

**TERCER INFORME DE LA COMISION DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO,  
AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL,  
GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL**

ÍNDICE

I.- ANTECEDENTES GENERALES	2
1.- Creación e integración de la Comisión.	2
2.- Elección de Coordinación	3
II.- OBJETO DE LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.	3
III.- DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL.	6
1.- Discusión general.	6
1.1.- Audiencias públicas.	6
1.2.- Despliegue territorial de la Comisión.	14
1.3.- Iniciativas constitucionales incluidas en este informe y votación general	15
1.4.- Audiencia del inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente.	148
1.5.- Texto sistematizado de las inciativas aprobadas en general.	153
2.- Discusión particular.	195
2.1.- Votación particular.	195
2.2.- Indicaciones rechazadas.	366
V. PROPUESTA CONSTITUCIONAL.	385



## **HONORABLE CONVENCIÓN:**

La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 93 del Reglamento General de la Convención Constitucional, pasa a informar a este Pleno las Propuestas de Normas Constitucionales aprobadas por la Comisión, correspondientes a su tercer bloque.

### **I.- ANTECEDENTES GENERALES**

#### **1.- Creación e integración de la Comisión.**

El Reglamento General de la Convención Constitucional estableció la creación de comisiones temáticas, “para tratar una o más materias en la esfera de su competencia y cuya finalidad es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y disposiciones transitorias que serán sometidas para su discusión y aprobación por el Pleno”, contemplando a su vez en su numeral 3 la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.

De acuerdo al proceso de integración de las comisiones, el Secretario de la Convención Constitucional remitió el oficio N° 163, de fecha 8 de octubre de 2021, mediante el cual comunicó la integración de la Comisión, la que quedó conformada con las y los 25 convencionales que se indican a continuación:

- Tiare Aguilera (en cupo de escaños reservados).
- Julio Álvarez.
- Amaya Álvez.
- Adriana Ampuero.
- Jorge Arancibia.
- Wilfredo Bacián (en cupo de escaños reservados).
- Cristóbal Andrade.
- Eduardo Castillo.
- Eric Chinga (en cupo de escaños reservados).
- Elisa Giustinianovich.
- Claudio Gómez.
- Álvaro Jofré.
- Bastián Labbé.



- Jeniffer Mella.
- Adolfo Millabur (en cupo de escaños reservados).
- Geoconda Navarrete.
- Tammy Pustilnick.
- Ramona Reyes.
- Pollyana Rivera.
- César Uribe.
- Felipe Mena.
- Yarela Gómez.
- Harry Jurgensen.
- Helmuth Martínez.
- Hernán Velásquez.

Con posterioridad, el día lunes 17 de enero de 2022, el convencional Bastián Labbé comunicó a la Coordinación de la Comisión que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento General de la Convención Constitucional, sería reemplazado de manera permanente por la convencional María Elisa Quinteros, modificándose de esta manera la integración de la Comisión.

## **2.- Elección de Coordinación.**

En la sesión N° 1, celebrada el día martes 19 de octubre de 2021, la Comisión procedió a constituirse y elegir a su coordinación paritaria, según lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento General. En dicha oportunidad, en votaciones sucesivas, resultó electa en primer lugar la convencional Jeniffer Mella, y en segunda votación el convencional Adolfo Millabur.

En la sesión N°37, celebrada el día 21 de febrero de 2022, se procedió a la elección de nuevos coordinadores, dada la renuncia de la Coordinación original, resultando nominados para tales cargos la convencional Jeniffer Mella (reelecta) y el convencional Claudio Gómez, por 16 y 15 votos respectivamente.

## **II.- OBJETO DE LA COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA, DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL, GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL.**

El Reglamento General de la Convención Constitucional, en su artículo 64, creó esta Comisión de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad,



Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, estableciendo una serie de temas que debía abordar, los principios comunes sobre los cuales debía fundar su accionar, así como los objetivos generales y específicos que debía cumplir para tratar las materias que forman parte de la competencia de la Comisión.

En efecto, los temas que la Comisión debe tratar son los siguientes:

- a) Estructura organizacional y descentralizada del Estado;
- b) Organización territorial interior del Estado y división político-administrativa con enfoque ecosistémico;
- c) Mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental;
- d) Gobiernos locales;
- e) Autonomías territoriales e indígenas;
- f) Igualdad y cargas tributarias;
- g) Reforma administrativa;
- h) Modernización del Estado;
- i) Territorios insulares y zonas extremas;
- j) Ruralidad;
- k) Estatuto de chilenas y chilenos residentes en el exterior;
- l) Integración de las personas chilenas residentes en el extranjero, y
- m) Autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno.

Asimismo, el Reglamento General establece los principios sobre los cuales debe basar su actuación la Comisión, a saber:

- Principio transversal de descentralización.
- Principio de Justicia y Equidad territorial.
- Principio de Priorización Territorial.
- Principio de Diferenciación Territorial.
- Principio de Coordinación (cooperación).
- Principio de Responsabilidad Fiscal.
- Principio de Plurinacionalidad.
- Principio de Gobernanza Local.
- Principio de Equilibrio Ecológico.
- Principio de Autonomías Territoriales.
- Principio de Solidaridad y Asociatividad Territorial.
- Principio de participación en la vida nacional.
- Maritorio.



Por otra parte, el artículo 64 del Reglamento General dispuso una serie de objetivos a cumplir, tanto generales como específicos.

Entre los objetivos generales, y principales, se cuenta la generación y proposición al Pleno de una propuesta de norma constitucional que aborde la forma de Estado y estructura organizacional del mismo, así como la división, ordenamiento y funcionamiento territorial, administrativo, político, fiscal, legislativo u otro ámbito que la comisión determine, así como también sobre temáticas relacionadas con la autonomía territorial y local, esto es, la descentralización propiamente tal, tanto en los ámbitos jurídico, económico, administrativo, fiscal, tributario y político, y los distintos órganos que integrarán su estructura funcional, y nuevas instituciones vinculadas a justicia territorial o creación de normativas locales. En los objetivos específicos, se cuentan la emisión de informes al Pleno o a la Comisión para fundamentar las decisiones de aprobación o rechazo sobre determinadas materias; propuestas de despliegue territorial, la canalización de apoyos o alianzas técnicas, favorecer la planificación y zonificación de la totalidad del territorio nacional, y el propiciar herramientas de democracia directa.

Por último, el artículo 64 del Reglamento General de la Convención determina la competencia de la Comisión, estableciendo las materias que le son propias:

- Forma jurídica y administración del Estado (Estado unitario, federal, regional, autonómico, etc.;
- Organización territorial del Estado, su división político-administrativa, representación y reparto de competencias autonómicas, los niveles nacionales y subnacionales;
  - Ámbitos de competencias exclusivas de cada nivel territorial;
  - Competencias de naturaleza política;
  - Competencias de naturaleza administrativa;
  - Competencias de naturaleza económica;
  - Relaciones entre las competencias en todos los niveles territoriales;
  - Coordinación de competencias;
  - Control del ejercicio de las competencias;
  - Mecanismos de resolución de conflictos de competencia;
  - Financiamiento de los territorios;
  - Solidaridad, equidad y justicia entre territorios;
  - Primacía del interés superior de todas las naciones y todos los territorios;
  - Los deberes constitucionales de los órganos del Estado respecto de los



territorios;

- Democracia y participación al interior de las unidades político-administrativas;
- Estatutos especiales respecto de determinados territorios;
- Territorios insulares;
- Zonas extremas;
- Zonas Aisladas o de difícil acceso;
- Chilenos y chilenas residentes en el extranjero;
- Libertad de circulación de las personas en cualquier territorio del país;
- Normas transitorias transicionales, y
- Autonomías territoriales, entre otras.

### **III.- DELIBERACIÓN CONSTITUCIONAL.**

#### **1.- Discusión general.**

##### **1.1.- Audiencias públicas.**

Para el cumplimiento de la tarea encomendada por el Pleno de la Convención, la Comisión desarrolló su mandato sobre la base de un cronograma de trabajo, establecido en el artículo 72 del Reglamento General de la Convención Constitucional, propuesto por la Coordinación y aprobado por 23 votos favorables y 2 abstenciones en su sesión N° 10.

De acuerdo a este cronograma, la Comisión celebró 31 sesiones, más 6 sesiones de sus subcomisiones 1 y 2, creadas para el efecto de recibir audiencias públicas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente, la Comisión abrió un proceso de recepción de solicitudes de audiencias públicas, proceso en el cual se recibieron 570 postulaciones.

Antes de abrirse dicho proceso, la Comisión recibió en audiencia a diversos invitados, propuestos por las y los convencionales integrantes de la Comisión, con el objeto de ilustrarse en torno a las materias que son propias de su competencia.

El listado de las personas e instituciones recibidas por la Comisión, considerando tanto a aquellas recibidas en dependencias del ex Congreso Nacional como a las escuchadas en las sesiones celebradas en regiones, con ocasión del despliegue



territorial de la Comisión, así como a aquellas recibidas en audiencias previas y en audiencias obligatorias reglamentarias, es el siguiente:

(Las intervenciones de los invitados pueden consultarse en las actas de las respectivas sesiones<sup>1</sup>; los documentos aportados, en la sección “Presentaciones”<sup>2</sup> en el sitio web de la Comisión, y el contenido de sus aportes en el informe de sistematización preparado por la Asociación de Universidades Regionales que se encuentra publicado en la página web institucional<sup>3</sup>).

#### **Martes, 02 de noviembre 2021 (Sesión N° 4)**

- Los Profesores Heinrich von Baer, Humberto Nogueira, Esteban Szmulewicz e Ismael Toloza, representantes de la Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado.

#### **Miércoles, 03 de noviembre 2021 (Sesión N° 5)**

- El señor Tomás Jordán, abogado y miembro del Observatorio Nueva Constitución.

- El señor Sergio Alburquenque, abogado, académico de la Universidad Diego Portales, y señoras Pilar Navarro y Patricia Toledo, en representación del Centro de Estudio Universitario sobre Descentralización Financiera y Fiscal.

- El señor Ignacio Irrazábal, Director del Centro de Políticas Públicas de la PUC.

- La señora Carolina Salas, abogada y Doctora en Derecho Constitucional.

- El señor Guillermo Pérez, Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, miembro Chile Descentralizado.

- La señora Jeanne Simmon, académica de la Universidad de Concepción.

#### **Jueves, 04 de noviembre 2021 (Sesión N° 6)**

- Señor Egon Montecinos, académico de la Universidad Austral de Chile.

- Señor Álvaro Magasich, abogado y académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Señor Christian García del CEUDEFF Autonomía Financiera y Señora Angie Flies, Universidad de Magallanes.

<sup>1</sup> Las actas de las sesiones de la Comisión de Forma de Estado se encuentran disponibles en la siguiente dirección web:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision\\_sesiones.aspx?prmID=27](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_sesiones.aspx?prmID=27)

<sup>2</sup> Las presentaciones aportadas por los invitados pueden consultarse en la siguiente dirección web:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision\\_presentaciones.aspx?prmID=27](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/comision_presentaciones.aspx?prmID=27)

<sup>3</sup> El señalado informe puede consultarse en la siguiente dirección web:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2112&prmTipo=DOCUMENTO\\_COMISION](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/verDoc.aspx?prmID=2112&prmTipo=DOCUMENTO_COMISION)



-Señor Eddy Burgoa, abogado y experto en regímenes de autodeterminación indígena y descolonización.

-Señor Eduardo Mondaca, Presidente del directorio e investigador permanente de la ONG de investigación Socio-Territorial “Centro de Estudios Sociales de Chiloé”.

-Señor Matías Garretón, Director de la Fundación Rumbo Colectivo.

### **Miércoles 10 de noviembre de 2021 (Sesión N° 9)**

- El señor Martín Besfamille, Académico del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública, Pontificia Universidad Católica de Chile.

- La señora Natalia Muñoz Chiú, Profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

- La señora Verónica Figueroa Huencho, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

- El señor Esteban Valenzuela, Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Concepción.

### **Martes 28 de diciembre de 2021 (Sesión N° 1, Subcomisión 1)**

- La señora María Teresa Romero Arrau, Movimiento Escuelas Abiertas.

- El señor Cristóbal Caviedes, Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta

- La señora Macarena Lagos y el señor Jaime Abedrapo, de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián.

- La Asociación Chilena de Municipalidades.

- Los señores Diego Baeza y Edson Ladama, de la Asamblea de Organizaciones que Luchan Calama.

### **Martes 28 de diciembre de 2021 (Sesión N° 1 Subcomisión 2)**

- Los señores Enrique Rajevic y Fabián Pressaco, del Núcleo Análisis Político y Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado.

- El señor Silvio Galaz S., Cabildo Autoconvocado de Queilen.

- El señor Lucas Serrano Barraza, de la Universidad San Sebastián.

- El señor Ricardo Guerrero.

- El señor Sebastián Michaelis, de la Gastronomía el Sartén Ltda.

### **Miércoles 29 de diciembre de 2021 (Sesión N° 2 Subcomisión 1)**





-La señora Pilar Moraga y el señor Marco Billi, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, de la Universidad de Chile.

-El señor Héctor Huircapan.

-La señora Carmen Le Foulon y el señor Luis Eugenio García, del Centro de Estudios Públicos.

-El señor Felipe Rivera, de la Comunidad Indígena Changos Álvarez-Hidalgo y Descendencia, Caleta Chañaral de Aceituno.

-El señor Fernando Peña, del Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de Temuco.

-La señora Valeska Salazar.

### **Miércoles 29 de diciembre de 2021 (Sesión N° 2 Subcomisión 2)**

- El señor Italo Omegna Vergara.

- El señor Iván Lepian Pilquinao, Weche Maulen.

- El señor Sergio Endress Gómez, Universidad de Chile.

- El señor Gonzalo Arriagada Kritzler.

- Los señores Luis Castro y Claudio Valle, Changos del Éxodo.

### **Jueves 30 de diciembre de 2021 (Sesión N° 3 Subcomisión 1)**

- Las señoras Ignacia Fernández y Danae Mlynarz, de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

- El señor Alex Bowen Carranza y la señora Blanca Martínez Martínez, de Causa Emprendimiento.

-El señor Eduardo Abarzúa, la señora Cecilia Osorio y el señor Enrique Rajevic, de la Universidad Alberto Hurtado.

### **Jueves 30 de diciembre de 2021 (Sesión N° 3 Subcomisión 2)**

- La señora Andrea Peroni y el señor Pablo González, Núcleo Interdisciplinario en Investigación Evaluativa, orientado a la Decisión Pública (NIIIE), Centro de Sistemas Públicos (CSP), Universidad de Chile.

- El señor Juan Francisco Arellano y Matías Miranda, Asamblea Jardín Alto Organizado distrito 13.

- El señor Diego Martínez e Ignacio Silva, Comunidad de Organizaciones Solidarias.



- La señora Alicia del Pilar González Silva, Amazonas de la Tradición Chilena
- Los señores Cristián Mardones y Mario Calderón, Agrupación Cultores de Cantares y Tradiciones de Aculeo.
- La señora María Jesús Vera, Red Chile Despertó Internacional.

**Audiencias públicas en la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso (despliegue territorial de la Comisión).**

**Martes 9 de noviembre de 2021 (Sesión N° 7)**

- Señor Edgardo Gonzalez, alcalde de la comuna de Llay Llay.
- Señor Ignacio Villalobos, alcalde de la comuna de Petorca.
- Señor Rafael Sottolichio Bauer, en representación de las Concejalías del Valle del Aconcagua.
- Señor Daniel Morales, en representación de la Asociación Regional de Municipalidades.
- La señora Lizet Briones y el señor Ignacio Lara López, en representación de la Coordinadora Todos Somos Putaendo.
- El señor Juan Carlos Cerda, en representación de la ONG CIEM Aconcagua.

**Audiencias públicas en la comuna de Calle Larga, Región de Valparaíso (despliegue territorial de la Comisión).**

**Martes 9 de noviembre de 2021 (Sesión N° 8)**

- La señora Dina González Alfaro, alcaldesa de la comuna de Calle Larga.
- El señor Christian Ortega Villagras, alcalde de la comuna de San Esteban.
- El señor Manuel Rivera Martínez, alcalde de la comuna de Los Andes.
- La señora Rocío Parra Cortés, académica facultad de Derecho Universidad Católica de Valparaíso, en representación del Observatorio de la Costa.
- El señor Gastón Vera Rojas, miembro de la Comunidad Diaguita Campillay-Guacalagasta; la Asamblea Autoconvocada de Pueblos Originarios de la quinta región; y el Grupo de defensa patrimonial ancestral de Piedra Tacitas.
- Los señores Andrés Covarrubias y Gonzalo Gallardo, en representación de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y Juntos por Chile.
- La señora Gilda Antonella Miranda Gallardo, asistente social, en representación de la organización medioambiental Valencia nativo y espacio KillaUlcha.
- Los señores Yury Quiroz Mura y Nelson Venegas Salazar, en representación



de la Corporación Aconcagua Región y Movimiento Yo Amo Región de Aconcagua.

**Audiencias públicas en la comuna de Peumo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (despliegue territorial de la Comisión).**

**Jueves 11 de noviembre de 2021 (Sesión N° 10)**

- El señor Carlos Aliaga Donoso, Alcalde de la comuna de Peumo.
- El señor Carlos Núñez Vidal, dirigente campesino de la región.
- La señora Celerinda Valdés Garrido, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores (UCAM) de Peumo.

**Audiencias públicas en la comuna de Malloa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (despliegue territorial de la Comisión).**

**Jueves 11 de noviembre de 2021 (Sesión N° 11)**

- El señor Martín Araño Escalona, de Juntos por Chile.
- Los señores Maurice Dintrans Bauer y Alfredo Vitaglich, en representación de la Delegación O'Higgins del Colegio de Arquitectos de Chile.
- El señor Jorge Valenzuela, en representación de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta).

**Exposiciones realizadas en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío (salida de la Convención Constitucional a la Región del Biobío).**

La comisión recibió a las siguientes personas naturales e instituciones:

**Jueves 24 de noviembre de 2021 (Sesión N° 12)**

- El señor Esteban Krause Salazar, Alcalde de Los Ángeles.
- La señora Cecilia Collio Llanquileo, Presidenta de la Asociación Mapuche Pewun kimun.
- La señora Andrea del Carmen Rojas Vidal, Asociación Mapuche We Rakiduum.
- La señora Denise Silva Quichel, Asociación Mapuche Newentuaiñ.
- Los señores Diego Lapostol Piderit y Cristóbal Cifuentes Torres, de la Universidad San Sebastián.
- El señor Rodrigo Díaz Wörner, Gobernador Regional del Biobío.



**Audiencias públicas en la comuna de Alto de Biobío (salida de la Convención Constitucional a la Región del Biobío).**

**Jueves 24 de noviembre de 2021 (Sesión N° 13)**

- El señor Jorge Condeza Neuber.
- El señor Felix Tranamil, Consejo de Lonkos.
- El señor Roberto Manquepi, Lonko de Butalelbun.
- El señor José Rosales, Presidente de la Comunidad Indígena Manuel Neicuman de Ralco Lepoy.
- Las señoras Fernanda Castro Purrán y Valeska Figueroa Bravo, Red por la Defensa del río Queuco.
- El señor Nivaldo Piñaleo Llaulen, Alcalde de Alto Biobío.

**Audiencias públicas en la comuna de Yungay, Región del Ñuble (despliegue territorial de la Comisión).**

**Jueves 25 de noviembre de 2021 (Sesión N° 14)**

- El señor Rafael Cifuentes Rodríguez, alcalde de la comuna de Yungay.
- El señor José Patricio Lagos Cisterna, de la Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica de Chillán (COPELEC).
- La señora Gladys Benítez San Martín, Unión Comunal de Adultos Mayores de Yungay.
- La señora Blanca Faúndez Godoy, Presidenta Agrupación de Defensa y Conservación de la Flora y Fauna del Valle Templado de Yungay, ADECOFFY.
- El señor Carlos Bustos, de la Multigremial Osorno.

**Audiencias públicas en las comunas de Pozo Almonte, Región de Tarapacá y Arica, Región de Arica y Parinacota (despliegue territorial de la Comisión).**

**Martes 30 de noviembre de 2021 (Sesión N° 15)**

- El señor Nivaldo Ceballos, dirigente de la Comunidad Indígena La Huayca Marka.
- El señor Cristian Báez Lazcano, Mesa Técnico Política Pueblo tribal afrodescendiente chileno.



- El señor Edwin Briceño, Cabildo Territorial Arica y Parinacota.
- La señora Karen Rivera Iribarren, Presidenta de la Comunidad Indígena Quechua de Iquiua.
- El señor Edward Gallardo, de la Sociedad de Fomento Fabril FG.
- La señora Ninoska Angélica González Flores, de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Arica y Concejala de la I. Municipalidad de Arica.
- La señora Claudia Rojas Muñoz y los señores Christian Barahona Rubio y Julio Reyes Lazo, de la Empresa Aguas del Altiplano.

**Audiencias públicas en las comunas de Alto Hospicio, Región de Tarapacá (despliegue territorial de la Comisión).**

**Martes 30 de noviembre de 2021 (Sesión N° 16)**

- El señor Patricio Ferreira Rivera, Alcalde de la I. Municipalidad de Alto Hospicio.
- El señor José Miguel Carvajal Gallardo, Gobernador Regional de Tarapacá.
- El señor Alex Ruiz, arquitecto del Gobierno Regional.
- El señor Hugo Marín, dirigente de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile (CONFUCH).
- La señora Yubiza Cabezas, Dirigente Junta de Vecinos Emprendedores del Desierto.
- El señor Marcos Gómez Barrera, Vicepresidente de la Asociación de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte A.G. (ASIPNOR).
- El señor José Luis Astorga Verdugo, Concejal de la I. Municipalidad de Alto Hospicio.

**Audiencias públicas en la comuna de Puerto Cisnes, Región de Aysén (despliegue territorial de la Comisión).**

**Martes 21 de diciembre de 2021 (Sesión N° 20)**

- El señor Francisco Roncagliolo, alcalde de la comuna de Cisnes.
- El señor Jorge Emilio Díaz Guzman, Aces Consultores.
- El señor Rubén Leal Pérez, de la Cooperativa de Trabajadores Friosur SpA, y Renato Flores y de A.G. Mar Sustentable.
- El señor Miguel Rusell, Presidente de la Coordinadora de Sindicatos de Puertos Estatales.
- El señor Francisco Javier Abarca Arap, concejal de la comuna de Cisnes.



- La señora Luisa Ludwig Winkler, escritora y activista medioambiental.
- El señor Agustín Zsilavec y la señora Yasnira Quintul, de la comunidad de Cisnes.
- El señor Carlos Torres, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal y de Buzos de la comuna.

**Audiencias públicas en la comuna de Puerto Río Ibáñez, Región de Aysén (despliegue territorial de la Comisión).**

**Miércoles 22 de diciembre de 2021 (Sesión N° 21)**

- El señor Marcelo Santana Vargas, Alcalde de Municipalidad de Río Ibáñez en representación de Asociación Regional de Municipalidades de Aysén (AREMUR).
- El señor Jorge Calderón, Alcalde de la Municipalidad de Cochrane.
- El señor Manuel Suazo Illesca, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Coyhaique.
- La señora Miriam Chible Contreras y el señor Patricio Segura Ortiz, Junta de Vecinos N° 8, Puerto Guadal.
- La señora Alicia Haro, del Fundo Don Gerardo.
- El señor Manuel Vivar, de la Fundación Chile Descentralizado... Desarrollado.

**1.2.- Despliegue territorial de la Comisión.**

La Comisión de Forma de Estado, en virtud del mandato contenido en el inciso final del artículo 64 del reglamento General de la Convención, tiene el mandato de celebrar sesiones en cada una de las regiones del país, lo que hasta la fecha ha sucedido de la siguiente forma:

- Región de Valparaíso (sesiones N° 7 en la comuna de Putaendo y N° 8 en la comuna de calle Larga, celebradas el día 9 de noviembre de 2021).
- Región del Libertador General Bernardo O'Higgins (sesiones N° 10 en la comuna de Peumo y N° 11 en la comuna de Malloa, celebradas el día 11 de noviembre de 2021).
- Región del Biobío (sesiones N° 12 en la comuna de Los Ángeles y N° 13 en la comuna de Alto Biobío, celebradas el día 24 de noviembre de 2021).
- Región del Ñuble (sesión N° 14 en la comuna de Yungay, celebrada el día 25 de noviembre de 2021).
- Región de Arica y Parinacota (sesión N° 15 y N° 16 en la comuna de Arica,



celebradas el día 30 de noviembre de 2021)<sup>4</sup>.

- Región de Tarapacá (sesión N° 15 en la comuna de Pozo Almonte y N° 16 en la comuna de Alto Hospicio, celebradas el día 30 de noviembre de 2021).
- Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (sesión N° 20 en la comuna de Puerto Cisnes, celebrada el día 21 de diciembre de 2021, y N° 21 en la comuna de Río Ibáñez, celebrada el día 22 de diciembre de 2021).

**1.3.- Iniciativas constitucionales incluidas en este informe.**

El presente informe versa sobre las iniciativas convencionales constituyentes, iniciativas convencionales indígenas e iniciativas populares deliberadas y votadas desde la 46ª sesión, celebrada en lunes 7 de marzo de 2022, hasta la 52ª sesión, celebrada en jueves 17 de marzo de 2022, cuya deliberación se presenta a continuación. La votación en general de las iniciativas se realizó en la sesión 56ª, del 24 de marzo de 2022.

**Iniciativa convencional constituyente N° 85-3, sobre Principios y derechos en materia tributaria y cargas públicas y sobre el Trato del Estado y sus organismos en materia económica.** de las y los Convencionales presentada por Martín Arrau, Arturo Zúñiga, Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Felipe Mena, Katerine Montealegre, Cecilia Ubilla, Carol Bown.

Los autores de la iniciativa indicaron que esta iniciativa ya fue expuesta previamente en la sesión N° 23 de esta Comisión, razón por la cual prescindirá de su exposición.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	17	0	0	23	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5026](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5026)

<sup>4</sup> Sesiones N° 15 y N° 16 celebradas simultáneamente en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, con la mitad de los integrantes de la comisión presencialmente en una región, conectados de manera telemática con la otra mitad de la comisión en la otra región).



**Iniciativa convencional constituyente N° 163-3 que establece la igual repartición de tributos y cargas fiscales, y dispone la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica,** de los y las Convencionales Rodrigo Álvarez, Arturo Zúñiga, Martín Arrau, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Felipe Mena, Katerine Montealegre, Cecilia Ubilla y Carol Bown.

Los autores de la iniciativa indicaron que esta iniciativa es de un contenido similar a la iniciativa N° 85-3, que ya fue expuesta previamente en la sesión N° 23 de esta Comisión, razón por la cual se prescindirá de su exposición.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
4	18	1	0	23	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5027](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5027)

**Iniciativa convencional constituyente N° 200-3, que dispone la equidad y progresividad en materia de cargas tributarias,** de las y los Convencionales Fuad Chahín Valenzuela, Felipe Harboe Bascuñán, Eduardo Castillo Vigouroux, Luis Barceló Amado, Agustín Squella N., Miguel Ángel Botto, Andrés Cruz C. y Cristian Monckeberg.

Pese a los reiterados llamados a los autores de esta iniciativa, los autores no se presentaron a exponer la propuesta. Por ello, se procedió por la Coordinación a dar lectura a los fundamentos de la misma y se tuvo por deliberada para todos los efectos reglamentarios.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	5	1	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:



[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5028](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5028)

**Iniciativa convencional constituyente N° 633-3, que propone régimen tributario, fiscal y presupuestario de la República,** de las y los Convencionales Adolfo Millabur Nancuil, Yarela Gómez Sánchez, Jeniffer Mella Escobar, Tiare Aguilera Hey, Amaya Álvez Marín, María Elisa Quinteros, Elisa Giustinianovich Campos, Claudio Gómez Castro, Hernán Velásquez Núñez, César Uribe Araya, Adriana Ampuero, Fernando Atria, Jorge Abarca Riveros, Eric Chinga Ferreira Escaño, Manuela Royo, Luis Jiménez Cáceres.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Yarela Gómez**. Dio lectura a los fundamentos de la iniciativa, la que versó del siguiente tenor:

“La aspiración de profundizar la institucionalidad democrática requiere un compromiso con la descentralización de las competencias tributarias, fiscales y presupuestarias. Esta aspiración resulta de la profunda frustración que el centralismo fiscal causa en las regiones y comunas de nuestra República. Esta frustración de los territorios es comprensible, puesto que mientras el ingreso y gasto público subnacionales en países miembros de la OECD, es en promedio superior al 40%, en Chile no supera el 16.60% y el 14.89%, respectivamente.

Esta iniciativa convencional responde al anhelo de descentralizar el poder, expresado como el reconocimiento al autogobierno regional y local, distribuyendo competencias financieras, tributarias y presupuestarias, entre el Estado, las Regiones Autónomas, Autonomías Indígenas y Comunas Autónomas de la República.

La iniciativa, por ello, no sólo se limita a establecer los principios fundamentales en materia financiera, tributaria y presupuestaria, sino que estructura un régimen fiscal descentralizado para la República. El régimen fiscal establece un equilibrio entre la autonomía e intereses de las entidades territoriales y la solidaridad entre éstas, así como la autonomía e intereses generales de la República en su conjunto.

Este equilibrio se expresa en el reconocimiento de la autonomía tributaria diferenciada entre las entidades territoriales y el establecimiento de un sistema de compensación fiscal solidaria horizontal y vertical, es decir, dando cabida a la redistribución entre Regiones, incluyendo a las Autonomías Indígenas y entre Municipios, así como traspaso de recursos del Estado a las entidades territoriales.



El equilibrio mencionado también se expresa en que si bien el régimen fiscal de la Constitución reconoce autonomía tributaria, es decir, reconoce competencias para establecer tributos al Estado, las Regiones y los Municipios, la fiscalización y recaudación de éstos se mantiene unitaria, puesto que el SII y la Tesorería continúan siendo entidades unitarias centrales, pero desconcentradas.

Finalmente, una serie de normas relativas a la aprobación del presupuesto, la suscripción de deuda y otras materias semejantes, refleja el anhelo descentralizador, con los límites impuestos por el interés general y la solidaridad interterritorial."

A continuación, la autora entregó la palabra al especialista y colaborador en la iniciativa expuesta, el académico **Sr. Arnulf Becker**.

Destacó que el desafío pedagógico es introducir una idea que no es familiar en nuestra tradición constitucional, que es tener un régimen fiscal constitucional, constituyendo un conjunto de normas que, por una parte, reconocen la autonomía financiera de las entidades territoriales y por otro lado, son las normas que establecen un sistema de equidad interterritorial.

Precisó que es necesario constitucionalizar y no dejar estas normas a nivel legal, pues en constituciones de países descentralizados es común tener un capítulo o una serie de normas en esta materia. Porque estas normas están separando y distribuyendo el poder en relación a preguntas como quién tiene la facultad de crear tributos, quien recauda, cómo se distribuyen. Por lo tanto, esta propuesta se estructura al reconocimiento de dos principios fundamentales, tal es la autonomía, que ya ha sido reconocida y, por otra parte, la solidaridad que significa que las regiones pueden establecer tributos, tasas y contribuciones.

A continuación, se abrió la palabra a las señoras y señores convencionales para efectos de efectuar preguntas en relación a esta iniciativa.

La convencional **Sra. Ampuero**, solicitó mayor explicación sobre la compensación entre ingresos inter-regiones.

La convencional **Sra. Navarrete** solicitó explicar en mayor detalle qué se entiende por regalías. Sobre tasas y contribuciones diferenciadas entre entidades territoriales, consultó cómo se garantiza entonces la equidad territorial, y por qué el IVA se regula a **nivel**



constitucional, si la ley tributaria es variable. Finalmente, consultó qué se entiende por bienes de primera necesidad, como se determinan y quienes.

La convencional **Sra. Álvez** consultó a qué se refiere con rentas monopolísticas y a multas de externalidades negativas.

La convencional **Sra. Pustilnick** consultó por qué sería beneficioso establecer en la Constitución el tema de las rentas monopólicas y por qué se hace esa diferencia. En cuanto a la suficiencia fiscal, solicitó explicar qué se entiende por aquello.

El convencional **Sr. Mena** consultó al especialista cuál es la experiencia comparada a la complementariedad entre los artículos 16, 17 y 18. De qué manera se debe establecer en relación al principio de legalidad, y cuáles serían los alcances de las mismas.

A continuación, se otorgó al especialista, **Sr. Arnulf Becker**, para efectos de responder a las preguntas planteadas. Señaló que en términos de derecho comparado, la regulación propuesta es muy usual respecto a estructuras descentralizadas. Explicó la manera en que ingresan los recursos a nivel fiscal y cómo estos se distribuyen entre las distintas entidades territoriales. En cuanto a la compensación fiscal, manifestó que es un método transparente y claro de cómo se efectúa la redistribución, a diferencia de los sistemas vigentes hoy. Por otro lado, indicó que las rentas monopolísticas son comunes en nuestro medio, junto a disposiciones de libre competencia. Esto busca que las rentas y las deudas se socialicen.

Finalmente, se dio continuidad a la fase de deliberación de esta iniciativa.

El convencional **Sr. Uribe** felicitó la propuesta pues abordan temáticas relevantes para el ámbito social de nuestro país.

La convencional **Sra. Navarrete**, manifestó que esta propuesta contrasta mucho con la realidad respecto de las regiones de nuestro país. Indicó las características precisas del distrito al cual representa, la región de Aysén.

La convencional **Sra. Y. Gomez**, a diferencia de lo indicado por la convencional Sra. Navarrete con lo que acontece en región de Aysén, y también como representante del mismo distrito, indicó que esta propuesta precisamente se hace cargo de dichas debilidades y mira hacia la redistribución y solidaridad interterritorial respecto de los



ingresos y gastos fiscales.

El convencional **Sr. Castillo**, hizo una observación en relación a las regalías, pues a su juicio queda pendiente resolver cuáles son los bienes comunes naturales. Esto es importante para efectos de los problemas derivados con las concesiones, y su similitud con la regalía en los términos propuestos.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	1	5	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5031](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5031)

**Iniciativa convencional constituyente N° 723-3, sobre principios Tributarios y del Gasto Público**, de las y los convencionales Jorge Abarca, Amaya Álvarez, Fernando Atria, Carlos Calvo, Adriana Cancino, Trinidad Castillo, Tomás Laibe, Juan José Martín, María José Oyarzún, Carolina Sepúlveda y Christian Viera.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Amaya Alvez**. Explicó someramente el contenido de la misma y su objetivo, destacando la contribución de toda persona como principio constitucional. A continuación, dio la palabra a expertos que colaboraron en la redacción de la propuesta constitucional.

Expusieron los Profesores **Ricardo Guerrero, Francisco Saffie y Sebastián Salazar**. Dieron cuenta de un alto componente de observancia a partir de la experiencia comparada, diseñando el concepto de los tributos, tasas, contribuciones así como los impuestos, importando una diferenciación sobre estos y cuya significación conceptual de la propuesta primará respecto de otras normas constitucionales que se refieran aisladamente a los mismos.

Explicaron que el principio de legalidad en la propuesta reconoce que, por regla general, los tributos, exenciones (eximir de la aplicación de algún tributo) o beneficios impositivos (por ejemplo, contratos de invariabilidad tributaria), serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional. Se reconoce que pueden existir excepciones según el resto de las normas de la futura Constitución (de ahí que se utilice la frase – Sin

perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución).

En este sentido, la propuesta de artículo utiliza la voz “tributos”, que da cuenta de lo que la práctica académica y jurisprudencial ha entendido por ellos. Esto es, tributo contiene los conceptos de impuestos, contribuciones y tasas. Un impuesto es el tributo cuyo pago no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado (por ejemplo, el impuesto a la renta, al valor agregado, etc.). Las contribuciones son tributos cuya obligación tiene un vínculo con beneficios obtenidos por servicios, obras u otras acciones del Estado en favor de un grupo de contribuyentes y cuyo financiamiento puede ser mediante algún mecanismo progresivo. Las tasas, en cambio, son tributos que implican una contraprestación efectiva del Estado, pero cuya obligatoriedad dependerá de que el ciudadano demande un servicio que va en directo beneficio personal – en este sentido, son equivalentes a un pago que el o la contribuyente hace para recibir el servicio.

Se desarrolló latamente el deber de contribuir. Explicaron que reconocer expresamente el deber de contribuir se recoge en la propuesta de nuevos principios para la Constitución chilena, es un anhelo que se busca hacer realidad en esta propuesta. La redacción propuesta no hace referencia, como sí lo hacen las constituciones de Italia o España a los ciudadanos o personas, para poder incluir a entidades que, a pesar de no tener personalidad jurídica, sí son centro de imputación normativa que pueden tener el deber de pagar tributos. De esta manera se reconoce que la obligación de pagar tributos en términos amplios, la referencia a los gastos públicos dice relación con la existencia del Estado más que con una determinada función de los tributos.

A continuación, expusieron los diversos principios tributarios de la propuesta. Con esta frase se busca que los principios informen a todo el sistema. Por lo mismo, la evaluación que se haga a futuro en relación a las distintas modificaciones/reformas que tenga el sistema tributario, deben evaluarse según su impacto sistémico, y no en cuanto a su alcance particular. Por ejemplo, si en el futuro se pretende desintegrar la relación de dueños de empresas y las empresas en el sistema de impuesto a la renta, se debería evaluar su impacto sistémico, y no el efecto concreto que pueda tener nivel de impuesto a la renta. Así, si la ley considera (y los datos lo confirman) que con la desintegración se avanza en equidad vertical (que los que tienen más aporten más), y eso se traduce en mayor progresividad, no importaría que teóricamente no se respetara la equidad horizontal (como se plantea más abajo, es un concepto criticado en la doctrina y que debería estar al servicio de la equidad vertical).

Sobre el principio de progresividad, explicaron que busca que el sistema tributario en su conjunto – no partes de él – de cuenta que en la medida que el ingreso-patrimonio de las personas aumenta, dichas personas contribuyan proporcionalmente más que el resto en razón de sus ingresos-patrimonio. Con esto, se excluye el concepto de “capacidad de contribuir” teniendo en cuenta las críticas que este concepto ha recibido. Particularmente hacemos referencia al hecho que este concepto se relaciona con el concepto de renta-ingresos, y de renta “realizada”. Por renta realizada se entiende aquella contenida en el concepto de “renta” de la ley sobre impuesto a la renta. Por ello, indicaron que el concepto de “capacidad contributiva” es útil para la discusión legislativa (y la dogmática del derecho tributario) pero no para el nivel constitucional. Es un concepto que sirve para la evaluación del sistema de impuesto a la renta en particular, pero es un concepto problemático cuando se piensa en todo el sistema tributario. Es problemático porque genera discusiones en torno a si el legislador podría establecer impuestos al patrimonio que no denotan una “capacidad contributiva”, teniendo en cuenta que no se trata de rentas “realizadas”.

Sobre el principio de igualdad, explicaron que se circunscribe a un concepto horizontal. Con este principio se busca reconocer que todos deben contribuir bajo una noción de igualdad que deberá determinar la ley. Con esto, se busca evitar incluir las palabras “equidad/igualdad” horizontal y vertical, teniendo en cuenta que son dos caras de la misma moneda y que el legislador deberá definir qué principio privilegiará en sus reformas. En este sentido, se consideran las críticas que se han realizado a la equidad horizontal como principio que carece de fundamento desde una perspectiva de justicia distributiva. Nos remitimos al ejemplo dado anteriormente a propósito de la desintegración.

A continuación, se refirieron a la necesaria constitucionalización de los principios orientadores del gasto público. En materia de institucionalidad pública es indispensable preguntarse por el marco constitucional para un mejor rol de la política fiscal, que permita ampliar la base productiva y la riqueza del país, así como para proveer la financiación de todos los derechos fundamentales de forma adecuada y responsable financieramente. A efectos de avanzar en una senda que busque disminuir progresivamente el marcado ejercicio discrecional -y sin adecuados contrapesos político institucionales- que las actuales disposiciones constitucionales le entregan al Presidente de la República, es necesario consagrar con rango constitucional una serie de principios formales y materiales que orienten el gasto público para la consecución de los desafíos que impone sobre la materia un Estado Social y Democrático de Derecho. Este desafío implica revalorizar el rol de los gastos públicos frente a los ingresos, los cuales han recorrido



derroteros distintos, a pesar de ser las dos caras de una misma moneda.

Indicaron que, si el primer aspecto de interés del fenómeno jurídico financiero público fue el Presupuesto durante el siglo XIX, la velocidad del desarrollo de los tributos a nivel constitucional ha superado con creces al del gasto público, relegando a esta a un ámbito marginal. En el siglo XX, se constitucionalizan principios y normas tributarias referidas a la reserva de ley, la igualdad y sus diversas manifestaciones, la capacidad contributiva, etc., lo que ha dificultado la comprensión del fenómeno financiero público adecuadamente. Por tanto, no solo basta con regular adecuadamente a nivel constitucional a la Ley de Presupuestos, por tratarse de una norma que se desenvuelve a nivel político y jurídico en la distribución de competencias y de legitimidad democrática de entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que también es necesario plantear criterios de justicia sustantiva o material sobre el gasto público con una lógica político redistributiva de la Hacienda Pública que legitimen su función constitucional. Este avance se concretizó en el artículo 31 de la Constitución española de 1978.

A continuación, se abrió ronda a las señoras y señores convencionales para efectuar preguntas a expositores sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Álvarez** manifestó no entender por qué esta iniciativa está en esta radicada en esta Comisión, pues cree que corresponde a modelo económico y a principios. Sin embargo, consultó sobre el deber de contribuir respecto de aquellas personas radicadas en el extranjero y que renten en Chile. Consultó a especialistas qué opinan de la participación de la cámara territorial respecto de tributos que tuvieran relación con la región autónoma.

La convencional **Sra. Navarrete** consultó cómo se debería determinar la progresividad en concreto, si es mediante una ley, etc. para evitar su implementación dispar respecto de las regiones. Consultó cómo se redistribuyen los tributos respecto de las distintas entidades territoriales.

El convencional **Sr. Jofré** consultó sobre el principio de la proporcionalidad, debido a la riqueza generada en la macrozona de Tarapacá.

El convencional **Sr. Arancibia** a raíz de la propuesta le surgieron dudas de quien manejaría la billetera del Estado, si lo sería el Presidente de la República y si esto tiene por objeto establecer tributos para fines específicos. Manifestó en su opinión que debería ser la ley de presupuesto la que lo debería establecer y no dejarlo fijado constitucionalmente.





El convencional **Sr. Castillo**, consultó si los dineros fiscales no ingresan al erario nacional solamente, sino también a las regiones y a las comunas. Preciso que en la Constitución actual, los tributos de atribución local podrían ser afectados a dichas entidades locales como Municipios y Gobiernos regionales.

El convencional **Sr. Andrade** consultó hacia dónde iría el ingreso de estos tributos.

La convencional **Sra. Rivera**, consultó sobre participación ciudadana sobre gasto público.

El coordinador **Sr. Gómez** aclaró, finalmente, a raíz de la consulta del convencional Sr. Álvarez, que la iniciativa es parte de esta Comisión según lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento General.

Se dio la palabra a autores de la iniciativa y expositores para responder las preguntas formuladas, por intermedio de los especialistas invitados.

Sobre la participación ciudadana, el **Sr. Sebastián Salazar** explicó la experiencia comparada sobre esta posibilidad respecto de gasto del presupuesto público para ámbitos específicos, pues esto permite mejorar la propuesta en materia de representación.

El **Sr. Francisco Saffie**, explicó el tema del impuesto adicional respecto a inversiones extranjeras, indicando que esto está previsto en la legislación vigente, y mediante esta iniciativa se pretende mejorar constitucionalmente dicha regulación. No se trata de iniciativa exclusiva lo aquí tratado, sino que esto es establecido a nivel de principio constitucional, debiendo aquello ser competencia del procedimiento de formación de la ley, por una dimensión democrática. En este sentido, la idea de que los tributos deban ser establecidos por ley -principio de legalidad- pretende buscar la mejor participación democrática posible en su determinación, viejo principio que viene desde la revolución francesa e independencia de Estados Unidos en adelante. En relación al problema de la progresividad, indicó que es importante que la Constitución exprese sobre la equidad en términos neutros, para no decidir constitucionalmente qué principio prevalece sobre otro en colisiones de derechos e intereses, quedando al legislador regular otros detalles.





El **Sr. Ricardo Guerrero**, se refirió a la equidad vertical y horizontal y cómo esto se vincula con la progresividad. Indicó que el problema de consagrar constitucionalmente tanto la equidad vertical y horizontal a la vez, es que se habla de dos caras de la misma moneda y que en algunos casos se pueden contraponer. Esto ha sido discutido a propósito del impuesto a la renta, lo que provocaría que ambos entren en colisión, por ello estimó que es mejor hablar de solo “equidad”. Por ello, estimó que algún principio específico puede quedar entregado al legislador.

Finalmente, se abrió la palabra para las y los señores convencionales para efectos de deliberar sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Jofré**, indicó que la Comisión de la Unión Europea emitió un informe sobre el desequilibrio a la economía que provoca la posibilidad de la deuda pública y privada y la fragmentación de las regulaciones autónomas. Se refirió al caso de España precisamente sobre la forma de Estado ya aprobada por la Convención Constitucional.

La convencional Sra. Álvarez se refirió a la forma de Estado regional precisando que no sería un trasplante jurídico desde España. En este sentido, indicó que se deben tomar los casos desde el derecho comparados y adecuarlos a la realidad propia de cada sistema jurídico, contextualizarlo y mejorar aquellas falencias que se han estudiado y detectado. Así se pretende hacer una efectiva descentralización territorial del poder.

**Votación:**

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el artículo 1 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	1	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5033](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5033)

**Iniciativa convencional constituyente N° 931-3, que establece la**

**descentralización fiscal y cargas tributarias**, de las y los convencionales Álvaro Jofré, Felipe Mena, Geoconda Navarrete A., Roberto Vega C., Angélica Tepper K., Paulina Veloso M., Raúl Celis M., Manuel Ossandón, Ruggero Cozzi E, Carol Bown, Rodrigo Álvarez Z., Ruth Hurtado O., Jorge Arancibia R., Harry Jürgensen C. Cristián Monckeberg B. y Pollyana Rivera B.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Álvaro Jofré**. Dio lectura a los fundamentos de la iniciativa, la que versa del siguiente tenor:

“El anhelo por una mayor descentralización se remonta a los inicios de la historia política de nuestro país. Su búsqueda permanente se asocia a que, en términos generales, se le atribuyen principalmente dos beneficios: por un lado, mejorar la asignación de los recursos públicos, y, por el otro, generar mayor supervisión y control de las autoridades por parte de la ciudadanía, acercando la política a las personas y a sus localidades.

En cuanto a la descentralización fiscal, comparado con otros países unitarios de la OECD, nuestro país cuenta con un bajo nivel de gasto y recaudación fiscal subnacional. Así las cosas, en Chile tan solo el 14,5% del gasto fiscal es de administración subnacional, lo cual se contrapone al 27,4% promedio de los países unitarios de la OECD. Por otro lado, mientras en promedio los países de la OECD recaudan cerca de un 30% de los impuestos con fuentes subnacionales, en Chile esa fuente abarca tan solo el 16,5% de la recaudación.

Las regiones en Chile tienen resultados socioeconómicos desiguales en distintas dimensiones. Por ejemplo, mientras Antofagasta es la región con mayor PIB per cápita con \$22 MM anuales, La Araucanía apenas supera los \$4 MM, siendo la media para todas las regiones \$7,8 MM. Por su parte, la proporción de personas en situación de pobreza por ingresos está en un rango de entre 2,1 y 17,2 por ciento entre las distintas regiones, y esta misma dispersión también se observa para la pobreza multidimensional.

Luego, la descentralización fiscal se puede entender desde dos enfoques: el enfoque de gastos y el enfoque de ingresos. Por una parte, el enfoque de gastos se relaciona con dotar de mayores niveles de decisión subnacional respecto del gasto público total, entendiendo que existirá un mayor nivel de descentralización fiscal mientras mayor sea el peso relativo de los gastos de decisión de los gobiernos subnacionales (regional y local) respecto del gasto público total. Por otra parte, el enfoque de ingresos significa avanzar hacia mayores ingresos propios levantados desde el nivel subnacional



respecto de los ingresos nacionales totales.

Así, las propuestas de descentralización en general -y la descentralización fiscal en particular-, buscan asegurar, en el largo plazo, a todos los ciudadanos, igualdad de acceso a oportunidades y el ejercicio de sus derechos, lo que se conoce como el “principio de igualdad horizontal”. Este principio consiste en asegurar por parte del Estado la provisión de bienes públicos en similar calidad y proporción a todos los habitantes de los distintos territorios subnacionales.

La dotación de más recursos de decisión autónoma a las regiones y comunas posibilita mayor cohesión social y gobernanza territorial, entendida como el resultado esperado de avanzar hacia la construcción de un país territorialmente equilibrado. En consecuencia, avanzar en descentralización fiscal a nivel de los gobiernos regionales y locales, requiere aumentar el peso relativo de sus ingresos propios, el del gasto de decisión regional y local respecto del gasto público total, y, dentro de este último, el del gasto de decisión regional y local no condicionado.

Por todo lo anterior, en nuestra propuesta buscamos constitucionalizar una serie de principios y mecanismos que permitan avanzar hacia una descentralización fiscal efectiva y oportuna. Por ejemplo, mediante la formulación de un principio de descentralización fiscal, se busca asegurar que las entidades subnacionales tengan autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes.

Por su parte, mediante la consagración del principio de equilibrio y responsabilidad fiscal, -que debe ser rector de toda la gestión pública-, buscamos su íntegra aplicación al ámbito de los gobiernos subnacionales. En la propuesta, se busca combinar dicha responsabilidad de velar por el buen y eficiente uso de los recursos públicos, con ciertos deberes para las autoridades de los distintos niveles con respecto a la probidad, transparencia y rendición de cuentas a la comunidad. Ahora bien, consideramos que el detalle de dichos deberes (y las responsabilidades correlativas) son de una profundidad más propia de una ley que de la Constitución. Finalmente, cabe señalar que este principio también está recogido en el Reglamento General de la Convención.

Asimismo, proponemos la consagración del principio de suficiencia en el financiamiento de las competencias, replicando, en cierta forma, la norma que actualmente se encuentra consagrada a nivel legal para el caso de las municipalidades.



Lo anterior es complementado con una suerte de “garantía”, consistente en la obligación de que las leyes que asignen una nueva función o atribución contemplen su financiamiento en el informe financiero correlativo.

Luego, buscamos consagrar la solidaridad y la equidad territorial. Este principio, busca propender un desarrollo social y territorial armónico, considerando la posibilidad de que operen instrumentos de compensación económica, que permitan una discriminación positiva en la asignación de recursos públicos en atención al menor desarrollo relativo de determinados lugares.

Posteriormente, se establece un principio de coordinación y cooperación. Este principio contiene, por un lado, un componente de eficiencia, toda vez que busca evitar duplicidades en las funciones públicas (que actualmente son muy comunes, principalmente como consecuencia de una difusa delimitación de competencias). Por otro lado, contiene un componente de solidaridad, ya que incentiva la cooperación entre las distintas unidades territoriales -y entre ellas y los servicios públicos centralizados- para el logro de sus objetivos comunes.

También, integramos un principio de no discrecionalidad presupuestaria. Esto se hace con la finalidad de evitar que la disposición de recursos responda a criterios políticos o a la mera discreción del gobierno de turno, otorgando, asimismo, mayor certeza en la disponibilidad presupuestaria. Proponemos que se establezca el deber de que la ley de presupuestos les asigne recursos en base a criterios objetivos, y que sea la ley la que determine otras fuentes de financiamiento. En este punto, nuestra propuesta también precisa que las políticas internas de recaudación de cada gobierno subnacional -como lo podría ser el aumento o disminución de la tasa de un impuesto nacional- no afectarán el monto transferido por el Estado central, de manera tal de no generar incentivos perversos.

Asimismo, en este punto establecemos algunos criterios mínimos a ser considerados para la distribución de los recursos por parte del gobierno central, así como una garantía de financiamiento de los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos subnacionales. Por último, se establece un mecanismo excepcional de transferencias de recursos desde el nivel central a las unidades subnacionales por razones de emergencia o aislamiento.

Finalmente, en cuanto a normas y principios comunes se trata, la propuesta establece la responsabilidad e iniciativa presupuestaria. Se trata de un artículo según el

cual se establece que la iniciativa exclusiva del proyecto de presupuesto regional o local, recae en el Gobernador Regional o en el Alcalde, respectivamente. El diseño de esta norma, con contenido similar a lo que se establece respecto a la iniciativa exclusiva del Presidente en materia presupuestaria del Estado, tiene como objetivo asegurar la estabilidad macroeconómica del país, considerando evidentemente el aporte y relevancia que tendrán las regiones y comunas en este aspecto. Por tanto, se busca que sea el Ejecutivo subnacional el responsable ante la ciudadanía del manejo del desempeño económico en dicho nivel, dentro del ámbito de sus competencias y en coordinación con el nivel central, con el fin de asegurar la promoción de la prudencia fiscal y la estabilidad económica.

Luego, para complementar nuestra iniciativa, se proponen una serie de artículos que guardan relación con las cargas tributarias. En dicho sentido, primeramente encontramos algunos principios fundamentales en esta materia, cuyo rol es orientar el diseño jurídico, influyendo en el contenido de derechos y libertades fundamentales, y constituir un límite para la actuación de los distintos órganos del Estado. Este límite será fundamental para proteger a los ciudadanos de las posibles arbitrariedades del Estado.

Por tanto, proponemos principios como: el de igualdad y legalidad tributaria; el de no afectación tributaria; y el de no discriminación del Estado en materia económica. Así, el principio de legalidad tributaria significa que los tributos (y los elementos para determinarlo) solo pueden ser establecidos, modificados, suprimidos y condonados por una ley, sirviendo de garantía de mayor deliberación y contrapeso político, en comparación a un acto discrecional de una autoridad, como pudiere ser la vía reglamentaria. Por otro lado, el principio de igualdad tributaria quiere decir que el tratamiento impositivo debe ser el mismo para quienes se encuentren en condiciones similares (equidad horizontal) y gravar de forma distinta a personas que se encuentren en situaciones diferentes (equidad vertical). En este sentido, la igualdad no mira al tributo en sí mismo, sino al sacrificio que debe hacer quién lo paga, por lo tanto, no se refiere a la igualdad en sentido estricto, sino que refiere a soportar las cargas de manera que sean distribuidas equitativamente entre todos.

El principio de la no afectación específica, por otro lado, implica que los recursos provenientes de los impuestos no puedan estar destinados a financiar un proyecto o finalidad específica, sino que han de ingresar a las rentas generales del Estado. La distribución de los ingresos del Fisco se realiza a través de la Ley de Presupuestos que aprueba cada año el Congreso Nacional. Este principio admitiría como excepción el caso de los tributos de destinación local, que propondremos más adelante.



Por último, en lo que a principios tributarios o fiscales respecta, encontramos el principio de igualdad y no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Dicho principio se refiere especialmente a que los beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o gravámenes especiales que afecten a uno u otras, se establezcan siempre por ley y en base a parámetros que sean razonables y justificados, de lo que se sigue que ha de tratarse de medidas medidas mesuradas, necesarias y proporcionadas.

Por otro lado, nuestra propuesta contempla ciertas normas tributarias, tales como los tributos de destinación local, que, de forma similar a lo expuesto en el artículo 19 n°20 de la actual Constitución -disposición que rara vez se ha utilizado-, permite que lo recaudado por ciertos impuestos a actividades locales quede en las regiones previa autorización legal. Esta disposición, de potenciarse, abriría -por ejemplo- la posibilidad de que la recaudación de determinados impuestos con una clara identificación regional, sean de beneficio del respectivo gobierno regional; aumentando los ingresos subnacionales sin afectar la unidad tributaria ni legislativa.

Finalmente, se regula la potestad tributaria subnacional, contemplada con el fin de que ciertos tributos puedan establecerse a nivel regional, en el marco garantizado por la Constitución y las leyes. Así, una ley regulará específicamente la procedencia de estos tributos, y la definición del tipo de tributo que puede establecerse a nivel regional, pudiendo ser de tipo territorial -como contribuciones o patentes-, o bien sobretasas a ciertos impuestos nacionales, lo que quedará determinado por el legislador.”

Se abrió rondas de preguntas a las señoras y señores convencionales para efectos de efectuar consultas sobre la propuesta. No hubo intervenciones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 931-3 que establece la descentralización fiscal y cargas tributarias

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	4	5	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesio](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesio)

[n=832&prmlIdVotacion=5035](#)

**Iniciativa convencional constituyente N° 1014-3, sobre haciendas territoriales y autonomía financiera,** de las y los Convencionales Adriana Ampuero, Tammy Pustilnick, Jeniffer Mella, César Uribe, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Ramona Reyes, Yarela Gómez, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez, Francisco Caamaño y Natalia Henríquez.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Adriana Ampuero**. Presentó a los profesores **Sergio Albuquerque y Álvaro Magasich de la CEUDEFF**, quienes colaboraron y contribuyeron en la redacción de la propuesta. A continuación, la convencional les otorgó su tiempo a los académicos para efectos de exponer la propuesta.

Los académicos explicaron que la autonomía financiera real implica capacidad para auto normarse y auto dirigirse en materia de ingresos y gastos. Es decir, es el derecho de las entidades territoriales a poseer ingresos propios suficientes y poder de gasto para el ejercicio de sus competencias. No significa independencia económica de las entidades territoriales ni mucho menos ausencia de controles y responsabilidades.

A continuación, explicaron los aspectos técnicos relativos al articulado de la propuesta, particularmente de los principios que incumben a la autonomía financiera. Asimismo, hicieron hincapié en la necesidad de otorgar al legislador la posibilidad de establecer tributos y por otra parte, que las regiones y las distintas entidades territoriales tuvieran la posibilidad de establecer tasas y contribuciones. Enseguida, explicaron el resto de los principios de la propuesta constitucional, entre ellos el principio de coordinación, el principio de solidaridad y de compensación de interterritorialidad. Se trata de un principio que corrige los déficits de ingresos entre los distintos territorios. Finalmente, se refirieron a las garantías procesales para hacer efectiva la autonomía frente a incumplimientos, ya sea del legislador, la administración central o de entidades territoriales, explicando el modelo que contempla la propuesta a este respecto.

A continuación, se abrió rondas de preguntas a las señoras y señores convencionales para efectos de efectuar consultas sobre la propuesta.

La convencional **Sra. Ampuero** solicitó a los especialistas explicar en mayor detalle los fondos de compensación y el fondo de desarrollo.

El convencional **Sr. Andrade**, interrogó respecto a los motivos por los cuales



determinaron al Estado central sin las distinciones necesarias y el resto a la ley.

La convencional **Sra. Navarrete** consultó por la posibilidad de establecer contribuciones y tasas, así como ejemplos para poder concretar y comprender la propuesta en esta parte. Solicitó precisar mayormente las implicancias sobre ello.

El convencional **Sr. Uribe** consultó sobre la experiencia comparada de España e Italia en relación a la propuesta.

La convencional **Sra. Álvarez**, consultó la opinión a expositores sobre la solidaridad y compensación interregional, si se cuenta hoy con el conocimiento los criterios respecto de las distintas entidades territoriales o si se trata de un desafío hacia el futuro, siendo necesaria su implementación hacia la gradualidad.

El convencional **Sr. Álvarez** consultó a expositores cómo evitar competencias entre regiones respecto de tasas más bajas. Cómo podría una entidad financiera querer entregar recursos sabiendo que el territorio no tiene patrimonio sobre el cual responder.

Los expositores respondieron las consultas de convencionales dentro del tiempo otorgado. Indicaron que las entidades territoriales, cualquiera que éstas sean tendrán ingresos propios, por lo que no se debe mirar la capacidad de endeudarse bajo la situación de hoy. Los endeudamientos también se otorgan por flujo de caja, y sobre ello también los bancos efectúan el análisis crediticio. Lo que se obtiene vía endeudamiento, se tiene una regla de inversión en activo. En cuanto a los paraísos territoriales, el concepto de tasas es relevante, pues es una especie de tributo que está asociado a la prestación de un servicio público. Por ejemplo, el pasaporte o cédula de identidad, valor asociado a ello. Hoy se llaman derechos y no “tasas”, por lo que esto implica reconocer una realidad que hoy acontece. Un ejemplo de contribución especial serían los pavimentos participativos. Destacaron que estas facultades serían dentro de una ley marco que establezca el legislador.

A continuación, se abrió el espacio para la deliberación sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Velásquez** valoró la propuesta pues se trata de un diseño técnico relevante que permite dar mayor fruto a los recursos con los cuales cuenta el país. Se refirió al caso especial del cobre.

La convencional **Sra. Ampuero** destacó la postergación de la voluntad política





en cuanto a una debida descentralización financiera. Destacó diversos aspectos de la propuesta, como el sistema de endeudamiento responsable respecto de los territorios.

El convencional **Sr. Mena**, manifestó que debe explicitarse de mejor manera el riesgo y los beneficios de propuestas como estas, y así graficar más pedagógicamente como cambia lo que tenemos hoy. Por otro lado, debe relevarse cómo acercamos la actividad productiva a la ciudadanía, generando impacto positivo en el empleo y con otras variables de mejorar la vida de las personas desde las distintas aristas existentes. Manifestó finalmente la necesidad de mayor debate sobre el tiempo de todas iniciativas que implican discusiones de fondo importante, pero que lamentablemente aquel no existe.

La convencional **Sra Pustilnick** destacó la propuesta indicando que permite impulsar una mejor capacidad económica para las regiones y las distintas entidades territoriales de manera solidaria y equitativa. Específicamente valoró que esta propuesta se hace cargo de muchas inquietudes manifestadas por convencionales en el Pleno, con motivo del debate de una forma jurídica de Estado regional.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 1014-3 sobre haciendas territoriales y autonomía financiera.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en la Parte I de la misma, correspondiente a los artículos 1 al 12.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	0	5	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5037](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5037)

**Iniciativa convencional constituyente N° 696-3, que establece la participación significativa de los réditos de las actividades económicas de las unidades territoriales en que se organiza el país,** de las y los convencionales Alvaro Jofré Rodrigo Vega, Raúl Celis, Manuel José Ossandón, Angélica Tepper, Paulina Veloso, Ruggero Cozzi y Patricia Labra.



Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Álvaro Jofré**. Dio la palabra al **Sr. Max Barrera, Presidente de la Asociación de Usuarios de la ZOFRI**. Indicó que las regiones puedan disfrutar de los réditos que generan las diversas actividades económicas sin desconocer el carácter solidario con el resto de las regiones que conformar nuestro territorio nacional, haciendo uso de la autonomía que puedan detener a efecto de tomar en forma rápida y certera las decisiones que les permitan su mejor desarrollo.

Relevaron que una Constitución debe establecer un sistema que nos permita el mejor desarrollo como país, pero que a la vez procure un desarrollo autónomo de las distintas regiones. En este sentido, resulta clave la descentralización, de modo tal que a través de ella se persigue contar con un desarrollo autónomo (no soberano) de las regiones, principalmente desde un punto de vista económico, toda vez que las decisiones de distribución, asignación y gasto de los recursos fiscales tienen su común denominador en el hecho de que la decisión final siempre descansará en la autoridad central.

La propuesta tiene por objeto crear un sistema de administración de áreas metropolitanas, basado en cada Gobierno Regional, en articulación con las correspondientes Municipalidades, lo cual constituye un medio para salvaguardar el principio de igualdad (Sin perjuicio de las diferencias entre regiones) no reducir esta idea a solo 3 de las 16 regiones en las que se encuentra dividido nuestro territorio.

Por otro lado, crear una Ley de Rentas Regionales, que hoy Chile no tiene, y fortalecer la Ley de Rentas Municipales, con el objetivo de permitir la gestión autónoma local y regional de modo tal que, sin prescindir de la idea de colaboración entre las regiones, podamos contar con un sistema de distribución y asignación de recursos, a parte de la Ley de Presupuestos, que permita generar y mantener un flujo de circulante en la región.

Finalmente, proponen un fondo de convergencia para la equidad interregional. Inspirado en el modelo de la Unión Europea y de aplicación en otros países, tales como Canadá, Australia, o Japón, dirigido a establecer mínimos comunes de servicios garantizados en cualquier parte del territorio nacional para dotar a los gobiernos regionales de las capacidades de autonomía de gestión que les permita desempeñar sus tareas, comenzando por definir el Estado de Chile como uno de carácter descentralizado, sobre un territorio indivisible.



A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Andrade**, consultó a qué se refieren los expositores con mayores impuestos.

El convencional **Sr. Jürgensen**, consultó a los expositores si han estado alguna fórmula para generar mayor crecimiento en las regiones y por otro lado, consultó cómo ven la autonomía de administración de los recursos en las regiones.

El convencional **Sr. Arancibia** consultó a los expositores qué opinan sobre el tributo en la región e ingresos de recursos.

El convencional **Sr. Uribe** consultó a expositores a qué se refieren con el término de administración de áreas metropolitanas.

Los expositores respondieron dentro del término otorgado. Precisaron que es de su interés buscar mayor eficiencia en las actividades de las regiones y que eso genere mayor nivel de recaudación de impuestos, en retribución de este ejercicio en materia tributaria. En este sentido, se debe promover la productividad a nivel de cada región. Con ello, relataron el modelo de productividad regional que estiman óptimo, tomando como ejemplo el caso de la región de Tarapacá.

Se ofreció a continuación la palabra para que las señoras y señores convencionales deliberen sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Jofré**, se manifestó a favor de esta propuesta y relevó la importancia de establecer las circunstancias constitucionales para incrementar la productividad e ingresos en las regiones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 696-3 que establece la participación significativa de los réditos de las actividades económicas de las unidades territoriales en que se organiza el país.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	4	1	0	23	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5039](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5039)

**Iniciativa convencional constituyente N° 899, sobre establecer participación ciudadana a nivel de gobiernos locales.** de las y los convencionales César Uribe, Elisa Giustinianovich, Adriana Ampuero, Amaya Álvarez, Yarela Gomez, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, Tammy Pustilnick Ramona Reyes, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Cristobal Andrade, Hernán Velásquez, Helmuth Martínez y María Elisa Quinteros.

Expuso el convencional **Sr. César Uribe** como autor de la iniciativa. Explicó los fundamentos de la iniciativa y dio lectura a la misma, la que versa del siguiente tenor:

“La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política.

El régimen político vigente en Chile es la democracia representativa. Se busca lograr el equilibrio entre las diferentes formas de poder que en ella coexisten. Se deben establecer canales y mecanismos formales que permitan y faciliten la participación ciudadana de manera significativa en las diferentes etapas de la toma de decisión y de desarrollo de las políticas públicas. El derecho a tomar parte en la formación de decisiones democráticas no solo protege a la ciudadanía del poder arbitrario, sino que produce formas de poder que permiten establecer un diálogo horizontal y continuo sobre asuntos públicos. Este razonamiento sitúa entonces a la participación política directa como una forma de interacción necesaria desde el punto de vista del funcionamiento equilibrado de las democracias representativas. Como fundamento de este proceso de apertura o tránsito hacia un Estado garante de derechos, es necesario reconocer explícitamente el marco normativo nacional e internacional que consagra el conjunto de derechos humanos y promover transformaciones culturales que favorezcan el reconocimiento de los derechos humanos dentro de las instituciones y en las prácticas sociales.

La participación es un principio rector de los DDHH y a la vez un derecho que abarca todas las dimensiones de la vida humana y que la comunidad internacional, de la cual Chile hace parte, no solo reconoce y promueve, sino que amplía permanentemente. Contar con una ciudadanía activa e implicada es un síntoma de salud

democrática. Los gobiernos locales en los que los individuos dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás o a desarrollar proyectos comunitarios suelen entablar relaciones más fructíferas con los encargados de ejecutar las políticas públicas. Además, los proyectos comunitarios que se promueven desde la ciudadanía organizada pueden suponer importantes ahorros para la administración, ya que la detección de los problemas es inmediata y los diagnósticos pueden y suelen ser más acertados que aquellos que son diseñados centralizadamente. La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública define la participación como “un “proceso de construcción social de las políticas públicas, que conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran así como las de las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Esta propuesta busca reconocer a todas las personas no solo el derecho a ser parte de la vida política mediante su participación en temáticas sociales, ambientales, económicas culturales y de los asuntos públicos en general, si no que impone al estado la obligación de generar, promover y fomentar esta participación. Esta obligación va acompañada del necesario mandato de proveer mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica que asegure que la comunidad pueda tener los medios tanto físicos como culturales e intelectuales para propender a una mayor y mejor participación de los ciudadanos en la construcción de las políticas públicas y la gobernanza de su territorio. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto consideramos que la participación ciudadana es en sí misma una herramienta educativa, toda vez que ser parte de estos procesos necesariamente conllevan un mayor nivel de conocimiento e involucramiento de la esfera de lo público e incluso de algunas particularidades del mundo privado en cuanto estos interactúan constantemente, formándose así un círculo virtuoso que genera ciudadanos cada vez mejor preparados, con más conocimiento y más involucrados en el actuar público. A su vez esta ciudadanía podrá ser cada vez más precisa y resolutiva a la hora de plantear sus necesidades, las diferentes opciones para suplirlas e incluso participar activamente en la ejecución y fiscalización de las políticas públicas que se generen, lo que genera eficiencias a nivel presupuestario y logístico para el estado y eleva el estándar democrático del país.

Para asegurarnos de un nivel mínimo de participación ciudadana a la hora en que esta constitución entre en vigencia es que se establecen ciertos mecanismos de participación en su artículo tercero, los que deben ser considerados como un piso mínimo y en ningún caso un agotamiento de los mecanismos participativos. Es menester del



Estado estar en constante búsqueda de los mejores mecanismos para lograr la participación ciudadana inclusiva, universal, transparente, oportuna, pertinente, accesible, recíproca, igualitaria, gratuita, plural, diversa no discriminatoria, adecuada tecnológicamente, autónoma e institucional. En definitiva el estado debe estar constantemente evaluando los mejores mecanismos para facilitar la participación ciudadana, considerando las fluctuantes dinámicas sociales y los incesantes avances tecnológicos.

Mención especial se merecen los mecanismo propuestos en los artículos cuatro, cinco y seis de esta propuesta que establecen herramientas de participación que buscan poder revocar resoluciones emanadas por las autoridades, a las misma autoridades y proponer la creación de normativas. Todo esto a nivel regional y comunal. Si bien en una primera lectura la acción popular revocatoria y el referéndum revocatorio de autoridades nos pueden llevar a pensar que estas podrían generar inestabilidad política e institucional, el efecto es justamente el contrario. Ante la posibilidad de poder ser revocadas las resoluciones e incluso las autoridades esperamos que se alcance un mayor estándar de gestión, ya que la revocación es un escenario que gobernantes y administradores tratarán de evitar en cuanto está dentro de sus objetivos tener una administración exitosa y mantenerse en sus cargos. Y es que, la participación ciudadana temprana, legítima los procesos políticos y consecuentemente la democracia, dándole acceso al ciudadano y generando confianza, convirtiendo esta democracia representativa en una activa, que no solo recoge la opinión de los ciudadanos, sino que crea cultura política. Finalmente esta propuesta considera la conformación de un consejo de participación ciudadana que tendrá por objetivo promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, además de impulsar y establecer mecanismos de control por parte de los ciudadanos en los asuntos de interés público. Entendemos este consejo como una segunda vía, en conjunto con el rol del gobierno central, los regionales y comunales, para mantener una participación ciudadana activa y vigente. Consideramos esto necesario en el nuevo ordenamiento ya que la participación ciudadana será una parte importante de la democracia y la legitimidad del actuar del estado, por lo que la verificación de las condiciones idóneas para su debido funcionamiento no puede recaer solo bajo el aparataje gubernamental, en cuanto puede darse el caso de gobiernos que no tengan a la participación ciudadana como un eje central de sus políticas públicas y liderazgo en términos generales.”

A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.



El convencional **Sr. Arancibia** manifestó su preocupación con las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, pues a su juicio un consejo no sanciona, sino que aconseja.

El convencional **Sr. Jürgensen** se refirió a la Contraloría Popular, y solicitó mayor detalle para entender mejor el rol de dicha institución propuesta.

La convencional **Sra. Pustilnick**, consultó si la Contraloría Popular es un órgano propiamente tal o algo más funcional en relación mecanismos de participación. Respecto del referéndum revocatorio manifestó que es un tema bastante discutible y por ello consultó por qué sería beneficioso establecerlo a nivel regional y local.

El convencional **Sr. Mena** consultó por diferencias de lo expuesto con lo ya aprobado y cómo lo hacemos calzar. Solicitó mayor precisión respecto de aspectos de afectación a pueblos originarios en temas susceptibles de poder serlo respecto del consentimiento libre e informado, así como la Contraloría Popular.

El convencional **Sr. Uribe** respondió a las consultas formuladas. Indicó que se trata de una iniciativa repartida entre distintas comisiones. Preciso que la Contraloría Popular no se trata de un órgano regional ni comunal sino un órgano nacional, como parte de una facultad de las distintas reparticiones públicas. No es similar al COSOC, aunque va en esa línea, aclaró. Sobre la contraloría popular, respecto al referéndum revocatorio, precisó que esto se vio en la comisión de principios constitucionales, pues ahí se debaten mecanismos de democracia directa.

Finalmente, se dio continuidad a la deliberación respecto de esta iniciativa constitucional.

El convencional **Sr. Arancibia** insistió en que un consejo no puede ser sancionador. Sobre escaños reservados reflexionó por qué no también se consideran a otras minorías étnicas, pues aquello depende de la población y su representación.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 899-4 que establece la participación ciudadana a nivel de gobiernos locales.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto los artículos 2 y 3 de la misma.



**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	4	0	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5042](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5042)

**Iniciativa popular constituyente N° 47-3, que establece universidades estatales en cada región del país,** presentada por Consorcio de Universidades del Estado de Chile.

Expuso como autor de la iniciativa, el **Sr. Ennio Vivaldi**, Rector de la Universidad de Chile. Comenzó destacando el rol de las mujeres a lo largo de la historia, así por intermedio de la Universidad de Chile y universidades públicas.

A continuación, expuso sobre los fundamentos de la iniciativa popular. Destacó que las universidades del Estado han desempeñado un rol histórico fundamental para el desarrollo del país. Desde la creación de la U. de Chile a inicios de la República, como sucesora de la Real U. de San Felipe; la posterior instalación de la Universidad Técnica del Estado, el año 1947, mediante la fusión de diversas escuelas politécnicas; la apertura, desde los 50, de múltiples sedes regionales en todo el territorio, se conformó un complejo entramado de centros de estudios superiores y sus comunidades, fomentadas por el Estado, que han protagonizado los más trascendentales avances del país.

En 1981, se produjo una reforma que inició la privatización de la educación superior, con la creación de decenas de universidades privadas y el debilitamiento de la red de universidades estatales. Las políticas mercantiles se acentuaron con mecanismos de financiamiento estudiantil, ideados como subsidios a la demanda, y la competencia descarnada entre las instituciones por el acceso a recursos.

Desde el año 2018, con la creación de nuevas instituciones de ed. superior del Estado y el establecimiento de una nueva regulación para toda la ed. superior y de un marco común para las instituciones estatales (mediante las leyes N°s 21.091 y 21.094, respectivamente) se avanzó en fijar condiciones para que las Ues del Estado se reencuentren con su misión, esto es, contribuir, desde la perspectiva universitaria, a la





satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.

Sin embargo, precisó, pareciera que cada avance procurado en dicho sentido encuentra resistencia en el actual modelo constitucional, que propicia la existencia de un mercado educacional, con escasa referencia al rol particular de las universidades estatales dentro de la Administración del Estado, junto a la nula protección a la autonomía universitaria (que en 1971, mediante la Ley N°17.398, fue protegida constitucionalmente, pero luego omitida por la constitución del 80). (Ver más fundamentos en adjunto).

El Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) es una agrupación que reúne a las dieciocho universidades estatales del país, desde Arica a Magallanes, constituida como una corporación sin fines de lucro el 13 de Mayo de 1993, y cuya personalidad jurídica fue otorgada por Decreto N°31, del 7 de Enero de 1994. La presentación de la presente iniciativa fue acordada por el Directorio del CUECH, sobre la base de las propuestas emanadas desde los equipos técnicos y jurídicos del mismo Consorcio y de sus universidades integrantes.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Uribe** formuló preguntas sobre el articulado en particular, preguntó la intención de la iniciativa pues a su juicio la exigencia de existir una universidad pública en cada región se cumple.

El convencional **Sr. Arancibia** preguntó en relación a la población marginal de ciertas regiones, cuál sería el aporte al desarrollo de las universidades.

El convencional **Sr. Álvarez** dio cuenta del traslado a otras regiones por parte de la población chilota desde hace años. Sin embargo, existe la Universidad de Los Lagos, precisó. Preguntó al expositor cómo se visualizan especialmente en este tipo de territorios, en la relación de estas universidades estatales con otros establecimientos educacionales que pudiesen ser privados, como colegios, otros sectores productivos (como industria salmonera), etc.

La convencional **Sra. Álvez** consultó cómo cree que se va a revertir la centralización de las universidades estatales, es decir, cómo se pretende ejecutar esto mediante la propuesta. Valoró la visión de la educación de mercado que no sea preferente, cómo se van a vincular las universidades estatales con universidades



públicas regionales.

El convencional **Sr. Castillo** preguntó por la relación de la Universidad de Chile con las universidades regionales que se han creado recientemente. Qué sinergia hay entre todas ellas.

El convencional **Sr. Jürgensen**, preguntó por aquellas regiones que tienen sedes y si éstas cumplirían con la labor que se plantea. Preguntó al expositor si está de acuerdo con el mecanismo de competencia entre universidades privadas y estatales respecto de proyectos de relevancia para la región convocados por el Gobierno regional. Preguntó por su opinión favorable o desfavorable sobre el aporte que han hecho universidades privadas a la educación del país.

El convencional **Sr. Mena** consultó al autor en qué región considera necesario levantar universidades estatales, que opina de la exclusividad de las universidades del estado del ejercicio de la función pública.

El convencional **Sr. Bacian** consultó mayores detalles de cómo se pretende el financiamiento de estas universidades.

A continuación, se dio espacio a que el expositor respondiera las preguntas formuladas. El **Sr. Ennio Vivaldi**, indicó manifestarse a favor de promover las áreas de crecimiento propio de cada región al interior de cada universidad regional, entregándole su propio sello en la formación de estudiantes. Por otro lado, indicó que la cantidad de habitantes no debe ser un criterio para establecer una universidad, sino que el criterio es cuánto puede impactar a la región o a un territorio específico (soberanía territorial). Finalmente, dio relevancia al hecho de que no se puede medir económicamente el impacto, financiamiento y sostenibilidad de proyectos de universidades públicas para su acceso a beneficios, toda vez que lo relevante es lo público que surge de ello y su contribución social al país. En este caso, dio como ejemplo el caso de la gratuidad en la educación respecto de universidades públicas no acreditadas.

Finalmente, se dio continuidad a la fase de deliberación sobre esta propuesta.

La convencional **Sra. Mella** destacó la realidad de muchos estudiantes de regiones en la necesidad de migrar para acceder a educación superior, valorando esta propuesta pues fortalece la educación pública regional.



El convencional **Sr. Gómez** valoró la propuesta y destacó el caso de la Universidad de Aconcagua y otras experiencias que han contribuido a mejorar la educación regional.

La convencional **Sra. Aguilera** manifestó que vale la pena pensar un nexo, y no siempre pueda ser una universidad, sino también procesos e instituciones intermedias que se articulen con otras instituciones educacionales, como centros de estudio que podrían constituirse como puente entre la educación media y la universidad. Potenciar la capacidad de cada territorio también se requiere con motivo de la educación, pudiendo las universidades avanzar en potenciar las particularidades del territorio donde están situadas.

La convencional **Sra. Giustinianovich**, valoró la propuesta en cuanto a nuevas formas de pensar y promover la educación pública. Destacó elementos relevantes de la educación superior en la formación de estudiantes.

La convencional **Sra. Ampuero** agradeció la propuesta y relató su propia experiencia como habitante de Chiloé y su necesidad de migrar a otra parte del país para estudiar una carrera universitaria. Así, destacó cómo esta propuesta permite hacer frente a dichas realidades de vida.

El convencional **Sr. Mena**, hizo presente que en la región de Los Ríos no hay una universidad estatal a diferencia de otras regiones. Sin embargo, valoró el aporte de la Universidad Austral.

**Votación:** Iniciativa Popular Constituyente N° 47-3 que establece universidades estatales en cada región del país.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	0	5	0	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5044](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5044)

**Iniciativa convencional constituyente N° 347-3, que establece inhabilidades**



para el ingreso a cargos de Administración Pública, de las y los Convencionales Martín Arrau, Rocio Cantuarias, Margarita Letelier, Ruth Hurtado, Pablo Toloza, Harry Jurgensen, Claudia Castro, Maria Cecilia Ubilla, y Teresa Marinovic.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Martín Arrau**. Dio lectura a los fundamentos de la propuesta, los que versaron del siguiente tenor:

“En Chile no existe una regulación que impida los abusos que se cometen en la designación de funcionarios de Gobierno con vínculos familiares, por parte de las autoridades de los distintos Ministerios y reparticiones. Ello se traduce en que, a lo largo de la Administración del Estado, se pueden encontrar una gran cantidad de funcionarios que ocupan cargos de Gobierno cuyo único mérito es ser pariente de algún alto funcionario o congresista cercano al Gobierno.

Los avances del Sistema de Alta Dirección Pública han sido un aporte, pero son absolutamente insuficientes para hacerse cargo de una demanda transversal por mayor preparación y neutralidad en el ejercicio de la función pública. Aún quedan miles de cargos de confianza y designaciones en cargos a honorarios, a contrata e incluso en empleos de planta que quedan al criterio exclusivo de las autoridades, sin un sistema de evaluación y calificación adecuado a las necesidades que nuestro país demanda.

Como dan cuenta numerosos reportajes de prensa y denuncias ciudadanas -cuya información se ha recopilado en gran medida gracias a la Ley de Transparencia que entró en vigencia el año 2005- hoy es posible saber con mayor certeza cuántos funcionarios son designados por las autoridades de turno por el solo hecho de tener un parentesco con autoridades de Gobierno, con algún congresista o autoridad municipal, aun cuando, no cuente con la preparación, experiencia o méritos suficientes para llevar a cabo las tareas propias del cargo.

La circunstancia anterior, por sí sola, es un antecedente más que genera indignación en la ciudadanía y que contribuye al desprestigio de la actividad política, además de constituir un acto profundamente injusto. En efecto: El Estado no puede ser un botín que queda a merced del Gobierno de turno para repartir cargos a su antojo, sin tener el más mínimo sentido de responsabilidad y de rigor. Lo anterior se agrava si se considera que, eventualmente, muchos parlamentarios y autoridades podrían estar siendo cooptados en sus decisiones, producto de la dependencia que familiares o cercanos a él tienen respecto de cargos del Estado. En este sentido, cabe razonablemente preguntar: ¿Qué libertad tiene un Diputado o un Senador, por ejemplo,



cuyo cónyuge o sus padres fueron contratados en la administración pública, para votar libremente una iniciativa que fue presentada por el Gobierno?”

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Mella**, indicó que hoy hay propuestas destinadas a distinguir cargos de confianza respecto de otros cargos de la Administración Pública. En este sentido, solicitó aclarar si esta propuesta aplicaría para ambos tipos de cargos, o solamente para aquellos de la Administración.

La convencional **Sra. Pustilnick**, consultó a si esta propuesta se refiere a cualquier parte de territorio respecto de cargos regionales o si solo son casos que son de una misma región.

La convencional **Sra. Álvez** manifestó que entiende que los cargos de confianza son de designación directa, pues en otros casos es sólo respecto del mérito, lo que la norma confunde y podría generar situaciones injustas. Estima que esto podría aplicarse a las demás entidades territoriales.

El convencional **Sr. Castillo**, solicitó precisar el principio de laboralización. Además, manifestó que hoy existen prohibiciones similares.

El convencional **Sr. Arrau** aclaró que la propuesta abarca respecto de un criterio nacional, toda vez que existen parentescos respecto de autoridades en regiones distintas y respecto de funciones que podrían ser similares. Aclaró que esto no aplicaría para cargos de Administración Pública electas bajo criterios de mérito.

Finalmente, se dio paso a la fase de deliberación de la iniciativa.

El convencional **Sr. Uribe**, manifestó estar a favor de la propuesta, puesto que no quiere que ocurra con la región a la que representa, como es el caso de Ñuble.

El convencional **Sr. Castillo**, estimó que lo propuesto está en la ley y de hecho es más exigente que la propuesta, pues es extensivo a cargos directivos y jefes de departamento. La motivación de la norma tiene que ver con la regulación del empleo público, precisó.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 347-3 que establece



inhabilidades para el ingreso a cargos de Administración Pública.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5047](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5047)

**Iniciativa convencional constituyente N° 477-3, que estable el Estatuto de la Administración Pública y reconoce la titularidad sindical de las asociaciones o gremios de funcionarios públicos.** de las y los Convencionales Miguel Ángel Botto Salinas, Fuad Chahín Valenzuela, Luis Barceló Amado, Rodrigo Logan Soto, Andrés Norberto Cruz Carrasco, Claudio Gómez Castro, Carlos Calvo Muñoz, Manuel José Ossandón Lira y Francisco Javier Caamaño Rojas.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Miguel Ángel Botto**. Agradeció a la Comisión por la oportunidad, y otorgó la palabra a representantes de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile (ASEMUCH).

Señalaron que este es un tópico que ha tenido variadas opiniones, tanto a favor como en contra. Sin embargo, a nivel de reconocimiento internacional ha sido reconocido ampliamente en importantes acuerdos, pactos y convenios internacionales. En nuestra legislación, en cambio, y a partir de la dictatorial Constitución Política de la República de 1980 y el posterior Código Laboral, si bien es cierto se reconoce el fundamento del titular original de la organización sindical que es el trabajador, en el desarrollo y conclusión de la prerrogativa laboral se desdibuja ostensiblemente este concepto, en el ámbito laboral, quedando reducido a una mera declaración de intenciones.

En el caso de los trabajadores del sector público, esta situación es un poco más compleja aún y, necesariamente, se debe abordar a partir de la ratificación del C151 de la OIT por parte del Estado de Chile, mediante el Decreto 1.539 de septiembre del año 2000, pero que carece aún de implementación en la legislación nacional. Este Convenio es fundamental para entender la proposición de un articulado tendiente a complementar una propuesta de iniciativa popular de norma de la función pública municipal que se pudiera incorporar al debate en la Convención Constitucional considerando,



específicamente el ámbito de acción territorial comunal y su vínculo más estrecho con la ciudadanía local.

Para los efectos de hilvanar un correlato para fundamentar esta iniciativa, señalaron que primero se debe asumir los Convenios Internacionales 87 y 98 de la organización Internacional del Trabajo ratificados por Chile y en pleno vigor, que en términos abreviados dicen relación al reconocimiento a la Libertad Sindical y a la protección del derecho a sindicación, (C87), y Sobre el Derecho a Sindicación y Negociación Colectiva, (C98), en términos generales, para los trabajadores en los países miembros de la OIT. La primera de estas normas establece que todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir organizaciones, redactar sus reglamentos y normas y gozaran de la protección al derecho de sindicación.

Por su parte, la segunda, garantiza la protección contra todo acto de discriminación que pueda menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo, no permitiendo condicionar su afiliación o dejar de ser miembro para mantener o no su empleo. Además de establecer la adopción de medidas adecuadas para estimular y fomentar entre los empleadores y sus organizaciones y los trabajadores y sus respectivas organizaciones el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con la finalidad de perfeccionar acuerdos y contratos colectivos que fijen las condiciones de empleo. En esta nomenclatura de definiciones se configura el concepto de Libertad Sindical que a partir de estas precisiones se aprecian tres elementos que constituyen los tres pilares fundamentales que sirven de sustento al concepto de libertad sindical: la libertad y autonomía de organización, la acción colectiva y el derecho a huelga.

Precisaron que de esto se desprende que, en el caso de los trabajadores, son sujetos del derecho fundamental de asociarse a otros para constituir su organización sindical como instrumento para nivelar condiciones laborales frente al empleador en un proceso de negociación colectiva de mejoramiento laboral y salarial, que en definitiva es la titularidad sindical para actuar en representación del o los trabajadores que otorgan o transfieren dicho derecho a su organización sindical mediante la afiliación y aceptación de sus normas estatutarias. En el caso particular de los trabajadores públicos, fuera de reconocer las características propias de servidores del Estado, pero también como trabajadores asalariados, les asiste el reconocimiento de estos derechos laborales fundamentales mediante la ratificación del C151 que viene a fundamentar la incorporación de sus derechos e investiduras públicas en una futura carta magna, considerando el rol y obligación de ser garantes del adecuado uso de los recursos y



gastos públicos del erario público nacional y municipal. Que entre otras prerrogativas a considerar deben establecerse reconocimientos a la carrera funcionaria, la investidura pública y a la titularidad sindical de sus organizaciones laborales.

A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Álzvez** consultó desde qué perspectiva la propuesta se vincula a la forma jurídica del Estado y de la distribución del poder.

El convencional **Sr. Uribe**, consultó cómo se hace cargo esta propuesta de funcionarios que están contratados bajo honorarios.

El convencional **Sr. Álvarez** señaló que él es autor de una iniciativa similar en la Comisión de Derechos Fundamentales. Por ello, consultó cuál es la postura sobre la negociación colectiva respecto a la iniciativa pues no hay referencias sobre esto.

Los expositores dieron respuesta a las preguntas en el tiempo otorgado. En este sentido manifestaron creer que esta iniciativa está en esta comisión pues forma parte de la forma de cómo se organizará el estado. En este sentido, su estamento relevante son los trabajadores y por ello estaría bien planteada. La estructura del Estado no puede entenderse sin ellos, en la nueva Constitución no se deben dejar pasar el hecho de que se reconozcan a los mal denominados funcionarios o servidores, sino como trabajadores. En este sentido, aborda la calidad de los mismos funcionarios respecto del empleo público.

Se abrió la fase de deliberación de la iniciativa, sin embargo, no hubo palabras solicitadas.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 477-3 que establece el estatuto de la Administración Pública y reconoce la titularidad sindical de las asociaciones o gremios de funcionarios públicos.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	5	2	0	25	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5052](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5052)

**Iniciativa convencional constituyente N° 501-3, que establece un nuevo Sistema de Función Pública y consagra igualdad entre trabajadores del sector público y privado,** de las y los Convencionales Carol Bown, Martin Arrau, Rocio Cantuarias, Pablo Toloza, Claudia Castro, Alfredo Moreno, Harry Jürgensen, Margarita Letelier y Pollyana River.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Carol Bown**. Comenzó señalando que uno de los motivos por el cual la ciudadanía desconfía en el aparato estatal es la existencia de diferencias arbitrarias entre trabajadores del sector privado y los funcionarios públicos. Si bien, teóricamente, la creación de un Estatuto Administrativo tiene como objetivo la protección del funcionario público y del servicio que presta la Administración frente a los vaivenes políticos que pueda sufrir el país, esto actualmente no es percibido así por la ciudadanía y tampoco ha sido así en la práctica.

Producto de las decisiones de los tribunales de justicia, se ha producido un fenómeno denominado “laboralización de la función pública” en la que por vía judicial se ha hecho aplicable las normas laborales a los funcionarios del Estado, rompiendo con la lógica estatutaria. De esta manera, las distinciones que justificaban la existencia de un estatuto administrativo se difuminan, configurándose ante la opinión pública como un conjunto de privilegios que gozan los funcionarios públicos adicionales a los que ostenta cualquier otro trabajador del país.

Gran ejemplo de lo anterior, destacó, es la inamovilidad funcionaria que hace que la función pública, más que perfilarse como un estándar alto de probidad y un escudo en contra del partidismo político, sea un puesto de trabajo en el que, en caso de encontrar un bajo rendimiento en un funcionario, las dificultades para removerlo sean excesivas, aprovechándose de su posición y en desmedro de la función pública encomendada. Esto acarrea múltiples problemas para el ejercicio de la función pública, destacando el hecho de que se mancha, por culpa de unos pocos, a todos los funcionarios del país. Además, la imposibilidad de remoción de funcionarios a contrata en función de la “confianza legítima”, doctrina que impide la remoción de funcionarios a honorarios que, a su vez, es una institución para una contratación eminentemente temporal, provoca que se mal utilicen fondos públicos en desmedro de las necesidades de las personas.



De esta manera, es necesario establecer las bases para la transformación de la función pública para que ya no sea sinónimo de estabilidad mal entendida para unos pocos, sino un equivalente de correcto funcionamiento y servicio para todos los chilenos y habitantes del país. Esto se logra por medio de la equiparación de la legislación aplicable entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, es decir, en la aplicación del Código del Trabajo, en lo pertinente, para ambos grupos por igual; en la profesionalización de quienes acceden a cargos públicos y en la eliminación de diferencias hoy arbitrarias y perjudiciales para la misma función pública, como la inamovilidad funcionaria.

Lo anterior, no sólo es beneficioso para los ciudadanos usuarios de los distintos servicios públicos, sino también para el propio trabajador del sector público, pues les haría aplicables el régimen de indemnizaciones y el procedimiento de tutela laboral, así como de otros derechos que hoy están establecidos exclusivamente para los trabajadores del sector privado. Lo anterior, sin perjuicio de que existan ciertas excepciones que, por razones de continuidad de servicio no puedan serles aplicable, como la negociación colectiva propia del sector privado.

Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos las diferencias entre ambos grupos de trabajadores sí son fundadas e, incluso, necesarias. Por esta razón es que se debe contemplar la posibilidad de consagrar dichas diferencias en una ley, aunque deberá tener como requisito la seguridad nacional, o bien, salvaguardar el principio de la continuidad de la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, que la Administración del Estado pueda continuar prestando servicios.

La coordinación hizo precisión de que el artículo 3° de esta propuesta es de competencia de la Comisión de Sistemas de Justicia.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Mella** consultó sobre el artículo transitorio y lo referente a gradualidad, qué es lo que tienen en mente con ello y si consideran que un año es suficiente.

La autora dio respuesta a la pregunta formulada. Indicó que efectivamente el artículo transitorio respecto de personas que tienen derechos adquiridos, como lo es el caso de funcionarios de planta. En este sentido, lo que se puede establecer un proceso progresivo en relación al término de las plantas de conformidad a las causales legales y



éstas se extingan, y se vaya contratando a nuevos funcionarios bajo disposiciones del Código del Trabajo. A la vez, se establecería una coordinación con el sistema de Alta Dirección Pública. Sobre el plazo de un año para el Congreso en cuanto a dictar una ley que ejecute esta propuesta, efectivamente estimó que se trata de un plazo muy breve, necesitando ser ampliado.

Finalmente, se dio continuidad a la fase de deliberación.

El convencional **Sr Castillo**, reflexionó sobre qué sucede con los derechos colectivos laborales sobre estos funcionarios de conformidad a esta propuesta. El servicio público es una fuente de empleo, y esto contradice la noción de servicio hacia la comunidad. O estatutos especiales, o Código del Trabajo.

El convencional **Sr. Jürgensen** se manifestó a favor de este proyecto pues estima que funcionarios públicos son efectivamente trabajadores, a la vez que tiene una vocación de comunidad hacia garantizar el servicio. Esto último, particularmente respecto de los derechos colectivos de trabajadores, como la huelga.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 501-3 que establece un nuevo Sistema de Función Pública y consagra igualdad entre trabajadores del sector público y privado.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el artículo 1 de la misma. Asimismo, se excluyó el artículo transitorio.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
1	20	4	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5054](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5054)

**Iniciativa popular constituyente N° 33-3, que establece protección del Estado a los cuerpos de Bomberos,** presentada por los señores José Molina Palma y Julio Hardoy Baylaucq.

Expusieron los autores de esta iniciativa popular. Señalaron que, al revisar la



historia de los cuerpos de bomberos de Chile, siempre está presente el grave problema del financiamiento. En efecto, por más de 170 años los cuerpos de bomberos han tenido que mantenerse con presupuestos poco estables y dispares unos de otros, provenientes del esfuerzo de sus propios bomberos, un aporte del presupuesto de la nación, los municipios, los gobiernos regionales, las colectas públicas y socios contribuyentes.

Estos recursos nunca han sido estables y han dependido de la voluntad tanto de las instituciones de turno como de las personas naturales, por lo tanto, no se han podido establecer presupuestos anuales de la institución, ni menos de cada uno de los cuerpos de bomberos. Por ello, desde sus inicios se ha sufrido la falta de financiamiento, al punto de afectar gravemente el servicio que ofrece a la comunidad y que -por el avance del país- cada vez es más exigente y requiere de mayor capacitación, entrenamiento y equipos.

En consecuencia, estimaron, se genera una gran brecha en la atención a la comunidad, localidades con mayores recursos ofrecen un sistema más continuo, rápido y eficiente, en desmedro de lugares más apartados y comunidades con escasos recursos.

En términos generales los bomberos chilenos deben cubrir -con fondos propios: El 55% de los gastos operaciones de la institución. El 40% de los gastos de inversiones (compra de carros-unidades de rescates-camionetas, etc) Para lograr cubrir medianamente esos gastos e inversiones, los bomberos voluntarios deben en consecuencia destinar casi un 50% del tiempo que destinan a la institución en la búsqueda de recursos, lo que afecta gravemente la motivación, la capacitación y entrenamiento del personal.

Precisaron que Bomberos de Chile es la institución profesional (capacitada según normas internacionales) de respuesta a todo tipo de emergencias a lo largo de todo el país. Su capacitación se encuentra ligada a una malla curricular que permite formar un bombero estándar llamado “Bombero Operativo” y una malla curricular con curso de especialidad que lo preparan como bombero profesional en distintas áreas. Bomberos de Chile es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que sus integrantes voluntarios prestan una gran amplitud de servicios tanto a nivel nacional y también internacional.

A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.



La convencional **Sra. Rivera** dio cuenta de la situación precaria de Bomberos, y estimó que no deben implorar. Se mostró favorable, para que esta iniciativa prospere. por qué después de tanto tiempo les ha costado que el Estado entregue el respaldo institucional y económico, cuáles son las trabas.

El convencional **Sr. Jürgensen** consultó sobre datos de otras regiones en esta materia y sin embargo, manifestó estar de acuerdo en apoyarla.

La convencional **Sr. Ampuero** valoró la propuesta pues estimaba necesario levantar una iniciativa como esta. Consultó a expositores a qué nivel del Estado quisieran hacer exigible dicha obligación.

La convencional **Sra. Pustilnick** consultó si sería mejor que la redacción de la norma se pensara en un porcentaje de la ley de presupuesto, sino constantemente habría que debatir ese monto. Si a nivel comparado existen otras constituciones donde existan estos mandatos.

La convencional **Sra. Álvez** consultó por la forma jurídica que tiene el cuerpo de Bomberos. A su juicio, cree que sería una vinculación público-privada que habría que defender. En este sentido, consultó también por cómo sería esta vinculación respecto de los territorios en relación a forma de Estado regional. Pensó en el caso de Canadá que cobran el servicio de manera remunerada a personas jurídicas y si esta podría ser una forma de ingreso.

El convencional **Sr. Álvarez**, se manifestó a favor de esta propuesta, y consultó sobre el mecanismo de financiamiento y mayores precisiones sobre ello.

El convencional **Sr. Castillo**, consultó por qué no contar con una institución pública destinada al financiamiento y costos de las necesidades de Bomberos.

A continuación, se dio espacio para que expositores respondan las preguntas formuladas dentro del tiempo otorgado. Los expositores, explicaron aspectos de fuentes de financiamiento que a su juicio han sido insuficientes. En este sentido, la glosa de presupuesto generalmente cubre aspectos de operaciones pero aquello no es suficiente, pues no cubre adquisición de carros bomba y equipamiento, por ejemplo. Ello, hoy es colaborado en su financiamiento por municipios y gobiernos regionales. Sin embargo, dichos aportes son marginales.



Se abrió la palabra para deliberar sobre esta propuesta. El convencional **Sr. Arancibia** y el convencional **Sr. Mena** manifestaron su apoyo a esta propuesta y la necesidad de contar con un financiamiento integral central a Bomberos.

**Votación:** Iniciativa Popular Constituyente N° 33-3 que establece la protección del Estado a los cuerpos de Bomberos.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5055](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5055)

**Iniciativa convencional constituyente N° 567-3, que establecer el deber del Estado de velar por el acceso a las personas a servicios públicos,** de las y los Convencionales Marcos Barraza, Valentina Miranda Arce, Bessy Gallardo, Malucha Pinto, Ingrid Villena Narbona, Mauricio Daza, Andres Cruz Carrasco, Constanza San Juan, Manuel Woldarsky González y María Trinidad Castillo Boilet.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Marcos Barraza**. Comenzó su presentación señalando que las Municipalidades son los órganos públicos más cercanos a los problemas cotidianos de las personas, siendo vehículos de transformación de la experiencia local y ciudadana y estando a cargo de servicios de aseo, áreas verdes, iluminación y pavimentación de calles. En este sentido, la lógica sería que las Municipalidades puedan prestar estos servicios en igualdad de condiciones a todos los habitantes de Chile, con especial consideración a la población que habitan las comunas, enfocando esfuerzos donde hay más necesidades. Sin embargo, la realidad nacional es diametralmente opuesta. De esta manera, los habitantes de la comuna de Vitacura, tienen presupuesto municipal por persona de \$1.136.044, y los de la comuna de Lo Espejo, de \$169.550. Lo señalado se traduce en que el presupuesto per cápita entre el municipio con más recursos y el con menos alcanza una diferencia de 7,9 veces (según datos del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile – Censo 2017).

Lo anterior se traduce en que en comunas como de bajos ingresos, las



condiciones de vida urbana se ven precarizadas, pues no existe acceso a comercio, supermercados, farmacias, cajeros automáticos, bancos, metro, entre otros. Dado que la Constitución vigente consagra el principio subsidiario, las empresas que prestan dichos servicios deciden no estar presentes en comunas de bajos ingresos, por consideraciones de seguridad en los espacios públicos.

Precisó que las Municipalidades o los órganos administrativos que las reemplacen en la nueva constitución como unidad territorial, deberían tener ingresos per cápita en función a las necesidades de las personas que habitan las respectivas comunas. En un primer momento, deberían existir asignaciones diferenciadas en beneficio de las comunas con mayores necesidades, sea en consideración al nivel socioeconómico de sus habitantes o sea por necesidades nacientes de comunas que por cambios en su composición demográfica o geográfica requieran de mayor inversión municipal. Luego de este período de ajuste y de “igualar la cancha”, se debe apuntar a que las municipalidades tengan un ingreso idéntico per cápita. Además de la asignación de presupuestos que se enfoquen en las necesidades de las personas y realidades de cada comuna, debe existir un mandato estatal a que las personas puedan contar con servicios de este tipo, con prescindencia del nivel de ingresos de las personas que habitan los territorios, con expreso reconocimiento al principio de Equidad Territorial.

A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Álvez** solicitó al expositor su diagnóstico de por qué ha fallado el fondo común municipal, pues existen voces que aún postulan que aquello sería lo adecuado. Consultó si piensa que podría ser un mecanismo fiscal, pero con criterios de diferenciación.

El convencional **Sr. Jürgensen**, consultó cómo va a funcionar la autonomía comunal respecto de los beneficios.

La convencional **Sra. Rivera**, qué sucede con habitantes más vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, niños vulnerables. Esto supone mayor presupuesto.

El convencional **Sr. Álvarez**, consultó cómo se compatibiliza el número de habitantes con aquellos casos en que es muy bajo, y como esto se soluciona en favor del inciso 2º de la propuesta, pues el presupuesto por persona debería ser equitativo.



La convencional **Sra. Ampuero**, consultó a qué se refiere con “la cantidad de personas que habitan un determinado territorio”, pues podría suceder que aquello perjudique a territorios que tienen menor población.

El expositor respondió a las preguntas dentro del tiempo otorgado. El convencional **Sr. Barraza** manifestó que lo central es un ingreso per cápita basal que responda a criterios de suficiencia económica. Estimó que se requiere una reorganización fiscal, teniendo en cuenta un criterio equitativo y no igualitario, donde el factor de corrección es hacia arriba y no hacia abajo.

A continuación, se dio continuidad a la fase de deliberación de la iniciativa.

El convencional **Sr. Jürgensen**, manifestó su preocupación de esta propuesta pues a su juicio no considera la realidad de comunas de menor población. Por otro lado, a su juicio, la autonomía territorial no dialogaría con esta propuesta.

La convencional **Sra. Ampuero**, manifestó estar a favor de la propuesta pero discrepó del hecho de que se pueda generar equidad territorial con un solo centro de distribución económica y que no tiene noción ni capacidad de resolver los problemas de los territorios.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 567-3 que Establece el Deber del Estado de velar por el acceso a las personas a servicios públicos.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	7	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5059](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5059)

**Iniciativa Convencional Indígena N° 46-1 sobre territorio indígena y libre determinación.** La iniciativa fue presentada, a través de la plataforma respectiva, por Nivaldo Piñaleo L., en representación del pueblo Mapuche, la cual contó con el patrocinio de tres comunidades indígenas.





Expuso su contenido frente a la comisión su autor, Nivaldo Piñaleo, junto a Pedro Núñez. El Sr. Piñaleo ofreció la introducción de la iniciativa evidenciando la participación de las comunidades que dio origen a la propuesta. Por su parte, el Sr. Núñez abogó por el empoderamiento de las autonomías territoriales indígenas en un plano de igualdad con los otros territorios no indígenas; así también, afirmó que la consagración del Estado plurinacional y otorga protección a los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el objetivo de la norma es el reconocimiento a la propiedad ancestral indígena, lo que conlleva el derecho al territorio, tierras, aguas y recursos naturales. Bajo su entendimiento, los derechos territoriales de los pueblos originarios son ejercidos por parte de un sujeto colectivo, ya sea de una nación en su conjunto o en sus diversas unidades económicas o sociales propias, comprendiendo la gestión, utilización, goce, disposición y contribución a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que éstos albergan. Todo lo anterior en razón del despojo territorial, que ha significado la pérdida del 95%, aproximadamente, del territorio histórico.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Castillo** interrogó sobre los cambios en la vida de los habitantes de la comunidad al reconocerse su territorio como una autonomía territorial indígena.

La convencional **Sra. Navarrete** solicitó explicar cómo visualizan el reconocimiento y organización interna como territorio autónomo.

El convencional **Sr. Jürgensen** instó a ahondar sobre los procedimientos de determinación de los territorios geográficos, la restitución de tierras sujetas a propiedad privada y la autonomía financiera.

La coordinadora **Sra. Mella** aclaró que la propuesta sujeta a conocimiento y deliberación de esta comisión es el art. 13 de la iniciativa, el que señala: “Artículo xx: Para la protección de los territorios indígenas y en cumplimiento del derecho a la libre determinación, se crearán los territorios autónomos indígenas con personalidad jurídica, autonomía financiera y patrimonio propio y cuentan con las potestades y competencias administrativas, reglamentarias, ejecutivas y fiscalizadoras necesarias para autogobernarse, en el ámbito de sus competencias, con arreglo a lo dispuesto en la Constitución y la ley.”

El expositor, Sr. Piñaleo, en respuesta a las interrogantes enfatizó la importancia de reconocer y proteger las zonas geográficas que comparten las entidades territoriales, en ese sentido, los deslindes territoriales institucionales no se condicen con la cosmovisión de los pueblos habitantes del territorio, especialmente tras usurpación histórica de territorios mapuches. En lo que respecta a la obtención de recursos, afirmó que ENEL podría pagar su patente en la Municipalidad de Alto Bío Bío, aumentando el presupuesto municipal, en ese sentido, explicó que los recursos existen, pero se necesitan instrumentos para poder hacer uso efectivo de los mismos. Señaló que con la propuesta no buscan crear un nuevo ordenamiento constitucional exclusivo para el pueblo Mapuche sino adaptar las reglas, para ello, a su parecer, es necesario la devolución de tierras y aguas, así como también, desarrollar la libre determinación del pueblo Mapuche. Por su parte, el Sr. Pedro Núñez afirmó que el territorio Pehuenche se puede delimitar geográficamente a fin de otorgar las autonomías señaladas en la propuesta, específicamente la autonomía financiera, mejorando la distribución de recursos que generan las empresas con asiento en el territorio.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. No se presentaron observaciones.

El convencional **Sr. Arancibia** afirmó que el territorio de Alto Bío Bío tiene una densidad poblacional altamente indígena. Sin embargo, a su parecer, cada pueblo originario tiene características particulares, el pueblo Mapuche funciona a través de comunidades, en ese sentido, cuestionó las relaciones entre las distintas autoridades mapuches con la autoridad del gobierno central.

El convencional **Sr. Jürgensen** afirmó que los pueblos indígenas tienen derechos y existe una deuda que se debe reparar, pero esto no se puede realizar desconociendo el desarrollo humano y social durante la historia contemporánea. Señaló que ante soluciones difíciles se requiere gradualidad y reconocer la historia y capacidad de Chile para poder resolver algunos de los temas que plantean los pueblos indígenas por encontrarse en una posición atrasada en relación con el desarrollo del país.

La convencional **Sra. Reyes** señaló que el reconocimiento de los pueblos originarios ha ido avanzando, en ese sentido, manifestó su confianza que la propuesta se analizará y promoverá su conocimiento por el Pleno de la Convención.

El convencional **Sr. Millabur** aclaró que la base del pueblo mapuche es la



comunidad y cada una de ellas integran al pueblo mapuche conforme a su organización que reconoce distintas identidades territoriales. Con respecto a la tierra, reconoció que existe un derecho occidental consumado, pero también existe un derecho ancestral, distinguió entre lo legal y el carácter legítimo de los títulos de dominio.

El convencional **Sr. Andrade** destacó la frase del Alcalde Sr. Piñaleo: “somos una comunidad indígena pero nos regimos por leyes nacionales”. Agradeció la experiencia que vivieron en Alto Bío Bío en el marco del despliegue territorial de la comisión.

**Votación:** Iniciativa Convencional Indígena N° 46-1 sobre territorio indígena y libre determinación.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el artículo 13 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	6	13	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5132](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5132)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 1018-3 que reconoce la ruralidad,** de las y los convencionales constituyentes Ramona Reyes, Jeniffer Mella, Cristóbal Andrade, Yarela Gómez, Bastián Labbé, Claudio Gómez, Adriana Ampuero, Tammy Pustilnick, Amaya Álvez, César Uribe, Helmuth Martínez, Julio Álvarez y Elisa Giustinianovich.

Expuso frente a la comisión la convencional **Sra. Reyes** quien dió lectura de la minuta de su propuesta, señalando que el Estado debe reconocer a las personas de los sectores rurales y de difícil acceso como grupos históricamente excluidos y que han sido privados de sus derechos. El estado debe avanzar hacia un estado social y sostenible considerando el bienestar de las personas, su desarrollo social, cultural, económico, productivo, medioambiental, según las particularidades territoriales. Ofreció antecedentes respecto a la ruralidad, señalando que en nuestro país la ruralidad está

compuesta por el 25% del total de la población nacional y habita en 83% de este territorio, con 263 comunas rurales según el censo del 2017. Así también señaló que la economía rural aporta un 22,1% del PIB, donde la agricultura familiar campesina e indígena produce casi la mitad de los alimentos consumidos en Chile con 279.000 exportaciones agrícolas donde el 90% corresponde a este tipo de agricultura familiar campesina e indígena. Realizó un diagnóstico de los problemas asociados a la vida rural, por ejemplo, la falta de suministro de energía eléctrica y agua potable, salud con un promedio de 1,3 camas por cada cien mil habitantes y 30 médicos por la misma cantidad de habitantes. Todo ello para afirmar que el Estado no ha ofrecido respuesta a las problemáticas actuales de la ruralidad, señalando como ejemplo, el Ministerio de agricultura, el cual no ha tenido cambios estructurales en más de 50 años, dedicándose a la transferencia de capital a la agricultura agro exportadora. Señaló otros factores agravantes, tales como, el cambio climático, la extracción y uso irracional de los recursos naturales, la contaminación, el monocultivo y la no regulación de los sistemas productivos. En ese sentido, el Estado debe abordar las particularidades de los territorios rurales y promover políticas de género que reviertan las desigualdades. La propuesta normativa tiene ocho ítems, a saber, = reconocimiento de la ruralidad; Territorio y equidad territorial; equilibrio ecológico del territorio rural; rol de la ruralidad en la alimentación; gobernanza local del agua; reconocimiento de la equidad de género en la ruralidad; asociatividad y el trabajo el territorio rural; y por último, la ruralidad y su aporte en la educación, cultura y saberes campesinos.

La convencional **Sra. Mella** complementó la presentación de la iniciativa señalando que fue construida desde la experiencia de las y los convencionales desde sus territorios. Se refirió al reconocimiento de la ruralidad, la cual, bajo su entendimiento, requiere una protección específica debiendo ser deber del Estado. En ese contexto, afirmó que la propuesta tiene una mirada hacia el futuro desde la ruralidad como un rescate a la misma, principalmente en las normas referentes a la paridad, perspectiva de género y lenguaje neutro de la propuesta. Hizo referencia a la primera parte de la propuesta normativa, señalando el reconocimiento de la ruralidad como una expresión territorial y personal de vida que requiere una regulación especial por ser también una importante cosmovisión para nuestro país, siendo un deber del Estado el garantizar un desarrollo armónico de los habitantes que integran la ruralidad, consecuentemente, resaltó la importancia de hacer referencia no solo el reconocimiento sino también al ordenamiento territorial, es decir, al territorio y la equidad territorial con la que se aborda el espacio territorial donde se ejerce la vida y renovación de bienes comunes de la tierra, reconociendo la biodiversidad y los ecosistemas que poseen una función social, cultural y ecológica, debiendo ser el Estado el garante de asegurar su protección conservación



y fomentar la restauración que se ha ido perdiendo. Señaló también el deber del Estado de garantizar un trato equitativo en cada territorio, tanto en la en la toma decisiones como en el presupuesto y la ejecución del mismo.

Por último, el convencional **Sr. Andrade** hizo referencia al rol de la ruralidad, afirmando que la propuesta normativa busca garantizar la alimentación como un derecho fundamental inalienable ligado a la soberanía alimentaria, su producción y procesamiento de alimentos, debiendo el Estado proteger la salud humana y de los ecosistemas a través de alimentación sana y acceso a misma. Respecto a la gobernanza del agua, manifestó que la propuesta señala que el estado debe garantizar el acceso al agua y su uso, priorizando el consumo humano y ecosistémico, como también uso sanitario y producción de alimentos. En lo que respecta al reconocimiento de la equidad de género, enfatizó en la importancia de que el Estado garantice el desarrollo de la mujer campesina con especial referencia al ámbito de cuidados y reconocimiento del trabajo doméstico, así también una vida libre de violencia, promoviendo la equidad en los trabajos rurales y su remuneración.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Jürgensen** afirmó que existen muchas iniciativas relativas a la ruralidad, agradeció que así fuera dada la importancia de la temática. Solicitó explicar la equidad entre los territorios rurales y urbanos. Por otro lado, cuestionó la existencia de una nueva institucionalidad que regulara los territorios rurales.

La convencional **Sra. Rivera**, en el marco de la desprivatización del agua, cuestionó sobre el procedimiento, tecnología y recursos económicos del Estado para asumir el servicio de agua potable manteniendo los estándares actuales.

La convencional **Sra. Navarrete** instó a definir la soberanía alimentaria teniendo en consideración las diferencias geográficas y climáticas de las distintas regiones. Además, en lo relativo a la dotación de energía eléctrica, solicitó su opinión al respecto.

La convencional **Sra. Mella**, en respuesta al convencional Jürgensen, afirmó que se reconoce que la ruralidad y su regulación se contempla a través de las instituciones reguladas por la Constitución, no se crea una nueva. En el mismo sentido, aclaró que cualquier entidad territorial, ya sea nivel local o regional, puede hacerse cargo con especial atención de lo que es la ruralidad, particularmente al considerar la disminución



desproporcionada y despoblamiento de los campos a lo largo del país, que hace temer que esta forma de vida pudiera quedar reducida al desarrollo de agroindustria. Con respecto a la equidad entre territorios rurales y urbanos, afirmó que la Constitución debe establecer solo principios y normas generales, debiendo ser las leyes y políticas públicas las encargadas de desarrollar los mecanismos que atiendan a esa equidad territorial entre ambos territorios. En lo referido a la gobernanza local del agua, recordó que el Estado y los gobiernos locales se han hecho cargo de cubrir la demanda de agua potable en espacios rurales, a través de camiones aljibes; por tanto, el concepto de desprivatización viene a asegurar el consumo humano y ecosistémico.

La convencional **Sra. Navarte** reforzó lo sostenido por la convencional Sra. Mella. Por su parte, el convencional Sr. Andrade, señaló la necesidad de reconocer la labor de las APR en la distribución del agua potable en las comunidades rurales.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Millabur** afirmó que las problemáticas de la ruralidad no se relacionan exclusivamente con la ausencia de servicios básicos sino el cuestionamiento al modelo económico, lo que incluye la migración campo-ciudad; monopolios de los territorios y la soberanía y seguridad alimentaria.

La convencional **Sra. Rivera** considerando la experiencia de la comuna de Maipú donde la peor sanitaria a nivel nacional es administrada por municipio de esa comuna. Afirmó que el Estado no va a contar con la tecnología ni capacidad para dar ofrecer los servicios públicos básicos; a su parecer, lo que se debe consagrar es la exigencia a los privados a proveer de éstos.

El convencional **Sr. Jürgensen** dio a conocer su intención de aprobar en general las propuestas que digan relación con la ruralidad, a fin de visibilizar las problemáticas de la misma. Resaltó el concepto de seguridad alimentaria por sobre la soberanía alimentaria, entendido por tal aquella orientada a generar las mejores condiciones, conforme a las capacidades chilenas, para producir de la mejor forma, la mayor cantidad de alimentos y de la mejor calidad, aplicando tecnologías y ciencias, junto con aprovechar la demanda mundial por los alimentos. En ese sentido, Chile se puede proyectar como una potencia alimentaria.

El convencional **Sr. Uribe** interpeló a la convencional Sra. Rivera en lo referido a sus afirmaciones, puesto que, a su parecer, existen experiencias negativas en la



provisión de servicios sanitarios tanto de administración pública como privada. En lo que respecta a ruralidad aclaró que la iniciativa se gestó con apoyo de las comunidades rurales, en el mismo sentido, distinguió entre la perspectiva de la ruralidad y la agroindustria. Relató la experiencia de la región de Ñuble y el desplazamiento de los arrieros por proyectos estatales, de ahí la importancia de reconocer los derechos campesinos en la ruralidad.

La convencional **Sra. Navarrete** señaló la importancia de socializar modelos de territorios con buenos resultados, para esos efectos, señaló la experiencia de su región.

El convencional **Sr. Castillo** valoró la propuesta, sin embargo, cuestionó los mecanismos para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En ese sentido, evidenció la ausencia de la regulación del uso del suelo agrícola.

El convencional **Sr. Mena** afirmó que la propuesta es una provocación de distintas temáticas, por lo que agradeció la amplia discusión al respecto. En lo referido al agua, señaló que Costa Rica y Chile son los únicos países en que el agua potable se puede tomar de la llave. Bajo su entendimiento ha visto una evolución respecto a los APR y la inversión pública, tanto a nivel nacional, sectorial y regional, sin embargo, afirmó que el procedimiento de conformación de APR es lento, por lo cual, si se siguiendo esta lógica y proyectando la cantidad de APR que se pudieran construir en el tiempo, el Estado llegaría tarde con la solución. Por ello, propuso una política regional del agua, es decir, un instrumento que permita dar indicaciones en torno a esta temática. Afirmando, a modo de conclusión, que los APR no son la única solución, debiendo concentrarse en políticas públicas específicas.

La convencional **Sra. Reyes** invitó a trabajar en conjunto en el reconocimiento constitucional de la ruralidad, como puntapié para ampliar su protección.

El convencional **Sr. Chinga** reconoció la importancia de las tradiciones y saberes rurales. Ofreció como ejemplo el monocultivo en las cuencas. En lo que respecta al agua, recordó que los habitantes de la región de Copiapó compran el agua para consumo humano.

La convencional **Sra. Giustinianovic** se refirió a la soberanía alimentaria. En la región de Magallanes tienen una dependencia alimentaria del 70%, no existen políticas públicas al respecto. En lo referido a la seguridad alimentaria, afirmó que la ciencia ha comprobado que la soberanía alimentaria y agroecología resulta más productiva que la





agroindustria. Abogó por un balance entre la soberanía alimentaria y la exportación.

La convencional **Sra. Rivera** respondió al convencional Sr. Uribe, señalando que se ha hecho referencia a todas las experiencias y ejemplos con total responsabilidad. Profundizó su planteamiento cuestionando respecto a la facultad de fiscalización del Estado ante el incumplimiento de los estándares de aprovisionamiento de agua potable.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 1018-3 que consagra el reconocimiento de la ruralidad.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	0	6	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5061](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5061)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 471-3 define el concepto de ruralidad**, de las y los convencionales Felipe Mena V., Geoconda Navarrete A., Harry Jürgensen C., Jorge Arancibia R., Álvaro Jofré C., Katerine Montealegre N., Ricardo Neumann B., Constanza Hube P., Patricia Labra B., Angélica Tepper K., Carol Bown S., Eduardo Cretton R., Raúl Celis M., Manuel Ossandón L., Paulina Veloso M., Roberto Vega C. y Pablo Toloza F.

El convencional **Sr. Mena** expuso sobre la iniciativa, el cual tiene como principal objetivo generar las condiciones necesarias para potenciar el desarrollo de los sectores rurales, dotando a la ruralidad de una definición constitucional que asegure, en primer lugar, su reconocimiento en la Carta Fundamental; así como también establecer ciertos criterios mínimos para promover y ejecutar la incorporación efectiva de estos sectores y sus habitantes, los cuales se han visto históricamente rezagados y desprovistos de las condiciones e infraestructuras necesarias para vivir dignamente, pues, la distribución territorial y geográfica de nuestro país ha dado origen a zonas de segunda categoría, donde ciertos sectores quedan relegados a la toma de decisiones. Afirmó que no existe una definición de ruralidad establecida ni aceptada por las distintas naciones, de esta forma los distintos países dotan a la ruralidad de una definición basada en diferentes factores, convirtiendo el concepto un amplio y heterogéneo que debe ser estudiado a





profundidad para establecer una definición constitucional que sea suficiente y completa. Enfatizó en que los factores para definir la ruralidad resultan insuficientes pues no logran describir los diferentes tipos de ruralidad existentes en Chile, en razón de la diversidad geográfica, heterogeneidad de las actividades productivas y condiciones climáticas, impiden encasillar a los sectores rurales en una definición única, dejándolos desprovistos de la atención Estatal que requieren y el acceso a servicios considerados básicos para la subsistencia digna de las comunidades, en efecto, el exacerbado centralismo ha sido incapaz de incorporar las zonas rurales en las políticas públicas, generando una inequidad sistemática en la provisión de servicios públicos, tales como el agua potable, electricidad, transporte, conectividad. Concluyó que resulta necesario reconocer constitucionalmente los sectores rurales, estableciendo las bases mínimas para potenciar su desarrollo, superar la marginación sistemática de los mismos y asegurar un tratamiento equitativo entre las distintas zonas del país, a fin de dejar utilizar los factores geográficos y demográficos como excusas para mantener situaciones de desigualdad, y garantizar a todos los habitantes del país los estándares mínimos de calidad de vida. En ese sentido, señaló que la propuesta consagra una definición constitucional de ruralidad y criterios mínimos que permitan promover la incorporación efectiva de estos territorios en la toma de decisiones, finalmente introduce una cláusula genérica donde se prohíbe cualquier tipo de discriminación arbitraria por parte de las autoridades en atención a factores geográficos o demográficos.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Pustilnick** interrogó respecto a lo contemplado en el inciso primero del artículo primero de la propuesta, en específico, si la entidad mínima de ruralidad es una comuna o puede ser una delimitación inferior. Respecto al mismo inciso de la propuesta, el convencional **Sr. Castillo** aclaró que existen comunas consideradas urbanas que tiene una amplia extensión rural, así también predios mapuches, en ese sentido, cuestionó su consideración dentro de la clasificación propuesta. En el mismo sentido, el convencional **Sr. Martínez** consultó sobre la forma en que el concepto de ruralidad contemplado en la propuesta se podría desarrollar con la nueva institucionalidad aprobada.

El convencional **Sr. Álvarez** reconoció la relevancia de la propuesta. Planteó dos inquietudes, la primera respecto al concepto de zona rural y su relación con la estructura que esta comisión ha determinado, pudiendo causar problemas al interior de cada comuna. La segunda interrogante se relaciona con la distinción entre las facultades del



legislador para determinar una zona rural y el desarrollo integral de las zonas rurales considerado como principio y no como un mandato al legislador.

La convencional **Sra. Giustinianovich** solicitó profundizar y explicar los criterios escogidos para definir la zona rural.

El expositor **Sr. Mena** agradeció las preguntas y comentarios pues permiten complementar la propuesta. Respondiendo a la convencional Sra. Giustinianovich, aclaró que no existe una definición clara de ruralidad a nivel mundial, existen diferentes parámetros para determinarlo, en ese sentido, plantearon en el artículo primero la calificación una comuna, específicamente, como rural a fin de que las políticas públicas sean diferenciadas y específicas en torno a su ruralidad, complementando la densidad demográfica con el espacio urbano en la determinación de una zona rural.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

La convencional **Sra. Mella** aclaró que esta discusión no pretende desarrollar una rivalidad entre lo rural y lo urbano. En ese sentido, señaló que criterios de diferenciación y pertinencia mencionados en el artículo segundo pueden ser transformados en acciones afirmativas a través de mandatos legales. Por último, enfatizó en la existencia de comunas y sectores rurales de la Región Metropolitana.

El convencional **Sr. Castillo** propuso una modificación del orden del articulado, yendo de lo más general a lo más específico. Observó con inquietud la posibilidad que la propuesta determine una clasificación de las comunas, recordó el Decreto Ley N° 1289 que también realizó una clasificación y no prosperó. Por último, señaló que la definición de lo rural como lo no urbano no da cuenta de las características de la ruralidad.

La convencional **Sra. Reyes** agradeció la propuesta normativa. Se mostró dispuesta a trabajar conjuntamente en el concepto, promovió su integración con otras iniciativas.

El convencional **Sr. Martínez** agradeció esta deliberación democrática de esta comisión. Valoró la propuesta al visibilizar y clasificar las comunas a fin de orientar las políticas públicas a una realidad en concreto.

La convencional **Sra. Álvez** se refirió a la profundidad de la propuesta y su



relación con la consagración de derechos básicos de los compatriotas que habitan territorios rurales.

El convencional **Sr. Arancibia** enfatizó en la importancia de las propuestas, a ese respecto agregó dos ideas. En primer lugar, la precarización y marginación de las personas que han migrado del campo a la ciudad; por otro lado, la vida rural tiene características que merecen un reconocimiento positivo de esas condiciones de vida rural. Por último, señaló que el campo se ve afectado por las nuevas tecnologías, lo que promueve la migración ante la ausencia de trabajo.

La convencional **Sra. Navarrete** agradeció las propuestas, las cuales buscan visibilizar un sector que no ha estado permanentemente en la discusión pública. Desde su perspectiva, la definición más general de la ruralidad busca garantizar su adaptación a los tiempos sin restarle importancia.

El convencional **Sr. Álvarez** precisó aspectos de la complementariedad de ambas propuestas, en primer lugar, la precariedad de los trabajadores del mundo rural que desempeñan funciones rurales, recolectores y pescadores; en segundo lugar, en lo que respecta a la subdivisión de los predios rurales, se produce un afán inmobiliario especulador que altera la vida campesina.

La convencional **Sra. Aguilera** solicitó ampliar los conceptos a fin de que sean aplicables a todo el territorio de Chile, particularmente la clasificación de rural y urbano en Rapa Nui se relaciona con otros elementos, tales como, turístico, cambio climático, etc. Propuso centrar la clasificación conforme al uso del suelo.

La convencional **Sra. Álvez** que no se haya hablado de la ruralidad en la Constitución evidencia la cosmovisión de reconocer lo urbano como un objetivo a conseguir. Afirmó que los criterios de la densidad poblacional es insuficiente, propuso repensar los criterios de calificación y crear órganos con competencias para resolver las controversias entre lo rural y lo urbano, así también los problemas de parcelación.

El convencional **Sr. Mena** agradeció los comentarios. Señaló que, desde el punto de vista de la administración de salud municipal y la implementación de políticas públicas, la clasificación de las comunas entre urbanas y rurales cobra importancia.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 471-3 que define el concepto de ruralidad y exige al Estado promover el desarrollo integral y armónico de las zonas



rurales.

Resultado de la votación:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	2	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5067](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5067)

**Iniciativa Convencional N° 824-3 sobre Chile país rural y agrícola.** de las y los convencionales Rodrigo Álvarez, Margarita Letelier, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Harry Jürgensen, Teresa Marinovic, Martín Arrau, Alfredo Moreno, Carol Bown y Cecilia Ubilla.

El convencional **Sr. Jürgensen** presentó la iniciativa, señalando que pretende declarar a Chile como un país rural y agrícola, siendo obligación del Estado fomentar y velar por la tradición y cultura del mundo rural, fomentar el desarrollo equitativo de sus habitantes en todo el territorio nacional, y promover la agricultura y el desarrollo de las actividades productivas locales, así como propender al desarrollo social, cultural, económico y productivo en las distintas iniciativas legales y reglamentarias. En Chile el 70% de las comunas son rurales, de ahí surge la importancia de consagrar la ruralidad en la Constitución. Señaló que desde una perspectiva productiva, el sector rural es importante, generando empleos, en ese sentido, Chile se podría consagrar como una potencia agroalimentaria. Políticas públicas que incentiven la aplicación de tecnologías, ciencias y nuevos procedimientos en la agricultura. Además, afirmó que la Constitución debe considerar la ruralidad como un modo de vida con características que deben ser evaluadas en su mérito, a fin de dar reconocimiento de la ruralidad en la elaboración, implementación y ejecución de políticas públicas en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de Chile. Por último, afirmó que la propuesta de normativa busca reconocer además la historia, afirmando que desde el campo nació nuestra cultura, folclore y tradiciones, por lo que es posible continuar avanzando en ese mismo camino y valorando la historia de la ruralidad y del campo chileno.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.



La convencional **Sra. Álvez** interrogó respecto a la posibilidad de considerar las diversidades territoriales, pues, a su parecer, la presentación evidenció una vocación de homogeneización.

El convencional **Sr. Mena** solicitó profundizar la importancia de lo agrícola y seguridad alimentaria.

El convencional Sr. Jürgensen, respondiendo a la convencional Álvez, afirmó que la pretensión del campo es declarar que Chile es un país rural y agrícola, pero que puede tener efectos positivos tanto interior como exteriormente. Asoció esta respuesta con el concepto de seguridad alimentaria, entendido como el potencial que tiene Chile, este desarrollo está asociado al mejor uso y tecnificación del agua, de tal forma de proteger al ecosistema y los ríos; también está asociado a desarrollar agricultura, fundamentalmente en la agricultura familiar campesina y en las comunidades indígenas que tienen la opción de llegar a mercados externos con productos ancestrales usando sus propias semillas.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Castillo** afirmó que las actividades descritas en la propuesta constituyen elementos fundamentales del país, pero no clasificaría a Chile como un país rural y agrícola, pues su desarrollo económico también está vinculado con la minería y la pesca.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 824-3 sobre Chile país rural y agrícola.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5063](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5063)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 869-3 sobre la conectividad insular, de sectores rurales, aislados y de difícil acceso,** de las y los convencionales



Adriana Ampuero Barrientos, César uribe Araya, Amaya Alvez, Jennifer Mella, Tammy Pustilnick, Yarela Gómez Sánchez, Julio Alvarez Pinto, Elisa Giustinianovich, Adolfo Millabur, Tiare Aguilera, Ramona Reyes, Cristóbal Andrade, Francisco Caamaño Rojas, Gaspar Domínguez y Natalia Henríquez.

La convencional **Sra. Ampuero** expuso los fundamentos de la iniciativa, la cual establece un deber estatal como garante del derecho, de conectividad insular, de sectores rurales, aislados y de difícil acceso para generar mecanismos, leyes y políticas públicas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad como la puerta de acceso al buen vivir, la equidad territorial y a los derechos sociales básicos que amparan a toda persona. En razón de la precaria conectividad de los sectores insulares, rurales, aislados y de difícil acceso, sea digital, marítima, terrestre o aérea perjudica al país en su desarrollo equitativo y a sus habitantes en la protección, acceso y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la constitución y las leyes. En este sentido, debe ser deber del Estado generar los mecanismos que permitan y faciliten la continua conectividad de los territorios, con pleno respeto a sus habitantes y a la cultura propia del territorio, buscando los medios más idóneos, con el fin de alcanzar el bien común general, la equidad y justicia territorial.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Álvez** interrogó respecto a la pertinencia de la iniciativa y su separación con la temática de territorios especiales, en razón de ser comprendida la falta de conectividad como una consecuencia de la insularidad.

El convencional **Sr. Mena** rol de las comunas y regiones en la conectividad, teniendo en consideración las facultades aprobadas por esta comisión.

En respuesta a las interrogantes, la convencional **Sra. Ampuero** afirmó que la propuesta no se incluyó en territorios especiales porque no todos ellos corresponden a situaciones de aislamiento y ruralidad. Por otra parte, afirmó que debe haber una coordinación a nivel local, regional y nacional, las obras de conectividad son de gran envergadura y requieren de un Estado garante.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

La convencional **Sra. Aguilera** destacó dos elementos, por un lado, el



aislamiento territorial, respecto al cual es fundamental el rol del Estado para corregir estas situaciones con mayor inversión pública en la conectividad y evitar los monopolios en estas materias. Por otro lado, señaló que esta propuesta permite agrupar otros territorios que no constituyen territorios especiales.

El convencional Sr. **Jürgensen** manifestó que conoce muy bien los problemas de conectividad, especialmente en la región de los Lagos. Se mostró su opinión favorable a esta propuesta.

El convencional **Sr. Castillo** afirmó que la propuesta de esta iniciativa se vincula también con otras materias trabajadas en la comisión 7, respecto a la conectividad digital, por tanto, podrían resultar complementarias, garantizando un derecho de conectividad y deber del Estado al respecto.

El convencional **Sr. Mena** manifestó que no existe ningún inciso de la propuesta que se refiera a la coordinación entre comunas y regiones con el Estado central, propuso incorporarlo en la propuesta. Reflexionó sobre el avance y velocidad de aprobación de los proyectos públicos y de conectividad al contemplar este deber en la Constitución.

La convencional **Sra. Rivera** reconoció la importancia de la iniciativa en la labor de descentralización, además evidenció el aislamiento de las realidades de la provincia de Parinacota.

La convencional **Sra. Ampuero** enfatizó en que la consagración de la propuesta contribuye a solucionar condiciones complejas. Particularmente, porque en Chile el concepto de rentabilidad social resulta nocivo para combatir el aislamiento, la cual ha servido como excusa para el Estado al momento de resolver problemáticas locales.

La convencional **Sra. Reyes** señaló que la conectividad es uno de los temas más importantes para la ciudadanía, así, el rango constitucional permitirá hacer efectiva esa norma.

La convencional **Sra. Giustinianovich** se mostró de acuerdo con que la temática de la iniciativa no corresponde exclusivamente a territorios especiales sino que es transversal a los distintos territorios del país. Evidenció la realidad de su región poniendo énfasis en las consecuencias del Estado Subsidiario y la falta de control estatal en los sobrepagos de los pasajes de transporte.



El convencional **Sr. Mena** propuso ampliar el enfoque diagnóstico de la conectividad, reconociendo el aporte de la inversión pública en el banco integrado de proyectos, en ese sentido, frente a las inequidades se le debe otorgar más atribuciones a las comunas.

El convencional **Sr. Chinga** hizo una precisión respecto al territorio y el uso del término de “zona extrema”. Propuso incluir el pleno respeto del territorio a través de la justicia ambiental. Se mostró a favor de apoyar esta norma.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 869-3 que regula la conectividad insular, de sectores rurales, aislados y de difícil acceso.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5072](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5072)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 190-6 que crea la justicia intercultural,** de las y los convencionales Natividad Llanquileo, Luis Jiménez, Ingrid Villena, Vanessa Hope, Manuela Royo, Daniel Bravo, Mauricio Daza, Hugo Gutiérrez y, Manuel Woldarsky.

Fue competencia de esta comisión deliberar y votar el acápite X de la propuesta, referido a la función jurisdiccional de cada pueblo como elemento de las autonomías indígenas. Cuyo articulado dispone: “Artículo XX. Los pueblos indígenas, en el ejercicio de su libre determinación, tienen derecho a la autonomía política, territorial, funcional, jurídica y presupuestaria.

En virtud de su autonomía jurídica, los pueblos y naciones indígenas preexistentes, dentro de sus territorios, tienen la potestad de crear, preservar y desarrollar sus propias normas, instituciones y resolver, con eficacia de cosa juzgada los conflictos que se susciten.”

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 190-6 que crea la justicia intercultural.





En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el acápite 10 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	11	4	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5077](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5077)

**Iniciativa convencional constituyente N° 482-3 que dispone el deber estatal de protección integral en favor de las mujeres y niñas rurales y campesinas.** de las y los convencionales Francisca Arauna Urrutia, Ingrid Villena Narbona, Bastián Labbé Salazar, Vannesa Hoppe Espoz, Cesar Uribe Araya, Loreto Vallejos Dávila, Dayyana González Araya, Elsa Labraña Pino, Natalia Henríquez Carreño, Adriana Ampuero Barrientos, Francisco Caamaño Rojas, Gloria Alvarado Jorquera, Alejandra Flores Carlos.

La coordinadora **Sra. Mella** informó que la expositora, convencional Sra. Arauna, se encuentra en votación en su comisión por lo que no pudo presentar la iniciativa, subsanado este hecho a través del envío del material de la exposición a través de correo electrónico.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 482-3 que dispone el deber estatal de protección integral en favor de las mujeres y niñas rurales y campesinas.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	0	6	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5069](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5069)

**Iniciativa convencional constituyente N° 924-3 sobre la Administración del**

**Estado y Dirección Nacional del Servicio Civil**, de las y los convencionales Constanza Schonhaut, Jaime Bassa, Guillermo Namor, Fernando Atria, Fuad Chaín, Patricia Politzer, Tatiana Urrutia, Daniel Stingo, Ignacio Achurra, Yarela Gómez Sánchez y Amaya Álvez.

El convencional **Sr. Guillermo Namor** expuso la iniciativa. Para ello ofreció el contexto de la norma, esto es, los desafíos de la mejora y perfeccionamiento del Estado, en ese sentido, la propuesta tiene como por objeto la implementación de los nuevos derechos sociales para avanzar en el Estado democrático y social de Derecho, contribuir a frenar la crisis de legitimidad y responder a una deuda pendiente de la administración pública, con una función pública fragmentada que atiende a la precarización de los funcionarios públicos y la limitación de sus derechos laborales colectivos. Expresó que los aspectos fundamentales de la propuesta giran en torno a las necesidades de separar la función de gobierno de la función de administración, esto es, que se incorpora un capítulo especialmente referido a la administración del estado y del servicio civil; Por ello fijaron finalidades y orientaciones para la actividad de administración del Estado así en el artículo 1 inciso primero se aterriza su actuar en la adecuada implementación de las normas jurídicas como la expresión de la voluntad popular con posterioridad se fija un marco de acción de una manera mucho más amplia. Cabe destacar también que el inciso tercero del artículo 16 a un marco de acción para la adecuada modernización de los órganos y Administración públicos de administración del Estado acercándose a la innovación con nuevas herramientas y tecnologías por su parte el artículo 2 adopta un giro relevante en la actuación propia de la Administración se presenta una innovación en esta materia que supera la hipótesis de pasividad y abstención de la administración apostando a crear las condiciones habilitantes para actuar en situaciones donde es urgente la actuación pública, por ejemplo, en zonas alejadas y territorios aislados donde la disyuntiva es inhibirse o actuar. Respecto al artículo 3, precisó que es una disposición de carácter orgánico, donde se consagran los órganos autónomos con su regulación especial los cuales forman parte de la administración del Estado, lo cual es relevante a fin de uniformar estándares de probidad y transparencia que históricamente han sido bastante esquivos en tales órganos. Por otro lado señaló que en los artículos 4 y 6 de la propuesta se incorpora la regulación del estatuto de la función pública, precisando una serie de innovaciones a nivel constitucional, atendido el diagnóstico anteriormente señalado, por un lado, se precisa y distingue claramente la calidad de funcionarios del servicio civil de aquellos de confianza política con una regulación diferenciada en los estatutos de cada uno; por otro lado, se establecen las categorías del servicio civil que permiten una regulación diferenciada por categorías, específicamente, los funcionarios de carrera y los de alta dirección pública. Expresó que el artículo 6 de la propuesta establece



estándares de actuación de las y los funcionarios públicos destacando su actuar objetivo y profesional, además del derecho a sindicalización, negociación colectiva y huelga. Aclaró que el artículo 5 está sometido al conocimiento de la comisión temática N° 6 de la Convención. Se refirió al artículo 7, el cual fija las normas sobre responsabilidad del Estado, precisando que no solamente se agota en la falta de servicio, sino que habilita la creación de otros títulos de imputación de responsabilidad. Por último, precisó que el artículo 8 fija un marco general para las Empresas Públicas. Invitó a aprobar la iniciativa en general, pues destacan ideas que no han sido propuestas en otras iniciativas.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Castillo**, respecto al artículo 3 de la propuesta, solicitó explicar la clasificación de los órganos de la administración del Estado, específicamente la distinción entre órganos administrativos centralizados y descentralizados, como también los órganos autónomos. En lo relativo a las reglas de servicio civil solicitó aclarar los sujetos a los que se le aplicarían.

La convencional **Sra. Álvez**, interrogó respecto a la adecuación de lo contemplado en artículo 8 de la propuesta relativo las empresas públicas con lo aprobado sobre el Estado Regional Autónomo.

La convencional **Sra. Navarrete** agradeció la propuesta de separar la administración pública y funcionarios de confianza. Solicitó aclarar los motivos por los cuales se realizó la distinción entre los estatutos de cargos de confianza política y otro para los otros funcionarios de la administración pública. Además, cuestionó el derecho a huelga y su relación con la entrega de servicios públicos a la ciudadanía, específicamente la regulación del reemplazo de cara a las prestaciones de los servicios públicos.

El convencional **Sr. Andrade** solicitó definir el concepto de funcionarios de alta dirección pública. Mostró su preocupación respecto a los funcionarios municipales y la regulación de los contratos a honorarios.

La convencional **Sra. Giustinianovich** instó a aclarar los alcances de cláusula de dominio exclusivo de la ley, así también la justificación de considerar la Dirección Nacional del Servicio Civil como un órgano autónomo.



El convencional **Sr. Jofré** puntualizó la redacción del artículo 1 de la propuesta, al señalar “pueblos y naciones de Chile”. Propuso referirse de forma más igualitaria a través de “todas las personas” o “habitantes”.

El convencional **Sr. Álvarez** manifestó inquietudes sobre el alcance de la frase “empresas públicas se regirán por el derecho privado” contemplado en el artículo 8 de la propuesta. Señaló dos posibles consecuencias, solicitando su aclaración por parte del expositor, en primer lugar que los trabajadores se podrían regir por el Código del Trabajo, y por otro, que se determine el tipo de relación de la empresa regidas por el Derecho privado, en el sentido de competir con las demás empresas privadas.

El convencional **Sr. Namor**, respondiendo a las inquietudes del convencional Sr. Castillo, afirmó que la propuesta busca resolver un problema que se suscita en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, respecto a la aplicación de los estándares de transparencia y probidad. En relación al Servicio Civil, aclaró que formarían parte los funcionarios de carrera administrativa y de alta dirección pública. Señaló, además, en respuesta a la convencional Sra. Álvez, que la propuesta fue elaborada con antelación al inicio de la deliberación en comisiones, por lo mismo reiteró su llamado a aprobarla en general y discutir lo que resultare pertinente. Respondiendo a la convencional Sra. Giustinanovic, expresó que la idea de la propuesta es superar la fragmentación de los principios del Servicio Civil. Igual lógica de temporalidad en la creación de la propuesta aplica respecto al dominio legal, pues, la comisión N° 1 ha concordado respecto al dominio legal mínimo. Por otro lado, en respuesta a lo planteado por la convencional Sra. Navarrete, señaló que los motivos para tener estatutos distintos es fortalecer la carrera funcionaria con independencia del gobierno de turno; respecto al derecho a la huelga, fue enfático en señalar que los funcionarios públicos son titulares de ese derecho, debiendo el legislador regular los servicios esenciales. Definió el concepto de alta dirección pública como el mecanismo de concurso público para acceder a cargos directivos, en respuesta al convencional Sr. Andrade, también compartió el problema de la precarización de los funcionarios municipales sujetos a contrato de honorarios. Refiriéndose a lo planteado por el convencional Sr. Jofré, reconoció la relevancia del debate, especialmente llevado en la Comisión N° 2 de principios constitucionales, a título personal, señaló que se debería referir al pueblo de Chile integrado por diferentes naciones.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

La convencional **Sra. Navarrete** afirmó que esta es la instancia para mejorar las



condiciones y nunca olvidar que la finalidad es hacer servicio público, donde todas las condiciones son determinantes desde las remuneracionales hasta la infraestructura. En base a su conocimiento, le parece insostenible la existencia de un servicio civil único por lo que los procesos de contratación resultarían lentos y engorrosos. Por otra parte, en relación a los contratos a honorarios, señaló que se vincula la transferencia de competencias con la ejecución de programas determinados en el tiempo. Aclaró que las cotizaciones se contemplan en el bruto mensual de los honorarios.

La convencional **Sra. Pustilnick** manifestó que la propuesta a su parecer va en el camino correcto, la comparó con una iniciativa popular de norma del Núcleo Constitucional UAH, particularmente la distinción entre administración pública y funciones de gobierno, pensando en un sistema como el chileno.

El convencional **Sr. Castillo** afirmó que la distinción entre gobierno y administración es débil y confusa, específicamente en lo que respecta al gobernador y el Delegado presidencial. En relación a los Estatutos, señaló que el hecho de que los funcionarios se rijan por el código del trabajo no asegura estabilidad, pues pueden ser despedidos en cualquier momento, aún con la indemnización correspondiente. Se mostró en desacuerdo con la huelga en los servicios públicos, propuso buscar nuevas alternativas a la negociación colectiva.

El convencional **Sr. Arancibia** valoró la propuesta y los argumentos planteados. Aclaró que la propuesta normativa es buena y las discusiones se han basado en cuestionamiento a los fundamentos de la propuesta.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 924-3 sobre la Administración del Estado y Dirección Nacional del Servicio Civil.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en los artículos 1 a 4 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	14	5	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesio](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesio)

[n=832&prmlVotacion=5085](#)

**Iniciativa Convencional N° 921-3 sobre función pública y modernización del**

**Estado**, de las y los convencionales Yarela Gómez, Elisa Giustinianovich, Adriana Ampuero, Jeniffer Mella, Amaya Álvarez, César Uribe, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, Tammy Pustilnick, Ramona Reyes, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Cristobal Andrade, Hernán Velásquez, Helmuth Martínez y María Elisa Quinteros.

Expusieron la iniciativa las convencionales constituyentes, **Sra. Pustilnik, Sra. Giustinianovich y Sra. Álvarez**. La primera de ellas señaló que la iniciativa propone disposiciones sobre la Reforma administrativa y la administración del Estado, la cual responde una necesidad imperiosa de reconfigurar nuestro sistema administrativo, consecuencia directa de la transformación de todo el sistema político e institucional que se está llevando a cabo en este proceso Constituyente. Invitó a recordar que, en términos generales, el proceso de elaboración de nueva Constitución responde a la necesidad de velar por la establecimiento de un buen gobierno, lo cual resulta clave a partir de lo expuesto por el jurista argentino Roberto Gargarella que señalaba que no basta meramente con el ingreso y reformulación de las bases fundamentales, sino que ésta debe encontrarse en sintonía funcional con el diseño de la sala de máquinas, entendiéndose como tal, la arquitectura mismo del sistema político. Afirmó que es constatable que esta sala de máquinas ha sido objeto de un largo desentendimiento de nuestra Carta Fundamental contribuyendo esta despreocupación a una serie de problemáticas que hoy existen en nuestro sistema la crisis de legitimidad y de representación, en la desafección con la fe con la política, el activismo judicial, la ineficiencia administrativa y legislativa, entre otras. Señaló que esta iniciativa apunta a redefinir la relación del gobierno con la administración mediante el establecimiento de una buena administración pública en el marco del Estado regional recientemente aprobado por el Pleno de esta Convención y que ya forma parte de la propuesta de nueva Constitución, el cual se conforma con una pluralidad de administraciones que son inherentes a los poderes públicos y cuentan con distinto rango de acción y autonomía subordinada a la dirección política del Estado que encarna el gobierno y a los órganos ejecutivos de las entidades territoriales respectivas, asumiendo el Estado el rol de proveedor de servicios públicos para el bien común. Por último señaló los elementos rectores de la iniciativa convencional, en primer lugar, la consagración expresa de principios orientadores en el ejercicio de la función pública, en segundo lugar, se configura un estatuto base para el ejercicio de la función pública por parte de los funcionarios y las funcionarias públicas con énfasis en la dignidad de la función y la formación continua; en tercer lugar, se establece el acceso a los cargos públicos y la

carrera administrativa mediante un ingreso de sistema público transparente, imparcial y que privilegia el mérito, la especialidad y la idoneidad para el cargo; en cuarto lugar, la creación de un régimen de responsabilidad funcionaria que reconoce expresamente la falta de servicio como hipótesis en materia de responsabilidad y; en último lugar, la remisión a la ley el establecimiento de un estatuto general de la Administración pública que permita la ejecutividad de los principios consagrados en esta articulado.

La convencional **Sra. Giustinianovich** se refirió a la propuesta normativa propiamente tal. En primer lugar, los principios orientadores que deben regir la función pública, dentro de los que destaca por su carácter innovador, la pertenencia cultural y lingüística, lo cual obliga a que los servicios públicos y sus funcionarios se capaciten de manera de brindar un servicio cultural y lingüísticamente pertinente a las personas, manifestó que esto va en línea con el estado regional Estado plurinacional e intercultural que ya se consagró en el proyecto de nueva constitución y es algo ya incorporado en varios países de nuestro continente, pero que en Chile está sujeto a la discreción de los servicios públicos. Mencionó también las acciones afirmativas para acceder a los cargos públicos para personas pertenecientes a grupos discriminados en razón de género, situación de discapacidad y pueblos preexistentes. Por otro lado, explicó que el artículo 2 establece los fines de la Administración pública, encontrándose al servicio de los pueblos y naciones de Chile, siendo su finalidad la promoción del bien común y el buen vivir de las personas que habitan el territorio; en ese sentido, le da otorga al Estado la responsabilidad de ejecutar políticas públicas, planes, programas y prestación de servicios públicos de forma continua y permanente de alcance nacional regional y comunal para ser posible el desarrollo integral y solidario de los mencionados niveles territoriales; así también se establecen los derechos de las personas que acuden a estos servicios, quienes pueden recurrir ante el superior jerárquico interno o respectivo tribunal competente. Señaló que el artículo 3 establece la conformación de administración del Estado por los órganos administrativos y los organismos autónomos; también se consagra que el sistema de acceso a la carrera administrativa será mediante un sistema de ingreso público, transparente, imparcial y ágil. Además, indicó que la propuesta modifica la figura de contratación a honorarios, estableciéndose como una forma de contratación sin subordinación y dependencia, aplicable a servicios ocasionales específicos y no habituales, promoviendo la estabilidad laboral y fomentando la movilidad funcionaria, considerado como un aspecto fundamental para llevar a cabo el modelo de Estado descentralizado con gobiernos locales y regionales fuertes. Se refirió al contenido del artículo 4, el cual viene a establecer que los funcionarios de la administración del Estado deben estar en continuo perfeccionamiento a fin de brindar mejores servicios a la ciudadanía desde ahí se propone la existencia de un sistema de formación,





capacitación y perfeccionamiento que determinará la ley. La expositora señaló que el artículo quinto relativo a la responsabilidad patrimonial es coherente con el resto de las disposiciones que propuestas, estableciendo una regla básica para el régimen constitucional de la Administración pública relativo a la responsabilidad patrimonial de la administración del Estado por falta de servicio u otra imputación de responsabilidad establecida por el legislador. Por último, el artículo 6 establece la obligación de modernización del Estado, a través de consejos asesores que diagnostiquen e implementen programas de ese tipo.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Álvez** dio cuenta de las coincidencias entre esta iniciativa y la anterior, propuso evaluarlas en conjunto. Interrogó respecto a si esta propuesta permite la diferenciación entre administración y gobierno.

El convencional **Sr. Jofré** interrogó respecto a la forma en que se materializaría el proceso de modernización del Estado.

La convencional **Sra. Navarrete** solicitó ahondar en los criterios de selección del personal y el resguardo de la idoneidad del cargo con especial atención a aquellas regiones y territorios que no tengan las capacidades humanas con estos perfiles. Interrogó sobre la optimización y forma de hacer operativa la inclusión lingüística.

La convencional **Sra. Rivera** interrogó sobre el alcance de de la propuesta sobre la eventual contratación de otros sectores discriminados como, por ejemplo, adultos mayores y jóvenes de familias vulnerables.

La convencional **Pustilnick** respondiendo a la pregunta de la convencional Sra. Álvez, afirmó que en esta iniciativa se ve con mayor claridad la distinción entre función administrativa y de gobierno, siendo fundamental las relaciones de clientelismo que han existido y siguen existiendo en Chile, en el mismo sentido, la existencia de un Servicio Civil profesional viene a avanzar en el perfeccionamiento de la administración pública. En base a la pregunta de la convencional Sra. Navarrete, recordó la discusión relativa a la paridad en la Convención, donde normalmente se piensa que ésta es contraria a la meritocracia, afirmó que constituye una visión errada que ha impedido a las mujeres llegar a cargos de poder y de toma de decisión. En ese sentido, recomendó el análisis del sistema electoral sueco con la inclusión de la paridad en la publicación



denominada “Crisis del hombre mediocre”.

La convencional **Sra. Giustinianovich** respondió las inquietudes del convencional Sr. Jofré, indicando que la propuesta busca establecer consejos permanentes de modernización del Estado, con políticas de largo plazo con visiones políticas, técnicas, académicas, funcionarias y de usuarios de servicios públicos. En relación a la consulta de la convencional Sra. Rivera, aclaró que la vocación del Estado social garante de derechos es garantizar la vejez digna, donde la edad de jubilación es un factor a considerar.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Castillo** se refirió a la responsabilidad del Estado, propone consensuar un solo artículo relativo a la materia, complementario y no contradictorio, entre las diferentes iniciativas.

La convencional **Sra. Rivera** aclaró sus comentarios, los cuales iban focalizados a los adultos mayores que desean continuar su vida laboral, independiente de su calidad de vida y estabilidad económica. Volvió a enfatizar en la importancia de incluir en la administración pública a jóvenes de bajos recursos recién egresados de carreras técnicas.

El convencional **Sr. Arancibia** se mostró de acuerdo con lo planteado, específicamente en lo relativo a la modernización del Estado y los estatutos de los funcionarios públicos. Propuso aumentar los incentivos para trabajar en lugares aislados, especialmente a los jóvenes, por ejemplo, a través de la asignación de zona.

El convencional **Sr. Jofré**, felicitó la presentación. Reconoció la importancia de los principios de la propuesta, específicamente el relativo a la eficiencia y eficacia de la administración pública. Puntualizó en las medidas de acción afirmativas e invitó a debatir sobre las competencias de los habitantes de los territorios y la residencia para ejercer la función pública.

La convencional **Sra. Giustinianovich** agradeció los comentarios. Se refirió a las zonas aisladas, cuestión regulada en el artículo 4 de la propuesta, relativa al perfeccionamiento de los funcionarios promoviendo mecanismos de movilidad.

La convencional **Sra. Navarrete** reflexionó sobre el mejoramiento del capital humano dentro de la administración del Estado, en ese sentido, invitó a prever la forma



en de fomentar la capacitación y mejoramiento continuo que permita la retribución respectiva reconociendo las nuevas competencias y capacidades con nuevas responsabilidades acordes a su cargo. Replanteó la pregunta planteada anteriormente, la cual estaba enfocada en la forma de operar en caso de que no se pueda acreditar los elementos, ejemplo paridad, ante un concurso público.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 921-3 sobre función pública y modernización del Estado.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	0	6	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5088](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5088)

**Iniciativa popular constituyente N° 64-3 que establece obligación del Estado de proveer servicios públicos universales y de calidad,** presentada por Valentina Contreras O., representante de Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Expuso frente a la Comisión la **Sra. Valentina Contreras, Sr. Marcos González y el Sr. José Pérez**. Señalaron que la propuesta denominada “servicios públicos universal y de calidad y política fiscal justa para la garantía de derechos sociales”, Iniciativa popular constituyente N°18.202, surge bajo el amparo de dos alianzas, la primera, de los sindicatos del sector público agrupados en “Internacional de Servicios Públicos”; y la segunda, es la alianza de la Red Ciudadana por la Justicia Tributaria y Fiscal. Conforme a lo planteado por los autores, la idea central de la propuesta es instalar mecanismos de garantía de los Derechos sociales. En ese término, los trabajadores públicos, a través de esta iniciativa, proponen hacer un cambio en la lógica del debate avanzando desde un concepto de administración pública hacia el concepto de servicios públicos universales y de calidad, lo que materializa un salto cualitativo en la lógica de la Administración.

Los expositores hicieron referencia al rol de los servicios públicos y la política fiscal en la reducción de desigualdades económicas de género, culturales, sociales y ambientales; así como también, el rol de los proveedores de estos servicios públicos y

los diseñadores de la política fiscal en el enfrentamiento de la crisis ecológica y descomercialización de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, en particular, respecto a los servicios públicos. A su parecer, esto significa que se debe comenzar a definir los servicios públicos como un concepto adaptable que tiene un elemento objetivo y subjetivo; el primero, dice relación con que detrás de cada servicio público existe una obligación de derechos humanos y, particularmente, una de derechos sociales; y por otro lado, un elemento subjetivo conforme a la determinación democrática de turno. En ese contexto, la propuesta normativa contempla la obligación del Estado en proveer servicios públicos universales y de calidad de manera directa para garantizar los derechos humanos de todas las personas y comunidades que habitan el territorio plurinacional, abarcando dimensiones vitales necesarias para vivir una vida digna y un desarrollo humano sostenible, y entre ellos figuran los servicios de salud y de cuidados, la seguridad social, la educación, el agua y el saneamiento, la vivienda, la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de residuos, sin que esta enumeración sea taxativa.

Respecto a la política fiscal, los expositores señalaron la importancia de consolidar una política fiscal orientada por objetivos de derecho humanos, a fin de regular un sistema tributario que recaude con justicia y ayude al financiamiento progresivo y equitativo de acuerdo a la capacidad de pago de los contribuyentes, junto con establecer criterios de transparencia y control del ejercicio del gasto presupuestario. Ofrecieron criterios de política fiscal, tanto en la recaudación como en la ejecución presupuestaria, permitiendo a la ciudadanía fiscalizar el ejercicio de la función pública.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Álvez** interrogó respecto a los puntos de encuentro de esta iniciativa con otras propuestas normativas presentadas en la presente sesión frente a la comisión.

Los expositores señalaron que las iniciativas pueden ser complementarias, incluyendo la separación entre administración pública y servicios públicos de su propuesta y los criterios para dotar de contenido el proyecto servicio público y para determinar los estándares que deben cumplir los servicios públicos independientes de quién los está prestando, todo ello conforme a la responsabilidad Internacional del Estado y la debida diligencia en la garantía de derechos sociales. Destacó que las propuestas son especialmente complementarias en lo relativo al estatuto regional

permitiendo que la flexibilidad de los gobiernos regionales puedan ir desarrollando sus propios estándares, a partir de la norma genérica respectiva contemplada en su propuesta. Subrayaron el trabajo bipartito en esta área.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. La convencional **Sra. Giustinianovich** agradeció la propuesta y la calificó como un reflejo de las demandas colectivas de carácter robusto y plantea el desafío de hacerla dialogar con las otras propuestas en torno a la temática. Por su parte, el convencional **Sr. Arancibia**, afirmó que la labor de las organizaciones es fundamental por lo que debiera ser un foco central coordinar las distintas propuestas relativas al servicio público.

**Votación:** Iniciativa Popular Constituyente N° 64-3 que establece obligación del Estado de proveer servicios públicos universales y de calidad.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	6	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5091](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5091)

**Iniciativa convencional constituyente N° 950 que regula la administración y acceso a los bienes naturales comunes en un contexto de crisis climática**, de las y los convencionales Camila Zárate Zárate , Francisco Caamaño Rojas, Carolina Vilches Fuenzalida, Francisca Arauna Urrutia, Ingrid Villena Narbona, Constanza San Juan S., Isabel Godoy Monardez, Elisa Giustinianovich Campos, Dayyana González Araya, Alvin Saldaña M., Ivanna Olivares Miranda, Bastián Labbe Salazar, Gloria Alvarado Jorquera, Carolina Sepúlveda, Paola Grandón y Manuela Royo. En deliberación conjunta con la **Iniciativa convencional constituyente N° 965-3 que establece la Administración y gestión climática**, de las y los convencionales Camila Zárate Zárate; Francisco Caamaño Rojas; Carolina Vilches Fuenzalida; Francisca Arauna Urrutia; Ingrid Villena Narbona; Constanza San Juan S.; Isabel Godoy Monardez; Elisa Giustinianovich Campos; Dayyana González Araya; Alvin Saldaña M.; Ivanna Olivares Miranda; Bastián Labbe Salazar; Gloria Alvarado Jorquera; Carolina Sepúlveda; Paola Grandón y Manuela Royo.



La convencional **Sra. Elisa Giustinianovich** presentó a la expositora de la iniciativa, **Sra. Camila Bustamante**, asesora del convencional Sr. Martin y parte del equipo de asesores del movimiento eco-constituyente. El objetivo de la norma es abordar la crisis climática, reconociendo en Chile las siete vulnerabilidades reconocidas por la Naciones Unidas. Destacó la necesidad de la gestión climática y ecológica en conjunto con las unidades basales que deben contemplar, contemplando los biomas y las cuencas, lo que permite tener directrices hacia el ordenamiento territorial y una planificación socio ecosistémica, pudiendo diferenciar las características climáticas, eco sistémicas y humanas de las diferentes zonas del país. Afirmó que la propuesta busca desarrollar un sistema de administración integrado para gestionar los efectos de la crisis climática y ecológica, contemplando la importancia de la protección de los ecosistemas y teniendo en consideración los límites biogeográficos particulares que corresponden a la geomorfología del país. Señaló que el primer artículo de la propuesta se basa en la necesidad de generar acciones en transformaciones, propias de un deber asociado a fin de mitigar y adaptarse al cambio climático desde una perspectiva tanto de la gobernanza nacional como local; por otro lado, se avanza en integrar dentro de la unidad de gestión climática no solamente las cuencas sino también las biomas, a fin de generar directrices a nivel país que tengan un mayor arraigo a nivel territorial y que puedan integrar, tanto los elementos de la naturaleza como las actividades humanas o bien las áreas urbanas que están situadas dentro de los ecosistemas pero desde una perspectiva multiescala.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Pustilnick** interrogó respecto a la forma en como la norma conversa con lo aprobado en el Pleno respecto a la gestión de la cuenca.

La convencional **Sra. Giustinianovich** solicitó profundizar en el diseño institucional y su vinculación con gobiernos, ya sea locales o regionales.

El convencional **Sr. Arancibia** solicitó antecedentes de otros países en la gestión climática.

En respuesta las inquietudes la expositora aclaró que Chile tiene 104 cuencas, las cuales constituyen unidades de gestión, pero no todas tienen las mismas características conforme a sus distintos tipos de ecosistemas y de disponibilidad de agua. En ese sentido, existe una macro agrupación de cuencas a nivel de biomas, otra subdivisión a nivel regional y una subdivisión a nivel local. Señaló que la gestión integral



de cuencas es a nivel internacional, puso ejemplo de México, por tanto, existe jurisprudencia que permite enraizar esta discusión a nivel país. Por último, afirmó que la crisis climática requiere esfuerzos a nivel internacional, nacional, regional y local., apuntó al diálogo entre los distintos niveles y la forma de desarrollarnos como país.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. El convencional **Sr. Castillo**, se refirió a la administración que debe considerar los instrumentos de planificación socio sistémica de los territorios, en ese sentido, cuestionó respecto a la forma de integrar todo en un instrumento de planes y políticas regionales, un ejemplo es el plan regional de política territorial, propuso ir agregándole elementos a este instrumento, dotando de contenido a los instrumentos regionales.

**Votación conjunta:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 965-3 y 950-3 que establece la Administración y gestión climática.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	7	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5093](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5093)

**Iniciativa convencional constituyente N° 961-3 que establece la producción, distribución y servicios para la soberanía territorial,** de las y los convencionales Tania Madriaga Flores, Alejandra Pérez, Manuel Woldarsky, Lisette Vergara, Marco Arellano, Giovanna Grandon, Natividad Llanquileo, Isabel Godoy, Eric Chinga, Elsa Labraña, Margarita Vargas, Maria Rivera, Victorino Antilef y Wilfredo Bacion.

Expuso frente a la comisión el convencional **Sr. Chinga**, quien explicó que la propuesta consta de 17 artículos y sus fundamentos nacen desde la falta de participación local en la definición de las políticas de desarrollo económico, lo cual no permite fortalecer procesos y unidades productivas que potencien y articulen las capacidades existentes. Conforme a lo expresado por el expositor el objetivo de la iniciativa se centra en la producción, distribución y servicios de primera necesidad para las soberanías territoriales poniendo en el centro a las personas y comunidades con el fin de cubrir todas las necesidades esenciales y pleno desarrollo de la ruralidad, a través de la constitución



de unidades de producción, distribución y servicios de primera necesidad en cada territorio, basadas en la asociatividad de entidades públicas, comunitarias y privadas, con total ausencia de sentido lucrativo, centrándose exclusivamente en la provisión de bienes y servicios de primera necesidad a precios justos. Señaló que dichas unidades de producción, distribución y servicios se podrán organizar en diferentes escalas territoriales, a saber: comunal, intercomunal, regional o en autonomías territoriales indígenas, estimulando la mancomunidad. La propuesta contempla la aplicación de la soberanía alimentaria, conforme a la cual el Estado debe propender a un sistema autónomo local de producción de alimentos saludables para la distribución en la población a precios justos, garantizando la provisión de suelos, agua, sistemas de riego e infraestructura, y se trabajarán las tierras con completa ausencia de agrotóxicos. El expositor enfatizó en el concepto de ruralidad de su propuesta, entendido por tal, el espacio territorial de vida, de hábitat, de producción, recolección y renovación de los bienes comunes de la tierra y de las aguas marítimas, lacustres y de los ríos y demás cuerpos de agua, con una amplia generación cultural, en que viven y se desenvuelven, una parte significativa de la población denominada campesinos y campesinas. A su parecer, esta definición de ruralidad permitiría ahondar en el debate, particularmente respecto a la obligación del Estado asegura que los campesinos tienen derecho a vivir con dignidad y a su integridad física y a no ser acosados, desalojados, perseguidos, detenidos arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos, así como también, el deber de asegurar que el mundo rural y campesino goce del medio ambiente limpio y saludable, preservando el medio ambiente de acuerdo a sus conocimientos.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Giustinianovich** interrogó respecto a las unidades de producción, distribución y servicios de primera necesidad, particularmente el estatus jurídico de las mismas, su carácter y su integración.

La convencional **Sra. Rivera** cuestionó el alcance de la obligación Estatal respecto a las unidades de producción, distribución y servicios de primera necesidad, así como también la obtención de recursos para llevarlo a cabo.

La convencional **Sra. Navarrete** solicitó explicar el concepto de “reproducción social” y la forma de financiamiento de la propuesta.

Respondiendo las interrogantes, el convencional Sr. Chinga aclaró que la idea es





que las unidades de producción, distribución y servicios se organicen en diferentes escalas territoriales, a saber: comunal, intercomunal, regional o en autonomías territoriales indígenas, estimulando la mancomunidad; así como también iniciativas propias de las orgánicas, como cooperativas, mancomunales y asociaciones de productores y trabajadores de servicios. En lo referente al financiamiento, afirmó que este se puede llevar a cabo a través de diferentes fondos, como ocurre actualmente, aclaró también que las las unidades promueven la descentralización a fin de generar cooperación y organización en el mundo rural.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. No hubo intervenciones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 961-3 que establece la producción, distribución y servicios para la soberanía territorial.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	12	5	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5097](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5097)

**Iniciativa convencional constituyente N° 897-3 que reconoce el carácter público de servicios estatales o estructurales.** de las y los Convencionales César Uribe Araya, Francisco Caamaño Rojas, Loreto Vallejos Dávila, Cristóbal Andrade León, Natalia Henríquez Carreño, Alejandra Flores, Paola Grandón Gonzáles, Francisca Arauna Urrutia, Dayyana Gonzáles Araya y Ingrid Villena Narbona.

Expuso frente a la comisión el convencional Sr. Uribe, quien señaló que la propuesta se refiere a los servicios básicos que en la mayoría de los casos han perdido su carácter público. Posteriormente, dio a conocer el objetivo de la misma es optimizar la eficiencia, equidad y calidad de los servicios públicos y contribuir a un desarrollo urbano- rural sostenible, además, el estado debe recuperar y ejercer su poder regulatorio, haciendo efectivo el carácter público del servicio. Señaló que la propuesta normativa busca el reconocimiento, por parte del Estado, el reconocimiento del carácter público de los servicios, ya sean directamente brindados por el Estado o bajo su control





y regulación, y los garantiza para todos sus habitantes con el fin de satisfacer las necesidades básicas humanas, debiendo cumplir con eficiencia y eficacia en su funcionamiento. En ese sentido, el Estado deberá planificar y promover la instalación y prestación de servicios bajo criterios de equidad, asociatividad, oportunidad, inclusión, sostenibilidad, eficiencia del gasto y no segregación. De igual forma incentivará y apoyará a aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos de los servicios. La comunidad participará en las plusvalías que genere la urbanización y/o instalación de servicios que se ejecuten.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Pustilnick** hizo la prevención respecto a la aprobación por el Pleno de diversos principios incluido en la propuesta de norma constitucional. Además, solicitó aclarar la participación de la comunidad en la plusvalía de la urbanización.

La convencional **Sra. Rivera** enfatizó en los altos estándares de servicios de agua potable, para luego solicitar la opinión del expositor sobre el rol fiscalizador del Estado en los servicios.

La convencional **Sra. Navarrete** interrogó respecto a los mecanismos de implementación y administración de los servicios públicos, y la forma en que se regularía a fin de hacerlo más eficiente y asequible. Por último, solicitó aclarar el concepto de la plusvalía de la urbanización y su relación con el aumento de impuestos.

La convencional **Sra. Giustinianovich** planteó inquietudes respecto al espíritu del primer inciso referido al reconocimiento del carácter público de los servicios y el rol subsidiario del Estado.

En respuesta a lo planteado, el **Sr. Uribe** advirtió que no ha revisado en detalle los artículos aprobados por el Pleno, sin embargo, afirmó que su propuesta está enfocada en los servicios básicos, lo que puede diferenciar su propuesta con las normas aprobadas. Respecto al concepto de plusvalía, el expositor lo definió como el aumento del valor del suelo de un bien inmueble y se relaciona con la inversión del Estado en la provisión de servicios, por lo cual, se busca establecer un mecanismo relativo a ello, ya sea desde impuestos o entrega de áreas de afectabilidad pública. Afirmó que el rol del Estado no se reduce a la fiscalización de los servicios sino ampliarse a la entrega y financiamiento de los mismos, por lo cual se promueve un rol activo del estado en la



planificación urbana. Por último, ante la consulta de la subsidiariedad, afirmó que la propuesta busca un rol activo del Estado ante los servicios básicos, como agua y alcantarillado.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Jofré** afirmó que no está de acuerdo con textos maximalistas, pero reconoció la importancia de la temática. Propuso avanzar en esta materia y evaluar el rol del Estado en la provisión de los servicios. Mostró su preocupación respecto al tratamiento de las aguas grises.

El convencional **Sr. Castillo** señaló que los convencionales patrocinadores acertaron con la propuesta, vinculada a los derechos humanos. Sin embargo, señaló que el punto neurálgico es el acceso a los servicios, donde entra en juego la rentabilidad y el rol del Estado al respecto. Enfatizó en el rol de control y fiscalización por parte del Estado sumado a mayores recursos humanos.

El convencional **Sr. Uribe** agradeció los comentarios. Afirmó que le hizo sentido lo señalado por el convencional Sr. Jofré respecto al tratamiento de las aguas grises. Reconoció que falta también el apoyo Estatal, no sólo para las cooperativas de agua potable, así como también incentivar las decisiones autónomas dentro de las mismas unidades.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 897-3 que reconoce el carácter público de servicios estatales o estructurales.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	1	5	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5098](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5098)

**Iniciativa convencional constituyente N° 344-3 que Reforma de la Administración Pública y modernización del Estado,** de las y los convencionales Hernán Larraín, Cristián Monckeberg, Marcela Cubillos, Agustín Squella, Patricio



Fernández, Andrés Cruz, Bárbara Rebolledo, Geoconda Navarrete, Felipe Harboe, Ruggero Cozzi, Bernardo de la Maza y Raúl Celis. El convencional Sr. Jofré excusó la ausencia de los expositores.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 344-3 que Reforma de la Administración Pública y modernización del Estado.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el título I y IV de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	16	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5101](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5101)

**Iniciativa convencional constituyente N° 269-3 sobre organización territorial del Estado**, de las y los convencionales Felipe Mena, Álvaro Jofré, Geoconda Navarrete, Harry Jürgensen, Pollyana Rivera, Jorge Arancibia, Martín Arrau, Katerine Montealegre, Ruth Hurtado, Cecilia Ubilla, Carol Bown, Ángelica Tepper, Roberto Vega, Rocío Cantuarias, Manuel Ossandón, y Ricardo Neumann.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Álvaro Jofré**. Preciso que la presentación tiene por objeto abordar las bases de la organización territorial del Estado, principios constitucionales en materia territorial, y una remisión al legislador.

Señaló que la presente iniciativa busca fortalecer la organización territorial del Estado, implementando una estructura que permita una descentralización efectiva, garantizando la unidad de la República, pero, paralelamente, permitiendo que los órganos encargados de las regiones y de las comunas puedan decidir autónomamente sobre materias relacionadas con su realidad territorial.

En este sentido, se mantienen las regiones y las comunas, las que pasan a desempeñar un rol preponderante en la gobernanza territorial, puesto que los órganos encargados de estas unidades estarán dotados de autonomía política, administrativa y



fiscal, con el objeto de agilizar la toma de decisiones y optimizar el funcionamiento del Estado.

No obstante, esta autonomía se encuentra circunscrita exclusivamente al ámbito de sus competencias, lo que permite reforzar el principio de juridicidad evitando que esta termine atentando en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile.

Esta propuesta también mantiene la figura de los territorios especiales, pero eliminando las menciones expresas a Isla de Pascua y al archipiélago de Juan Fernández. De esta manera, se facilita la creación de estas unidades territoriales, puesto que deja de ser necesario reformar la Constitución para consagrarlas.

Finalmente, esta estructura se complementa con la mantención de las provincias, pero resaltando su calidad de unidades territoriales netamente administrativas, a cargo de un órgano desconcentrado territorialmente del gobierno central, con la finalidad de que se limite a coordinar las entidades del gobierno central que operen dentro de su jurisdicción.

Recogiendo los planteamientos formulados por distintos expositores durante el período de audiencias públicas que promovió la Comisión No3, y empleando como base el documento “Descentralización con Participación” de la Fundación Chile Descentralizado, se propone la consagración expresa de cinco principios rectores para la organización territorial del Estado.

En primer lugar, esta iniciativa contempla el principio de subsidiariedad territorial. Esta figura establece una preferencia por el nivel de gobierno más descentralizado en la gestión de los asuntos públicos, sin perjuicio de que también se faculta al gobierno central para actuar en forma subsidiaria cuando los territorios presenten dificultades y requieran apoyo.

En segundo término, esta propuesta normativa consagra el principio de diferenciación territorial. Este, busca reconocer la diversidad geográfica, climática, productiva, social, étnica y cultural que existe en nuestro país. De esta manera, se reconocerán las particularidades de cada territorio, con la finalidad de generar mayores posibilidades de desarrollo.

Del mismo modo, esta concepción de la diferenciación territorial también introduce el concepto de maritorio, lo que resulta fundamental considerando la vocación

marítima de un país con miles de kilómetros de costa. Sin duda, se trata de un elemento que debe ser considerado al momento de aplicar criterios de diferenciación territorial.

En tercer lugar, esta iniciativa establece el principio de coordinación y cooperación en el ámbito institucional. Esta figura opera sobre la base de que las distintas unidades territoriales tengan ciertos objetivos compartidos, cuya consecución requiere de mecanismos e instancias que promuevan e incentiven la coordinación y la colaboración entre las distintas instituciones, evitando conflictos de competencia y operando en forma eficiente.

En cuarto lugar, esta propuesta normativa consagra el principio de equidad y solidaridad interterritorial. Si bien este principio cuenta con una dimensión territorial y otra fiscal, atendido el contenido de esta iniciativa solamente nos hacemos cargo de la primera. Esta figura permite introducir el concepto de equidad o igualdad horizontal, el que se encuentra presente en otros ordenamientos y plantea que el Estado debe dotar a todos los ciudadanos de la misma cantidad y calidad de bienes y servicios públicos, con independencia del lugar donde se encuentren, lo que apunta a disminuir las brechas existentes entre distintos territorios.

Por último, esta propuesta contempla el principio de participación popular. Esta figura recoge los anhelos de la ciudadanía, que progresivamente ha ido demandando más espacios de participación en la toma de decisiones. La participación definitivamente se ha transformado en un imperativo, de manera que es fundamental consagrarla con una perspectiva local.

Las constituciones se caracterizan por limitarse a establecer la estructura básica para el ejercicio del poder, sin entrar a regular en forma detallada los órganos que se consagran. Por lo mismo, la remisión al legislador para complementar y profundizar ciertas materias es una constante tanto a nivel nacional como comparado.

En este sentido, concluyó que esta iniciativa contempla un mandato al Poder Legislativo para estatuir las bases esenciales de la organización territorial del Estado y abordar materias que, sin ser de índole constitucional, repercuten directamente en la aplicación práctica de la división territorial del Estado y permiten que la descentralización sea verdaderamente efectiva.

A continuación, se dio la palabra al **Sr. Jürgensen**, quien expuso un tema reglamentario. Indicó que el contenido de esta iniciativa ya fue deliberada mediante la



iniciativa convencional constituyente N° 154-3 en sesión N° 25 y votada en el bloque N° 1 de esta Comisión, la que fue rechazada.

La Coordinación agradeció la precisión, toda vez que se trata de un error desde la Secretaría de la Convención al derivar esta norma con distinto caratulado. **Por tanto, se excluyó de la votación en general.**

**Iniciativa convencional constituyente N° 469-3 que dispone la modernización de la Administración del Estado,** de las y los convencionales Felipe Mena, Geoconda Navarrete, Harry Jürgensen, Jorge Arancibia, Álvaro Jofré, Ricardo Neumann, Constanza Hube, Angélica Tepper K., Patricia Labra, Claudia Castro, Manuel Ossandón, Paulina Veloso, Roberto Vega, Raúl Celis y Pablo Toloza F.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Geoconda Navarrete.** Comenzó relatando que la presente iniciativa busca potenciar una profunda modernización del Estado, implementando una estructura de funcionamiento que permita el desarrollo de una Administración eficiente, que tenga como base la profesionalización y selección objetiva de los funcionarios públicos que la integran, la incorporación de las más aptas y actuales tecnologías para facilitar el acceso del público a sus servicios y el robustecimiento de las instituciones que integran estos servicios, con el fin de que su funcionamiento sea seguro, permanente y cuya eficacia y calidad no se vea afectada por las fluctuaciones que puedan darse a partir de la existencia de los cambios en los escenarios políticos del país.

En este sentido, es de suma importancia que la dotación de los cargos que integren estos servicios públicos se realice en base a criterios objetivos que se caractericen por priorizar la idoneidad técnica, la experiencia profesional y el mérito de las personas que vayan a asumir las funciones correspondientes, sobre todo en aquellos cargos que impliquen la dirección de los servicios respectivos, tanto a nivel local como regional.

Profundizando el criterio explicado con anterioridad, tiene particular relevancia que exista una potenciación de la estabilidad en el empleo público, facilitando a través de diversos mecanismos organizacionales internos y externos, el acceso, permanencia y progresión de la carrera funcionaria a través del tiempo y, al mismo tiempo, contribuir a la experiencia y especificación técnica de los integrantes de los servicios, permitiendo el desarrollo de un sistema que funcione de manera más rápida, eficaz y oportuna, que asegure a la población los más altos estándares de calidad y de trato a las personas que

acudan a ellos.

Por otro lado, indicó que las sucesivas crisis sociales, políticas, sanitarias y económicas que se han suscitado en los últimos años evidencian la urgente necesidad de digitalizar las plataformas de atención y funcionamiento general de los servicios públicos, con el fin de que estos sean capaces de seguir operando de manera virtual, rápida y eficiente al momento de atender a las necesidades de la población, sobre todo ante situaciones de adversidad que puedan significar una amenaza para la celeridad y desarrollo ininterrumpido de los servicios públicos para con las personas.

El uso y desarrollo de tecnologías avanzadas, seguras y oportunas en la prestación de servicios se ha convertido en una prioridad, razón por la cual es de suma importancia que se provean los recursos necesarios para implementar estas medidas en el funcionamiento de las instituciones, organismos y servicios públicos de la Administración, con el fin de que sean capaces de facilitar el acceso de las personas a la información necesaria y atención oportuna por parte de la Administración, dejando de lado el sistema híper burocratizado, inoportuno y obstaculizado existente en la actualidad.

Asimismo, señaló, al igual como se establece en el artículo octavo de la actual Constitución, “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento del principio de probidad en todas sus actuaciones”. Es así como resulta de suma importancia que el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública sea una directriz general obligatoria para la modernización del Estado y para el funcionamiento de los servicios, organismos e instituciones públicas, así como de la Administración en general.

Es por esto que, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos utilizados para arribar a las diversas conclusiones resulta fundamental para garantizar la transparencia en el funcionamiento de nuestras instituciones, asegurando y fortaleciendo nuestro Estado de Derecho.

Por último, destacó que sumado a lo expuesto con anterioridad, la ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses establece las directrices fundamentales que deben inspirar el comportamiento de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, quienes en virtud del artículo 1 de la mencionada ley tienen el deber de “observar una conducta funcionaria intachable, un



desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular”, a partir de los distintos mecanismos establecidos en conformidad a la Constitución y las leyes.

Es por esto que, para el correcto funcionamiento de un Estado en vías de modernización, resulta fundamental que los funcionarios públicos permeen su actuar de manera constante y permanente de la integridad necesaria para el cumplimiento de sus funciones, sobre todo en cuanto a facilitar el acceso de la población a los servicios públicos, al resguardo de los datos personales e información sensible a la que tengan acceso en virtud de su cargo y al apego estricto al principio de probidad y transparencia, protegiendo siempre el interés general por sobre el particular, logrando un desempeño en sus funciones que se encuentre a la altura de los estándares de integridad que les son exigidos conforme a la dignidad de sus cargos.

Se otorgó a continuación, la palabra a las señoras y señores constituyentes para efectos de consultar sobre esta iniciativa.

La convencional **Sra. Mella**, preguntó a la autora si imagina algo distinto al sistema de Alta Dirección Pública y cómo ve la diferenciación entre cargos de gobierno y de administración pública.

La convencional **Sra. Álvez** consultó en qué consistiría la modernización del Estado, especialmente en cuanto a la conectividad de los servicios en el territorio.

A la convencional **Sra. Aguilera**, le pareció interesante esta diferencia entre el funcionario público de carrera y el funcionario que ostenta un cargo político. En este sentido, no ve incorporado a los cargos políticos mediante esta iniciativa. Consultó la opinión de la autora sobre cargos que se ejercen en regiones, respecto de la forma de Estado ya aprobada.

La convencional **Sra. Navarrete** dio respuesta a las preguntas dentro del tiempo otorgado. Señaló que desde la creación del sistema de Alta Dirección Pública se dio una mayor transparencia en la selección de servicios públicos, pero hasta determinado nivel. Para el resto, los procesos de selección de personal son de regulación interna y general. En este sentido, proponen crear un servicio que tenga competencias que hayan condiciones transversales de selección de personal.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación de esta iniciativa.





La convencional **Sra. Álvez** manifestó intención de trabajar coordinadamente debido a todos los elementos en común.

La convencional **Sra. Navarrete** cree que es importante avanzar hoy hacia una instancia institucional nacional que permita una selección transversal y transparente de funcionarios públicos. Aclaró que el proceso es una instancia externa, pero que los perfiles serán determinados por ministerios o servicios.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 469-3 que dispone la modernización de la Administración del Estado.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
21	3	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5104](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5104)

**Iniciativa convencional constituyente N° 648-3 que regula el ejercicio de la función pública**, de las y los Convencionales Carolina Sepulveda, Cesar Uribe, Lissette Vergara, Francisco Caamaño Rojas, Cristobal Andrade, Elsa Labraña, Alejandra Pérez Espina, María Magdalena Rivera y Nicolás Núñez Gangas.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Carolina Sepúlveda**. Destacó que esta iniciativa se elaboró con ayuda de personas del sector público de la región de Ñuble.

Comenzó destacando que en el Chile neoliberal de la post dictadura, bajo la aparente satisfacción del consumo compulsivo y el individualismo, ha fomentado una desigualdad estructural y una pauperización permanente y progresiva de la vida donde la precarización del empleo, el endeudamiento, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, etc., son la base de la concentración de la riqueza de una minoría social. Es en esta realidad, impugnada por el estallido social, donde los servidores públicos cumplen día a día su labor.

Precisó que, sin embargo, en la ejecución de esta labor, los trabajadores fiscales experimentan las limitaciones propias del Estado subsidiario. Esto porque el tipo de función pública que conocemos en el Chile es el resultado de la dictadura militar y las reformas estructurales, que son perpetuadas gracias al cambio constitucional del año 1980, que consagró en el Estado el principio de subsidiaridad, la supremacía del individuo y la prevalencia de la propiedad privada en la sociedad. Este principio de subsidiaridad focaliza las políticas públicas en la población más vulnerables y reduce la participación del Estado en la sociedad al mínimo.

Si bien el gasto fiscal destinado al cumplimiento de la función pública ha tenido un aumento sostenido desde el retorno de la democracia respecto del PIB, intentando “corregir” los errores del neoliberalismo y el Estado subsidiario, el gasto aún se mantiene por debajo de los países con mayores índices de desarrollo humano. Este gasto fiscal, “austero”, sumado a un empleo precario con diferentes modalidades de contratación y la tercerización de la implementación de las políticas públicas, dificulta el desarrollo de la función pública.

Sólo la acción colectiva, a través de los movimientos sociales, ha sido en los últimos 30 años el factor más relevante para el aumento del gasto fiscal mediante la presión social sobre los gobiernos de turno. El movimiento estudiantil es un claro ejemplo de ello, así también como las propias organizaciones sindicales de empleados públicos que han puesto en la base de sus peticiones mayores recursos para la ejecución de la política pública de sus servicios o ministerios, pero sin superar los límites del Estado subsidiario.

La disputa por la legitimidad del modelo sólo vino a darse 30 años después del retorno de la democracia, por la acción colectiva de diferentes movimientos sociales, que a lo largo de la década que finaliza, han desplegado ofensivas sectoriales por la recuperación de derechos sociales, como educación, seguridad social, equidad de género, participación ciudadana, etc. y además, por el fortalecimiento del Estado y por ende, de la función pública, cuyo ciclo finaliza con el estallido social y el actual proceso constituyente en curso.

Por último, destacó que en el escenario descrito y como señalamos arriba, el empleo público ha mostrado una tendencia progresiva al deterioro. Es conocido el incremento de formas de contratación precarias, sin carrera funcionaria, como los empleos a contrata y a honorarios, que por un amplio margen superan el empleo de planta, minoritario. Estas modalidades de empleo han sido aprovechadas por los



gobiernos de turno para disponer de las personas a voluntad, perjudicando aún más el desarrollo de las políticas públicas. El ejemplo más brutal de esta tendencia fue la dinámica de los ingresos y egresos en el primer gobierno del Presidente Piñera: el año 2010 fueron despedidos 10 mil trabajadores, pero al final de este gobierno se habían contratado 30 mil personas más.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Jürgensen** consultó por qué la creación de empresas públicas no tienen quórum calificado y sí las concesiones. En este sentido, preguntó por qué existe una opinión tan negativa sobre ellas respecto de ciertas concesiones que han funcionado bien.

La convencional **Sra. Navarrete**, solicitó precisión sobre lo que implica un estatuto único, si el grado valdrá lo mismo en el entendido de una igualación de rentas, y cómo se haría pues hoy algunos van a subir y otros van a bajar en su renta.

El convencional **Sr. Andrade** indicó que sería deseable establecer cómo los funcionarios deben tratar a los usuarios mediante esta iniciativa.

La convencional **Sra. Álvez** destacó que hace falta un estudio sobre la cantidad de funcionarios. A veces existen funcionarios sin una función específica. El servir bien a Chile en la función pública supone una función a cumplir y rendir cuenta, y por ello consultó si esto está considerado en la propuesta.

La autora dio respuesta a las preguntas formuladas. Indicó que las materias de esta iniciativa requieren de quórum calificado atendida su importancia social que contienen. Por otro lado, se refirió a aspectos de sueldo de los funcionarios públicos y cómo esto se condice con el resto de instituciones y cómo aquello permite hacer frente a las necesidades del servicio.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Castillo** manifestó que si el Estado ejerce en forma exclusiva la función pública, deja fuera a muchas instituciones que ejercen funciones públicas, como universidades, organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito de la salud, mostrándose en contra de esta idea.



**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 648-3 que regula el ejercicio de la función pública.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	8	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5105](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5105)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 183-2 sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y su derecho a la participación política,** de las y los convencionales Rodrigo Álvarez, Carol Bown, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Katerine Montealegre, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pollyana Rivera, Pablo Toloza, María Cecilia Ubilla y, Arturo Zúñiga.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Eduardo Cretón**. Se refirió a los fundamentos de la iniciativa en aquella parte que es de competencia de esta Comisión, esto es, para agregar, en la parte orgánica de la propuesta de nueva Constitución, en la sección del Consejo Regional, la siguiente propuesta de norma constitucional: “De la totalidad de declaraciones de candidaturas consejero regional, declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser inferiores al 5%. Este porcentaje será obligatorio y se calculará con independencia de la forma de nominación de las candidaturas. La infracción de lo señalado precedentemente acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a consejero regional, según corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito.”

A continuación, dio lectura de los fundamentos de la norma, la que versó del siguiente tenor:

“Bajo la premisa que debe resguardarse la indivisibilidad de la nación chilena y su soberanía, la propuesta que sometemos a consideración de la Convención es incompatible con el principio de plurinacionalidad, que implica compartir la soberanía y compartir su ejercicio entre distintos pueblos-naciones indígenas. Sostenemos la

importancia de la indivisibilidad de la nación y su soberanía porque el Estado plurinacional genera una categoría conceptual que beneficia a las minorías étnicas frente al resto de los chilenos, como a algunas de ellas frente al resto de los pueblos indígenas, sin que exista un claro sustento para fundar esa diferenciación. Además, transfiere a dichos pueblos derechos colectivos que pueden afectar los derechos individuales de sus integrantes. Por esta razón, estimamos que debe evitarse la creación de estatutos jurídicos especiales pues constituye un retroceso en la visión universalista de los derechos civiles y políticos como derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la propuesta de la plurinacionalidad es un retroceso en cuanto a la universalidad de los derechos.

Por otro lado, si la nación chilena está conformada por distintos pueblos indígenas en los cuales recae la nacionalidad de origen, la nación chilena como tal vendría a ser una mera sumatoria de nacionalidades diversas, donde una parte importante de la población carecería de nacionalidad de origen y estaría indeterminada en el texto constitucional. En otras palabras, quienes no tengan autoidentificación con algún pueblo indígena, serían chilenos, pero no habría una nación que se componga de ellos. Solo los indígenas tendrían un reconocimiento en cuanto a su soberanía originaria.

Reafirmar y resguardar la indivisibilidad de la soberanía nacional, tanto a nivel conceptual, como desde el punto de vista de su ejercicio resulta crucial para la tradición constitucional chilena. Lo anterior, es sin perjuicio de un reconocimiento expreso a la integración intercultural de la nación chilena, lo cual implica un amplio reconocimiento a la diversidad cultural presente en el país, más allá de lo meramente étnico.

Ello es complementado con un inciso, que explicita cómo se ejerce legítimamente la soberanía, rescatando en esto la redacción tradicional del constitucionalismo chileno. En el mismo sentido, se explicita que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana son el límite más crucial del ejercicio de la soberanía.

Se propone un reconocimiento de los pueblos indígenas en la constitución. Este reconocimiento está dirigido a los pueblos indígenas chilenos que habitan en el territorio nacional, lo cual considera el límite temporal y espacial de las fronteras chilenas. Se delega en la legislación nacional la enumeración de los pueblos indígenas existentes actualmente en Chile, así como la regulación de la pertenencia de las personas a estos.

A su vez, se establece la importancia de que la colectividad no pueda negar arbitrariamente la pertenencia a dicho pueblo, a su vez que se limita a la ley la

autoidentificación de las personas.

Resulta fundamental, dado el contexto geopolítico chileno, que exista una cláusula que señale expresamente, que los indígenas transfronterizos, por el hecho de pertenecer a un mismo pueblo, no puedan ser reconocidos como indígenas chilenos, ya que eso implicaría nacionalizar amplios grupos de personas sin los requisitos establecidos en la Constitución. Por ello, se indica expresamente que los indígenas extranjeros deben cumplir las normas generales de nacionalidad y ciudadanía.

El reconocimiento es complementado con una cláusula que proscribe la discriminación arbitraria en razón de la pertenencia a uno de los pueblos indígenas. A su vez, se establece la obligación de respetar, por parte del Estado, las creencias, instituciones ancestrales, derecho propio, organizaciones, etc. propias de los pueblos indígenas. Esto, debido a que en virtud de la asociatividad natural del hombre -expresada en el derecho de asociación y reunión- las personas indígenas tienen derecho a organizarse en forma interna de la mejor manera que consideren, debiendo el Estado respetar dichas formas internas de organización.

Por último, se indica que las personas indígenas siempre pueden participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con la legislación nacional. Con ello, se busca consagrar explícitamente la inclusión de las personas indígenas, sin otorgar privilegios en materia de representación.

En atención a la distorsión que los escaños reservados generan en la representación política y en de cara a las reglas y principios de la democracia representativa, es que se propone que la sociedad civil y los pueblos indígenas puedan proponer candidatos a diputados, senadores o consejeros regionales. De esta forma, no se consagra, en estricto rigor, un escaño reservado, sino que se trata de una legitimidad activa para proponer candidatos, los cuales pueden llegar o no a ser ratificados por los votantes.

Además, se dice expresamente que las especificaciones quedan entregadas a la ley del órgano respectivo. A su vez, esto va en la lógica de no implementar el uso de esta fórmula en los órganos técnicos ya que lo fundamental en ellos es la competencia técnica de quien detenta el cargo.

Por último, se propone un arreglo institucional que replica, para las personas pertenecientes a pueblos indígenas, la norma electoral que garantiza que los partidos

políticos incluyan dentro de sus candidatos a elección popular a cierto porcentaje de mujeres. Este arreglo institucional se extiende no solo a diputados y senadores, sino también a concejales regionales. No se extiende a concejales ya que, en las comunas en que habita un menor número de personas indígenas, puede volverse muy difícil para los partidos políticos encontrar militantes aptos y dispuestos para ser candidatos y asumir eventualmente la responsabilidad. Tampoco se extiende a gobernadores u otros cargos uninominales, ya que los partidos políticos suelen postular a solo un candidato para llenar el cargo disponible.

Nuestro ordenamiento jurídico consagra la protección al medioambiente en el artículo 19 N°8 de la Constitución y a través de la ley. Un aspecto fundamental de esta regulación es que el legislador ha definido expresamente que es contaminación. Por esta razón, el recurso de protección regulado en el artículo 20 de la Constitución, solo opera cuando el acto u omisión es ilegal, no cuando es arbitrario, justamente para no dejar a libre discriminación de los tribunales que es lo que se puede o no hacer en materia medioambiental, dando así certeza jurídica a los ciudadanos.

Sin embargo, ha trascendido que un sector de la Convención Constitucional busca consagrar a la “madre tierra o pachamama” como ser viviente y sujeto de derechos, personificando a entes animados e inanimados indeterminados y genéricos. Por ello, nosotros proponemos una cláusula similar al actual respeto al derecho al medioambiente contenido en el art. 19 N°8 de la Constitución vigente, con el fin de no crear un concepto jurídico indeterminado, sino que aterrizar la protección a la naturaleza a través de la ley.

Por otro lado, se propone que los particulares y el Estado tenga roles de protección del medio ambiente, tutelar la preservación de la naturaleza y promover el desarrollo sostenible, de acuerdo con la ley. En esta redacción, se encuentra en forma inherente el reconocimiento de la naturaleza y del medioambiente como un objeto de derecho, o bien jurídico digno de protección.

Así el derecho prevé y previene la depredación de la naturaleza, pero no la convierte en sujeto de derechos, categoría propia de la especie humana. Lo anterior resulta importante, pues erigir a la naturaleza como sujeto de derechos es una falsa creación jurídica, ya que nunca la naturaleza va a tener la capacidad de detentar y ejercitar derechos, ni mucho menos exigir las obligaciones correlativas que ello conlleva. En ese sentido, se trata de un concepto jurídico indeterminado que no refleja la realidad, siendo los miembros de la especie humana quienes siempre deberán estar pendientes



de preservar y cuidar la naturaleza. A diferencia de un ser humano, una empresa, una corporación, “la naturaleza” no es un sujeto individualizable pues es un universo de elementos por lo que las afectaciones a sus derechos serían infinitas haciendo que cualquier acción del humano sea una afectación. Por las razones anteriores, resulta un instrumento jurídico mucho más idóneo considerar a la naturaleza un objeto digno de protección, y no un sujeto jurídico.”

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Aguilera** indicó que se debe pensar de la manera más amplia posible para que se incorporen todos los elementos. Sobre la soberanía, y territorios especiales, siente que el país está perdiendo una oportunidad de avanzar y no ser tan conservadores y restrictivos sobre el concepto de soberanía. Sobre todo en relación a lo que ocurre en derecho internacional respecto de dominio marítimo y aéreo.

La convencional **Sra. Álvez** instó a que hay que distinguir la voluntad del autor respecto del texto que está obsoleto. En términos de redacción constitucional es recomendable no establecer guarismos. Por otro lado, consultó si están dispuestos a la pluralidad y cómo se imaginan sobre este saber de quién forma parte de un pueblo indígena.

El convencional **Sr. Castillo**, consultó si esta propuesta abarcaba el ámbito regional y el comunal.

El autor dio respuesta a las preguntas formuladas dentro del tiempo otorgado. Señaló que hay que diferenciar entre el ejercicio de la soberanía respecto de los depositarios de la soberanía. Sobre los guarismos, lo comparte que no es la mejor técnica constitucional, sin embargo destacó la intención de la propuesta de no establecer escaños reservados sino considerar porcentajes de candidaturas.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación sobre esta iniciativa.

El convencional **Sr. Chinga** estimó que se trata de una propuesta con un estigma paternalista hacia los pueblos. En este sentido, insta a entender que la representación de los pueblos en Chile debe ser a través de las naciones, y por ello no es bueno establecer un porcentaje de candidaturas.

El convencional **Sr. Jürgensen** manifestó que hace ruido la idea de los escaños reservados en todas las elecciones políticas, pues la igualdad del voto se distorsiona





estableciendo una sobre representación.

El convencional **Sr. Jofré** solicitó precisar a qué se refiere “los pueblos” y “las naciones” para efectos de precisar el contenido constitucional.

El convencional **Sr. Arancibia** manifestó estar en contra de escaños reservados para pueblos indígenas, pero sí deben haber incentivos de participación ciudadana.

El convencional **Sr. Millabur** valoró la existencia de esta propuesta y las intenciones, pero que deben ser abordadas con una mirada moderna y de actualidad acorde a las alturas del debate de hoy.

La convencional **Sra. Aguilera** manifestó las debilidades de esta iniciativa, y se refirió a las recurrentes críticas de normas sobre pueblos originarios aprobadas por parte de algunos sectores políticos de la Convención Constitucional. Vinculó esta situación con su propia experiencia, manifestando la necesidad de mirar la experiencia comparada y el derecho internacional.

El convencional **Sr. Gómez** destacó el rol de la Historia chilena y la forma en que ésta ha sido impartida en los colegios, debiendo cambiar la forma de abordarse, teniendo en consideración educación sobre plurinacionalidad y pueblos originarios.

La convencional **Sra. Rivera** manifestó inquietudes sobre escaños reservados de pueblos originarios en cargos de representación popular, esto a raíz de su propia experiencia en la región de Arica y Parinacota.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 183-2 que reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y su derecho a la participación política.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el último artículo de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5108](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5108)

**Iniciativa Convencional Constituyente 683-1 que incorpora al pueblo tribal afrodescendiente chileno a los criterios de plurinacionalidad del Estado**, de las y los convencionales Jorge Abarca Riveros, Carolina Videla Osorio, Carolina Sepúlveda, Juan José Martín Bravo, Benito Baranda Ferrán, Javier Fuchslocher Baeza, Malucha Pinto Solari, Ignacio Achurra Díaz y Paola Grandón González.

Expuso como autor de la iniciativa, el convencional **Sr. Jorge Abarca**. Se trata de una iniciativa de deliberación parcial en aquellos temas de competencia de esta Comisión.

Dio lectura a los fundamentos de la iniciativa, la que versó del siguiente tenor:

“Existe una negación e invisibilización histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, la cual se ha sustentado en el racismo estructural impuesto por los diversos procesos políticos que buscan una nación cultural y étnicamente homogénea.

La experiencia histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, da cuenta de diversos procesos de exclusión y diferenciación por parte del Estado, donde se observan manifestaciones racistas de distinto alcance, que la sociedad chilena se ha negado a reconocer.

En este sentido, una de las vulneraciones contemporáneas que ha vivido el pueblo tribal afrodescendiente chileno ha sido la negación de un escaño reservado a pesar de tener condición jurídica de pueblo amparada por legislación internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la legislación nacional como la Ley N° 21.151 de fecha 16 de abril del 2019 que otorga reconocimiento al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno.

Esta situación arbitraria ha sido observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre el Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales año 2021, donde esta Comisión visibiliza consistentemente a lo largo de sus observaciones y recomendaciones el estándar de derechos, y se refiere a la preocupación en torno a la exclusión que aqueja al pueblo tribal afrodescendiente de esta instancia de representación política y al riesgo que supone para la garantía de derechos hacia este pueblo.

Cabe destacar que, uno de los antecedentes jurídicos centrales para el

reconocimiento de escaños reservados a los pueblos indígenas de Chile en el proceso constituyente se deriva de las obligaciones que el Estado de Chile ha asumido al suscribir el Convenio No 169 de la OIT, como de otros instrumentos del Sistema Internacional de protección. En este sentido, uno de los argumentos legales fundamentales que justifican la incorporación del Pueblo Tribal Afrodescendiente chileno en el proceso constituyente con una participación efectiva, es la condición de sujeto colectivo titular de los derechos del Convenio No 169 de la OIT, tal como lo ha asumido el Estado de Chile a través de la dictación de la Ley No 21.151 de 2019, que otorgó reconocimiento a este pueblo en su condición de pueblo tribal, lo que lo obligaba a garantizar la participación de este pueblo en pie de igualdad con los demás pueblos indígenas.

Es importante destacar el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, decretado por Naciones Unidas el año 2015, mediante Resolución N°68/237 de la Asamblea General. De esta forma, para el periodo 2015-2024, bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”, los Estados miembros de Naciones Unidas, donde se encuentra Chile, se han comprometido a la elaboración y adopción de acciones que tengan por objeto eliminar la discriminación racial, así como las brechas de desigualdad de esta población y facilitar el desarrollo de las personas afrodescendientes a través de la participación efectiva en cada uno de los procesos políticos de sus países.

En virtud de lo anterior, se hace necesario generar instancias de participación efectiva y no arbitrarias como acciones reparatorias para el pueblo tribal afrodescendiente chileno por la exclusión sistemática del cual ha sido objeto, en respeto a los derechos humanos colectivos e individuales consagrados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos como en la legislación interna.

La ley 21.151 de reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente sostiene que los miembros de dicho pueblo son todas aquellas personas que comparten “...la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y se auto identifique[n] como tal...” (artículo n°2). Es importante considerar a este respecto que la afro descendencia posee elementos que, tal y como ocurriera con los pueblos originarios del país, dan cuenta de la inserción de las personas afrodescendiente a los diferentes ciclos y coyunturas que definieron el tránsito hacia la modernidad chilena y latinoamericana. Uno de estos elementos que definen la condición del pueblo en cuanto a situarse en un paisaje sociocultural propio, es el acceso a la tenencia de la tierra, proceso histórico que tiene una larga data y que, a la fecha, se sigue estableciendo y resignificando históricamente.

La evidencia documental da cuenta de que, durante la segunda mitad del siglo XIX, y tras la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de la libertad de vientre en el Perú durante el segundo gobierno del general Ramón Castilla, fueron muchos los afrodescendientes que, a fin de proteger sus derechos conquistados recientemente, buscaron establecer su condición de ciudadano mediante el acceso a la propiedad de la tierra. A este respecto, diversas fuentes de archivo dan cuenta de que, entre los años 1854, 1855 y 1856, muchos ex esclavos comenzaron a comprar tierras en el valle de Azapa, produciéndose un proceso de campeonización, muy propio de la transición a la modernidad capitalista en el cono sur andino, proceso que tuvo lugar en el marco de una legislación liberal que propiciaba la consideración de la tierra como propiedad privada. Sería entonces este moderno acceso a la tenencia de la propiedad privada de la tierra - a través de la compra y venta de títulos de dominio- lo que le permitiría a las y los afrodescendientes el asentarse en el valle de Azapa (territorio que se convertiría en afrodescendiente por excelencia), y mediante ello, conseguir su ciudadanía política como dueños de la propiedad, como campesinos.

El “Pago de Gómez”, lugar que se encuentra entre los primeros cinco kilómetros del valle de Azapa, adoptó dicho nombre justamente porque en esta región se efectuaban las compras-ventas de los títulos de dominio -el acceso a la tierra- al asedado coronel del ejército peruano Tomás Gómez (a través del señor Albarracín, apellido este último que también es propio de la toponimia del valle de Azapa, en las tierras adjuntas al Pago de Gómez), por parte de los campesinos afrodescendientes. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX el territorio del valle de Azapa y sus primeros kilómetros fueron convirtiéndose en un paisaje cultural que cada vez era más representativo de los ex esclavos libertados.

Durante el siglo XX, muchos de los dueños de tierras en el valle de Azapa eran, de hecho, afrodescendientes que mantuvieron los títulos de dominio heredados de sus ancestros. Pese a las políticas eugenésicas establecidas por el Estado de Chile durante la chilenización de la frontera norte, y al constante maltrato que recibieron no sólo afrodescendientes, sino que también población indígena en las ex provincias de Tacna y Arica, la población afro siguió habitando las tierras del valle, y mediante ello, convirtiendo el hinterland ariqueño en el centro de la vida económica y social de la población afro.

Ahora bien, es importante considerar que los procesos de acceso a la tenencia de la tierra por parte de las familias afrodescendientes son tan antiguos como los

procesos de pérdida de la tierra. En este sentido, la pérdida de tierras a través de la expropiación en tiempos de la chilenización de Arica fue una constante que permitió que nuevos colonos chilenos usurparan las antiguas tierras productivas de las y los afrodescendientes. Un proceso similar ocurriría, posteriormente, con los procesos de privatización neoliberal que ocurrieran en tiempos de la dictadura militar de Pinochet, momento en el cual muchas de las tierras afrodescendientes fueron expropiadas por el Estado para posteriormente venderlas a diferentes industrias agrícolas del valle. Los procesos de acceso y pérdida de la tierra, por consiguiente, son un indicador que da cuenta de cómo las familias de los descendientes de la trata esclava se adaptaron a los ciclos sociales, políticos y económicos por los cuales atravesó la región más septentrional del país, enfrentando a través de sus propias agencias, las diferentes coyunturas de la historia de Arica y de Chile.

El problema de la negación e invisibilización histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, sustentadas en la idea de una nación cultural y étnicamente homogénea, donde el pueblo afrodescendiente y los pueblos originarios han permanecido en una posición de subordinación y discriminación, avaladas por concepciones y actitudes racistas. Como señala Albert Memmi (2000), el racismo se caracteriza por la valoración de diferencias biológicas, reales o imaginarias, que benefician a quien realiza la diferenciación y en desmedro de a quién se dirige, justificando hostilidad -social o física- o agresión. Frente a la violencia que han supuesto los procesos de aculturación forzada, entre ellas la chilenización en el extremo norte del territorio nacional, el pueblo afrodescendiente ha respondido con prácticas de resistencia cultural, que han permitido mantener las memorias de las distintas experiencias vividas a lo largo del tiempo, que incluyen la esclavitud pero también la participación en los “batallones pardos” en las guerras de independencia, entre otros procesos que han contribuido a formar su identidad y la construcción de la República. La experiencia histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno, da cuenta de diversos procesos de exclusión por parte del Estado, donde se observan manifestaciones racistas de distinto alcance, que la sociedad chilena se ha negado a reconocer, y que en los casos más extremos se han expresado en violencia física con resultado de muerte.

En síntesis, la invisibilización y negaciones históricas del pueblo afrodescendiente chileno, no pueden desvincularse del racismo estructural en el que se sustentan los poderes y prácticas del Estado. Y este último es un padecimiento que en la actualidad afecta a distintas comunidades afrodescendientes que residen en el territorio nacional.

Soñamos con una sociedad que reconozca y valore la diversidad cultural que dio origen y conforma la comunidad política nacional. Donde las poblaciones y comunidades afrodescendientes que han sido históricamente negadas y excluidas, sean reafirmadas en sus derechos individuales y colectivos, y de esta forma promover la igualdad, el respeto, la inclusión y la no discriminación. Soñamos con un Estado que afirme la plurinacionalidad, reconociendo constitucionalmente al pueblo tribal afrodescendiente chileno, afirmando sus derechos individuales y colectivos, a la vez que consagre mecanismos vinculantes para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos. Este futuro soñado supone el compromiso con el antirracismo como marco ético que oriente la convivencia entre los diferentes grupos al interior de la sociedad, reconociendo que el racismo es una realidad que ha afectado al pueblo afrodescendiente y que debe ser combatido explícitamente, pues expresa una forma particular de violencia que, en sus manifestaciones más extremas, pone en riesgo la existencia física de las personas, a la vez que restringe la perpetuación social y cultural.

Estas garantías permitirían el desarrollo de una vida segura para las poblaciones afrodescendientes, abriendo paso a ejercicios de autoafirmación a lo largo y ancho del país, de revitalización, expresión y consolidación de sus herencias culturales.

Esta nueva situación beneficiaría especial y directamente a las comunidades integrantes del pueblo tribal afrodescendiente chileno, pero también a otras comunidades afrodescendientes vecindadas en nuestro país.

Proponemos incluir el reconocimiento constitucional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, basado en su presencia histórica en el territorio nacional, en las acciones afirmativas previas, en la Ley 21.151 de 2019 que otorga reconocimiento legal y en convenios internacionales suscritos por el Estado chileno, que reconocen su existencia y abordan diversos aspectos dirigidos a garantizar el resguardo de sus culturas, la participación en la vida nacional y la igualdad en el acceso a derechos, entre otros. Ello debe estar enmarcado y posibilitado por un Estado plurinacional, que asegure la participación del pueblo tribal afrodescendiente chileno en los espacios de representación política y de ejercicio del poder en igualdad de condiciones. Con el fin de que la soberanía sea compartida por las diferentes naciones y pueblos que habitan el país.

A la vez, afirmar el compromiso explícito del Estado chileno en contra del racismo y la discriminación racial, fundamento ideológico y cultural de la negación y exclusión del pueblo afrodescendiente. De esta forma la Constitución debiera incluir el principio de la



no discriminación y la condena a cualquier forma de racismo, sirviendo de base para acciones afirmativas que pudieran configurarse a través de otros cuerpos legales y marcos institucionales.

La constitución como pueblo de las comunidades esclavas trasladadas forzosamente al territorio americano desde el siglo XVI, ha sido el resultado de una experiencia histórica común y condiciones sociales compartidas que contribuyeron a fundar una identidad propia, basada en expresiones culturales con diversas raíces y tradiciones.

En Chile, la Encuesta de caracterización para la población afrodescendiente (ENCAFRO) realizada en 2014 por el INE sólo para la región de Arica y Parinacota, arrojó que 8.415 (4,7%) personas se autoidentifican como parte del pueblo tribal afro chileno. Sin duda el reconocimiento constitucional facilitaría y promovería la autoidentificación a lo largo y ancho de sus territorios, al garantizar la visibilidad estadística como primer efecto, lo cual se encuentra comprometido en el censo 2023 en virtud del art. 6 de la Ley 21.151. Tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en la legislación nacional existen instrumentos y fuentes que justifican la reivindicación de derechos del pueblo tribal afrodescendiente chileno. El Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT, suscrito y ratificado por el Estado chileno, promueve el reconocimiento explícito al pueblo afrodescendiente y la garantía de sus derechos. La Ley 21.151 de 2019 otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, pero su alcance es limitado al no reconocer derechos, ni contemplar formas de participación y representación política.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, suscrita y ratificada por nuestro Estado, aporta una definición jurídica de discriminación racial, que en el contexto nacional no ha logrado instalar una consciencia sobre la magnitud del racismo que se vive en la sociedad chilena. La consagración constitucional con inspiración en las fuentes internacionales, permitiría garantizar un marco general para avanzar en legislación.”

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Aguilera** consultó qué se entiende por “preexistencia”, pues en el caso de pueblos indígenas es respecto del proceso de colonización. Por otro lado, consultó sobre los criterios en relación a autonomías territoriales indígenas en el contexto de la iniciativa.



La convencional **Sra. Rivera**, le surgió dudas respecto a la investigación que fundamenta esta iniciativa, y si ha podido reunirse con afrodescendientes a este respecto.

La convencional **Sra. Navarrete** consultó cómo se concilia este grupo originario respecto de otros que el día de mañana también pueden reclamar dicha condición.

El convencional **Sr. Jofré** consultó qué alcance tendrá la autonomía territorial en relación a esta propuesta.

El convencional **Sr. Bacion** consultó cómo esto impactaría en relación al pueblo aymara.

El **Sr. Jorge Abarca** dio respuesta a preguntas formuladas dentro del tiempo otorgado para ello. Respecto a las observaciones realizadas en relación a la calidad de “preexistentes” y en relación a autonomías territoriales, manifestó estar de acuerdo en que aquello debe mejorarse.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación respecto de esta iniciativa.

El convencional **Sr. Andrade**, agradeció y valoró esta iniciativa pues propone desafíos hacia el futuro de la recepción constitucional del pueblo tribal afrodescendiente.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 683-1 que incorpora el pueblo tribal afrodescendiente chileno a los criterios de plurinacionalidad del Estado.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	15	3	0	25	RECHAZADA

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el apartado 3 de la misma.

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5110](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5110)





**Iniciativa constitucional indígena N° 11-3, que establece la organización del Estado como regional, plurinacional e intercultural,** presentada por Héctor White, pueblo Mapuche.

Dentro de los fundamentos de esta iniciativa, se destaca su elaboración con énfasis en los principios del Itrofill Mognen, la plurinacional e interculturalidad en cuanto permite a pueblos originarios avanzar en la libre determinación, autonomía y autogobierno, sobre los territorios que ancestral e históricamente han ocupado.

**Votación:** Iniciativa Convencional Indígena N° 11-3 que establece la organización del Estado como regional, plurinacional e intercultural.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
4	10	11	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5114](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5114)

**Iniciativa constitucional indígena N° 13-3 que establece descentralización política y administrativa en entidades territoriales y fomenta desarrollo equitativos entre ellas,** presentada por Luis Nahuel, pueblo Mapuche.

Expuso como autor de la iniciativa, el **Sr. Luis Nahuel**. Comenzó relatando que la identidad territorial Lafkenche es una coordinación de comunidades mapuche que comienza a articularse en la década de 1990, a raíz de la aplicación de la Ley General de Pesca y Acuicultura que no considera a los trabajadores del mar pertenecientes al pueblo mapuche. Desde ahí, las organizaciones que integramos el Territorio Lafkenche (borde costero de Arauco a Chiloé-Palena) comenzamos un proceso de articulación y reconstrucción del territorio con el fin de proteger el borde costero.

En ese contexto, señaló que consiguieron que en 2008 se promulgara la Ley 20.249 (Ley Lafkenche) que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, que constituye una iniciativa única en la forma de hacer leyes en Chile, resultado de la participación de una contraparte político – técnica desde nuestra organización, en conjunto con el Parlamento.



Otras iniciativas legales que han impulsado son: durante el año 2008 presentamos 24 indicaciones a la “Ley General de Educación” relacionadas con la enseñanza del mapudungun en escuelas con alta población indígena, de las cuales se aprobaron ocho. Durante el año 2012 plantearon al parlamento el reconocimiento de los pueblos indígenas como titulares de cuotas de pesca durante la tramitación de la “Ley Longueira”; el año 2018, presentamos indicaciones en la “Ley que Moderniza el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura”, logrando junto a organizaciones de pescadores artesanales, el reconocimiento de la pesca de subsistencia; el año 2019, impulsaron con otras 50 organizaciones la ley para contar con escaños reservados en la Convención Constitucional.

Señaló que la organización se ha reunido de manera sistemática desde el año 2016 y ha elaborado un relato político en donde los conceptos de la plurinacionalidad e interculturalidad y el itrofill mongen han estado en el centro de la discusión. Para elaborar las normas presentadas a la Convención, nos reunimos los días 10, 11 y 12 de diciembre en nuestro 8° Congreso Lafkenche 400 alrededor de 400 dirigentes provenientes del territorio lafkenche entre Arauco y Chiloé – Palena y establecimos los temas prioritarios para la discusión. Luego de la discusión y conclusiones generales, un grupo de 15 representantes quedó mandatado para reunirse con un equipo técnico y trabajar el articulado específico. Este trabajo se realizó en varias jornadas de trabajo, completando un total de 12 conjunto de normas.

Finalizó indicando que de manera paralela las comunidades se organizaron e hicieron reuniones algunas de ellas en donde hicieron un acta de apoyo a todas las iniciativas bajo el concepto de “Derechos de los pueblos originarios” y en muy pocos casos, algunas decidieron apoyar solo una específica. Quienes no pudieron reunir a sus comunidades, los representantes firmaron apoyando estas iniciativas. Para la fundamentación de las iniciativas, se utilizó bibliografía temática, histórica, documentos del derecho internacional referida a derechos humanos y pueblos indígenas y antecedentes de otras constituciones.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Ampuero** manifestó que encuentra complejo generar división territorial en base a cuencas pues son 101. Por ello, consultó cómo conversan estos dos criterios entre sí y evitando la división excesiva del país.



La convencional **Sra. Navarrete** consultó a qué se refiere con la división territorial que establece la propuesta y cómo lo asimilan según la división territorial actual.

El convencional **Sr. Jürgensen** consultó cómo ve en el futuro la producción acuícola o la pesca artesanal o inversiones en el borde costero, y cómo ve el manejo de las áreas que se entregan en concesión a los pescadores artesanales. Frente a la propuesta, cómo ve el funcionamiento económico y social de todos estos actores. Finalmente, cómo explicaría el proceso de desafectaciones que esto supondría.

El expositor dio respuesta a las preguntas planteadas. Se refirió a las diferencias entre lo legal y lo legítimo, indicando que lo primero no ha estado a favor de pueblos originarios, debiéndose abordarse estos temas a propósito de las discusiones de la legitimidad.

Se dio lugar a continuación a la fase de deliberación, pero no hubo palabras solicitadas.

**Votación:** Iniciativa Convencional Indígena N° 13-3 que establece descentralización política y administrativa en entidades territoriales y fomenta desarrollos equitativos entre ellas.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	9	11	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5117](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5117)

**Iniciativa Convencional Constituyente N° 618-5 que regula los servicios de transporte público de pasajeros y las facultades de los gobiernos regionales en la materia,** de las y los convencionales Cristóbal Andrade, César Uribe, Francisca Arauna, Francisco Caamaño, Loreto Vallejos, Ingrid Villena, Natalia Henríquez, Claudio Gómez, Nicolás Nuñez y Paola Grandón.

El convencional **Sr. Andrade** realizó la presentación de la iniciativa. En primer término, aclaró que la iniciativa se dividió en dos partes distribuyéndose a la Comisión



de Medioambiente los artículos 1 al 5, y quedando radicada en esta comisión el artículo 6 y 7 de la propuesta, conforme a los cuales, el Gobernador Regional implementará oficinas territoriales de control y fiscalización a la prestación y calidad del servicio de transporte público de pasajeros, con facultades de sanción, mediante resolución fundada, al prestador o empresa respectiva. Además, afirmó que los municipios tendrán la facultad de apoyar directamente a las oficinas territoriales regionales, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de planificación vial y del tránsito, así como denunciar al correspondiente juzgado de policía local las faltas que observare. Por otro lado, señaló que la propuesta contempla la creación de una Empresa Regional de Transporte Público de Pasajeros, dirigida por el Gobierno Regional, cuyos estatutos serán aprobados o modificados por el voto favorable de la mayoría del Consejo Regional y del Gobernador Regional, para luego ser elevada al Presidente y al Ministro de Transportes, para que se dicte el correspondiente decreto supremo, en un plazo no superior a noventa días contado desde la notificación de la aprobación o modificación del Gobierno Regional al Gobierno Nacional.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Álvarez** interrogó respecto al alcance de la propuesta, específicamente la posibilidad de considerar a todos los sistemas de transportes como exclusivamente públicos; así también sobre la posibilidad de incluir otros medios de transporte distintos a los buses, para ello, señaló la situación de Chiloé, donde el sistema de transporte lo integra también lanchas, algunas son privadas y otras licitadas. Para posteriormente, solicitar la aclaración respecto a la eventual creación de empresas públicas de transporte, o bien, la licitación.

El convencional **Sr. Jofré** señaló que el transporte público es un problema transversal, específicamente de las regiones. Señaló haberle llamado la atención lo extenso y detallado de la propuesta, en ese sentido, propuso reducir el texto constitucional a la garantía de acceso al transporte público o privado.

La convencional **Álvez** consideró que la propuesta se basa en un punto que no se ha resuelto, este es, que la conectividad sea considerada como un servicio público, de ser así, expresó que la propuesta se vincularía con la de la convencional Sra. Ampuero relativa a la conectividad.

El convencional **Sr. Andrade** respondiendo al convencional Sr. Álvarez, indicó

que en el ámbito rural las concesiones resultan necesarias a fin de asegurar el acceso y regular el valor de los pasajes, en cambio, en el ámbito urbano el servicio debería ser estatal y con apoyo de otros prestadores. En lo relativo a la posibilidad de ampliar los tipos de medios de transporte, propuso hacerlo a través de las indicaciones en la votación en particular de las normas. En razón de la extensión de la propuesta de norma constitucional señaló que responde a la importancia social de la temática, además, afirmó que le otorga un marco de actuación al legislador al momento de regularlo.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

La convencional **Sra. Reyes** agradeció la propuesta, a su parecer, resulta esencial asegurar la conectividad y acceso en la Constitución, en especial con su relación con otros derechos como acceso a la salud y educación. Recordó que en el articulado de ruralidad también hay una propuesta de conectividad rural pública.

La convencional **Sra. Mella** afirmó que estos temas confirman el modelo de Estado regional, el cual requiere de instrumentos y herramientas como los planteados para fortalecerse. Se sumó a los comentarios de la convencional Reyes, en el sentido de poner énfasis en la ruralidad y la diversidad de las realidades de los territorios.

La convencional **Sra. Ampuero** aclaró que las iniciativas apuntan a distintas realidades, pues la iniciativa presentada por ella se orienta a zonas aisladas y el deber estatal a su respecto, por tanto, a su parecer, el desafío es evaluar su diálogo y convergencia.

La convencional **Sra. Navarrete** reflexionó en torno a la conectividad en sectores rurales, donde la importancia se basa en la necesidad de los habitantes de los sectores en la realización de la vida diaria, salud y educación, entre otros. Junto a ello, distinguió entre la necesaria existencia de caminos permanentes y expeditos para garantizar el acceso y conectividad a través de un fuerte impulso por parte del Estado, y por otro, la conectividad de los medios de transportes para movilizarse, en este punto, llamó a ser realistas y controlar las expectativas de la población. Para fundamentar lo anterior, dio a conocer la realidad de la región de Aysén donde la conectividad es subsidiada por el Estado, por lo que se debe aumentar la fiscalización para mejorar las condiciones de entrega del servicio. Por último, destacó que el Estado no tiene competencia en todo, su intervención no asegura la calidad del servicio. Propuso revisar la regulación de transportes públicos subsidiados y los mecanismos de control y fiscalización.



La convencional **Sra. Aguilera** recalcó que los temores políticos de fragmentación del país se provocan por un mal servicio de transporte. Señaló que se puede avanzar mucho en esta materia, aumentando la participación activa del Estado.

El convencional **Sr. Millabur** reconoció la importancia del debate pendiente a nivel país, especialmente en razón de la realidad de las regiones. Enfatizó en las precarias condiciones de los servicios de transportes subsidiados. Propuso hacer dialogar las tres iniciativas sobre estas materias. Se mostró dispuesto a discutir al respecto y presentar una solución al transporte y la conectividad.

El convencional **Sr. Mena** también avaló la importancia de la temática. A su parecer, se requeriría mucho más tiempo para discutir la evolución del transporte público. Se refirió a la incidencia del gobierno regional en el transporte público regional, así como también, la participación del alcalde en la implementación de transportes públicos. Por otro lado, puntualizó la relevancia de destacar los esfuerzos en electromovilidad y el desarrollo sostenible. Por último, interrogó respecto a la posibilidad de que las empresas públicas compitan con los privados en igualdad de condiciones, pues bajo su punto de vista, la importancia radica en mejorar la eficiencia de los recursos públicos.

El convencional **Sr. Andrade** aprovechó de responder aclarando que la competencia entre públicos y privados sería en igualdad de condiciones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 618-5 que establece el derecho inalienable al libre, igualitario y universal uso de los medios de transporte público colectivo y regula los servicios de transporte público de pasajeros y las Facultades de los Gobiernos regionales en la materia.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en los artículos 5 y 6 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5122](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5122)

**Iniciativa convencional constituyente N° 806-3 sobre Empresas Públicas**

**Regionales**, de las y los convencionales Hugo Gutiérrez Gálvez, Carolina Videla Osorio, Isabel Godoy Monardez, Bessy Gallardo Prado, Manuela Royo Letelier, Elisa Giustinianovich Campos, Nicolás Nuñez Gángas, Jeniffer Mella Escobar, Yarela Gómez Sánchez y Carolina Videla Osorio. En presentación y deliberación conjunta con la

**Iniciativa convencional constituyente N° 907-3 sobre consagrar a Chile como un**

**Estado con regiones autónomas**, de las y los convencionales Hugo Gutiérrez Gálvez, Isabel Godoy Monardez, Bessy Gallardo Prado, Ericka Portilla Barrios, Carolina Videla Osorio, Manuela Royo Letelier, Hernán Velásquez Núñez y Manuel Woldarsky González.

Expuso frente a la comisión la convencional **Sra. Gallardo**. Inició su presentación con los fundamentos de la Iniciativa N° 806-4 sobre la creación de empresas públicas señalando que Chile necesita y demanda urgentemente otro modelo de desarrollo económico, al margen de consideraciones ideológicas, que promueva una nueva idea de sociedad y de colaboración entre los habitantes y pueblos de Chile, en que el lucro no sea el único dispositivo predilecto de la actividad empresarial, sino también, el sentido del servicio y la posibilidad de generar bienestar y un desarrollo sustentable; de tal modo, de asegurar una vida con las necesidades básicas garantizadas para toda la población, en condiciones de dignidad y una vida modestamente acomodada. En ese sentido, afirmó que la creación de empresas públicas regionales, implica tener un agente de desarrollo en el territorio regional con el fin de realizar los diagnósticos adecuados y, por tanto, impulse economías regionales con enfoque territorial; considerando una tarea de descentralización efectiva del Estado, pues, no se trata sólo de constituir empresas públicas, sino de situarla en una escala regional, de acuerdo con las necesidades y oportunidades propias de cada región. Posteriormente la expositora explicó que la propuesta busca crear la figura de empresas públicas regionales (EPR), que se harán cargo de las actividades económicas estratégicas que mayor influencia tengan en el desarrollo y beneficio de la población que habitan las regiones; que asuman en plenitud la propiedad de los recursos y bienes que son de todos los chilenos y chilenas, y los movilicen para el bienestar individual y colectivo en el territorio regional. En base a lo expuesto por la convencional, las empresas públicas regionales, desarrollarán actividades empresariales en, a) Áreas económicas estratégicas relacionadas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile: minería, silvicultura, acuicultura y pesca. b) Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población: logística y portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable, combustible, energía, electricidad; provisión de vivienda y transporte público; rubros asociados a la salud; recolección y tratamiento de residuos. c)





Actividades asociadas a la investigación, desarrollo científico, innovación y cuidado y preservación de la vida y el medio ambiente.

Posteriormente la convencional **Sra. Gallardo** dio a conocer el contenido de la iniciativa N° 907-3 que busca consagrar a Chile como un Estado con regiones autónomas, la cual consta de un título de sección denominada “Forma de Estado, Administración y Autonomías Regionales”, integrado por nueve artículos, en los que se establece que Chile será una República constituida por regiones autónomas, las que contarán con patrimonio propio reconocido por esta constitución, derecho a percibir tributos regionales, estructura y funciones del Gobierno Regional, así como, la creación de un parlamento regional.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Pustilnick**, respecto a la iniciativa N° 806, solicitó aclarar el alcance del numeral primero del artículo primero, relativo a las áreas económicas estratégicas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile, específicamente, la posibilidad de estatizar todos los recursos naturales estratégicos. Por otra parte, interrogó sobre la forma en que conversa esta iniciativa con lo aprobado en el Pleno en esta materia.

El convencional **Sr. Jürgensen** manifestó su opinión señalando que la propuesta se fundamenta en una ideología estatista, en igual sentido, interrogó sobre las razones por las cuales no ofreció un análisis económico más profundo en lo referido a las empresas públicas regionales.

El convencional **Sr. Álvarez** coincidió con los planteamientos de la convencional Sra. Pustilnick, respecto a lo aprobado en el Pleno en lo relativo al Estado Regional. Destacó el mecanismo de iniciativa popular en la creación de las empresas públicas, sin embargo, cuestionó sobre la forma en que se podría integrar en las competencias de la región autónoma ya aprobadas por el Pleno. En relación con el Fondo de equidad territorial reconoció un inconveniente respecto a la desigualdad empresarial entre las distintas regiones, así también, solicitó explicar si la renta o el IVA también pasaban a ser parte de dicho fondo.

El convencional **Sr. Mena** interrogó, en primer lugar, respecto al alcance de la norma relativa al patrimonio de las regiones de la iniciativa N° 907-3, específicamente al





señalar “Todos los recursos económicos presentes en las regiones constituyen el patrimonio económico de las regiones, entendiendo por (...) recursos energéticos tales como energía eólica, solar, geotérmica (...) y terrenos que se encuentran en sus territorios. En segundo término, cuestionó la forma de financiamiento del Estado regional y central, teniendo en consideración las diferencias de ingreso entre las regiones. Respecto a la iniciativa 806-3, solicitó aclarar la forma de implementación de las áreas económicas estratégicas, y por último, la forma en que se relacionaría el Consejo Superior de Empresas Públicas regionales con el Estado Regional.

Respondiendo las inquietudes planteadas, la convencional **Sra. Gallardo** invitó al convencional Sr. Jürgensen a su territorio para conocer los campamentos y situación de pobreza, para posteriormente afirmar que esto es un problema de clase y ella no pertenece a la del convencional antes señalado. En razón de la pregunta de la convencional Sra. Pustilnick afirmó que expropiar es un acto de autoridad, pero también hay otras limitaciones al derecho a la propiedad, en esos términos, señaló que el acto expropiatorio en sí mismo no es negativo, particularmente cuando se devuelve estructura crítica al Estado. En lo que respecta a la forma en que conversa esta iniciativa con lo aprobado, declaró que estas normas constituyen normas rezagadas por lo que la comisión debe resolver esta situación. Ante la desigualdad empresarial entre las distintas regiones, propuso no sólo potenciar al Estado empresario sino también a las personas que generan empresas. En razón de las inquietudes sobre los recursos energéticos, en específico el solar, afirmó que no se quitará la energía solar a las personas que tienen paneles solares, calificando ese planteamiento como una caricaturización. Enfatizó en la existencia del Consejo Superior de Empresas Públicas como órgano de control.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Jürgensen** solicitó hacer uso del derecho a réplica contemplado en el reglamento, tras haber sido aludido de forma discriminatoria por la convencional Sra. Gallardo. Señaló que la expositora no tiene las facultades para discriminar ni clasificarlo en una clase determinada sin conocer su historia de vida. Enfatizó que su intervención fue una solicitud de análisis económico que no merecía una respuesta como la recibida. Solicitó las disculpas de la convencional expositora de la iniciativa.

La convencional **Sra. Rivera** señaló que en esta comisión siempre ha primado el diálogo. Reflexionó respecto a las consecuencias de la llegada de empresas públicas a competir con el pueblo Aymara. En esos términos, reconoció la labor de las empresas



privadas, calificándolas como eficientes. Abogó por el equilibrio entre lo público y lo privado.

La convencional **Sra. Mella** señaló que, si bien es cierto que la iniciativa corresponde a normas rezagadas, conocer de ellas abre la posibilidad de profundizar temáticas complementarias y fundamentales.

La convencional **Sra. Navarrete** hizo dos alcances, en primer lugar, reconoció el clima dialogante dentro de la comisión, por tanto, no deberían tolerarse actitudes como las manifestadas por la convencional expositora; en segundo punto, en lo relativo al sistema de empresas estatales, afirmó que el Estado no es el mejor empresario, ni eficiente ni eficaz en la utilización de recursos públicos.

El convencional **Sr. Jürgensen** reconoció la importancia del tema, por lo mismo promovió el avance y desarrollo de las trayectorias de los últimos cincuenta años. Invitó a evitar demonizar el empresariado chileno. Se manifestó absolutamente contrario a ambas propuestas.

El convencional **Sr. Chinga** dio a conocer que el desarrollo económico no ha llegado a los territorios indígenas, en el caso Diaguita ha existido una competencia desigual entre transnacionales y las comunidades. A su parecer, se debe fortalecer al Estado fomentando el desarrollo y la participación.

El convencional **Sr. Castillo** lamentó la situación que se dio y afectó al convencional Jürgensen. Reconoció sus diferencias respecto a las apreciaciones de la Reforma Agraria y la nacionalización del cobre, en ese sentido, afirmó que pueden haber diferencias, pero en este espacio es bueno mantener el clima dialogante. Invitó a acabar con varios mitos afirmando que tanto el Estado como el mundo privado han cometido errores en sus respectivas empresas. Calificó ambas iniciativas como “peligrosas”, pues rompe uno de los principios formulados por la comisión, aun reconociendo su mérito en la concepción de las regiones autónomas. Afirmó que es importante el patrimonio de la región, pero no se puede avanzar sin tener claridad respecto a los bienes comunes naturales.

El convencional **Sr. Millabur** reconoció que las palabras del convencional Castillo lo interpretan afirmando que en esta materia, hay argumentos ideológicos por ambas partes, así, no se puede caricaturizar el rol empresarial del Estado sin perder de vista la historia, particularmente, la reforma agraria. Recordó que el gran empresariado se hizo



dueños de recursos naturales en la dictadura militar, tal como ocurrió con las forestales. Por último, manifestó su opinión afirmando que no se sostiene que el Estado quedará anulado en las actividades donde se desarrolla bien.

El convencional **Sr. Jofré** reconoció que se vio afectado por la situación, valoró que la convivencia de la comisión que desde sus inicios ha fluido el respeto y los acuerdos, lo que también ha provocado el avance en las deliberaciones y votaciones de las iniciativas. Agradeció a todos y cada uno de los convencionales por su trabajo. El coordinador Sr. Gómez compartió sus reflexiones.

El convencional **Sr. Álvarez** también coincidió con el buen clima, lo que ha demostrado el avance en los acuerdos, particularmente respecto a las comunas autónomas. En lo relativo a la deliberación de la iniciativa, rescató la propuesta de implementación del mecanismo de iniciativa popular para la creación de empresas, poniendo en discusión en el órgano respectivo esta propuesta. Afirmó que no resulta procedente demonizar a las empresas públicas pues existen algunas innovadoras y eficientes, por ejemplo, la empresa de Medellín. Posteriormente, indagó en el rol de las empresas públicas a nivel regional y su eventual competencia con las empresas privadas, pues, a su parecer, no puede haber empresas públicas monopólicas.

El convencional **Sr. Arancibia** expresó la alegría de formar parte de la convención, lo cual ha demostrado que se puede trabajar en conjunto. Agradeció a todos y cada uno de los convencionales. Planteó que la mayor parte de su vida fue empleado público de las fuerzas Armadas, reconoció que a esta institución le faltó un mayor control y la identificación de las distintas características de fuerzas armadas, para concluir que el Estado debe tener mayor control y fiscalización de sus estructuras, particularmente de las Fuerzas armadas. Propuso ir evaluando las competencias de los privados, pues en aquellas áreas donde el particular no interviene el Estado debería hacerse presente, tal como, en sus términos, pasó en las concesiones de las carreteras y puertos de Valparaíso y San Antonio. Por último, afirmó que los diálogos y consensos le hacen bien al país.

La convencional **Sra. Giustinianovich** se sumó a las palabras en el ambiente de respeto dentro de la comisión. Mencionó la importancia de abrir el debate para ir perfilando las empresas públicas y los servicios básicos.

El convencional **Sr. Mena** aclaró el concepto de empresas públicas. También enfatizó en las diversas críticas a la Empresa Pública de Medellín.



**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 806-3 sobre empresas públicas regionales.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	8	3	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5124](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5124)

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 907-3 que consagra a Chile como un Estado con regiones autónomas.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	7	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5126](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5126)

**Iniciativa convencional constituyente N° 792-5 que garantiza y ampara el reconocimiento de los derechos de Madre Tierra,** de las y los convencionales Erick Chinga, Alejandra Pérez, Elsa Labraña, Tania Madriaga, Lissette Vergara, Isabel Godoy, Camilo Zarate, Alvin Saldaña y Carolina Vilches.

El convencional **Sr. Chinga** manifestó que la iniciativa es promovida por el movimiento internacional de la madre tierra, siendo competencia de esta comisión conocer el artículo 10 de la misma. Le ofreció la palabra a la Sra. Verónica Sacta, quien realizó la presentación de la iniciativa enfatizando en la relación de los pueblos indígenas con la naturaleza. Señaló la incipiente jurisprudencia en el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, siendo 35 países los que reconocen que la naturaleza es un sujeto jurídico. Para posteriormente dar lectura a la propuesta de articulado: “Art. 10.- Derechos de la Madre Tierra Naturaleza y Regiones Administrativas. Las regiones



administrativas editarán, en el ámbito de su autonomía, las normas para la implementación de los derechos de la Madre Tierra, Naturaleza, observando los principios constitucionales o legales que les sean de aplicación.”

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Jürgensen** concordó en que el ser humano debe vivir en armonía con la naturaleza, sin embargo, frente a los derechos de la naturaleza nacen muchas dudas, en específico, la determinación de los derechos de la naturaleza, las formas para ejercerlos y los sujetos activos en caso de reclamación.

La expositora Sra. Veronica Scata explicó que el principal derecho de la naturaleza es el derecho a estar viva, entendida como superorganismo vivo, con ello se reconocen los derechos de los seres humanos y el derecho a existir como especie. Así también el derecho a ser custodiada, respetada, a no ser contaminada, entre otros. Bajo su punto de vista, la forma de implementar estos derechos se debe consagrar constitucional y legalmente, siendo el principal avance a nivel educativo pasando de la cultura antropocéntrica a una geocéntrica.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. No hubo intervenciones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 792-5 que garantiza y ampara el reconocimiento de los derechos de Madre Tierra.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el artículo 10 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	15	3	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5128](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5128)



**Iniciativa convencional constituyente N° 871-3 que propone el consejo de asambleas legislativas regionales.** de las y los convencionales Yarela Gómez, Elisa Giustinianovich, Adriana Ampuero, Jeniffer Mella, Amaya Álvarez, César Uribe, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, María Elisa Quinteros, Cristóbal Andrade y Hernán Velásquez.

La convencional **Sra. Mella** realizó la presentación de la iniciativa. Preciso que resulta necesario actualizar el nombre del “Consejo de Asambleas legislativas regionales”, en razón de lo ya aprobado en el Pleno. Definió la nueva institución como un organismo encargado de coordinar y trabajar colaborativamente con el nivel central, de carácter temporal, cuyo objetivo es abrir un espacio que visibilice el diálogo entre los órganos nacionales y subnacionales. Dentro de los fundamentos de la propuesta, señaló la disfuncionalidad de un bicameralismo simétrico que no sólo duplica innecesariamente el proceso legislativo, sino que también, concentra el poder en las elites políticas de Santiago, en cuanto el Senado actual no opera como una verdadera cámara alta territorial, en ese contexto, el Consejo de Asambleas Legislativas Regionales resuelve de modo simple y democrático la necesidad de contar con un organismo de representación regional en el ejercicio de la potestad normativa y reglamentaria. Subrayó que este Consejo operaría de modo simple y sin mayores costos para el Estado y las Regiones, puesto que sólo se reúne temporalmente a fin de ejercer sus competencias, está conformado por representantes ya electos en las Regiones y no duplica la competencia legislativa.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Mena** señaló que la esta iniciativa corresponde votar en la Comisión 1, pudiéndose deliberar, pero no votar en esta comisión. En segundo término, interrogó sobre su relación con lo aprobado en el Pleno.

El convencional **Sr. Jürgensen** reiteró que la propuesta quedó desfazada en el tiempo. Posteriormente, planteó la inquietud sobre si este consejo de asambleas legislativas regionales constituiría una tercera cámara legislativa.

La convencional **Sra. Navarrete** preguntó sobre la posibilidad de que esta propuesta sufra algún ajuste conforme a lo aprobado por el Pleno. En segundo término, solicitó clarificar el significado de la facultad de ratificar la ley general de regalías sobre el cobre y el litio, específicamente si se hace referencia a una especie de concesión u otro concepto.



El convencional **Sr. Álvarez** interrogó sobre la posibilidad de convivencia del consejo de asambleas legislativas regionales con la Cámara o Consejo territorial, o bien, pudieran ser considerados como órganos yuxtapuestos.

En respuesta a lo planteado, la convencional **Sra. Mella** afirmó que la propuesta tiene por objetivo armonizar la propuesta a través de las indicaciones y compatibilizarlo con lo ya aprobado. Se mostró convencida de las potestades de las regiones dependen del desarrollo de las regiones, en ese sentido, aún sin tener potestades legislativas, quedará como anhelo regional. En respuesta a los convencionales Sr. Jürgensen y Álvarez, fue enfática en señalar que la propuesta no fue pensada como una tercera cámara, sino que viene a promueve una representación territorial, además, no tienen el mismo origen ni funciones que el Consejo regional. Paralelamente, señaló que las facultades que contempla la propuesta es la ratificación de índole nacional, por ejemplo, Tratados de Libre Comercio y Leyes de presupuesto nacional.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Uribe** valoró la propuesta. Afirmó que muchas de las temáticas son de interés y necesidad regional. Manifestó que existe un vínculo con las temáticas conocidas por la Comisión N° 1, propuso abordarla de manera conjunta.

El convencional **Sr. Mena** afirmó que hay diferentes órganos que requieren delimitación, lo que exige deliberar en respeto a su espíritu y no radicar esa labor a la comisión de armonización, a fin de evitar colisión y contradicción entre los órganos.

La convencional **Sra. Rivera** reflexionó respecto a las facultades legislativas de las regiones autónomas, las cuales habían sido consideradas inicialmente excluidas.

El convencional Sr. castillo aclaró que existen Asambleas regionales, no Asambleas legislativas, convocadas por el Presidente de la República. Al mismo tiempo subrayó que el consejo de asambleas legislativas regionales sería un órgano que no está generado democráticamente sino más bien responde a una asamblea corporativa, pues las facultades en materia legislativas ya no existen de cara a lo aprobado. Por último, advirtió que esta discusión es un asunto político que se resolverá el Pleno recordando que existe un acuerdo político en la existencia de consejos territoriales.

La convencional **Sra. Giustinianovich** destacó que esta discusión se ha dilatado



en la comisión 1. Adhirió a la propuesta de creación de un órgano que pueda velar por el interés y necesidades regionales, pues, a su entendimiento, la propuesta promueve la incidencia de los órganos regionales en temas de relevancia. Agradeció esta discusión en esta comisión.

El convencional **Sr. Jofré** cuestionó la estrategia de seguir insistiendo en facultades legislativas regionales. A su parecer, este diseño es bastante particular con características experimentales y potestades legislativas. Paralelamente, denotó la posibilidad de que la ratificación pudiera ser considerada como una especie de veto. Para finalmente, manifestar su desacuerdo con la propuesta.

La convencional **Sra. Navarrete** resaltó las consecuencias de ratificar acuerdos de libre comercio, de cara a las diferencias concretas y económicas entre las regiones, lo que afectaría la certeza de inversión a nivel internacional. Bajo su punto de vista, la creación de nuevas instancias intermedias relentecería el aparato legislativo.

La convencional **Sra. Pustilnick** rescató la intención de avanzar a un punto intermedio con la discusión en la comisión N° 1. Puntualizó que la posibilidad de plantear órganos regionales con facultades legislativas temporales otorga inestabilidad a la tramitación de leyes en nuestro país. Invitó a ir avanzando con las decisiones del Pleno.

El convencional **Sr. Chinga** mostró su preocupación respecto a la iniciativa, propuso mejorar la propuesta a través de las indicaciones.

La convencional **Sra. Mella** agradeció el nutrido debate. Precisoó que la propuesta busca fortalecer la participación política desde los territorios, por lo tanto, se planteó como una alternativa a evaluar sujeta a indicaciones y mejoramiento con los debidos contrapesos en los distintos niveles subnacionales.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 871-3 que propone el consejo de asambleas legislativas regionales.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	10	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:



[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5128](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5128)

**Iniciativa convencional constituyente N° 898-3 que establece un sistema de ordenamiento y planificación integral del territorio,** de las y los convencionales César Uribe, Elisa Giustinianovich, Adriana Ampuero, Jeniffer Mella, Amaya Álvez, Yarela Gomez, Tiare Aguilera, Adolfo Millabur, Tammy Pustilnick, Ramona Reyes, Claudio Gómez, Julio Álvarez, Cristóbal Andrade, Hernán Velásquez, Helmuth Martínez y María Elisa Quinteros.

El convencional **Sr. Uribe** expuso la iniciativa frente a la comisión, la cual tiene por objetivo reconocer la importancia del ordenamiento y planificación territorial, debiendo conversar entre ellos y constituir un sistema que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio. Expresó que el ordenamiento y la planificación territorial en Chile no constituyen un sistema coherente de política pública, pues sus instrumentos están dispersos en normas y con distinto alcance legal sin abarcar además, la totalidad del territorio, en ese sentido, puntualizó que la regulación de los instrumentos de protección de ecosistemas es insuficiente, pues su gestión depende de instituciones públicas con limitadas capacidades de gestión y fiscalización para responder adecuadamente a las distintas formas nocivas de ocupación y uso del territorio, entre otros factores. En ese sentido, describió el contenido de la propuesta normativa, el artículo primero señala que el Estado y sus entidades territoriales deben asumir un rol de custodios del territorio plurinacional mediante el ordenamiento y planificación vinculante del uso del suelo y agua, para la protección de la totalidad del territorio del país, considerando como unidad de gestión de planificación a las cuencas hidrológicas que permitan un manejo ecosistémico y un desarrollo equilibrado, eficiente y sostenible para el bienestar de las presentes y futuras generaciones; el artículo segundo, por su parte, consagra los principios de la elaboración de toda política, plan de ordenamiento e instrumentos de planificación territorial; el artículo tercero establece los objetivos de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial; y por último, el artículo cuarto busca establecer una ley marco basada en un enfoque socio ecológico, que busque el desarrollo del país, integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

La convencional **Sra. Álvez** señaló que la propuesta marca la estructura de la



demanda territorial en varios sentidos, le pareció interesante debatirla, pero será necesario armonizar la iniciativa. Interrogó, en primer lugar, respecto al órgano que pudiera hacerse cargo de la especificidad territorial y su vínculo con las autoridades del Estado Regional. En segundo término, solicitó su opinión en la delimitación de lo urbano y rural.

El convencional **Sr. Bacion** resaltó la importancia de la creación de instrumentos de planificación. Consultó sobre los instrumentos que limitan la ejecución de planes territoriales y frenan la inversión pública. Planteó que la propuesta se puede complementar a través de indicaciones.

La convencional **Sra. Navarrete** puntualizó la importancia de la planificación territorial y la actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. Solicitó aclarar la posibilidad de crear una instancia superior que agrupe los diversos ordenamientos territoriales, por otro lado, cuestionó sobre el vínculo de esta propuesta con la parcelación de terrenos rurales.

Respondiendo las inquietudes, el convencional **Sr. Uribe** resaltó la importancia de la participación y sabiduría colectiva en la definición de proyectos en los territorios. Además, puntualizó la importancia de comenzar con variables macros para luego bajarlas a escala humana. Se abrió a la posibilidad de abrir la Ley marco frente a la autonomía de los pueblos indígenas. En lo relativo al órgano que defina los ordenamientos y planificación territorial, aclaró que debe estar alojada en todos los niveles, regional y central. Por último, en lo relativo al límite de lo urbano y lo rural, señaló que faltan planes reguladores de crecimiento armónico.

Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta. No hubo observaciones.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 898-3 que establece un sistema de ordenamiento y planificación integral del territorio.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	4	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5131](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5131)

**Iniciativa convencional constituyente N° 759-2 sobre mecanismos de democracia directa**, de las y los convencionales constituyentes Paulina Veloso, Hernán Larraín, Bárbara Rebolledo, Geoconda Navarrete y Álvaro Jofré.

Expuso frente a la comisión el convencional **Sr. Jofré**. En primer lugar, señaló que, a pesar de que la propuesta está radicada en distintas comisiones, sugirió evaluarla como un todo armónico. Manifestó que el proceso constitucional aparece como una oportunidad de complementar los institutos esenciales de nuestra democracia representativa; reconociendo, sin embargo, que la democracia directa no es una solución mágica, por el contrario, el uso demagógico y meramente formal de los mecanismos de participación, es ineficaz y puede terminar profundizando los problemas de la democracia representativa y el sistema político en general. Es así como, enfatizó que mediante esta propuesta proponemos mecanismos de participación que se centren esencialmente en el nivel subnacional (regional y comunal), con preeminencia en lo local, a través de iniciativas populares de norma, referendos regionales y comunales y jurados consultivos, como una manera de asegurar una mayor pertinencia por su conexión con las prioridades ciudadanas y también de dar mayor impulso a un anhelado proceso de descentralización. Por último, describió el artículo sujeto a la deliberación y votación de esta comisión referido a los mecanismos de participación ciudadana en el nivel local, a través de los Referendos regionales o comunales, y del Jurado Consultivo.

Se abrió una ronda de preguntas y observaciones por parte de las y los Convencionales Constituyentes.

El convencional **Sr. Andrade** cuestionó respecto a la posibilidad de considerar plebiscitos barriales.

La convencional **Sra. Álvez** reconoció la complejidad de deliberar la propuesta dispersa en varias comisiones. Se mostró a favor de la propuesta a fin de seguir discutiendo los mecanismos de participación.

En respuesta a lo planteado, el convencional **Sr. Jofré** comentó que corresponde a una potestad del legislador definir los diferentes tipos de plebiscitos. El convencional **Sr. Mena** puntualizó el alcance del Jurado consultivo, el cual ofrece insumos para la toma de decisión política en un consejo comunal.



Se dio inicio a la fase de deliberación sobre la propuesta normativa expuesta.

El convencional **Sr. Uribe** manifestó la importancia de la propuesta como forma de establecer un estándar de vinculación comunal.

La convencional **Sra. Reyes** reconoció que la propuesta es un punto de convergencia, enfatizó en la participación vinculante. Ofreció su experiencia en la utilización de mecanismos de participación.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 759-3 sobre mecanismos de democracia directa.

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en el artículo 4 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	2	4	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5133](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5133)

**Iniciativa convencional constituyente N° 163-4 que establece la igual repartición de tributos y cargas fiscales, y dispone la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica,** de las y los convencionales Rodrigo Álvarez, Arturo Zúñiga, Martín Arrau, Rocío Cantuarias, Claudia Castro, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Margarita Letelier, Teresa Marinovic, Felipe Mena, Katerine Montealegre, Cecilia Ubilla y, Carol Bown.

Los autores de la iniciativa pese a reiterados llamados en la Comisión, no se presentaron, razón por la cuál se procedió a dar lectura de los fundamentos de la misma, dándose por deliberada.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 163-4 que Establece la igual



repartición de tributos y cargas fiscales, y dispone la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
4	18	1	0	23	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5027](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5027)

**Iniciativa constituyente Indígena N° 215-4 sobre Derechos para los pueblos originarios, en sociedad justa, libre y próspera,** presentada por Hans Curamil.

Los autores de la iniciativa pese a reiterados llamados en la Comisión, no se presentaron, razón por la cuál se procedió a dar lectura de los fundamentos de la misma, dándose por deliberada.

**Votación:** Iniciativa Convencional Indígena N° 215 sobre diferentes derechos fundamentales de pueblos indígenas.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	1	14	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5134](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5134)

**Iniciativa convencional constituyente N° 296 como derecho fundamental, el de la defensa de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza,** de las y los convencionales Manuel Woldarsky González, Alejandra Perez Espina, Giovanna Grandon Caro, Tania Madriaga Flores, Eric Chinga Ferreira, Isabel Godoy Monardez, Victorino Antilef Ñanco, Natividad Llanquileo Pilquiman, Elsa Labraña Pino, Wilfredo Bacion Delgado, Alexis Caiguan Ancapán, Marco Arellano Ortega, Lisette Vergara Riquelme, Mauricio Daza Carrasco y Maria Rivera Iribarren.



Expuso como autor de la propuesta, el convencional **Sr. Eric Chinga**. Dio lectura a los fundamentos de la propuesta, los que versaron en los siguientes términos:

“Respecto de esta iniciativa, es posible sostener que los bienes jurídicos que busca proteger son: la Dignidad Humana, la protección a la humanidad toda, la fiscalización del cumplimiento estatal -en sus obligaciones- respecto de los derechos que consagra la Constitución, el acceso a información que permita verificar dicho cumplimiento y la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la historia de Chile.

El 8 de marzo de 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, mediante resolución A/RES/53/144 la Declaración 1 sobre el derecho y el deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, desde las cuales se desprenden los derechos ambientales y de la naturaleza.

Los constituyentes que suscriben recomiendan que la presente iniciativa sea incluida en el catálogo de derechos fundamentales de la propuesta de Constitución de los Pueblos de Chile, por lo que su texto -consideramos- debe ser discutido por la Comisión sobre Derechos Fundamentales.

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; motivo por el que los pueblos del mundo han defendido el acuerdo que permite defender los derechos humanos, la dignidad, el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de mujeres y hombres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social a elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad, como lo menciona el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En ese sentido, y reafirmando la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo, es que se usa la expresión “defensor/a de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos.



El papel que desempeñan aquellos individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales es de vital trascendencia, así como la necesaria participación ciudadana en el desarrollo de responsabilidades colectivas que permitan aportes que transiten hacia el término de la discriminación es que surge, desde la legislación internacional, la iniciativa que ofrece el resguardo para toda persona que, individual o colectivamente, fomente, promueva y procure la protección y realización de los derechos humanos y que, mediante esta iniciativa, los autores proponen incluirlo como derecho de rango constitucional en el catálogo de derechos que contenga la propuesta de Constitución de los Pueblos de Chile.

La actividad de muchos defensores tiene por objeto lograr que se rinda cuentas de la observancia de las normas relativas a los derechos humanos. En términos generales, esta labor puede consistir en ejercer presión sobre las autoridades y promover la realización de mayores esfuerzos por parte del Estado para cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha contraído al ratificar tratados internacionales; así como la de registrar el actuar de agentes del estado en ejercicio de sus atribuciones, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha suscrito, sus diferencias y, en caso de incumplimiento, las respectivas denuncias o registros.

En definitiva, nuestro país se encuentra frente a la oportunidad histórica de actualizar su catálogo, incluyendo aquellos preceptos que permitan que la defensa de la dignidad humana y la protección de la naturaleza sean una obligación que el Estado de Chile deba cumplir, para efectos de fomentar la participación y la educación ciudadana, promover el diálogo que conlleve hacia una cultura colectiva de la paz y cumplir con las obligaciones ya suscritas con la comunidad internacional en la materia”.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Arancibia** manifestó no tener claridad de cuáles son los derechos de la naturaleza, pues entiende que la subsistencia humana el cuidado de la naturaleza es fundamental. Sin embargo, solicitó aclarar por qué la iniciativa habla de “derechos” y no protección.

La convencional **Sra. Álvez** consultó al autor si esta propuesta se enmarca en un modelo de objetivos mayores, como el del Estado social de derecho.



El convencional **Sr. Chinga** respondió a las inquietudes dentro del tiempo otorgado. Indicó qué se entiende por los derechos de la naturaleza, desde una perspectiva del cuidado entendiéndose como un ser vivo. La pregunta más bien sería como se defienden estos derechos. Sobre el Estado social de derecho, manifestó estar de acuerdo con dicha estructura, pero señaló que se necesita precisar más en los términos de la propuesta de hoy.

Se dio continuidad a la fase de deliberación, pero no hubo palabras solicitadas.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 296 que consagra el derecho a defender los derechos humanos y la naturaleza.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	11	4	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5135](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5135)

**Iniciativa convencional constituyente N° 304-4 que Consagra los derechos fundamentales que indica,** de las y los convenciones Valentina Miranda Arce, Marcos Barraza Gómez, Bárbara Sepúlveda Hales, Carolina Videla Osorio, Hernán Velázquez Núñez, Nicolás Nuñez Gangas, Bessy Gallardo Prado y Hugo Gutiérrez Gálvez.

Los autores de la iniciativa pese a reiterados llamados en la Comisión, no se presentaron, razón por la cuál se procedió a dar lectura de los fundamentos de la misma, dándose por deliberada.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 304 que consagra diversos derechos de la personalidad.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
11	9	5	0	25	RECHAZADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5136](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5136)

**Iniciativa convencional constituyente N° 371-4 que establece un estatuto de protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza**, de las y los convencionales Constanza San Juan, Francisco Caamaño, Alvin Saldaña, Camila Zárate, Ivanna Olivares, Manuela Royo, Vanessa Hoppe, Malucha Pinto, Gloria Alvarado, Elisa Giustinianovic, Mario Vargas, Carolina Videla, Loreto Vallejos, María Magdalena Rivera, Juan José Martín, Dayyana González, César Uribe y, Cristóbal Andrade.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Constanza San Juan**. La convencional dio lectura a los fundamentos de la propuesta, los que versaron en los siguientes términos:

“En 1998, Naciones Unidas promulgó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, conocida como la declaración sobre defensores/as de DD.HH, en ella se señala que son defensores/as: las persona que, individual o colectivamente, promueven y procuran la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, lo esencial del concepto es que son las actividades de defensa, promoción y/o protección de derechos que realiza una persona o grupo de personas las que permiten atribuirles la calidad o condición de defensor o defensora y no una determinada profesión, raza, género o condición.

Al realizar la labor de defensa de derechos se ejercen simultáneamente otros derechos: como la libertad de expresión, la libertad de asociación, los derechos políticos, entre otros, pero los mecanismos tradicionales de reconocimiento y protección de estos derechos no han sido suficientes para procurar las condiciones necesarias para que quienes los ejercen de modo habitual para la defensa de sí mismos y de sus comunidades o colectivos, puedan desempeñar sus labores sin riesgos de múltiples tipos, tales como: campañas de desprestigio, amenazas de muertes, amenazas de diverso tipo, asesinatos, criminalización, entre otros.



La gravedad y habitualidad de estos atentados en contra de las personas defensoras de derechos humanos ha impulsado el trabajo de diversas instancias de derechos humanos que buscan que los estados reconozcan y protejan a las personas defensoras tomando para ello en especial consideración el rol esencial que desempeñan en una democracia.

Los principales hitos de reconocimiento a nivel universal comprenden la creación de una Relatoría Especial Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, la que al día de hoy han desarrollado diversos informes que nos permiten tener información seria y grave sobre la violencia que afecta a las personas defensoras.

Por otra parte, destacamos el trabajo realizado para exponer los especiales riesgos que viven las/os defensores/as de ciertos grupos o derechos en específico, por ejemplo las mujeres defensoras de derechos humanos. Asimismo, el trabajo de la relatoría para la libertad de expresión, que ha trabajado la situación especial de riesgos y agresiones a los/as periodistas en tanto defensoras de derechos humanos. También, el trabajo de los relatores para la protección de derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que han puesto el acento en la gravedad de la situación de los/ defensores ambientales, a la que haremos especial referencia.

A nivel de sistema interamericano de protección de derechos humanos, cabe señalar que su órgano político principal, la Organización de Estado Americano, realizó el primer reconocimiento en apoyo a la labor de defensores y manifestó su preocupación por los patrones de agresiones que les afectan en el año 1999 y desde ese entonces lleva un sin número de ocasiones en las que se ha pronunciado para reconocer el trabajo que estos realizan y denunciar las agresiones que les afectan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el año 2001 la Unidad de Defensores y el año 2011 ésta se convierte en una de las relatorías del sistema regional. En el marco de sus labores, estas instancias han desarrollado tres informes, dos sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el primero data del año 2006 y el segundo del año 2017. También destaca el informe sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos.

Actualmente, ya casi no encontramos informes de derechos humanos de relatorías o por países que no hagan referencia específica a la situación de los/as defensores, aumenta la jurisprudencia y la preocupación por las vulneraciones que les



afectan. Todo ello es un indicador más que claro de que las personas defensoras de derechos humanos efectivamente están siendo víctimas de vulneraciones y están en riesgo, es por ello que los sistemas de protección se han visto en la obligación de reconocerlos como sujetos de especial protección y desarrollar los deberes estatales específicos al respecto.

Que justamente reconociendo y haciéndose cargo de esta situación, Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú” (y que inexplicablemente el Gobierno de Chile aún no ratifica pese a haber sido uno de sus autores), contempla un título sobre la protección de las y los defensores de DD.HH, en la que en su artículo 9 impetra a los Estados partes a: 1) garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 2) tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente”, y; 3) tomar las “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.”

A nivel mundial el número de asesinatos y casos de violencia contra defensores del ambiente y los territorios resulta inquietante. El informe publicado por Global Witness en 2021 pone en evidencia cómo la violencia contra las y los defensores ambientales va en aumento año tras año, incluso más alarmante son los resultados del año 2020, el cual fue el peor año registrado. En 2020, registramos 227 ataques letales, lo que establece un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana y lo convierte, una vez más, en el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima.

En el caso de Chile, la situación es alarmante. Si bien, no hay información oficial emanada del Estado, la prensa independiente, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos ambientales han denunciado en varias ocasiones la persecución de sus miembros en casos específicos, muchos de los cuales han terminado judicializados, sin que se haya logrado una real protección para estas



personas.”

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Ampuero** consultó si el registro al que alude la iniciativa es de carácter nacional, o si sería un elemento según entidades territoriales.

La convencional **Sra. Navarrete** manifestó que no es de su parecer el establecer grupos privilegiados. Consultó qué hace que haya determinados grupos por sobre otros que también prestan ayuda a la comunidad y que no quedarían constitucionalizados como esta situación.

La convencional **Sra. Aguilera** consultó qué opinan qué significa en términos políticos una iniciativa de esta calidad.

La expositora respondió a las preguntas formuladas. Destacó el estatuto jurídico de defensores de derechos humanos, dando cuenta que es una realidad concreta en muchos países a nivel comparado, que se traducen en normativas y políticas públicas de distinto tipo. Por otro lado, aclaró que no se trataría de grupos privilegiados sino de sujetos de especial protección, por intermedio de relevar que el lenguaje jurídico no es neutro y categorías que pretenden aquello invisibilizan a todos aquellos sujetos que tienen diferencias sobre las cuáles se les debe reconocer una particularidad.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación de esta iniciativa.

La convencional **Sra. Ampuero** destacó la propuesta y la necesidad de dejar de lado formalismos en el derecho que hoy no hacen sentido. En este sentido, destacó que no se trata de grupos privilegiados, sino personas de especial protección.

La convencional **Sra. Navarrete** insistió en no estar de acuerdo con esta iniciativa, pues en su opinión sí establece grupos privilegiados, y terminó su intervención relatando su experiencia personal.

La convencional **Sra. Aguilera**, el convencional **Sr. Uribe** y el convencional **Sr. Andrade** manifestaron estar en favor de esta iniciativa e hicieron hincapié en no confundir la terminología al respecto, debiendo ser cuidadosos con el lenguaje, pues indicar que se trataría de grupos privilegiados desconoce la noción de grupos de especial protección.



**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 371 que consagra el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
12	6	7	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5137](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=832&prmIdVotacion=5137)

**Iniciativa convencional constituyente N° 375-4 que reconoce y regula diversos derechos fundamentales, en particular los civiles y políticos,** de las y los convencionales Roberto Celedón, Elsa Labraña, Javier Fuchslocher, Manuel Woldarsky, Giovanna Grandón, María Magdalena Rivera, Benito Baranda, Janis Meneses, Tania Madriaga, Valentina Miranda y Lidia González.

Expuso como autor de la propuesta, el convencional **Sr. Roberto Celedón**. Dio lectura a los fundamentos de la propuesta, en especial énfasis con aquello que ha sido derivado a esta comisión, como lo es el régimen constitucional minero y el derecho a la libre iniciativa económica, esto es, N° 24 y 27 de la propuesta.

“Los derechos civiles y políticos que, históricamente, recibieron el nombre de los derechos humanos de la primera generación, aquellos que se reconocen como fundamentales cuya vulneración afecta de manera sustancial a la persona humana y cuando ésta proviene de la acción de agentes del Estado se afecta a la comunidad política entera, a la sociedad en su integridad.

De ahí la importancia de esta temática, a estos derechos se refiere el inciso 2o del artículo 50 de la Constitución de 1980 cuando expresa: ‘El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana’. Son derechos que emanan de la naturaleza humana y no hay duda que la vida, la integridad física y psíquica de las personas, las libertades personales, de expresión, de pensamiento, creencias, religiosa, la igualdad ante la ley, el derecho a la justicia son, además, un límite a la soberanía del Estado. Lo grave e incomprensible es que los mismos que escribieron esta norma son, sino personalmente, al menos a través



de los agentes del Estado sobre los cuales tenían poder jerárquico, violaron todos y cada uno de estos derechos que provienen de la naturaleza humana.

Como autoridad tenían la obligación jurídica mínima de hacer respetar la propia Constitución. Por el contrario, al transformar la norma constitucional en palabra muerta, ampararon a los violadores y aceptaron las más brutales violaciones en términos que la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó al Estado de Chile durante 17 años, por la violación sistemática, colectiva e institucional de los derechos humanos.

Lo que se planteará como iniciativa de norma constituyente, a modo de aproximación normativa, es fruto del trabajo de múltiples personas que incluye a académicos e instituciones universitarias que generosamente colaboran con la Convención Constitucional”.

Se refirió, asimismo, a la idea del derecho al desarrollo, pero también al desarrollo sostenible. En dicho marco, destacó la relevancia de la libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. La propuesta establece que sin perjuicio del Estado poder administrar recursos del país, se reconoce a toda persona dicha garantía. Finalmente, se refirió al régimen constitucional minero, y los antecedentes históricos y de medioambiente actuales implicados en ella.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sra. Arancibia**, consultó sobre la forma de elección de autoridades de conformidad al N° 18 de la propuesta. Sin embargo, se hizo presente por la Coordinación que dicha pregunta no es parte de los contenidos a deliberar por esta comisión.

El convencional **Sr. Gómez** consultó qué elementos serían determinantes para que se formulen al sector privado respecto de las concesiones mineras.

El autor dio respuesta a las consultas dentro del tiempo otorgado para ello. Se refirió al número 2 del articulado del régimen constitucional minero, manifestó que están en concordancia sustancial.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación de esta iniciativa.

El convencional **Sr. Castillo** manifestó que el derecho de propiedad está muy



marcado por lo establecido en el Código Civil. Lo que hace la Constitución de 1980 es constitucionalizar el Código Civil. En este sentido, la propiedad minera es un derecho sobre una cosa incorporal. Manifestó la necesidad de que sea la constitución que fije el marco del derecho propiedad del Código Civil y no al revés, especialmente en esta materia.

La convencional **Sra. Aguilera** agradeció el detalle y correcciones que se hicieron con motivo de la fundamentación de esta iniciativa.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 375 que reconoce y regula diversos derechos fundamentales, en particular los civiles y políticos

En relación a esta iniciativa, solo es competencia de esta Comisión lo propuesto en los artículos 24 y 27 de la misma.

**Resultado de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	7	3	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5139](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=832&prmlIdVotacion=5139)

**Iniciativa convencional constituyente N° 406-4 sobre Titularidad de los Derechos Fundamentales,** de las y los convencionales Juan José Martin Bravo, Carolina Sepulveda Sepulveda, Jorge Abarca Riveros, Giovana Roa Cadin, Vannessa Hoppe Espoz, Adolfo Millabur Ñaicuil, Cristina Dorador Ortiz y Francisco Caamaño Rojas.

Esta iniciativa fue excluida de la deliberación, toda vez que fueron reenviadas, deliberadas y votadas en la Comisión de Medioambiente.

**Iniciativa convencional constituyente 860-4 que establece derechos de las personas en el régimen público económico,** de las y los convencionales Juan José Martin Bravo, Carolina Sepúlveda, Jorge Abarca Riveros, Lorena Céspedes Fernandez, Gaspar Domínguez, Ramona Reyes Painequeo, Nicolas Nuñez Gangas, Adriana



Cancino Meneses, Javier Fuchslocher Baeza y Tammy Pustilnick Arditi.

Esta iniciativa fue excluida de la deliberación, toda vez que fueron reenviadas, deliberadas y votadas en la Comisión de Medioambiente.

**Iniciativa convencional constituyente N° 779-3 que establece un Plebiscito para la creación de la Región de Choapa**, de las y los convencionales Ivanna Olivares, Yarela Gómez, Jeniffer Mella, Cristóbal Andrade, Ramona Reyes, Wilfredo Bacian, Adriana Ampuero y Eric Chinga.

Expuso como autora de la iniciativa, la convencional **Sra. Ivana Olivares**. La autora dio lectura a los fundamentos de la iniciativa, la que versó del siguiente tenor:

“La provincia de Choapa se localiza al sur de la región de Coquimbo y al norte de la región de Valparaíso. El principal curso de agua de la provincia es el río Choapa que drena a la cuenca del mismo nombre, abarcando una superficie de 8.100 km. La Serena es la capital regional, emplazada a 308 kilómetros de Salamanca, la comuna más distante al interior de la provincia, lo que equivale a más de 5 horas de viaje en bus.

Debido a múltiples factores, como la geografía única de la zona que configura una frontera interior y un límite natural a la desertificación, la existencia de valles transversales alimentados por la gran cuenca del Río Choapa, entre otros elementos objetivos y subjetivos, se ha configurado en la Provincia un sentimiento de unidad e identidad que lo distingue de las características propias de la Región de Coquimbo, a la vez que se ha hecho transversal el sentimiento de abandono y rezago del gobierno central y regional, a lo largo de toda su historia.

Sin tener un carácter taxativo, al Choapa le aquejan al menos las siguientes problemáticas: Existen zonas de escasa y nula conectividad no solo de internet, sino también de señal de teléfono y de televisión, acentuando el sentimiento de abandono y rezago. Existe una manifiesta desproporción en la distribución de la riqueza en relación al territorio que debe soportar las cargas ambientales de actividades extractivas en plena crisis climática y escasez hídrica. Así, y según datos del Banco Central del año 2020, un 41,2% de las exportaciones regionales de cobre y un 28% del total regional de las exportaciones de cítricos, nueces y paltas son aportadas por esta Provincia.

En los últimos 10 años, solo se han otorgado 1365 subsidios habitacionales en toda la Provincia, mientras que en Elqui y Limarí se otorgaron 7282 y 3972 subsidios





respectivamente en el mismo período de tiempo. Los y las vecinas de Choapa deben viajar más de 5 horas en bus para poder atenderse en los hospitales regionales de Coquimbo y La Serena. Muchos de estos traslados se convierten en verdaderas esperas de agonía o sentencias de muerte para pacientes de urgencias o se dificulta en demasía el tratamiento de enfermedades complejas.

En razón del sistema electoral, se produce una profunda asimetría y dificultad para alcanzar la representación política en el poder legislativo, debido a que la Provincia de Choapa sólo concentra el 12% del total de la población de la Región. En las últimas décadas, solo un par de representantes ha alcanzado el parlamento, generando que la práctica legislativa regional esté desconectada de la realidad de este territorio.

De acuerdo a datos entregados por los DAEM de las cuatro comunas, los egresados del año 2021 fueron 514 estudiantes, entre la modalidad Científico Humanista y Técnico profesional; mientras que los egresados de la educación particular subvencionada fueron aproximadamente 230 estudiantes.

En la provincia existe solo un Centro de Formación Técnica: Ceduc UCN, con una matrícula para el 2022 de 168 estudiantes en 6 cursos de 28 estudiantes. El resto de los y las estudiantes se ven forzados a migrar, develando la necesidad de un centro de estudios que atienda las demandas de la comunidad estudiantil de la Provincia.

En toda la Provincia no existen centros educacionales de educación superior universitaria, forzando la migración a diversas ciudades de Chile de parte de los y las estudiantes, generando un mayor costo y manutención para sus familias, en comparación a los habitantes de otras provincias que cuentan con su capital regional a solo un par de horas de distancia.

La sensación de abandono y olvido de parte de la administración central y regional es particularmente marcada en la comuna de Canela, cuyos habitantes sienten los rigores del excesivo centralismo de las decisiones políticas y administrativas de las autoridades de la Región de Coquimbo.

Los llamados “beneficios sociales” que debieran provenir de la realización de actividades extractivistas como la megaminería y monocultivo en nuestro territorio, son prácticamente inexistentes, con una alta tasa de población bajo el 40% de vulnerabilidad, escasez de servicios públicos de calidad (educación, salud, cultura, viabilidad, conectividad, etc.) y un estado de permanente conflicto social y ambiental con la empresa

privada y la inacción de la administración pública.

La provincia del Choapa configura una frontera interior, es decir es un territorio aislado y en desventaja en el acceso a un conjunto de servicios públicos y con fuertes carencias de conectividad, asociado a las características geográficas propias del territorio. Esta desconexión y aislamiento, solo ha sido superada por el desarrollo de actividades económicas altamente productivas, como la agricultura y la minería, cuyos réditos en su mayoría se van al nivel central regional y nacional, y cuyas externalidades negativas y cargas ambientales son soportadas en su integridad por los/as habitantes del Choapa.

Choapa posee cielos ideales para la observación astronómica, una rica variedad natural, geológica y antropológica única en Chile, proyectando un turismo de intereses especiales. Además, cuenta con importantes atractivos turísticos, como la Reserva Nacional Las Chinchillas, La Raja de Manquehua, Petroglifos, Puerto Oscuro, Ermita de San Alberto Hurtado, Laguna Conchalí, Cueva de la Quintrala, rica variedad de montañas cordilleranas para el desarrollo del deporte aventura, etc.

La provincia del Choapa frena el avance del desierto con formación de matorral y de bosque esclerófilo, permitiendo la vida de una amplia biodiversidad. Son manifestaciones de ello la costa Sitio Quereo, Bosque de Olivillos en el cerro Santa Inés, etc.

A lo largo de la Provincia, existe unidad productiva, cultural y paisajística claramente identificables y distintivas respecto de Limarí y Elqui, lo que proyecta una identidad territorial que al conocer su espacio, puede organizarlo en base a las necesidades que se percibe en el habitar cotidiano.

Existe un marcado desequilibrio en la distribución de recursos regionales que se generan en porcentaje importante en Choapa lo que se manifiesta en la falta de obras públicas y servicios de importancia.

Históricamente los habitantes del Choapa se han sentido excluidos de la representación política a nivel regional y nacional; sus habitantes desconocen en absoluto cómo se diseñan y quién decide las políticas públicas que incidirán en el territorio. Contar con una región autónoma en la cual se decida de forma efectiva quiénes les representarán, fortalece los lazos políticos y sociales entre la comunidad y sus representantes.



Asimismo, los principios de descentralización, desconcentración, territorialidad y justicia ambiental, entre otros, serán irrealizables si las comunas de Choapa mantienen como capital regional una ciudad que queda a más de 5 horas de viaje en bus.”

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Bacian** preguntó cuánta es la población que abarcaría y dimensión de espacio geográfico que supone.

La convencional **Sra. Reyes** consultó qué opina sobre la autonomía territorial en relación a la propuesta.

El convencional **Sr. Álvarez** consultó sobre el mecanismo de modificación constitucional, se sería una ley o un procedimiento administrativo.

La convencional **Sra. Ampuero** consultó formas de implementación de la región, en caso de que el plebiscito sea favorable.

La autora de la iniciativa dio respuesta a las preguntas formuladas. Destacó las características geográficas del territorio que permitirían justificar una propuesta como esta y una eventual constitución de la región de Choapa. En ello tiene peso las altas tasas de aislamiento que se han advertido. Agradeció la voluntad de los convencionales de Chiloé en cuanto a comprender estas demandas manifestadas.

A continuación, tuvo lugar la fase de deliberación de la iniciativa.

El convencional **Sr. Gómez** manifestó que la distribución del poder a los territorios implica buscar los mecanismos necesarios para que puedan tener la autonomía en la toma de decisiones. En este sentido, destacó que las unidades territoriales en la historia nacional no han sido pétreas, sino que más bien dinámicas. En ese sentido, se mostró a favor de esta iniciativa.

La convencional **Sra. Ampuero**, manifestó que es competencia de esta Comisión la división político-administrativa, más no les compete la creación de regiones en específico, sino mandar al legislador para ello. En este sentido, se manifestó a favor de la propuesta.



El convencional **Sr. Uribe**, manifestó dudas respecto del proceso de creación de regiones pasen por un filtro de plebiscitos únicamente. En este sentido, buscar mecanismos específicos de los procesos de regionalización. La convencional **Sra. Aguilera** fue de la misma opinión, y sobre a ello agregó la necesaria transitoriedad sobre estos procesos.

**Votación:** Iniciativa Convencional Constituyente N° 779-3 que establece un Plebiscito para la creación de la Región de Choapa.

Se hizo presente por la Coordinación de esta Comisión, que esta iniciativa fue excluida de la votación en general por contener únicamente un artículo transitorio, debiendo ser votada con posterioridad.

#### **1.4.- Audiencias del inciso tercero del artículo 42 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente.**

La Comisión, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 42 del citado Reglamento, dispuso de una sesión para recibir en audiencia pública a las siguientes personas:

##### **- Señor Gonzalo Vergara, abogado y profesor de Derecho Tributario.**

El Profesor Vergara, indicó que en materia de cargas tributarias y organización fiscal, es necesario distinguir primero que existen una serie de principios teóricos que tratan de dar cuenta de la necesidad que la ley tenga una serie de características que la hagan útiles para la sociedad.

Así, no todas ellas es necesario que queden consagradas en normas constitucionales, porque estos principios colisionan entre ellos, debiendo ponderarse. Lo anterior, debido a que la economía es cambiante, es la ley la norma que tiene la flexibilidad necesaria para atender a su modificación de manera regular.

Estos temas generalmente parten con la idea de suficiencia del presupuesto, de tal manera que si la ley establece una política pública o un gasto determinado, aquella tenga el financiamiento correspondiente. Otra característica es la de la elasticidad, lo que permite que el sistema tributario pueda aumentar o reducir su tributación, dependiendo de la actividad del Estado sin que sea necesario una reestructuración completa del sistema. Esto impacta en la necesidad de estabilidad del sistema tributario, pues cualquier cambio afecta de manera relevante a los contribuyentes, y en general a la economía.

Por otro lado, se refirió al principio de no afectación de los tributos, y las



consecuencias institucionales y jurídicas que su materialización conlleva. Asimismo, se refirió a la relevancia del principio de legalidad en materia tributaria, señalando que todos los elementos del hecho gravado deben estar en la ley y cada uno de ellos tengan un parámetro objetivo que permite que distintas personas puedan llegar a un mismo resultado. Solo así, es posible controlar a quienes les ha sido encargada la administración del tributo, y si están cumpliendo con su deber (hoy el Servicio de Impuestos Internos, Servicios de Aduanas, Servicios de Tesorerías y las Municipalidades). Terminó su exposición refiriéndose a dicho punto, en relación a la orgánica y facultades de estas entidades que permiten que, al cambiar el jefe de servicio o el alcalde respectivo, no debe proceder a un cambio completo del sistema.

A continuación, se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Jürgensen** consultó cómo se pueden evitar la evasión y la elusión, pues a su juicio mientras más exenciones se aplican, más alta sería la tendencia sobre estos ilícitos. Por ello, consultó, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene en Chile el impuesto a los combustibles. Finalmente, consultó su opinión sobre la creación de tribunales especiales tributarios y aduaneros que hoy existen, pero que sin embargo, en la Convención Constitucional no se existirían acuerdos de mantenerlos.

La convencional **Sra. Mella** consultó qué otras constituciones en el mundo tienen actualmente solo principios en materia tributaria, como serían los casos de Colombia, Alemania, Sudáfrica, Canadá y Australia, países que tienen regulaciones que han permitido cambios en normas constitucionales. En este sentido, la constitucionalización de estos principios no sería un obstáculo para la flexibilidad y la estabilidad del sistema tributario.

La convencional **Sra. Álvez**, indicó que ya que el expositor habló de principios, consultó su parecer respecto de la solidaridad y la progresividad tributaria, pues son principios que no existen en la actualidad pero sí en el derecho comparado. Por otro lado, consultó si le parece ampliar el régimen de excepciones al principio de no afectación en materia territorial, como en materia de afectaciones ambientales o en derechos sociales, más allá de la seguridad nacional.

La convencional **Sra. Navarrete** consultó cuáles serían los efectos del cambio de sistema tributario en la capacidad contribuyente de los ciudadanos, en términos de equidad.

La convencional **Sra. Pustilnick**, consultó sobre el órgano recaudador, si deberíamos mantenerlo, si debería ser otro o si en el marco del Estado regional, establecer subdivisiones a nivel regional.

El expositor dio respuestas a las preguntas dentro del tiempo formulado. Señaló que en temas de evasión y elusión constitucionalmente no es mucho lo que se puede

hacer porque tiene que ver con técnica legislativa y gestión. En el caso de los impuestos a los combustibles no es una afectación, sino que su fundamentación es para mejorar las carreteras, lo que normalmente luego no coincide con los hechos. Por ello estimó que lo ideal es que dichos principios queden a nivel legal, para adecuar la ley al cambio de los hechos sobre los cuales se destina la afectación de ciertos bienes. Las constituciones en términos comparados por ello suelen dejar esto a las leyes.

**- Señor Enrique Rajevic, abogado y profesor de Derecho Administrativo.**

El Profesor Enrique Rajevic, se refirió a temas de administración pública y modernización del Estado. Comenzó señalando que lamenta la falta de claridad en cuanto a diferencias entre Administración Pública y el Gobierno, manteniendo una tradición constitucional en nuestro país que ha llevado a la precariedad del empleo público y la falta de continuidad de la ejecución de políticas públicas. Pues los primeros prestan servicio público con un carácter técnico, mientras que los otros son cargos de confianza exclusiva del Presidente de la República.

Asimismo, se refirió al empleo público, la carrera funcionaria y la falta de precisión de ciertos conceptos que podrían mantener la situación de precariedad laboral de muchos funcionarios públicos hoy. De igual modo, se refirió a que no es necesario constitucionalizar el régimen a honorarios del sector público, pues para corregir ello sería bueno hablar con una buena definición de “servicio civil”, distinguiéndose del gobierno donde son funcionarios de exclusiva confianza.

Por otro lado, le llama la atención que no se hayan definido la orgánica y funciones del Estado central, sobre todo en relación a los principios supletorios de funciones. En este sentido, el carácter único e indivisible del Estado de Chile quedaría al debe toda vez que no habría una definición clara al respecto.

Destacó la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo mantenerse en dichos términos pues hoy la regulación de dicha responsabilidad ha sido muy escueta y eso ha planteado diversos problemas en la atribución de responsabilidades en sede judicial.

Sobre modernización del Estado, precisó que es necesario definir si es “del Estado” o de la “Administración del Estado”. Por otro lado, recomendó que la función de modernización quede alojada a un ente administrativo que tuviera que cumplir con dicho mandato, como una Subsecretaría o un Ministerio.

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

El convencional **Sr. Castillo**, solicitó precisar mayores diferencias entre gobierno y administración en materia de empleo público.

El convencional **Sr. Uribe**, solicitó ahondar más en temas de ordenamiento territorial, y consultó si es necesario hacer un cambio a nivel escala del mismo. Sobre



diferencias entre gobierno y administración, consultó si conoce normas relacionadas a probidad que impidan contratar a familiares, y cuáles serían los grados de parentesco que serían aceptados.

La coordinadora **Sra. Mella** consultó sobre la definición de tareas del Estado central, y cómo implementarla, debido al choque de competencias con materias que son de conocimiento de la Comisión de Sistema Político.

La convencional **Sra. Álvez** consultó a propósito de la diferencia entre administración y gobierno y la idea de lealtad a un proyecto político determinado, si existe alguna idea en el derecho comparado que permita hacer frente a dichas inquietudes.

La convencional **Sra. Pustilnick**, consultó en qué nivel de detalle incluiría aspectos de empleo público como el régimen de honorarios. Asimismo, consultó mayores detalles sobre el derecho de sindicalización de funcionarios públicos, si es que es buena o mala idea.

El expositor dio respuestas a las preguntas dentro del tiempo formulado. En relación a la distinción entre cargos de gobierno y administración pública, manifestó que la necesidad radica en definir conforme al sistema de Alta Dirección Pública, si cargos que son aparentemente técnicos, en realidad son cargos de confianza. Ello, pues las estadísticas muestran que los cargos directivos de servicios públicos durante en promedio 2 años, lo que dificulta diseñar cambios importantes en la administración. En este sentido, es necesario sincerar dichas apreciaciones.

En relación a la diferenciación entre ordenamiento territorial y urbanismo, indicó que ambas pueden ser complementarias pues sus escalas son distintas. Manifestó que no es necesario que todo sea vinculante, sino también contener orientaciones, sobre todo en grandes escalas. También depende de los motivos y fundamentos que hayan detrás, pero ello podría diseñarlo el legislador.

En cuanto a la probidad, precisó que es una exigencia común tanto para cargos de exclusiva confianza como para la administración pública. Las exigencias de hoy le parecen razonables, que apuntan al tercer grado de consanguinidad y al segundo grado de afinidad, pero que no sería necesario establecerlas en la Constitución, toda vez que debe profundizarse el concepto de probidad y que ésta se extienda sobre todo aquel que ejerza una función pública. Sobre la lealtad institucional, se trata de un mandato de la administración pública, debiendo ser eficiente independiente de quién gobierne.

**- Señor Oscar Landerretche, economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.**

El Profesor Landerretche comenzó su exposición señalando algunos comentarios relevantes: en primer lugar, tener en consideración el principio de parsimonia constitucional, esto es, fijar reglas y tratar de evitar de rigidizar las soluciones de la



política; el principio de ordenamiento conceptual, tal es centrarse en principios y marcos institucionales que inducen una dirección estratégica, pues no sabes cuáles son las mejores formas de implementar ese nuevo contrato social; el principio de flexibilidad y resiliencia institucional, esto es, dar espacio de adaptación a la política en forma de implementar principios y velocidades de procesos, pues la realidad cambia mucho; y finalmente, el principio de adaptabilidad evolutiva, que implica dar espacio al aprendizaje evolutivo institucional, pues tenemos mucho que descubrir y aprender, lo que parece obvio hoy puede no serlo a futuro.

Por otro lado, identificó algunas tensiones en el texto aprobado en general respecto de las normas del bloque N° 3, como lo es entre universalidad de derechos y autonomía local, autonomía financiera y gobernabilidad fiscal, innovación local y control fiscal o público, así como entre regionalización y municipalización.

Se refirió en general a temas de modernización del Estado, indicando que es una excelente señal que esto esté siendo considerando y deliberado en la Convención Constitucional, sin embargo, comentó que existe algo de exceso de texto, repetición y redundancia que puede ser fácilmente editada. Destacó que existen muy buenas ideas, y es una dirección interesante pero que podrían ser más asertivas y generar mayores definiciones institucionales.

Finalmente, terminó realizando algunas sugerencias: clarificar el derecho a la negociación colectiva, transparente, legítima y reglamentada para todos los trabajadores públicos bajo reglas coherentes con su marco normativo y régimen laboral; considerar una definición más descentralizada y profesional del órgano de contratación pública (art. 70); explícitamente incluir gobiernos regionales y municipales en este tipo de mecanismo; y explícitamente restringir cargos de confianza a procedimiento fundado con sistema de revisión colegiada (que no sean automáticos sino solicitados).

Se abrió ronda de preguntas a las señoras y señores convencionales.

La convencional **Sra. Pustilnick** solicitó precisar mayormente sobre los gobiernos copulativos y el concepto de carrera universitaria.

La convencional **Sra. Álvez**, consultó mayores detalles del principio de parsimonia constitucional al que se refirió el expositor. En este entendido, sobre todo entendiendo que la Constitución de 1980, en la idea de “la Constitución tramposa”, fue profundamente refundacional, ideas sobre las cuales no han podido reflexionar mayormente debido a la premura de los tiempos de funcionamiento. Y en este sentido, precisó qué opina sobre aquello y cómo poder abordarlo en los tiempos que corren.

El convencional **Sr. Castillo**, consultó qué opina sobre el derecho a huelga de funcionarios públicos.

La convencional **Sra. Navarrete**, consultó cómo garantizar la continuidad del servicio público en relación a una huelga.





El convencional **Sr. Álvarez**, consultó mayor ahondamiento sobre la tensión identificada sobre regionalización y municipalización, pues ha sido algo en pleno debate de esta Comisión, y por ello, cómo se podría solucionar dicha tensión. Cómo ve la responsabilidad del Estado en relación al endeudamiento.

El convencional **Sr. Gómez** valoró la idea de la carrera universitaria en relación al servicio civil, y cómo aquello podría ser concretizado institucionalmente.

El expositor dio respuestas a las preguntas dentro del tiempo formulado. Preciso que es necesario tratar con dignidad a los funcionarios públicos, según su vocación de servicio público, y valorando la experiencia a este respecto. En relación a los gobiernos copulativos, se refirió a que deben subsistir dos regímenes dentro de las empresas públicas pues, deben estar sujetas a todas las reglas aplicables en su calidad de empresa junto a aspectos públicos. Sobre carrera funcionaria y huelga, indicó que es mejor que esté reglamentada y no que esto sea fantasía y quede al arbitrio de la realidad. Muchos países tienen ciertas prohibiciones en relación a la continuidad de servicios esenciales. En cuanto a la parsimonia constitucional, se refirió efectivamente a que su preocupación es la respuesta de la Constitución de 1980 a cuestiones de políticas públicas a dicho momento, no debiéndose cometer dicho error, dejando a la política y al legislador decisiones concretas de cómo esto se ejecuta. Finalmente, en relación a las tensiones entre región y municipio, le pareció que el gobierno regional debe apuntar a decisiones de relevancia regional, en cambio, las cuestiones de servicios públicos esenciales y vecinales deben estar radicadas en el municipio.

### **1.5.- Texto sistematizado de las iniciativas aprobadas en general.**

Como consecuencia de la votación en general de las iniciativas correspondientes al tercer bloque de normas de la Comisión, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 del Reglamento General de la Convención, se elaboró un texto sistematizado de las iniciativas aprobadas en general, del siguiente tenor:

#### **“Capítulo 1.- CARGAS TRIBUTARIAS Y ORGANIZACIÓN FISCAL**

**Artículo 1.- Tributos.** Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional.

Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Una vez recaudados, los tributos ingresarán al erario público del Estado, las



Regiones Autónomas, las Autonomías territoriales indígenas y las Comunas Autónomas, según corresponda.

La ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos al bienestar social, la protección ambiental o al desarrollo económico.

**Artículo 2.- De los tributos.** Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional.

Una vez recaudados, los tributos ingresarán al erario público del Estado, las Regiones Autónomas y las Comunas Autónomas, según corresponda.

La ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos al bienestar social, la protección ambiental o al desarrollo económico.

**Artículo 3.- Impuesto sobre la República en su conjunto.** Sólo la ley dictada por el Congreso Plurinacional puede imponer cualquier impuesto aplicable sobre la República en su conjunto, determinar su progresión, proporcionalidad y destinación.

**Artículo 4.- Tasas y contribuciones Regionales.** La ley regional podrá establecer tasas o contribuciones de carácter y de afectación regional o comunal, en tanto no sean sobre los mismos hechos establecidos en tasas o contribuciones aplicables a la República en su conjunto según ley del Congreso Plurinacional.

**Artículo 5.- Descentralización fiscal.** Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes.

La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno.

El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.

**Artículo 6.- Equilibrio y responsabilidad Fiscal.** Las autoridades del gobierno

central, regional y comunal son responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando siempre los principios de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Una ley deberá definir dichos principios y regular las normas de responsabilidad fiscal aplicable, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Asimismo, una ley deberá fijar indicadores y metas de eficiencia de carácter público, asociados a resultados e impactos de la ejecución presupuestaria anual en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de las comunas y regiones.

**Artículo 7.- Suficiencia en el financiamiento de las competencias.** La creación, ampliación o traspaso de toda competencia, función o atribución desde el Estado central a los gobiernos regionales o comunales, deberá siempre ir acompañada del traspaso oportuno de los recursos financieros y humanos suficientes para su adecuado ejercicio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las leyes que asignen dicha función o tarea deberán consignar su financiamiento en el respectivo informe financiero.

**Artículo 8.- Solidaridad y equidad Territorial.** Los órganos del Estado y las leyes deben promover un desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario entre las distintas regiones y comunas del territorio de la República. Las leyes y políticas públicas deberán velar por cumplir con lo anterior, permitiendo que todos los habitantes de la República tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, independiente del lugar donde residan.

La ley dispondrá la creación de instrumentos que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, especialmente en cuanto a las transferencias fiscales que haga el Estado central a los gobiernos subnacionales, así como la creación de mecanismos de compensación económica entre las distintas unidades territoriales.

Asimismo, la ley podrá disponer de medidas que permitan compensar las externalidades negativas derivadas de la explotación de recursos naturales a las regiones y comunas afectadas.

**Artículo 9.- Coordinación y cooperación.** El Estado deberá promover la acción coordinada de los diferentes organismos e instituciones de los diversos niveles gubernamentales, fomentando la cooperación y colaboración para el logro de sus objetivos comunes, y evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones.

Los servicios públicos dependientes del gobierno central deberán coordinarse con los gobiernos regionales y municipalidades cuando ejecuten su labor en los respectivos territorios, en conformidad con la ley.

Asimismo, la ley establecerá fórmulas de asociación y cooperación para la

administración de todas o algunas de las municipalidades, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre las municipalidades y los demás servicios públicos.

**Artículo 10.- No discrecionalidad presupuestaria.** La transferencia de recursos realizada desde el Estado central a los gobiernos regionales y municipalidades, en el marco de la Ley de Presupuestos de la Nación u otro instrumento, deberá efectuarse en base a criterios objetivos, verificables y no discrecionales. Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno subnacional.

Una ley determinará dichos criterios, debiendo reconocer la diversidad territorial y considerar los componentes geográficos, demográficos, socioeconómicos y de accesibilidad a los servicios básicos de las distintas unidades territoriales.

La Ley de Presupuestos de la Nación asignará los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos regionales y municipalidades, en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno.

Asimismo, una ley podrá disponer transferencias especiales por razones de aislamiento o emergencia, las que en ningún caso podrán establecer discriminaciones arbitrarias entre las distintas regiones y territorios del país.

**Artículo 11.- Responsabilidad e iniciativa presupuestaria.** Corresponde exclusivamente al gobernador regional o, en su caso al alcalde, presentar el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional o de la Municipalidad al correspondiente Consejo Regional o Concejo, respectivamente.

Este proyecto debe presentarse dentro de un plazo máximo establecido por ley. En el caso en que el Consejo Regional o el Concejo no adopten la decisión sobre el proyecto dentro del plazo establecido por esta ley, regirá sin más el proyecto presentado por el gobernador o el alcalde.

El Consejo Regional o el Concejo no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo pueden reducir los gastos contenidos en el proyecto, salvo los establecidos en las leyes.

Se prohíbe al Consejo Regional o al Concejo aprobar nuevos gastos con cargo a los fondos del respectivo Gobierno Regional o Municipalidad sin indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos para solventar tal gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Consejo Regional o el Concejo son insuficientes para solventar cualquier nuevo gasto aprobado, el gobernador o alcalde, previo informe favorable del órgano por el cual se recaude el nuevo ingreso, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera sea su naturaleza.

**Artículo 12.- Igualdad y legalidad tributaria.** Todas las personas contribuirán al sostenimiento del gasto público en conformidad a lo establecido en la ley y de acuerdo con su capacidad contributiva. El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de equidad, progresividad, no discriminación arbitraria, justicia, irretroactividad, certeza jurídica, neutralidad, simplicidad y eficiencia.

En ningún caso los tributos, las cargas públicas, o el sistema tributario en su conjunto, tendrá alcance confiscatorio, o de carácter desproporcionado o injusto.

**Artículo 13.- Igualdad de cargas tributarias.** Las personas naturales y jurídicas contribuirán al financiamiento del Estado de acuerdo con su capacidad económica a través de un sistema tributario determinado por la ley e inspirado en los principios de equidad y progresividad y que, en ningún caso podrá incluir tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos nacionales que se recauden ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, excepto aquellos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, los que podrán ser destinados al financiamiento del desarrollo local según determine la ley. Los gobiernos subnacionales podrán aplicar o modificar impuestos locales para suplementar sus presupuestos bajo los parámetros que determine la ley. Los contribuyentes tendrán derecho a reclamar las decisiones de las autoridades tributarias.

**Artículo 14.- No discriminación del Estado y sus organismos en materia económica.** Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación y en los respectivos presupuestos de los gobiernos regionales y municipalidades cuando corresponda.

**Artículo 15.- No afectación tributaria.** Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, salvo en el caso de los tributos de destinación local que esta Constitución establece.

**Artículo 16.- Tributos de destinación local.** Una ley emanada del Congreso

Nacional deberá disponer que lo recaudado por determinados tributos que gravan actividades o bienes con una clara identificación regional o local, sea destinado, dentro del marco que la misma ley señale, a los presupuestos regionales o comunales.

**Artículo 17.- Potestad tributaria subnacional.** Los gobiernos regionales, previa autorización de una ley y dentro del ámbito de sus competencias, podrán decretar tributos especiales sobre ciertas actividades realizadas o bienes localizados en sus territorios, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.

**Artículo 18.- Regalías.** Con el fin de velar por el cuidado social y ecológico, el Congreso Plurinacional debe dictar una ley general de regalías sobre las rentas provenientes del uso de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, tales como la explotación de recursos minerales, pesqueros y forestales, el uso de la energía solar, eólica, oceánica o geotermal, del espectro radioeléctrico, o las concesiones sobre el uso de estos bienes, tales como el agua, carreteras o inmuebles fiscales.

Los recursos obtenidos por las regalías sobre la explotación del cobre y del litio ingresarán al patrimonio del Estado.

La ley de regalías sobre el cobre y el litio debe instituir un mecanismo de redistribución, entre el Estado y las Regiones Autónomas, de los recursos obtenidos por regalías sobre la explotación del cobre y del litio.

Dicha ley de regalías debe definir la distribución de estos recursos entre Regiones Autónomas, compensando a las regiones productoras, sin menoscabo de las regiones no productoras.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales deberá evaluar y sugerir cambios a la distribución de las regalías sobre el cobre y el litio establecidas en este artículo.

Los recursos obtenidos por las demás regalías entrarán al patrimonio de la Región Autónoma respectiva.

La ley dictada por las Asambleas Legislativas Regionales debe instituir un mecanismo de redistribución de los recursos obtenidos, entre la Región Autónoma y sus respectivas Comunas, Territorios Autónomos Indígenas y Territorios Especiales.

**Artículo 19.- Tasas y contribuciones Municipal.** Las Comunas Autónomas, en la forma determinada por la ley regional, pueden establecer tasas y contribuciones, en tanto no sean incompatibles con las establecidas por el Congreso Plurinacional.

**Artículo 20.- Ingreso de los recursos.** Una vez recaudados, los recursos obtenidos por impuestos, tasas y contribuciones, Centrales, Regionales, de las

autonomías territoriales indígenas y Comunales, ingresarán al patrimonio de la entidad territorial respectiva, sin perjuicio de la igualación fiscal solidaria establecida en los artículos 17 y 18.

**Artículo 21.- Fiscalización y recaudación.** La fiscalización y recaudación de los impuestos mencionados en los artículos 2 y 3, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente, estarán a cargo del SII y de la Tesorería General de la República.

La responsabilidad sobre la fiscalización y recaudación de los impuestos mencionados en el artículo 5 serán coordinadas por ley entre las Comunas Autónomas, el SII y la Tesorería General de la República.

**Artículo 22.- Devolución de IVA de artículos de primera necesidad.** La ley dictada por el Congreso Plurinacional que impone un impuesto al valor agregado sobre las ventas de bienes y prestación de servicios, puede establecer un mecanismo de devolución del impuesto por compras de bienes y servicios de primera necesidad para uso y consumo personal de individuos pertenecientes a grupos empobrecidos.

**Artículo 23.- Distribución.** Los ingresos fiscales generados por los impuestos a los que hace referencia el artículo 1 serán distribuidos entre el Estado, Regiones Autónomas, Territorios Autónomos Indígenas y Comunas Autónomas, de acuerdo a la fórmula establecida por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, la cual debe ser aprobada por el Congreso Plurinacional.

Tanto en el cálculo de la fórmula de reparto, como en la deliberación para su aprobación y ratificación, al menos uno o más de los siguientes criterios deben ser considerados:

a) conciliar el interés general de la República y los intereses de las Regiones Autónomas.

b) evaluar periódicamente la capacidad fiscal, los índices de pobreza y de desigualdad, las brechas de inversión pública, las brechas de desarrollo territorial y la población y tamaño de las Regiones Autónomas y Comunas Autónomas.

El Consejo de Gobernadores puede proponer criterios adicionales a la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales para la elaboración de las fórmulas de distribución.

**Artículo 24.- Multas y sobrepagos sobre externalidades negativas ambientales o de actividades económicas.** La ley dictada por el Congreso Plurinacional puede establecer multas y sobrepagos sobre las externalidades negativas ambientales o de actividades económicas, tales como cargas sobre la emisión de





carbono, residuos tóxicos u otras sustancias semejantes.

Esta ley debe definir criterios de compensación para las Comunas Autónomas afectadas por las externalidades o actividades sujetas a este impuesto.

**Artículo 25.- Impuesto a unidades económicas con rentas monopolísticas.**

La ley dictada por el Congreso Plurinacional puede establecer un impuesto a unidades económicas con rentas monopolísticas, cuando éstas sean superiores a las ganancias que hubieran sido obtenidas en un mercado competitivo, por razones de concentración de mercados, asimetrías de información u otras semejantes.

La ley determinará las tasas aplicables y la fracción de la renta afecta, así como la institución pública encargada de determinar la existencia de rentas monopolísticas.

**Artículo 26.- Publicación de microdatos e informes.** En virtud del principio de transparencia e igualdad democrática, una vez al año, al concluir la Operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos publicará microdatos e informes relacionados con las rentas imponibles y cargas tributarias efectivas de los contribuyentes, manteniendo su confidencialidad, en distintos segmentos de la población y a nivel estatal, regional y municipal e incluyendo personas naturales y jurídicas.

La ley determinará la información a ser publicada y la forma de llevarla a cabo.

**Artículo 27.- Sistema de multas y sanciones administrativas.** En virtud del principio de equidad y proporcionalidad, la ley propenderá a establecer un sistema de multas y sanciones administrativas proporcionales a las rentas de la persona multada o sancionada.

**Artículo 28.- Suficiencia fiscal.** Las Regiones Autónomas, autonomías territoriales indígenas y Comunas Autónomas, en el marco de la política económica de la República, deben contar con recursos suficientes para ejercer sus competencias.

La delegación de nuevas competencias deberá ser acompañada de las transferencias de recursos suficientes.

El Estado, las Regiones Autónomas y Comunas Autónomas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, y en virtud del principio de solidaridad, están obligadas a contribuir al financiamiento de las entidades territoriales de la República.

**Artículo 29.- Transferencias directas verticales en el ejercicio de las facultades supletorias del Estado.** La ley, dictada por el Congreso Plurinacional, establecerá un mecanismo de transferencias directas para el financiamiento del ejercicio de las facultades supletorias del Estado en la Región Autónoma y Comuna autónoma



que corresponda a que se refiere el artículo xxx de la Constitución.

**Artículo 30.- Transferencia financiera vertical.** El Estado establecerá los mecanismos de transferencias directas a Regiones Autónomas, Comunas Autónomas y Territorios Autónomos Indígenas, para financiar proyectos específicos destinados al bienestar regional, comunal y autonómico indígena.

Para estas transferencias de recursos a las Regiones, Comunas y territorios autonómicos indígenas de la República, el Estado deberá basar sus transferencias en planes de Inversión en Infraestructura a mediano plazo propuestos por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, los que deben estar basados en brechas de inversión pública, indicadores de pobreza y desarrollo territorial, o trato preferente a territorios especiales, poblaciones históricamente desaventajadas, zonas extremas o territorios insulares.

**Artículo 31.- Igualación horizontal regional.** Una ley dictada por el Congreso plurinacional establecerá un mecanismo de igualación solidaria regional con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Regiones de la República.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales determinará una fórmula para que las Regiones que obtengan ingresos que superen el promedio de ingresos fiscales por habitante de las Regiones de la República, transfieran a las Regiones que obtengan recursos bajo el promedio.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales contemplará los rangos de contribución.

Ninguna región contribuirá más del 50% de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio de ingresos fiscales por habitante de todas las Regiones de la República.

Los recursos destinados a Regiones por transferencias verticales y obtenidos por regalías y tributos serán contabilizados como ingresos en el cálculo de igualación fiscal horizontal.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales deberá contemplar, en la determinación de la fórmula de redistribución, criterios de capacidad fiscal, indicadores de pobreza, brechas de inversión pública y tamaño del territorio.

**Artículo 32.- Igualación horizontal comunal.** Una ley dictada por el Congreso plurinacional establecerá un mecanismo de igualación solidaria comunal con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Comunas Autónomas de la República.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales determinará una



fórmula para que las Comunas Autónomas que obtengan ingresos que superen el promedio de ingresos fiscales por habitante de las Comunas de la República, transfieran a las Comunas que obtengan recursos bajo el promedio.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales contemplará los rangos de contribución.

Ninguna Comuna contribuirá más del 50% de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio de ingresos fiscales por habitante de todas las Comunas de la República.

Los recursos destinados a Comunas por transferencias verticales y obtenidos por tasas, contribuciones y regalías serán contabilizados como ingresos en el cálculo de igualación fiscal horizontal.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, en la determinación de la fórmula de redistribución deberá contemplar criterios de capacidad fiscal, indicadores de pobreza, brechas de inversión pública y tamaño del territorio.

**Artículo 33.- Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales.** La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales es un organismo autónomo y de carácter técnico, cuya misión es proponer las fórmulas de redistribución territorial de los ingresos fiscales al Congreso Plurinacional u otras instituciones de acuerdo a la Constitución y la ley.

La ley determinará la composición y elección de los miembros de la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, así como sus competencias, las que, sin perjuicio de las facultades del Concejo de Gobernadores, incluyen al menos:

- a) Recopilar y sistematizar la información necesaria para definir la redistribución de los ingresos fiscales;
- b) Proponer una fórmula para la redistribución de los ingresos fiscales de los impuestos del artículo 1 y de las regalías;
- c) Proponer una fórmula para las transferencias de igualación fiscal horizontal establecidas en los artículos 17 y 18, habiendo considerado las transferencias de igualación fiscal vertical; y
- d) Proponer los montos para contribuir periódicamente al Fondo Fiduciario de Territorios Especiales.

**Artículo 34.- Presupuesto.** La ley de presupuesto del Estado, aprobada de acuerdo al artículo x de la Constitución, deberá estimar las transferencias de recursos a las entidades territoriales de la República.

El Estado propenderá a la reducción progresiva del gasto militar.

En la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos, las Regiones,



Comunas y autonomías territoriales indígenas de la República deberán cumplir con el equilibrio presupuestario. No podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

La aprobación de los presupuestos de las Regiones, Comunas y autonomías territoriales indígenas de la República debe ser ratificada por las Asambleas Legislativas Regionales, Concejos Comunales y el órgano que señale el Estatuto de la autonomía territorial indígena, respectivamente.

**Artículo 35.- Suscripción de deuda pública.** Las Regiones, Comunas y autonomías territoriales indígenas, de acuerdo a la ley podrán suscribir deuda. El nivel de deuda de cada unidad territorial debe ser consistente con una regla de sostenibilidad de finanzas públicas establecida por el Congreso Plurinacional.

**Artículo 36.- Fondo fiduciario para Territorios Especiales.** La ley creará un Fondo Fiduciario para Territorios Especiales.

La ley regulará la administración del Fondo Fiduciario para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados.

El Fondo Fiduciario obtendrá recursos de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 letra d.

**Artículo 37.- De la autonomía financiera de las entidades territoriales** Las entidades territoriales definidas en el artículo 1° gozarán de autonomía financiera para sus ingresos y gastos, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario y endeudamiento, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.

**Artículo 38.- De los ingresos de las entidades territoriales** Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos:

1. Los recursos que para su funcionamiento o inversión les sean asignados en la Ley de Presupuestos del Estado;
2. Los ingresos que recauden de las contribuciones y tasas que establezcan en el ejercicio de la potestad tributaria que se les reconoce, de conformidad con los límites establecidos en la Constitución y las leyes;
3. Los recursos que provengan de los tributos que les sean destinados o en que coparticipen en la recaudación por ley;
4. Los recursos que les correspondan en la distribución de los fondos de compensación que se establecen en este capítulo y los demás que se consagren en la

Constitución y las leyes;

5. Los recursos que obtengan vía endeudamiento en los casos y con los límites que se disponen en este capítulo y en las leyes dictadas en conformidad a esta Constitución;

6. Los ingresos que obtengan por la administración y explotación de su patrimonio;

7. Las donaciones, herencias y legados que reciban; y

8. Otros que la ley determine.

**Artículo 39.- Distribución de las potestades tributarias.** Solo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.

La ley podrá crear tributos de afectación a favor de las entidades territoriales, como asimismo establecer impuestos locales, regionales, insulares o especiales en conformidad con la Constitución.

Las entidades territoriales podrán crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio, orientado por el principio de equivalencia y en el marco que determine la ley.

El ejercicio de estas potestades tributarias se hará conforme al deber de contribuir, los principios constitucionales tributarios y los derechos fundamentales, asegurando siempre la debida coordinación entre los titulares de estas.

**Artículo 40.- Principios de autonomía y suficiencia.** La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes y bajo su responsabilidad.

Las entidades territoriales tendrán patrimonio propio y derecho a los recursos suficientes para cumplir las competencias que se les atribuyan, de los cuales podrán disponer autónomamente, salvo cuando se trate de transferencias condicionadas. Las transferencias de competencias deberán ir acompañadas de los recursos suficientes para su cumplimiento. Los costos fijos y variables de las competencias transferidas se cuantificarán por el organismo técnico que establezca la ley, el cual deberá tener integración y participación equitativa de las entidades territoriales.

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.

Sin perjuicio de los fondos de compensación señalados en el artículo 7, la ley

regulará un fondo de desarrollo comunal y otro de desarrollo regional que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de los entes territoriales y del Estado Central. A cada uno de estos fondos se le asignará a lo menos un 5% de recaudación tributaria del país, exceptuando los ingresos tributarios propios de las entidades territoriales.

**Artículo 41.- Principio de coordinación.** La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas y con las demás haciendas públicas y autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicación e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general.

Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales.

Las inversiones estatales en los territorios de las entidades territoriales requerirán la aprobación de sus autoridades respectivas, la que se dará en la forma que determine la ley, sin perjuicio de las excepciones que la Constitución y las leyes establecen.

**Artículo 42.- Equilibrio presupuestario y endeudamiento.** Las entidades territoriales en la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos no podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

Las entidades territoriales excepcionalmente podrán recurrir al endeudamiento en la forma establecida por la ley marco correspondiente. En este caso, el endeudamiento no podrá superar el 2% de los ingresos ordinarios de la entidad territorial aprobados en su presupuesto anual del año anterior. Extraordinariamente, autorizadas por una ley, las entidades territoriales podrán endeudarse por sobre el valor antes señalado, pero en ningún caso el endeudamiento podrá superar el 5% de los ingresos ordinarios contenidos en su presupuesto anual del año anterior. En ninguno de estos casos, el endeudamiento contará con la garantía del Estado. Las entidades territoriales deberán definir el correspondiente plan de amortización, el que deberá ser informado a los órganos de control correspondientes.

Los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento obligatoriamente deberán destinarse a activos no financieros tales como inversiones en infraestructura o inmuebles y gastos de emergencia por causa de una calamidad o catástrofe dentro de sus respectivos territorios.

**Artículo 43.- Solidaridad y compensación interterritorial.** El principio de solidaridad interterritorial tiene por fin corregir los desequilibrios económicos y

ambientales entre las entidades territoriales. Para tales efectos, se podrán establecer mecanismos razonables y justos tales como transferencias directas, subvenciones, beneficios fiscales y fondos de compensación territorial.

La ley deberá establecer fondos solidarios de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal, que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de las entidades territoriales y del Estado Central. La ley establecerá los criterios para determinar qué se entiende por menor capacidad fiscal.

Las entidades territoriales en cuyo territorio se desarrollen actividades ligadas a sus características y condiciones naturales o geográficas, tendrán derecho a participar de los ingresos que se perciban por el Estado en relación con dichas actividades, en conformidad al principio de solidaridad interterritorial y en la forma que determine la ley”.

**Artículo 44.- Sostenibilidad.** Es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

El cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas será una de las consideraciones primordiales al establecer, modificar, mantener o derogar tributos, beneficios tributarios o subsidios.

**Artículo 45.- Responsabilidad.** Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven de conformidad con la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva.

**Artículo 46.- Eficiencia económica.** El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.

**Artículo 47.- Garantías procesales de la autonomía financiera.** Para hacer efectiva la autonomía financiera en los términos consagrados en la Constitución, las entidades territoriales podrán recurrir a la jurisdicción constitucional, contenciosa administrativa u ordinaria competente, según corresponda”.

**Artículo 48.- Controles financieros.** Existirá un órgano de carácter técnico, desconcentrado territorialmente, con autonomía administrativa y presupuestaria, el cual controlará la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Su actuar deberá fundarse en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales y sociales.

Especialmente, fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley.

Asimismo, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano, democrático y participativo desde los territorios. El Estado promoverá la educación cívica de la ciudadanía en el control y la gestión de recursos públicos.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes.

Con todo, serán públicos los informes de auditorías y los estados financieros de las entidades fiscalizadas.

**Artículo 49.-** En las unidades territoriales en que se organiza administrativamente el país, tendrán derecho a participación significativa de los réditos que generan las actividades económicas que se realizan en tales territorios.

Para lo anterior, se les reconoce la debida autonomía que las faculte para la toma de decisiones que les permitan su mejor desarrollo. Ejercerán dicha prerrogativa, sin perjuicio de reconocer su obligación solidaria con el resto de las unidades territoriales. Asimismo, deberán actuar en coordinación y sin desconocer la vinculación con el Estado a través del respectivo Ministerio o Secretaría de Estado.

El legislador deberá dictar una ley que regule, desde un punto de vista orgánico y funcional el proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, estableciendo de esta manera un eficiente sistema de captación y distribución de tributos y rentas regionales que viabilicen esas competencias.

El Estado propiciará un sistema de planificación y administración territorial que favorezca la integración y complementariedad regional, con especial atención a las áreas o unidades territoriales que esta Constitución consagra.

**Artículo 50.-** El Estado se obliga a distribuir los recursos de manera equitativa y proporcional, sin desconocer el aporte que cada región efectúa al erario nacional, encomendando al legislador la determinación de los recursos que finalmente perciba la región y conjuntamente el mecanismo necesario para ello, a objeto de poder lograr su mejor desarrollo, atendida la autonomía que detentan.



## **Capítulo 2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ENTIDADES REGIONALES Y LOCALES**

**Artículo 51.-** A nivel regional y comunal se deberá generar, promover y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas, planes y programas, en los casos que esta constitución, la ley, y los estatutos regionales o comunales señalen.

Se proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación que será consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva.

La convocatoria, el financiamiento y el desarrollo del proceso participativo serán materia de ley.

Será deber de las entidades regionales y comunales considerar los principios de inclusividad, universalidad, transparencia, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, reciprocidad, igualdad, gratuidad, pluralidad, respeto a la diversidad y no discriminación, adecuación tecnológica, autonomía e institucionalización para el fomento y desarrollo de la participación ciudadana.

**Artículo 52.- De los mecanismos de participación en las entidades territoriales.** Las entidades regionales y comunales contarán a lo menos con los siguientes mecanismos de participación en su alcance respectivo:

- a) Plebiscitos;
- b) Consulta ciudadana;
- c) Contraloría popular;
- d) Presupuesto participativo;
- e) Audiencia pública;
- f) Cabildo abierto; y

g) Mecanismos de participación y consulta, destinados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y naciones pre existentes al Estado cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza susceptibles de afectar sus derechos.

De igual manera, los estatutos comunales podrán establecer otros mecanismos de participación ciudadana, tales como las mesas barriales, consultas vecinales y los demás que señale esta constitución y la ley.

**Artículo 53.- Referendos regionales o comunales.** Se podrán someter a referendo las materias de competencia de los gobiernos regionales y las municipalidades en conformidad a lo dispuesto en una ley, la que regulará al menos los requisitos mínimos



para solicitarlos o convocarlos válidamente por la ciudadanía o por las autoridades facultadas por la misma, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación y escrutinio y los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes.

**Artículo 54.- Jurado consultivo.** Antes de que un Consejo Regional o Concejo decida sobre una materia de su competencia, dicha materia podrá o deberá ser previamente discutida por un Jurado Consultivo integrado por ciudadanas y ciudadanos inscritas en la región o comuna, los que serán seleccionados al azar. Las resoluciones del Jurado no serán vinculantes para el Consejo Regional o Concejo.

Podrán convocar a un Jurado Consultivo el respectivo gobernador, alcalde, un cuarto de las consejeros o concejales en ejercicio o un porcentaje de los votantes inscritos de la respectiva región o comuna el cuál será definido por una ley, la que también regulará los mecanismos para la selección aleatoria de sus integrantes, los casos en que la conformación de este Jurado consultivo será obligatoria y el quórum necesario para su constitución y funcionamiento válido.

### **Capítulo 3.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

**Artículo 55.-** La Administración Pública se reconoce como una función esencial del Estado de Chile orientado a satisfacer las necesidades fundamentales de la ciudadanía y se rige mediante los principios elementales de un estado moderno. El ingreso a la función pública se regirá mediante un procedimiento de carrera funcionaria. Serán trabajadoras y trabajadores públicos todas las personas que cumplan funciones en el aparato público.

**Artículo 56.-** Existirá un Estatuto de la función pública que regulará las condiciones funcionarias de los trabajadores públicos y el reconocimiento a sus organizaciones sindicales, depositarias de titularidad sindical para actuar en los procesos de negociación laboral y salarial de los trabajadores/as del Estado.

**Artículo 57.-** Será deber del Estado velar por que todas las personas que habitan su territorio cuenten con acceso a servicios públicos que permitan su buen vivir, teniendo como fin la eliminación de diferencias en condiciones de vida barrial y territorial que responden a la condición socioeconómica de sus habitantes. Acceso a comercio, transporte público, establecimientos educacionales, y seguridad ciudadana, deberán responder a criterios objetivos tales como la cantidad de personas que habitan un determinado territorio, poniendo especial énfasis en las prestaciones que han sido privadas en cada uno de ellos.

Del mismo modo, la equidad territorial se expresará en el presupuesto por habitante del que dispongan las unidades administrativas en que se divide el territorio, siendo deber del Estado que ninguna persona cuente con distinto financiamiento a cualquier nivel, sin perjuicio de la capacidad de recaudación de cada una de éstas, en atención al territorio en que habiten las personas. La ley determinará los mecanismos por los cuales se materializará la equidad territorial, debiendo establecer, a lo menos, que el presupuesto por persona debe ser equitativo en todo el territorio nacional, admitiendo diferencias sólo en cuanto estas respondan a favorecer aquellos territorios que requieren de mayor financiamiento público, en atención a sus condiciones de precariedad en cuanto a servicios públicos como los señalados en el inciso anterior.

**Artículo 58.- Principios orientadores de la función pública.** La función pública se ejercerá de manera responsable en todas sus actuaciones, procurando un actuar objetivo y fundado para concretar los fines del Estado. Toda entidad pública deberá estar sujeta a control. Para esto, cada una de ellas deberá contar con un control interno y un control externo de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Todas las personas que ejercen una función pública deben cumplir su labor asegurando un trato digno, respetuoso y oportuno, sin discriminar en ninguna circunstancia y asegurando que las decisiones sean debidamente justificadas. De esta manera, la función pública deberá brindarse con pertinencia cultural y lingüística de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando los servicios y prestaciones que se entreguen, de acuerdo con las características y particularidades que presenten las personas beneficiarias de los servicios públicos.

El ejercicio de las funciones públicas se orientará a garantizar los principios de inclusión, probidad, transparencia, eficiencia, eficacia, jerarquía, descentralización, plurinacionalidad, interculturalidad e igualdad de género y no discriminación.

El Estado promoverá en el acceso a los cargos públicos medidas de acción afirmativa tales como la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, la participación de personas de grupos discriminados en razón del género, personas pertenecientes a los pueblos y naciones preexistentes, personas en situación de discapacidad y aquellas que establezcan la Constitución y las leyes.

**Artículo 59.- La Administración Pública.** La Administración Pública está al servicio de los pueblos y naciones de Chile, siendo su finalidad la promoción del bien común y el buen vivir de las personas que habitan el territorio del Estado.

La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de legalidad, juridicidad, transparencia, responsabilidad fiscal, enfoque de

género, plurinacionalidad, coordinación y cooperación, control, eficiencia, eficacia, buen trato, rendición de cuentas, participación popular y primacía del interés general.

La Administración Pública central y territorial deberá ejecutar políticas públicas, planes, programas y proveerá la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente de alcance nacional, regional y comunal para hacer posible el desarrollo integral y solidario de los mencionados niveles territoriales.

Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración Pública, sus órganos o sus funcionarios, en el desempeño de sus funciones, podrá recurrir ante el respectivo órgano de control jerárquico administrativo interno y externo o, en su caso, ante los tribunales de justicia, según lo contemple la Constitución y la ley.

**Artículo 60.- Estatuto de la función pública administrativa.** La Administración Pública se formará con órganos administrativos, de gestión centralizada o descentralizada y con órganos autónomos. Los órganos de la Administración son creados por la ley, sin perjuicio de las potestades de organización interna de cada servicio.

Estos órganos sirven al interés general para hacer efectivos los servicios públicos, en el marco de un Estado social, plurinacional y democrático de derecho.

El acceso a los cargos públicos y a la carrera administrativa se realizará mediante un sistema de ingreso público, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo. De forma excepcional, podrán contratarse a personas bajo régimen de honorarios, siempre que el cargo no requiera subordinación y dependencia o para servicios ocasionales, específicos, puntuales y no habituales.

Los funcionarios de carrera administrativa serán estables en el cargo que ostenten y solo podrán ser desvinculados en la forma que establezca la ley. La misma norma permitirá y fomentará la movilidad de estos funcionarios dentro de toda la Administración del Estado.

Sin perjuicio de los estatutos administrativos generales y especiales, la ley establecerá las normas que el personal de las Administraciones Públicas debe cumplir para asegurar los principios y fines antes enunciados.

**Artículo 61.- Formación y perfeccionamiento permanente.** El Estado deberá fortalecer la profesionalización y modernizar aquellos servicios que más lo requieran, estableciendo mecanismos de movilidad y capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio.

Corresponderá a la ley establecer un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos.

**Artículo 62.- Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.**

El Estado será responsable por los daños que causen por falta de servicio o por otro título de imputación determinado en la Constitución y ley. El Estado podrá siempre repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en dolo o falta personal. La ley regulará el régimen jurídico de responsabilidad de la Administración Pública.

**Artículo 63.- Sobre la modernización del Estado.** Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y estructuras, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, tecnológicas y culturales de cada localidad. La modernización del Estado se basa en la innovación, la relación con las personas, los ecosistemas y el mejor uso de los recursos que dispone el Estado para el cumplimiento de estos fines.

Existirán Consejos asesores de los órganos ejecutivos nacional y regionales, encargados de elaborar el diagnóstico del funcionamiento de los servicios públicos, proponer y monitorear planes de modernización en las instituciones públicas, y las demás atribuciones que establezca la Constitución y las leyes. Estos Consejos velarán prioritariamente por la modernización de los servicios públicos brindados en las localidades de menores recursos.

**Artículo 64.-** El Estado tiene la obligación de proveer servicios públicos universales y de calidad de manera directa para garantizar los derechos humanos de todas las personas y comunidades que habitan el territorio plurinacional, reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales y de género, y fomentar el desarrollo de todas las potencialidades de las personas.

Los servicios públicos universales y de calidad son la base de una sociedad justa y sostenible y no son una mercancía. Éstos abarcan un abanico de dimensiones vitales necesarias para vivir una vida digna y un desarrollo humano sostenible, y entre ellos figuran los servicios de salud y de cuidados, la seguridad social, la educación, el agua y el saneamiento, la vivienda, la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de residuos, sin que esta enumeración sea taxativa.

**Artículo 65.-** Todo servicio público universal y de calidad deberá:

1. Ser universal y accesible para todas las personas tanto territorial como económicamente, sin discriminación;
2. Diseñarse a partir de las necesidades de largo plazo de las personas y comunidades a las que sirve, adaptándose a sus cambios y mejorando continuamente las condiciones de su prestación;

3. Contribuir a afrontar la crisis ecológica, incorporando los principios de sostenibilidad ambiental y justicia intergeneracional en sus decisiones;
4. Contar con estándares éticos, de excelencia institucional y de igualdad en su gobernanza, financiamiento y gestión, combatiendo activamente la corrupción y la discriminación en todas sus formas, incluida la de géneros;
5. Gestionarse democráticamente, garantizando la participación de las comunidades, usuarios y trabajadores en el diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo del servicio, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria de manera transparente;
6. Incorporar mecanismos de rendición de cuentas, de monitoreo por parte de las personas usuarias del servicio y de respuesta efectiva a sus requerimientos;
7. Garantizar un trabajo decente para sus funcionarios y funcionarias, incluyendo condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, carrera funcionaria moderna y efectiva, y el respeto y promoción de los derechos laborales y sindicales, especialmente los derechos a sindicalización, huelga y negociación colectiva;
8. Incorporar garantías de protección de los servicios públicos contra la comercialización, financiarización y la búsqueda de fines de lucro;
9. Evitar el retroceso de las condiciones ofrecidas por el servicio frente a cambios en la disponibilidad presupuestaria; y
10. Contar con un financiamiento necesario y sostenible a largo plazo, en base a una política fiscal al servicio de los derechos humanos.

**Artículo 66.-** Todas las personas tienen el deber de contribuir al sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y los servicios públicos sobre la base de su capacidad contributiva.

La política fiscal debe ser socialmente justa y se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las demás instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, la política fiscal deberá asegurar una recaudación suficiente para asegurar estos fines.

La política fiscal debe promover la igualdad sustantiva de todas las personas a través de un sistema financiero y tributario basado en los principios de justicia, equidad, solidaridad y progresividad, con capacidad para redistribuir el ingreso y la riqueza.

El Estado deberá financiar las medidas de acción positiva que se dispongan para la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género, y para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todas las personas.

La política fiscal debe promover un desarrollo ambientalmente sostenible y la responsabilidad intergeneracional con el propósito de transitar hacia una economía regenerativa y justa.

La política fiscal debe diseñarse e implementarse de forma transparente, participativa y con instrumentos de rendición de cuentas. Todas las personas tienen derecho a recibir información acerca de la política fiscal de forma veraz y oportuna, la que deberá estar disponible de forma pública. Se establecerán mecanismos de participación de la sociedad civil durante todas las fases de diseño, elaboración y ejecución de la política fiscal.

El Estado promoverá un sistema financiero internacional socialmente justo, basado en los anteriores principios, así como en los de cooperación, solidaridad y reciprocidad.

La administración tributaria, en el desarrollo de sus labores de fiscalización y control de la evasión y elusión, contará con facultades para requerir información de organismos públicos y privados, sin previa autorización judicial, así como rangos de autonomía respecto a las autoridades de gobierno.

**Artículo 67.-** El Estado reconoce el carácter público de los servicios, ya sean directamente brindados por el Estado o bajo su control y regulación, y los garantiza para todos sus habitantes con el fin de satisfacer las necesidades básicas humanas, debiendo cumplir con eficiencia y eficacia en su funcionamiento.

El Estado planificará y promoverá la instalación y prestación de servicios bajo criterios de equidad, asociatividad, oportunidad, inclusión, sostenibilidad, eficiencia del gasto y no segregación.

De igual forma incentivará y apoyará a aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos de los servicios.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la urbanización y/o instalación de servicios que se ejecuten.

**Artículo 68.-** El legislador determinará la organización básica de la Administración del Estado y establecerá las bases de la carrera funcionaria, asegurando tanto la igualdad en el acceso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.

Este cuerpo normativo deberá contemplar, a lo menos, las obligaciones y los derechos de los funcionarios de la Administración del Estado, sus causales de cesación en el cargo, así como también el nacimiento y la extinción de la responsabilidad administrativa.

**Artículo 69.-** El ingreso a cualquier función o cargo dentro de la Administración del Estado se realizará mediante procesos de selección públicos y transparentes,

observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados, tales como la formación académica del postulante o la idoneidad técnica del mismo.

Asimismo, todas las personas tienen derecho a ser admitidas en las distintas funciones y empleos públicos de la Administración del Estado, sin otros requisitos o limitaciones que aquellos que impongan la Constitución y las leyes.

**Artículo 70.-** Existirá un órgano especializado encargado de gestionar el sistema de oferta, selección y contratación para los empleos y cargos públicos, así como de verificar que los postulantes cumplan con los criterios de idoneidad técnica y profesional pertinentes y de la evaluación regular del rendimiento de los mismos.

El legislador se encargará de determinar la denominación de este órgano, además de su integración y procedimientos internos, estableciendo diferentes directrices y lineamientos que permitan contar con funcionarios públicos de excelencia.

**Artículo 71.-** Los órganos de la Administración del Estado adoptarán todas aquellas medidas que resulten necesarias para la incorporación de tecnologías que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos.

Las políticas de modernización y digitalización del Estado se implementarán tomando en cuenta los recursos económicos y humanos disponibles para ello, sin perjuicio de que los órganos estatales deberán promover una gestión eficiente y moderna.

**Artículo 72.-** El principio de transparencia en la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, así como de sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.

El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de transparencia en todas sus actuaciones, con independencia de la calidad jurídica en que se encuentren desempeñando las mismas.

El legislador determinará los alcances e implicancias del principio de transparencia, así como también las responsabilidades y sanciones que acarrearán su incumplimiento.

El legislador podrá establecer la reserva o secreto de ciertas informaciones cuando la publicidad de las mismas afectare el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas o el interés nacional.

**Artículo 73.-** El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal y honesta, con preeminencia del interés general por sobre



el particular.

El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones, con independencia de la calidad jurídica en que se encuentren desempeñando las mismas.

El legislador determinará los alcances e implicancias del principio de probidad, así como también las responsabilidades y sanciones que acarrearán su incumplimiento.

**Artículo 74.-** Corresponde exclusivamente al Estado a través de sus órganos, el ejercicio de la función pública, entendida ésta, como toda actividad que tiene como principal objetivo el bien común, la satisfacción de necesidades de utilidad pública y el desarrollo de los pueblos, las comunidades y las personas en pro del interés general.

Los principios de la Función Pública son la probidad, la transparencia, la idoneidad y dignidad funcionaria, la eficiencia, la eficacia, la efectividad y el trabajo decente.

El Estado podrá crear o constituir entidades o empresas, con o sin fines de lucro, para el cumplimiento de las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, sus ingresos y utilidades ingresarán al Tesoro Público y en los casos y forma que determine la ley, al erario municipal respectivo.

Sólo en virtud de ley de quórum calificado se podrá concesionar o externalizar la función pública y sólo de aquellas actividades o servicios de menor impacto social cuya calificación corresponderá a un Consejo de la Función Pública de elección popular y dependiente de las Gobernaciones Regionales. La ley establecerá su conformación y funcionamiento.

La Función Pública será ejercida por funcionarios/as públicos regidos por un Estatuto Especial, integral, coordinado y universal, fundado en los principios del Trabajo Decente y de la Carrera Funcionaria.

### **Capítulo3.- RURALIDAD**

**Artículo 75.-** Se reconoce la ruralidad como una expresión territorial y personal de vida que, en atención a sus características históricas, materiales, ambientales y espirituales, requiere de un tratamiento y regulación especial en atención a los principios de solidaridad, plurinacionalidad e interculturalidad. Asimismo, sin perjuicio de otros derechos fundamentales específicos, se reconoce la ciudadanía rural como manifestación legítima y propia de la vida rural, siendo conformada por el campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, como sujetos históricos de especial protección constitucional, portadores de una cultura, conocimiento y cosmovisión propia, siendo



deber del Estado garantizar el desarrollo armónico y en convivencia de los habitantes de la ruralidad en sus diversidades etarias, de género, nacionales, étnicas, productiva, entre otras.

**Artículo 76.-** La ruralidad comprende aquel espacio territorial o hábitat donde se ejerce la vida, la producción, recolección y renovación de los bienes comunes de la tierra, y especialmente el uso, aprovechamiento y cuidado de las aguas marino-costeras, lacustres y de los ríos y otros cuerpos de agua.

La tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas rurales poseen una función social, cultural y ecológica fundamental e irremplazable debiendo el Estado asegurar su protección, conservación y fomentar su restauración.

**Artículo 77.-** El Estado debe fomentar la equidad entre los territorios rurales y urbanos, reconociendo que cada uno tiene particularidades respecto a los bienes naturales comunes y sus necesidades de desarrollo.

**Artículo 78.-** Los territorios rurales serán gobernados y administrados por las entidades territoriales mandatadas por esta Constitución, con especial atención a sus modos de vida, sistemas de conocimiento, necesidades ecológicas, sociales, económicas, culturales y de conectividad de cada territorio y sus habitantes.

**Artículo 79.-** El Estado y las entidades territoriales deben establecer un trato equitativo en cada territorio, en la toma de decisiones, el presupuesto y la ejecución de este. Equiparando el flujo de recursos financieros para educación, cultura, organización, salud, economía e infraestructura básica de caminos, puentes, viviendas, conectividad y vialidad de alta calidad con el medio rural.

**Artículo 80.-** El campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores, otras personas que trabajan en zonas rurales y sus organizaciones tienen derecho a participar en todas las instituciones creadas para ejercer el poder popular, en la definición de políticas agrícolas y alimentarias, recogiendo las especificidades de los territorios y el bienestar de la población rural, su desarrollo económico, productivo y la preservación de la naturaleza.

**Artículo 81.-** Es deber de las entidades territoriales fomentar y garantizar la participación efectiva de quienes habitan la ruralidad, en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas de ordenamiento territorial y políticas agrícolas, promoviendo y habilitando mercados locales, circuitos cortos de comercialización de

alimentos, incluidas las compras y ventas directas, de acuerdo con sus usos y costumbres, sin perjuicio de la asociatividad y sus derechos colectivos.

**Artículo 82.-** El Estado debe intervenir y regular los mercados, procesos productivos y comercialización de bienes y servicios silvoagropecuarios, en función del bien común y las oportunidades de desarrollo económico local del país.

**Artículo 83.-** El Estado debe fomentar desde el ámbito público el desarrollo de tecnologías y conocimientos para la agricultura de base agroecológica, incluyendo la ciencia y los saberes tradicionales. Asimismo, debe garantizar los servicios tecnológicos, velar la transparencia de las innovaciones tecnológicas y asegurar el financiamiento hacia la transición agroecológica de la ruralidad.

**Artículo 84.-** Serán protegidos por el Estado la tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas en su función social, cultural y ecológica fundamental, debiendo regular su uso, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, así como limitar, prohibir y revertir su concentración.

**Artículo 85.-** Estado debe asegurar la protección de nuestro patrimonio genético forestal de semillas locales y variedades autóctonas de ganado menor; la protección de la diversidad biogeográfica del país; el empleo eficiente del agua mediante la mecanización técnica del riego; la utilización adecuada de los distintos tipos de suelos; y la explotación adecuada de los recursos naturales basados en su capacidad biológica de reposición.

**Artículo 86.-** El Estado debe declarar patrimonio natural de la nación la biodiversidad de las poblaciones y ejemplares de especies de fauna y flora nativa, y tengan derecho a su existencia, conservación, reconocimiento, restauración y preservación en sus ecosistemas naturales, así como la garantía de su permanencia, investigación y manejo óptimo respetando derechos y costumbres de las comunidades locales.

**Artículo 87.-** El Estado debe reconocer y mitigar al máximo los daños ambientales provocados por la inacción de este, referidos a la desertificación y desertización; la falta de agua para consumo humano; la homogeneización del paisaje rural; la merma de tipos forestales que han sucumbido al avance de la fruticultura, la viticultura, la ganadería y otras explotaciones compuestas de especies forestales y animales que no tengan reguladores naturales. Asimismo, el Estado se debe



comprometer a contrarrestar el cambio climático, sus causas, consecuencias y modelos de desarrollo que pongan en peligro la naturaleza y los seres humanos.

**Artículo 88.-** Se debe garantizar la alimentación como derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, indisolublemente ligado a la soberanía alimentaria y a la protección de los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas.

**Artículo 89.-** El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos.

**Artículo 90.-** El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria, velando por alimentos sanos y libres de contaminación y su producción, mitigando al máximo el uso de agroquímicos, plaguicidas, agentes biológicos nocivos y la introducción de organismos genéticamente modificados que se demuestre que sean dañinos para la salud. Asimismo, debe garantizar que los alimentos y el derecho a la alimentación no dependan de los intereses económicos del mercado e intervenga en su regulación.

**Artículo 91.-** El Estado velará porque todas y todos los habitantes del país tengan en todo momento acceso físico y económico a una alimentación saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio, promoviendo el derecho a la alimentación ya sea a través de la producción de autoconsumo, teniendo garantizado el acceso a tierra donde desarrollarlo, y/o mediante la adquisición de alimentos en sistemas de distribución, elaboración y comercialización establecidos.

**Artículo 92.-** Los tratados internacionales que Chile suscriba o adhiera, deberán respetar la soberanía alimentaria, la biodiversidad y modos de vida del campesinado, pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en la ruralidad.

**Artículo 93.-** El Estado debe asegurar la desprivatización del agua y su uso prioritario de forma inalienable en el orden siguiente: 1º) consumo humano y ecosistémico, 2º) para usos sanitarios humanos de poblaciones de territorios rurales o de caseríos urbano-rurales, 3º) para el mantenimiento de los caudales ecológicos de los cursos de agua y, 4º) para el uso productivo directo de alimentos, el combate de

incendios forestales, recreación, otros.

**Artículo 94.-** El Estado debe asegurar la planificación del uso de las Cuencas Hidrográficas en armonía con la planificación territorial y la participación efectiva de los distintos actores u organizaciones que usan el recurso y/o administran su acceso y/o se posicionan físicamente sobre o colindantes a ellas.

**Artículo 95.-** El Estado debe garantizar el desarrollo de la mujer campesina y la efectiva realización de sus derechos, con especial referencia a los ámbitos del cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico; a una vida libre de violencia; a sus derechos sexuales y reproductivos; a la justicia feminista; a formar parte de la democracia paritaria y los derechos laborales dignos, donde se incluya a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores presentes en la ruralidad.

**Artículo 96.-** El Estado debe promover la equidad de género en sus diversas labores ligadas a la agricultura y a las labores forestales. Debiendo garantizar la equidad en los trabajos rurales y forestales, en las remuneraciones y en el acceso a trabajos dignos y de alta productividad.

**Artículo 97.-** Sin perjuicio de otros derechos fundamentales generales, se reconoce la actividad laboral, ejercida y desarrollada en la ruralidad, como una forma especial de trabajo. El legislador establecerá condiciones y derechos especiales para aquellos trabajadores, chilenos o extranjeros, que se desempeñen, indefinida o temporalmente, en faenas de agricultura, silvicultura, agroindustria, pesca artesanal, extracción de productos del mar y otras actividades afines, particularmente en lo referido a sus condiciones de higiene y seguridad laboral, su exposición a los agrotóxicos y la prevención de las enfermedades profesionales.

**Artículo 98.-** El campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, tienen derecho a formar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones gremiales, a fin de proteger sus intereses y negociar colectivamente, cuando ello proceda.

Una ley regulará el proceso de constitución, finalidades, participación, capacitación, extensión y financiamiento de la sindicalización campesina y organizaciones rurales.

**Artículo 99.-** El Estado reconoce especial protección a los diversos

conocimientos, prácticas e innovaciones generadas por la ruralidad, incluidos los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca artesanal, apicultura, ganadería, recolección, cultivo y cuidado de semillas, alimentación, medicina tradicional y artesanías rurales.

El Estado debe fomentar el desarrollo, financiamiento y acceso a tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena, la investigación científica, los saberes tradicionales, y garantizar los servicios tecnológicos, velando por la transparencia sobre las innovaciones tecnológicas, sus impactos y alternativas.

**Artículo 100.-** Es deber del Estado garantizar al campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, el uso, aprovechamiento y libre intercambio de semillas y animales de cría, prohibiendo la privatización, registro o patentamiento de los conocimientos y tecnologías vinculadas a la capacidad reproductiva de plantas y animales, así como los procesos vitales, componentes y estructuras celulares, genéticas o químicas.

**Artículo 101.-** El Estado, en sus diferentes entidades territoriales, tiene el deber de reconocer y potenciar los legados ancestrales en el amplio espectro de las dimensiones cotidianas de la vida, tanto en su cosmovisión como en su relación con el ambiente, incluyendo la medicina nativa y sus prácticas, quedando ligada su propiedad intelectual al campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores u otras personas que trabajan en zonas rurales que las hubieren desarrollado, con base en estudios debidamente acreditados.

Para ello, en los procesos educativos formales se deberá destinar por ley un número mínimo de horas académicas en los planes de educación regional y local, orientadas a temáticas locales, tanto históricas, fundacionales, étnicas, ecológicas, geológicas y económicas, de escala territorial, provincial y regional, como parte del identitario de la nueva óptica de organización estatal.

**Artículo 102.-** Se entenderá por zona rural aquella comuna o agrupación de comunas que cuente con la cantidad de pobladores o la densidad demográfica que determine la ley, así como también todo espacio que se encuentre fuera del radio urbano.

En la configuración de zonas rurales se considerarán elementos como la interrelación dinámica entre las personas, el desarrollo de actividades socioeconómicas comunes y los perfiles ecosistémicos del sector, empleando siempre las comunas como punto de referencia.

El legislador deberá determinar los criterios para establecer la cantidad de

pobladores y la densidad demográfica para que una zona determinada sea considerada rural, procurando establecer parámetros que aseguran una actualización constante de dichas cifras.

**Artículo 103.-** El Estado deberá garantizar la no discriminación arbitraria entre zonas urbanas y rurales, sin perjuicio de la aplicación de criterios de diferenciación y pertinencia territorial en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Asimismo, el Estado deberá promover el desarrollo integral y armónico de las zonas rurales, velando por la equidad horizontal en la provisión de bienes y servicios públicos para asegurar una cobertura efectiva de las necesidades básicas de la población.

**Artículo 104.-** El estado reconoce la existencia de la violencia patronal y rural en contra de las mujeres y niñas que viven en sectores rurales y campesinos debiendo adoptar las medidas adecuadas para modificar los patrones culturales que sustentan la discriminación hacia las mujeres y en los comportamientos estereotipados.

**Artículo 105.-** El Estado debe velar y generar políticas públicas que protejan a las mujeres y niñas rurales de la sequía y escasez hídrica, el riesgo de incendios producidos por la industria forestal, la explotación sexual y prostitución forzada, la desigualdad educacional, la falta de acceso y propiedad sobre la tierra, la violencia patriarcal y patronal rural, la invisibilización de sus derechos políticos y el trabajo no remunerado.

**Artículo 106.-** El Estado además debe garantizar los Derechos de las Mujeres y Niñas, especialmente de aquellas que viven en espacios Rurales, a vivir una vida libre de discriminación basada en el sexo, así como también debe implementar los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento de dichos derechos, en concordancia con los tratados internacionales relativos a la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujeres, firmados y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.

**Artículo 107.-** Es deber del Estado velar por la protección de la integridad física y psicológica de las Mujeres y Niñas Rurales con perspectiva Ecofeminista y erradicar su discriminación y violencia en todas sus formas, poniendo especial énfasis en aquellas vulneraciones específicas del mundo rural como las siguientes: la sequía y escasez hídrica, el riesgo de incendios derivados de la industria forestal, la explotación sexual y prostitución forzada, la explotación de su capacidad reproductiva, la desigualdad

nutricional, la desigualdad educacional, la falta de acceso y propiedad de la tierra, la violencia patronal rural, la baja participación en decisiones políticas y comunitarias, las tareas de cuidado no remuneradas y el ejercicio de la maternidad.

**Artículo 108.-** El Estado debe asegurar el derecho de las mujeres y niñas rurales y campesinas de reunirse en espacios seguros, independientes y autónomos, conocer y proteger su historia, economía y tradición práctica ecológica y feminista, sus saberes tradicionales, impidiendo su apropiación y deberá protegerlos del extractivismo epistémico y mercantilización.

**Artículo 109.-** El Estado debe garantizar a las mujeres y niñas rurales y campesinas el derecho de acceso a las comunicaciones e información, incluyendo el acceso a Internet y a la conectividad digital no pudiendo aludir a la falta de dispositivos digitales, ni de recursos económicos, de situación geográfica o de conocimientos informáticos o digitales.

**Artículo 110.-** El Estado velará porque las mujeres y niñas rurales y campesinas accedan en condiciones de igualdad a salud física y mental y en particular a centros de atención sanitaria, información, fomentará el respeto y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, debiendo ser esta promoción preventiva, y con énfasis en perfeccionar la institucionalidad sanitaria destinada a los sectores rurales, así como su planificación territorial y la calidad de la prestación de sus servicios, e instalaciones.

**Artículo 111.-** El Estado deberá fortalecer el acceso a programas de formación, capacitación y educación, formal o informal, incluidos los planes de desarrollo social, así como a todos los planes comunitarios, a fin de aumentar sus competencias técnicas. Asegurar y promover la creación de asociaciones, grupos comunitarios y cooperativas que tengan por finalidad acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades económicas mediante el acceso a empleos dignos que permitan el desarrollo de la vida campesina y del contexto de ruralidad y a gozar de igualdad de remuneración, acogerse a las prestaciones sociales, y acceder a actividades generadoras de ingresos así como el acceso a servicios financieros, los créditos y préstamos agrícolas, los servicios de comercialización y las tecnologías apropiadas.

**Artículo 112.-** El Estado deberá promover y asegurar el libre e igualitario acceso de la mujer a la tierra, como a los bienes naturales y así poder utilizarlos y gestionarlos, obtener un trato igual o prioritario en las reformas agrarias y los planes de saneamiento, así como implementar planes de Protección de semillas, saberes ancestrales, y recursos



necesarios para el desarrollo de la vida en el campo y para la gestión de una nutrición adecuada de manera que las mujeres puedan permanecer en el campo, si así lo quieren, para continuar con su rol de velar por la producción de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria.

**Artículo 113.-** La conectividad de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso es esencial para el desarrollo de la nación y sus habitantes, como también para el pleno ejercicio y protección de los derechos y deberes que consagra la Constitución y las leyes.

Corresponderá al Estado generar los mecanismos, leyes y políticas públicas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso, con pleno respeto al territorio, sus habitantes y a los principios de equidad y justicia territorial.

#### **Capítulo 4.- MEDIO AMBIENTE**

**Artículo 114.-** El Estado y sus organismos, en todos los niveles, promoverán las acciones y transformaciones necesarias para gestionar, mitigar y adaptarse a la crisis climática y ecológica. En el desarrollo de este deber integrará, de manera transversal en los niveles y funciones de gobierno, mecanismos de gobernanza basados en la cooperación y participación de las y los habitantes del territorio, así como los conocimientos científicos, saberes locales y ancestrales en la toma de decisiones.

**Artículo 115.-** La unidad de gestión climática del territorio corresponderá a las cuencas, y biomas, las que contarán con un sistema de administración integrado de los elementos de la Naturaleza y actividades humanas, que promuevan la articulación multiescalar entre distintos niveles de gestión.

Esta administración deberá considerar los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación socio-ecosistémica de los territorios, los planes y políticas de desarrollo regional y local, atendiendo a las características locales y los escenarios presentes y futuros para gestionar los riesgos y vulnerabilidades frente a los efectos adversos del cambio climático y los desastres socionaturales, y la protección de ecosistemas estratégicos para enfrentar la crisis climática.

#### **Capítulo 5.- GOBIERNO REGIONAL (REZAGADA)**

**Artículo 116.-** El Gobernador Regional evaluará anualmente a las empresas prestadoras de servicios del transporte, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos regionales. Tales evaluaciones serán públicas. La sociedad





civil, por medio del mecanismo de participación vinculante previsto en la Constitución y las leyes, podrá poner fin a una licitación cuando existan reclamos reiterados.

**Artículo 117.-** El Gobernador Regional implementará oficinas territoriales debidamente descentralizadas, las cuales controlarán y fiscalizarán la prestación y calidad del servicio. En virtud de ello, podrá, mediante resolución fundada, sancionar directamente al prestador o empresa respectiva.

Los municipios tendrán la facultad de apoyar directamente a las oficinas territoriales regionales, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de planificación vial y del tránsito, así como denunciar al correspondiente juzgado de policía local las faltas que observare.

**Artículo 118.-** El Gobierno Regional podrá constituir empresas públicas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter regional, con el fin de desarrollar y participar en:

1. Áreas económicas estratégicas relacionadas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile: minería, silvicultura, acuicultura y pesca;

2. Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población: alimentaria; logística y portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable, combustible, energía, electricidad; provisión de vivienda y transporte público; rubros asociados a la salud; recolección y tratamiento de residuos;

3. Actividades asociadas a la investigación, desarrollo científico, innovación y cuidado y preservación de la vida y el medio ambiente.

**Artículo 119.-** Las empresas públicas regionales tendrán como función social atender las necesidades básicas de la población regional e impulsar el desarrollo territorial.

**Artículo 120.-** La creación de una o más empresas públicas regionales será iniciativa del Gobernador o Gobernadora Regional, por mutuo propio o por petición fundada del 10% del padrón electoral.

Para la aprobación de la iniciativa se requerirá la aprobación del consejo regional por la mayoría de sus miembros en ejercicio.

**Artículo 121.-** El patrimonio de las empresas públicas regionales estará constituido por los recursos que se encuentren en sus territorios, tales como aguas continentales, aguas subterráneas, minerales metálicos y no metálicos, energías



solares, eólicas, recursos submarinos y otros cuya explotación o generación de valor pueda crear utilidades económicas en beneficio de la población.

Los gobiernos regionales podrán concertarse con regiones aledañas para crear conjuntamente empresas públicas regionales, si lo consideran necesario para su desarrollo.

**Artículo 122.-** Sin perjuicio de la función de control fiscal y administrativo que por disposición de esta Constitución recaigan en otros órganos del Estado, las empresas públicas regionales estarán sometidas, además, al control de tutela y funcionamiento administrativo de un órgano público en la forma de Consejo Superior de Empresas Públicas Regionales. La ley determinara su composición, integración, funcionamiento, facultades y atribuciones.

## **Capítulo 6.- FORMA DE ESTADO (REZAGADA)**

**Artículo 123.-** Chile es una república constituida por regiones autónomas. La base de la república radica en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas que habitan un territorio.

Un territorio es la apropiación de un espacio geográfico por parte de los ciudadanos y ciudadanas que hacen usufructo de él para su bienestar personal y colectivo, constituyendo una historia común y una identidad colectiva. Este territorio construido socialmente recibe el nombre de región.

La región está constituido a la vez por comunas, cuya expresión institucional son los municipios expresión del poder local.

**Artículo 124.- Del patrimonio de las regiones.** Todos los recursos económicos presentes en las regiones constituyen el patrimonio económico de las regiones, entendiendo por ello los recursos minerales metálicos y no metálicos, aguas continentales, acuíferos, aguas subcontinentales; recursos energéticos tales como energía eólica, solar, geotérmica. Humedales y terrenos que se encuentran en sus territorios.

**Artículo 125.-Tributación en las regiones.** Todas las empresas que desarrollan actividades productivas en las regiones deberán pagar sus tributos en dicha región, independiente que sus oficinas centrales estén radicadas en la capital de la República.

Del total recaudado por las regiones, el 60% de estos ingresos constituirán el presupuesto de la región. El 40% restante serán derivados al Gobierno Central el cual destinará estos recursos a la constitución de un Fondo de Equidad Territorial; este fondo



será tendrá como propósito mantener un desarrollo equilibrado entre las regiones.

**Artículo 126.-** La Estructura del Estado está conformado por el Gobierno Nacional, este a su vez implica la existencia de Ministerios y Direcciones Nacionales de Servicios Públicos.

El Gobierno Nacional estará presente en las regiones a través de las Direcciones Regionales y dependerán jerárquicamente del Gobernador Regional.

**Artículo 127.-** La estructura de Estado en regiones estará constituida por el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.

**Artículo 128.-** El Gobierno Regional estará constituido por un ejecutivo denominado Gobernador Regional. El Gobernador Regional será electo por los ciudadanos y ciudadanas de la región, mediante sufragio universal directo, secreto e informado.

**Artículo 129.- Funciones del Gobierno Regional.** El Gobernador Regional es el superior jerárquico del Gobierno Regional y de su servicio administrativo y de todas las direcciones regionales con presencia en la región.

Las principales responsabilidades del Gobernador Regional son:

- a) Representar a la región ante los otros poderes del Estado de Chile;
- b) Presidir todas las Comisiones Regionales que tienen directa relación con el desarrollo de la región, tales como, Comisión Regional del Uso del Borde Costero, Comisión Regional de Medio Ambiente, Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Urbanismo, etc.;
- c) Representar internacionalmente a la región sin contravenir las políticas nacionales sobre esta materia;
- d) Firmar convenios de cooperación con otros Gobiernos Regionales en pro del desarrollo económico, social y cultural de la región;
- e) Firmar convenios de cooperación con uno o varios municipios de su respectiva región para el desarrollo económico, social y cultural de la región;
- f) Elaborar Políticas, Planes y Programas para el desarrollo económico, social y cultural de la región;
- g) Presentar al Parlamento Regional el presupuesto plurianual de la región; y
- h) Administrar y ejecutar el presupuesto de la región.

**Artículo 130.-** Cada región contará con una instancia colegiada y deliberativa denominada Parlamento Regional, cuyos miembros serán elegidos por los ciudadanos y

ciudadanas de la región, mediante sufragio universal directo, secreto e informado.

El número de sus integrantes será definido por ley.

Las principales facultades son legislativa, reglamentaria y fiscalizadora.

**Artículo 131.- Funciones del Parlamento Regional:**

- a) Fiscalizar los recursos económicos de la región;
- b) Fiscalizar las acciones del Gobernador Regional;
- c) Fiscalizar las acciones de las direcciones regionales;
- d) Legislar en función del desarrollo de la región;
- e) Aprobar normas para su funcionamiento;
- f) Aprobar normas para la región las cuales no pueden contravenir leyes o normas de carácter nacional o local;
- g) Aprobar Alianzas públicas – privadas – sociales – cívicas en pro del desarrollo regional con participación de todos los sectores. Es necesario la complementariedad y el establecimiento de alianzas estratégicas entre todos los actores vinculados a procesos de desarrollo que permita una solución integral a los problemas; y
- h) Aprobar la convocatoria a consultas regionales, las que pueden provenir del Gobernador Regional o de algún integrante del Parlamento Regional.

**Artículo 132.- Del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales.** Las Asambleas Legislativas Regionales participarán en los destinos de la República constituyendo un Consejo de Asambleas Legislativas Regionales, a fin de ejercer las atribuciones y competencias señaladas en los incisos siguientes.

El Consejo de Asambleas Legislativas Regionales se reunirá sólo cuando lo convoque la Presidencia, el Congreso Plurinacional o la mayoría de las Asambleas Legislativas Regionales.

Una ley ratificada por la mayoría de las Asambleas Legislativas Regionales regulará la composición y funcionamiento del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales.

**Artículo 133.-** Son atribuciones de las Asambleas Legislativas Regionales:

- 1. Ratificar tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión;
- 2. Ratificar la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Plurinacional;
- 3. Ratificar la ley general de regalías y la ley de regalías sobre el cobre y el litio aprobadas por el Congreso Plurinacional;
- 4. Ratificar la fórmula establecida por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales aprobada por el Congreso Plurinacional;
- 5. Ratificar la ley que crea, modifica, delimita y suprime las entidades territoriales;

6. Ratificar el nombramiento de quienes componen el órgano de justicia constitucional;

7. Ratificar el nombramiento de las autoridades que determine la Constitución y la ley.

**Artículo 134.-** Son materias de competencia legislativa del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales:

1. Dictar la ley que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Gobernadores; y

2. Dictar la ley que regula los mecanismos de compensación fiscal horizontal, incluyendo la regulación de la fórmula de compensación fiscal propuesta por la Comisión de Equidad Territorial.

## **Capítulo 7.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**Artículo 135.-** El Estado y sus entidades territoriales deben asumir un rol de custodios del territorio plurinacional mediante el ordenamiento y planificación vinculante del uso del suelo y agua, para la protección de la totalidad del territorio del país, considerando como unidad de gestión de planificación a las cuencas hidrológicas que permitan un manejo ecosistémico y un desarrollo equilibrado, eficiente y sostenible para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

**Artículo 136.-** La elaboración de toda política, plan de ordenamiento e instrumentos de planificación territorial deberá fundarse en:

a) Los principios de gradualidad, la equidad, la integración social, la participación, la identidad, el compromiso, la calidad, la eficiencia, la adaptabilidad, la resiliencia y la seguridad, entre otros. Una ley desarrollará el contenido y alcance de estos principios;

b) Reconocer cuando corresponda, la preeminencia del cuidado de la integridad del ser humano y de los ecosistemas como soporte esencial de la vida en los territorios y considerar su protección, conservación y restauración;

c) Considerar la integración y coordinación permanente de todos los niveles de administración y gobierno estatal, con el fin de cautelar que las políticas y planes de ordenamiento territorial sean coherentes entre sus distintos niveles;

d) Fundarse en un uso eficiente, responsable y justificado de los recursos públicos que permita crear y proveer bienes y servicios enfocados en el bienestar y buen vivir de las generaciones actuales y futuras;

e) Tener como base la integración de todos los conocimientos, tanto la evidencia científica como los saberes tradicionales de los pueblos originarios y de las

comunidades. Cuando no exista información, deberá regir el principio precautorio;

f) Reconocer las distintas formas de vida y culturas que habitan los territorios, fomentando la protección de los elementos históricos, ancestrales y culturales tanto materiales como inmateriales;

g) Procesos participativos de los distintos actores involucrados, asegurando el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones vinculantes de sus habitantes, desde una mirada local; y

h) Considerar la diversidad del paisaje y la vocación natural de los territorios.

**Artículo 137.-** El Estado, a través de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deberá:

a) Velar por una correcta, adecuada, segura y eficiente localización de los asentamientos y actividades humanas;

b) Crear, reconocer, resguardar y conservar todas las zonas y áreas de protección de la diversidad biológica así como otras de alto valor ecológico, para que éste sea aprovechado por las generaciones futuras;

c) Establecer la ordenación espacial y gestión integrada de los espacios marinos y del maritorio, así como de las especies hidrobiológicas, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, basado en la justicia ambiental, ecológica, territorial y distributiva. La ley definirá estas materias;

d) Considerar como unidad de análisis, gestión y planificación a la o las cuencas hidrológicas y protegerlas siempre en coordinación con los planes de cuenca;

e) Garantizar un uso y manejo sostenible del suelo que prevenga su degradación o contaminación, y permita su conservación, recuperación y regeneración de sus funciones ecosistémicas;

f) Garantizar ciudades sostenibles y seguras;

g) Utilizar criterios de justicia ambiental para evitar la concentración de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la naturaleza en una determinada localidad;

h) Definir zonas de interacción entre lo antrópico y lo ecosistémico, contiguas a las de conservación, preservación y restauración. Áreas que deben ser calculadas y que deben tener usos compatibles con los ecosistemas;

i) Considerar instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad, a fin de fortalecer integralmente el desarrollo local y apoyar, estimular y valorizar las iniciativas de base comunitaria;

j) Identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales en el territorio, las que deberán desarrollarse en armonía con los centros poblados y los ecosistemas en que se pretendan instalar; y

k) Planificar economías locales alternativas, basada en la capacidad territorial como eje estructurante al servicio de los ecosistemas y de las economías locales sustentables.

**Artículo 138.-** Se creará una Ley Marco de Ordenamiento y Planificación Territorial basada en un enfoque socio ecológico, que busque el desarrollo del país, integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios.

Los aspectos que a lo menos deberá abordar esta ley son los siguientes:

a) Determinar las diferentes escalas de ordenamiento y planificación territorial, y los instrumentos y atribuciones que les permitan dar cumplimiento a los deberes establecidos por esta Constitución;

b) Establecer una orgánica con presencia en las distintas entidades territoriales que garantice una integración multiescalar en el desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación en los distintos niveles, nacional, regional, comunal, y el cumplimiento de estos.

c) Establecer una orgánica con presencia en las distintas entidades territoriales que garantice una integración multiescalar de la gestión de la información territorial para construir la base ambiental, social, cultural y económica que permita el desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación y ordenamiento;

d) La transición gradual de los instrumentos existentes al nuevo sistema de ordenamiento y planificación establecido en esta Constitución y las leyes;

e) Definir los mecanismos para la implementación de la función social y ecológica como límite del ejercicio del derecho de propiedad mediante los instrumentos de planificación y ordenamiento, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos establecidos por esta Constitución;

f) Considerar e integrar en los planes de ordenamiento y planificación los territorios especiales que se establezcan según la ley;

g) Proponer mecanismos de compatibilidad territorial de los impactos de actividades, proyectos y normativas que se pretendan realizar o implementar en el territorio;

h) Dar normas de coordinación, asociatividad y/o colaboración transfronteriza de las autoridades, cuando los límites naturales aconsejen elaborar planes para macrozonas;

i) Utilizar el diseño como herramienta válida para resolver puntos conflictivos de la planificación y la participación, con el objeto de catalizar variables territoriales o espaciales urbanas, rurales o de los tejidos productivos; y

j) Crear normas que permitan una actualización y/o modificación de los planes de



ordenamiento o planificación del territorio, cuando los indicadores evidencian en el tiempo, un error en la decisión; y den la posibilidad de compensar ambientalmente.

## **Capítulo 8.- NORMAS VARIAS**

### **Artículo 139.- Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas.**

Sin perjuicio de los derechos y deberes del Estado de administrar /os recursos que como pueblo nos pertenecen y los bienes nacionales que forman parte de las riquezas del país, se reconoce a toda persona la libertad de empresa respecto de cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad de la nación, respetando los valores y principios de esta Constitución y la legislación que las regule, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos.

Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica así como de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados y el bienestar de los consumidores, declaradas por la autoridad jurisdiccional competente, se entenderán como conductas contrarias a la moral y al orden público económico, obligando a sus responsables a una reparación integral.

La ley regulará el ejercicio de esta libertad en la medida necesario para proteger el interés general, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos nación indígenas preexistentes al Estado. Este podrá establecer una regulación de precios máximos en bienes, prestaciones y servicios en razón del interés superior social.

**Artículo 140.- Régimen constitucional minero.** Las sustancias que constituyen el patrimonio minero son bienes públicos. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Se comprenden en dicho dominio, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburo y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales que no requerirán de concesión minera, sin perjuicio de las autorizaciones que exija la ley. Lo anterior, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para permitir la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Quedará prohibida la exploración y explotación de sustancias minerales en áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y aquellas donde se localizan los glaciares, incluyendo un espacio de protección en torno a dichas áreas,



Serán concesibles todas las sustancias minerales que la ley determine, exceptuando los hidrocarburos líquidos o gaseosos y el litio, los que sólo podrán ser explotados por el Estado mediante contratos especiales de operación los que deberán ser fijados por decreto supremo del Ejecutivo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes bajo las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como estratégicas o de importancia para la seguridad nacional. La ley, para efectos de la explotación de aquellas sustancias que se encuentran disueltas en las salmueras, tales como el litio, deberá considerar requisitos ambientales especiales con la finalidad de que los fluidos que se extraigan no mermen las cuencas hidrográficas en que se produce su explotación. Con todo, aquellos áridos y arcillas que se encuentran en los cauces de los ríos y sus riberas no podrán ser objeto de extracción ni de concesión alguna.

Dentro del perímetro de la concesión de exploración y explotación deberán delimitarse y quedarán excluidas para su exploración y explotación las siguientes áreas catastradas según defina la ley: los glaciares y su área circundante; las áreas silvestres protegidas por el Estado; las áreas protegidas privadas, los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres, los acuíferos que alimenten los sistemas vegetacionales indicados, los límites urbanos, los territorios indígenas, las fuentes de abastecimiento de agua para la población, los sitios arqueológicos que constituyen patrimonio de la humanidad y todos aquellos sitios de interés científico que la ley determine. La concesión de exploración y explotación minera está sujeta a las restricciones y limitaciones que determine la ley y entre ellas que los residuos masivos provenientes de las labores de explotación minera no puedan afectar los componentes del medio ambiente protegidos indicados precedentemente. Estas zonas deben estar delimitadas con anterioridad a la solicitud de concesión minera.

El Estado sólo podrá otorgar concesiones si se satisface el interés público que justifica su otorgamiento. Dicho interés público consiste en el equilibrio que debe existir entre el desarrollo de la actividad minera, el beneficio patrimonial que de ella se obtenga y la conservación de los bienes públicos naturales que ella afecta, tales como el agua, los glaciares, la flora y la fauna la protección de las comunidades indígenas. Si dentro del perímetro de la concesión existe una comunidad indígena, el Estado deberá someter a consulta indígena la solicitud de concesión minera.

Las concesiones se constituirán por resolución administrativa y serán objeto de revisión para verificar su explotación efectiva en los plazos y formas que determine el legislador. La determinación de la exploración o explotación efectiva se efectuará mediante la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable. Las concesiones mineras conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley

exprese. El procedimiento que dé lugar a la resolución administrativa constitutiva deberá estar fijado por ley. El otorgamiento de la concesión y sus revisiones posteriores, podrán ser objeto de acciones colectivas de carácter cautelar cuando éstas amenacen el interés público.

La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justificó su otorgamiento y por ello su régimen de amparo se traduce en que las concesiones pagarán una patente anual, según lo determine la ley. Un porcentaje de esta patente deberá tener una destinación local con la finalidad de beneficiar al territorio donde se efectúa la exploración o la explotación, según la distribución geográfica que determine la ley. Sin perjuicio de la patente anterior, la explotación minera deberá pagar una contribución anual al territorio en el cual efectúa la disposición de sus residuos masivos. Dicha contribución y la proporcionalidad de la patente en el territorio será fijada por la ley.

Serán causales de caducidad de la concesión minera de exploración o explotación, las siguientes: la no acreditación de su uso efectivo en los plazos y formas que determine el legislador; el incumplimiento de las restricciones ambientales aplicables a la concesión, tales como explorar o explotar las áreas de exclusión; el no pago de la patente o de la contribución minera; y el incumplimiento del deber de informar que establezca la ley, el que al menos dispondrá informar las aguas del minero. Será de competencia exclusiva de la Administración declarar la caducidad de tales concesiones, sin perjuicio del derecho concesionario de recurrir judicialmente. En caso de caducidad por no pago de patente, el afectado podrá solicitar la subsistencia de su concesión una vez enterado el importe de lo no pagado de conformidad lo indique la ley.

**Artículo 141.-** En cada región existirá, al menos, una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, y que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa. Estas universidades formarán parte de la Administración del Estado, relacionándose preferente y coordinadamente con las demás instituciones estatales, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o del país. Una ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias.

**Artículo 142.-** Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución reconocida por el Estado cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito, incidentes con materiales peligroso u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.

Sera deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus



gastos de operaciones, inversiones, capacitación y renovación de equipos de material mayor y menor, como también dotarlos de equipos de protección personal para los diferentes actos de servicio, otorgar cobertura médica para atención de efectivos accidentados o por enfermedades contraídas por actos de servicio y un reconocimiento económico en época de vejez o invalidez.

Le corresponderá a la Ley establecer el marco regulatorio general respecto de lo señalado en el inciso anterior.”.

## **2.- Discusión particular.**

Luego de la elaboración del texto sistematizado, a partir de las iniciativas convencionales constituyentes aprobadas en general, se abrió un plazo para la presentación de indicaciones y de solicitudes de votación separada que se extendió hasta las 23:59 del día viernes 1 de abril, recibándose 22 paquetes de indicaciones, de cuya discusión y votación se da cuenta en el siguiente apartado.

### **2.1.- Votación particular.**

**“Artículo 1.- Tributos.** Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional.

Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Una vez recaudados, los tributos ingresarán al erario público del Estado, las Regiones Autónomas, las Autonomías territoriales indígenas y las Comunas Autónomas, según corresponda.

La ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos al bienestar social, la protección ambiental o al desarrollo económico.”

El convencional **Sr. Jürgensen** tomó la palabra para fundamentar en bloque las indicaciones relativas a cargas tributarias. Indicó, que las indicaciones en que es autor, buscan entregar mayor razonabilidad, sistematizar y concentrar las reglas básicas que determinan el sistema de tributación nacional. En este sentido, manifestó que las iniciativas aprobadas en general no superan los requisitos mínimos para entregar a ciudadanía un sistema que permita recaudar recursos y a la vez preservar derechos de los contribuyentes. En este sentido, se manifestó en contra de los artículos 22, 23, 27, 28, 29, 40, 32, 33, 36, 40 y 41 fundamentando las indicaciones supresivas de dichos artículos. En su opinión todos



estos artículos son irrealistas, debiéndose asumir que los recursos son siempre insuficientes, y a la vez que algunas normas se prestan para un sistema clientelista y susceptible para cometer malversaciones de recursos públicos.

La convencional **Sra. Mella** indicó que diversas indicaciones de las que es autora en lo relativo a este contenido de normas sobre cargas tributarias y organización fiscal que son de carácter supresivas no tienen la intención de eliminar su contenido, sino que reconfigurar y mejorar su formulación en otras indicaciones presentadas.

**En votación:**

**IND 001** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 1: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 1, por encontrarse contenido en el Artículo 2 (ICC 723 – 5).

**IND 002** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 1°.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 1 y 2:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6095](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6095)

**“Artículo 2.- De los tributos.** Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional.

Una vez recaudados, los tributos ingresarán al erario público del Estado, las



Regiones Autónomas y las Comunas Autónomas, según corresponda.

La ley podrá establecer la afectación de tributos para el cumplimiento de fines específicos relativos al bienestar social, la protección ambiental o al desarrollo económico.”

**En votación:**

**IND 003** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero “Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, por:

“Los habitantes de la República están obligados a contribuir al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos, respetando las normas del sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad. Los impuestos directos en ningún caso podrán ser confiscatorios, lo que se presumirá cuando sean manifiestamente desproporcionados o injustos, como cuando graven en más de un 45% las utilidades o ganancias que reporte un contribuyente, para cuyo cálculo se tendrá en consideración la totalidad de cargas pecuniarias aplicables a nivel nacional y regional”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 3:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	17	2	1	24	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6097](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6097)

**En votación:**

**IND 004** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 2 (De los tributos) inciso 1° por el siguiente:

“Artículo 2. De los tributos. Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley.

**Resultados de la votación, indicación Nº 4**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	2	2	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6099](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6099)

**En votación:**

**IND 005** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán determinados por una ley del Congreso Plurinacional”, por:

“Los tributos y las demás cargas se aplicarán en proporción a las rentas o en la progresión que fije la ley, los que no podrán exceder en su conjunto del porcentaje antes señalado respecto del contribuyente final. Los impuestos y cargas, las exenciones y los beneficios impositivos de aplicación estatal, serán determinados por Ley de quorum especial”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 5:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=)

[899&prmlIdVotacion=6100](#)

**En votación:**

**IND 006** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C. Gómez, J. J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 2º inciso 2º por el siguiente:

“El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, coherencia, no confiscatoriedad, solidaridad y justicia material; tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza.”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 6:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	0	6	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6101](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6101)

**En votación:**

**IND 007** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 2.: Ind. Aditiva: Para añadir antes de iniciar el tercer inciso: “El Legislador velará por dar estabilidad al sistema tributario, cuyo buen funcionamiento permitirá al Estado brindar la protección requerida por sus habitantes, así como contribuir al desarrollo personal de sus integrantes”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 7:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6102](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6102)

**En votación:**

**IND 008** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 2 inciso 3° por el siguiente:

“Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo aquellas tasas y contribuciones especiales que, conforme a esta Constitución y la ley correspondiente y dentro de su jurisdicción, puedan ser establecidas por las entidades territoriales. En el ejercicio de las potestades tributarias, se deberán respetar los principios del sistema.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 8:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	4	2	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6103](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6103)

**En votación:**

**IND 009** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 2° inciso 4° por el siguiente:

“El ejercicio de la potestad tributaria admite la imposición de tributos que respondan a criterios extrafiscales debiendo tener en consideración límites tales como la necesidad, razonabilidad y transparencia”.





Resultados de la votación, indicación Nº 9:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6104](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6104)

En votación:

**IND 010** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 4.: Ind. Aditiva. Para añadir un cuarto inciso: “Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago”.

Resultados de la votación, indicación Nº 10:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6106](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6106)

En votación:



**IND 011** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 2 bis:

“Igualdad y legalidad tributaria. Todas las personas contribuirán con el sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad contributiva, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

El sistema tributario y las cargas públicas encuentran su fundamento en los principios de equidad, progresividad, no discriminación arbitraria, justicia, irretroactividad, certeza jurídica, neutralidad, simplicidad, eficiencia y los demás que determinen la Constitución y las leyes.

En ningún caso los tributos, las cargas públicas o el sistema tributario en su conjunto podrán tener alcances confiscatorios o de carácter desproporcionado o injusto”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 11:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6108](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6108)

**“Artículo 3.- Impuesto sobre la República en su conjunto.** Sólo la ley dictada por el Congreso Plurinacional puede imponer cualquier impuesto aplicable sobre la República en su conjunto, determinar su progresión, proporcionalidad y destinación.”

**En votación:**

**IND 012** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 3.

**IND 013** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 3.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 12 y 13:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	1	0	0	0	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6109](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6109)

“**Artículo 4.- Tasas y contribuciones Regionales.** La ley regional podrá establecer tasas o contribuciones de carácter y de afectación regional o comunal, en tanto no sean sobre los mismos hechos establecidos en tasas o contribuciones aplicables a la República en su conjunto según ley del Congreso Plurinacional.”

El convencional **Sr. Jürgensen** fundamentó la indicación N° 16 y N° 17. Indicó que tales indicaciones pretenden establecer leyes de quórum especiales para efectos de crear ciertos tributos. Por otro lado, manifestó su preocupación de que se haya rechazado el principio no confiscatorio de los tributos en votaciones anteriores.

La convencional **Sra. Mella** fundamentó la indicación N° 14, indicando que en virtud de la intervención del convencional Sr. Jürgensen, está regulado más adelante el principio no confiscatorio de los tributos.

El convencional **Sr. Mena** manifestó intención de retirar su indicación N° 15.

**En votación:**

**IND 014** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 4.

**Resultados de la votación, indicación N° 14:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	2	0	1	24	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6112](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6112)

**IND 016** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 4. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar parte del inciso primero “(...) en tanto no sean sobre los mismos hechos establecidos en tasas o contribuciones aplicables a la República en su conjunto según ley del Congreso Plurinacional” por “(...) sólo cuando complementen de forma racional los impuestos de carácter nacional, según especifique una Ley de quorum especial”: **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 017** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 4. Inc 2.: Ind. Aditiva. Para agregar un inciso segundo: “Para evitar transgresiones que den por resultado la aplicación de impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos, el Congreso podrá establecer un rango máximo de afectación impositiva que podrá ser utilizado por las regiones, de manera que estas puedan establecer impuestos de carácter regional que complementen de forma razonable a las cargas nacionales”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 5.- Descentralización fiscal.** Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes.

La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno.

El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.”

**En votación:**



**IND 018** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 5.

**Resultados de la votación, indicación 18:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
12	12	0	1	24	<b>EMPATE</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6113](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6113)

**En votación:**

**IND 018** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 5.

**Resultados de la votación repetida, indicación Nº 18:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	15	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6113](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6113)

**En votación:**

**IND 019** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 5. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso segundo que señala: “(...) sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno” por “(...) sea ejecutado a través de los gobiernos regionales, buscando que el uso de los recursos recaudados vía impuestos se distribuya de forma equitativa y ordenada para el beneficio de todos los habitantes”.

**Resultados de la votación, indicación 19:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	18	2	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6115](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6115)

**En votación:**

Artículo 5 en su formulación original

**Resultados de la votación, artículo 5:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	5	1	0	25	APROBADO

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6117](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6117)



**“Artículo 6.- Equilibrio y responsabilidad Fiscal.** Las autoridades del gobierno central, regional y comunal son responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando siempre los principios de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Una ley deberá definir dichos principios y regular las normas de responsabilidad fiscal aplicable, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Asimismo, una ley deberá fijar indicadores y metas de eficiencia de carácter público, asociados a resultados e impactos de la ejecución presupuestaria anual en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de las comunas y regiones.”

**En votación:**

**IND 020** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 6.

**Resultados de la votación, indicación Nº 20:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6119](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6119)

**IND 021** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 6. Inc. 1.: Ind. Aditiva. Para agregar a continuación de “son responsables” el término “personalmente”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 7.- Suficiencia en el financiamiento de las competencias.** La creación, ampliación o traspaso de toda competencia, función o atribución desde el Estado



central a los gobiernos regionales o comunales, deberá siempre ir acompañada del traspaso oportuno de los recursos financieros y humanos suficientes para su adecuado ejercicio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, las leyes que asignen dicha función o tarea deberán consignar su financiamiento en el respectivo informe financiero.”

**En votación:**

**IND 022** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 7.

**Resultados de la votación, indicación 22:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6121](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6121)

**“Artículo 8.- Solidaridad y equidad Territorial.** Los órganos del Estado y las leyes deben promover un desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario entre las distintas regiones y comunas del territorio de la República. Las leyes y políticas públicas deberán velar por cumplir con lo anterior, permitiendo que todos los habitantes de la República tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, independiente del lugar donde residan.

La ley dispondrá la creación de instrumentos que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, especialmente en cuanto a las transferencias fiscales que haga el Estado central a los gobiernos subnacionales, así como la creación de mecanismos de compensación económica entre las distintas unidades territoriales.

Asimismo, la ley podrá disponer de medidas que permitan compensar las externalidades negativas derivadas de la explotación de recursos naturales a las





regiones y comunas afectadas.”

El convencional **Sr. Jürgensen** fundamentó la indicación N° 24, señalando que al crear territorios especiales y unidades territoriales se hace necesario entregarle al legislador la posibilidad de establecer beneficios tributarios.

**En votación:**

**IND 023** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 8.

**Resultados de la votación, indicación N° 23:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	1	1	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6123](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6123)

**IND 024** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 8. Inc. 2.: Ind. Aditiva. Para incorporar como nuevo inciso Segundo el siguiente: “La ley podrá establecer beneficios tributarios especiales a ciertas zonas que beneficien a sus habitantes y emprendedores, en razón de su distancia de los centros urbanos o de otras condiciones particulares que hagan necesario el fomento a determinadas actividades”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 9.- Coordinación y cooperación.** El Estado deberá promover la acción coordinada de los diferentes organismos e instituciones de los diversos niveles gubernamentales, fomentando la cooperación y colaboración para el logro de sus objetivos comunes, y evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones.



Los servicios públicos dependientes del gobierno central deberán coordinarse con los gobiernos regionales y municipalidades cuando ejecuten su labor en los respectivos territorios, en conformidad con la ley.

Asimismo, la ley establecerá fórmulas de asociación y cooperación para la administración de todas o algunas de las municipalidades, con respecto a los problemas que les sean comunes, así como entre las municipalidades y los demás servicios públicos.”

**En votación:**

**IND 025** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 9.

**Resultados de la votación, indicación 25:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6124](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6124)

**IND 026** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 9. Inc. 1.: Ind. Aditiva. Para agregar al final del primer inciso los términos “y gastos”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 027** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 9. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso final. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 10.- No discrecionalidad presupuestaria.** La transferencia de recursos realizada desde el Estado central a los gobiernos regionales y municipalidades, en el marco de la Ley de Presupuestos de la Nación u otro instrumento, deberá efectuarse en base a criterios objetivos, verificables y no discrecionales. Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno



subnacional.

Una ley determinará dichos criterios, debiendo reconocer la diversidad territorial y considerar los componentes geográficos, demográficos, socioeconómicos y de accesibilidad a los servicios básicos de las distintas unidades territoriales.

La Ley de Presupuestos de la Nación asignará los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos regionales y municipalidades, en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno.

Asimismo, una ley podrá disponer transferencias especiales por razones de aislamiento o emergencia, las que en ningún caso podrán establecer discriminaciones arbitrarias entre las distintas regiones y territorios del país.”

**En votación:**

**IND 028** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 10.

**Resultados de la votación, indicación 28:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
21	4	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6125](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6125)

**IND 029** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc. 1.: Ind. Supresiva. Para eliminar del primero inciso el término “central”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 030** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc. 1.: Ind. Supresiva. Para eliminar “Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno subnacional”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**



**IND 031** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc.3.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso tercero que señala “(...) en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno” por “(...) para lo que se tomará en consideración el número de habitantes que las integren, así como la cooperación de los mismos al erario nacional”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 11.- Responsabilidad e iniciativa presupuestaria.** Corresponde exclusivamente al gobernador regional o, en su caso al alcalde, presentar el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional o de la Municipalidad al correspondiente Consejo Regional o Concejo, respectivamente.

Este proyecto debe presentarse dentro de un plazo máximo establecido por ley. En el caso en que el Consejo Regional o el Concejo no adopten la decisión sobre el proyecto dentro del plazo establecido por esta ley, regirá sin más el proyecto presentado por el gobernador o el alcalde.

El Consejo Regional o el Concejo no pueden aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo pueden reducir los gastos contenidos en el proyecto, salvo los establecidos en las leyes.

Se prohíbe al Consejo Regional o al Concejo aprobar nuevos gastos con cargo a los fondos del respectivo Gobierno Regional o Municipalidad sin indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos para solventar tal gasto.

Si la fuente de recursos otorgada por el Consejo Regional o el Concejo son insuficientes para solventar cualquier nuevo gasto aprobado, el gobernador o alcalde, previo informe favorable del órgano por el cual se recaude el nuevo ingreso, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera sea su naturaleza.”

**En votación:**

**IND 032** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 11.

**Resultados de la votación, indicación 32:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------

20	0	0	1	24	APROBADA
----	---	---	---	----	----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6126](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6126)

**IND 033** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc.1.: Ind. Aditiva. Para agregar en el primer inciso a continuación de la palabra “respectivamente”, lo siguiente: “el que deberá revisarlo en el marco determinado por la ley de Presupuestos Nacional y a los ingresos que en razón de las políticas tributarias disponga la entidad. En ningún caso podrán aprobarse gastos cuando no existan ingresos que permitan financiarlos”.

**IND 034** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente: “De no aprobarse el presupuesto para un año determinado, regirá el autorizado para el año inmediatamente anterior”.

**IND 035** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc. 3.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso tercero que señala “(...) salvo los establecidos en las leyes” por “respectivo”.

**“Artículo 12.- Igualdad y legalidad tributaria.** Todas las personas contribuirán al sostenimiento del gasto público en conformidad a lo establecido en la ley y de acuerdo con su capacidad contributiva. El sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de equidad, progresividad, no discriminación arbitraria, justicia, irretroactividad, certeza jurídica, neutralidad, simplicidad y eficiencia.

En ningún caso los tributos, las cargas públicas, o el sistema tributario en su conjunto, tendrá alcance confiscatorio, o de carácter desproporcionado o injusto.”

**En votación:**

**IND 036** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 12.

Resultados de la votación, indicación Nº 36:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	2	0	1	24	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6128](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6128)

**“Artículo 13.- Igualdad de cargas tributarias.** Las personas naturales y jurídicas contribuirán al financiamiento del Estado de acuerdo con su capacidad económica a través de un sistema tributario determinado por la ley e inspirado en los principios de equidad y progresividad y que, en ningún caso podrá incluir tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos nacionales que se recauden ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, excepto aquellos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, los que podrán ser destinados al financiamiento del desarrollo local según determine la ley. Los gobiernos subnacionales podrán aplicar o modificar impuestos locales para suplementar sus presupuestos bajo los parámetros que determine la ley. Los contribuyentes tendrán derecho a reclamar las decisiones de las autoridades tributarias.”

En votación:

**IND 037** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 13.

Resultados de la votación, indicación Nº 37:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	2	1	0	25	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6132](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6132)

**“Artículo 14.- No discriminación del Estado y sus organismos en materia económica.** Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras.

En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación y en los respectivos presupuestos de los gobiernos regionales y municipalidades cuando corresponda.”

**En votación:**

**IND 038** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 14.

**Resultados de la votación, indicación Nº 38:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
21	4	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6133](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6133)

**IND 039** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 14. Inc.1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte final del inciso primero que señala “(...)”, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras” por “(...)”. Los gravámenes sólo podrán establecerse por el Congreso o por el organismo regional competente, adoptando criterios claros y objetivos, que no impliquen una discriminación arbitraria”. **Rechazada por incompatible**



con lo aprobado.

“**Artículo 15.- No afectación tributaria.** Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, salvo en el caso de los tributos de destinación local que esta Constitución establece.”

**En votación:**

**IND 040** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 15 (No afectación tributaria) por el siguiente:

“Artículo 15. De la afectación. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución.”

**Resultados de la votación, indicación Nº 40:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	0	2	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6136](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6136)

**En votación:**

**IND 041** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para añadir un nuevo inciso del artículo 15 por el siguiente:

“Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos de afectación en favor de las entidades territoriales referidos a actividades o bienes con una clara identificación con los





territorios, la prevención de contaminación medioambiental, la conservación y reparación de los ecosistemas, salud o educación. Una ley marco fijará los criterios para la creación de estos tributos.”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 41:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	6	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6138](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6138)

**En votación:**

**IND 042** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 15 bis:

“Artículo 15 bis. Prohibiciones en materia tributaria. La ley de Presupuestos no puede crear tributos ni beneficios tributarios. No procederá iniciativas populares ni plebiscito y referéndum en materia tributaria.”

**Resultados de la votación, indicación Nº 42:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6139](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6139)

**En votación:**

**IND 043** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 15 bis:  
“Tributos de destinación local. Una ley deberá disponer que lo recaudado por determinados tributos que gravan actividades o bienes con una clara identificación regional o local, sea destinado, dentro del marco que la misma ley señale, a los presupuestos regionales o comunales correspondientes”.

**Resultados de la votación, indicación 43:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	16	1	1	24	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6140](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6140)

**“Artículo 16.- Tributos de destinación local.** Una ley emanada del Congreso Nacional deberá disponer que lo recaudado por determinados tributos que gravan actividades o bienes con una clara identificación regional o local, sea destinado, dentro del marco que la misma ley señale, a los presupuestos regionales o comunales.”

**En votación:**

**IND 044** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 16.

**Resultados de la votación, indicación Nº 44:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6141](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6141)

**“Artículo 17.- Potestad tributaria subnacional.** Los gobiernos regionales, previa autorización de una ley y dentro del ámbito de sus competencias, podrán decretar tributos especiales sobre ciertas actividades realizadas o bienes localizados en sus territorios, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.”

**En votación:**

**IND 045** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 17.

**Resultados de la votación, indicación Nº 45:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	9	9	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6142](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6142)

**“Artículo 18.- Regalías.** Con el fin de velar por el cuidado social y ecológico, el Congreso Plurinacional debe dictar una ley general de regalías sobre las rentas provenientes del uso de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, tales como la explotación de recursos minerales, pesqueros y forestales, el uso de la energía solar, eólica, oceánica o geotermal, del espectro radioeléctrico, o las concesiones sobre el uso de estos bienes, tales como el agua, carreteras o inmuebles fiscales.”

**En votación:**

**IND 046** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera,



Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 18.

**Resultados de la votación, indicación Nº 46:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	2	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6144](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6144)

**IND 047** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc.1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la primera parte del inciso primero “Con el fin de velar por el cuidado social y ecológico, el Congreso Plurinacional debe dictar una ley general de regalías sobre las rentas (...)” por “El Congreso debe dictar una ley general de regalías o impuestos especiales sobre las rentas (...)”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 048** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso 2 por el siguiente: “El establecimiento de regalías respetará siempre los principios del sistema tributario, en cuanto su aplicación no será confiscatoria. Las regalías sólo podrán establecerse en beneficio del Estado, sin perjuicio de que una Ley especial determinará el mecanismo de redistribución con los Gobiernos Regionales”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 049** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 3. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 050** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 4.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 4. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 051** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 5.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 5. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**



**IND 052** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 6.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 6. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 053** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 7.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 7. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 19.- Tasas y contribuciones Municipal.** Las Comunas Autónomas, en la forma determinada por la ley regional, pueden establecer tasas y contribuciones, en tanto no sean incompatibles con las establecidas por el Congreso Plurinacional.”

**En votación:**

**IND 054** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 19.

**Resultados de la votación, indicación Nº 54:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	8	2	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6145](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6145)

**“Artículo 20.- Ingreso de los recursos.** Una vez recaudados, los recursos obtenidos por impuestos, tasas y contribuciones, Centrales, Regionales, de las autonomías territoriales indígenas y Comunes, ingresarán al patrimonio de la entidad territorial respectiva, sin perjuicio de la igualación fiscal solidaria establecida en los artículos 17 y 18.”

**En votación:**

**IND 055** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez,



Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 20.

**IND 056** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 20.

**Resultados de la votación conjunta, indicación Nº 55 y 56:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	9	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6146](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6146)

**“Artículo 21.- Fiscalización y recaudación.** La fiscalización y recaudación de los impuestos mencionados en los artículos 2 y 3, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente, estarán a cargo del SII y de la Tesorería General de la República.”

**En votación:**

**IND 057** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 21.

**Resultados de la votación, indicación 57:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6147](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6147)

**IND 058** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero por el siguiente: “La aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y las Regiones cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad determinada, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 059** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente: “El Servicio Nacional de Aduanas es el encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 060** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 3: Ind. Aditiva. Para agregar como inciso tercero el siguiente: “El Servicio de Tesorerías estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales de todos los servicios públicos. Asimismo, deberá efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes. Estos servicios dependen del Ministerio de Hacienda”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 22.- Devolución de IVA de artículos de primera necesidad.** La ley dictada por el Congreso Plurinacional que impone un impuesto al valor agregado sobre las ventas de bienes y prestación de servicios, puede establecer un mecanismo de devolución del impuesto por compras de bienes y servicios de primera necesidad para uso y consumo personal de individuos pertenecientes a grupos empobrecidos.”

**En votación:**

**IND 061** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 22.

**IND 062** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera,



Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 22.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones 61 y 62:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	3	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6148](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6148)

**“Artículo 23.- Distribución.** Los ingresos fiscales generados por los impuestos a los que hace referencia el artículo 1 serán distribuidos entre el Estado, Regiones Autónomas, Territorios Autónomos Indígenas y Comunas Autónomas, de acuerdo a la fórmula establecida por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, la cual debe ser aprobada por el Congreso Plurinacional.

Tanto en el cálculo de la fórmula de reparto, como en la deliberación para su aprobación y ratificación, al menos uno o más de los siguientes criterios deben ser considerados:

- a) conciliar el interés general de la República y los intereses de las Regiones Autónomas.
- b) evaluar periódicamente la capacidad fiscal, los índices de pobreza y de desigualdad, las brechas de inversión pública, las brechas de desarrollo territorial y la población y tamaño de las Regiones Autónomas y Comunas Autónomas.

El Consejo de Gobernadores puede proponer criterios adicionales a la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales para la elaboración de las fórmulas de distribución.”

**En votación:**

**IND 063** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 23: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 23.

**Resultados de la votación, indicación 63:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6150](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6150)

**En votación:**

**IND 064** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 23 por el siguiente:

“Artículo 23. Coparticipación en los impuestos. Los ingresos fiscales generados por impuestos serán redistribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida en la ley de presupuesto anual, según la fórmula de coparticipación sugerida por la Comisión de Equidad Territorial.

Tanto en el cálculo de la fórmula de coparticipación sugerida por la Comisión de Equidad Territorial, así como en la deliberación para la dictación de la ley de presupuesto anual, deben ser considerados los siguientes criterios:

1. Conciliar el interés general de la República y los intereses de las entidades territoriales;
2. Evaluar periódicamente la capacidad fiscal, los índices de pobreza y de desigualdad, las brechas de inversión pública, las brechas de desarrollo territorial y la población y tamaño de las entidades territoriales;
3. La estabilidad macroeconómica de la República, el equilibrio presupuestario u otros criterios semejantes.

El Consejo de Gobernaciones puede proponer criterios adicionales para la elaboración de la fórmula de coparticipación y la dictación de la ley respectiva”.

**Resultados de la votación, indicación 64:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------



19	3	3	0	25	APROBADA
----	---	---	---	----	----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6151](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6151)

**En votación:**

**IND 065** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para trasladar el artículo 23 inmediatamente después del nuevo artículo 39 bis.

**Resultados de la votación, indicación 65:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	3	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6152](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6152)

**“Artículo 24.- Multas y sobrepuestos sobre externalidades negativas ambientales o de actividades económicas.** La ley dictada por el Congreso Plurinacional puede establecer multas y sobrepuestos sobre las externalidades negativas ambientales o de actividades económicas, tales como cargas sobre la emisión de carbono, residuos tóxicos u otras sustancias semejantes.

Esta ley debe definir criterios de compensación para las Comunas Autónomas afectadas por las externalidades o actividades sujetas a este impuesto.”

**En votación:**

**IND 066** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 24.



**IND 067** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 24.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 66 y 67:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
11	14	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6153](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6153)

**En votación:**

Artículo 24 en su formulación original.

**Resultados de la votación, artículo 24:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	7	2	0	25	APROBADO

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6154](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6154)

**“Artículo 25.- Impuesto a unidades económicas con rentas monopolísticas.**  
La ley dictada por el Congreso Plurinacional puede establecer un impuesto a unidades económicas con rentas monopolísticas, cuando éstas sean superiores a las ganancias que hubieran sido obtenidas en un mercado competitivo, por razones de concentración de



mercados, asimetrías de información u otras semejantes.

La ley determinará las tasas aplicables y la fracción de la renta afecta, así como la institución pública encargada de determinar la existencia de rentas monopolísticas.”

**En votación:**

**IND 068** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 25.

**IND 069** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 25.

**Resultados de la votación, indicaciones Nº 68 y 69:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	11	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6155](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6155)

**“Artículo 26.- Publicación de microdatos e informes.** En virtud del principio de transparencia e igualdad democrática, una vez al año, al concluir la Operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos publicará microdatos e informes relacionados con las rentas imponibles y cargas tributarias efectivas de los contribuyentes, manteniendo su confidencialidad, en distintos segmentos de la población y a nivel estatal, regional y municipal e incluyendo personas naturales y jurídicas.

La ley determinará la información a ser publicada y la forma de llevarla a cabo.”

**En votación:**

**IND 070** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 26 por el siguiente:

“Artículo 26 Transparencia tributaria. En virtud del principio de transparencia e igualdad democrática, una vez al año, al concluir la operación de renta, el organismo competente publicará las rentas imponibles y cargas tributarias estatales, regionales y comunales determinadas por cada contribuyente de forma anónima, así como, los subsidios, subvenciones o bonificaciones pagadas que ordenen leyes de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas, información que, en todo caso, deberá ser anónima.

La ley determinará la información a ser publicada y la forma de llevarla a cabo.

La Presidencia deberá incluir en la cuenta pública anual, las medidas adoptadas para disminuir la evasión y elusión de impuestos.”

**Resultados de la votación, indicación Nº 70:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	1	6	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6157](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6157)

**En votación:**

**IND 071** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para trasladar el artículo 26 inmediatamente después del artículo 48.

**Resultados de la votación, indicación Nº 71:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	2	1	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:



[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6158](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6158)

“**Artículo 27- Sistema de multas y sanciones administrativas.** En virtud del principio de equidad y proporcionalidad, la ley propenderá a establecer un sistema de multas y sanciones administrativas proporcionales a las rentas de la persona multada o sancionada.”

**En votación:**

**IND 072** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 27.

**IND 073** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 27.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 72 y 73:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6159](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6159)

“**Artículo 28.- Suficiencia fiscal.** Las Regiones Autónomas, autonomías territoriales indígenas y Comunas Autónomas, en el marco de la política económica de la República, deben contar con recursos suficientes para ejercer sus competencias.

La delegación de nuevas competencias deberá ser acompañada de las transferencias de recursos suficientes.

El Estado, las Regiones Autónomas y Comunas Autónomas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley, y en virtud del principio de solidaridad, están obligadas a contribuir al financiamiento de las entidades territoriales de la República.”



**En votación:**

**IND 074** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) ) Para suprimir el artículo 28.

**IND 075** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 28.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 74 y 75:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6160](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6160)

**“Artículo 29.- Transferencias directas verticales en el ejercicio de las facultades supletorias del Estado.** La ley, dictada por el Congreso Plurinacional, establecerá un mecanismo de transferencias directas para el financiamiento del ejercicio de las facultades supletorias del Estado en la Región Autónoma y Comuna autónoma que corresponda a que se refiere el artículo xxx de la Constitución.”

**En votación:**

**IND 076** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 29.

**IND 077** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 29.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones 76 y 77:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADAS

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6161](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6161)

**“Artículo 30.- Transferencia financiera vertical.** El Estado establecerá los mecanismos de transferencias directas a Regiones Autónomas, Comunas Autónomas y Territorios Autónomos Indígenas, para financiar proyectos específicos destinados al bienestar regional, comunal y autonómico indígena.

Para estas transferencias de recursos a las Regiones, Comunas y territorios autonómicos indígenas de la República, el Estado deberá basar sus transferencias en planes de Inversión en Infraestructura a mediano plazo propuestos por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, los que deben estar basados en brechas de inversión pública, indicadores de pobreza y desarrollo territorial, o trato preferente a territorios especiales, poblaciones históricamente desaventajadas, zonas extremas o territorios insulares.”

**En votación:**

**IND 078** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 30.

**IND 079** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 30.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones 78 y 79:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADAS





El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6162](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6162)

**“Artículo 31.- Igualación horizontal regional.** Una ley dictada por el Congreso plurinacional establecerá un mecanismo de igualación solidaria regional con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Regiones de la República.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales determinará una fórmula para que las Regiones que obtengan ingresos que superen el promedio de ingresos fiscales por habitante de las Regiones de la República, transfieran a las Regiones que obtengan recursos bajo el promedio.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales contemplará los rangos de contribución.

Ninguna región contribuirá más del 50% de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio de ingresos fiscales por habitante de todas las Regiones de la República.

Los recursos destinados a Regiones por transferencias verticales y obtenidos por regalías y tributos serán contabilizados como ingresos en el cálculo de igualación fiscal horizontal.”

**En votación:**

**IND 080** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 31.

**IND 081** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 31.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 80 y 81:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=)



[899&prmlIdVotacion=6163](#)

**“Artículo 32.- Igualación horizontal comunal.** Una ley dictada por el Congreso plurinacional establecerá un mecanismo de igualación solidaria comunal con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Comunas Autónomas de la República.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales determinará una fórmula para que las Comunas Autónomas que obtengan ingresos que superen el promedio de ingresos fiscales por habitante de las Comunas de la República, transfieran a las Comunas que obtengan recursos bajo el promedio.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales contemplará los rangos de contribución.

Ninguna Comuna contribuirá más del 50% de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio de ingresos fiscales por habitante de todas las Comunas de la República.

Los recursos destinados a Comunas por transferencias verticales y obtenidos por tasas, contribuciones y regalías serán contabilizados como ingresos en el cálculo de igualación fiscal horizontal.

La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, en la determinación de la fórmula de redistribución deberá contemplar criterios de capacidad fiscal, indicadores de pobreza, brechas de inversión pública y tamaño del territorio.”

**En votación:**

**IND 082** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Para suprimir el artículo 32.

**IND 083** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 32.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 82 y 83:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	1	0	0	25	<b>APROBADAS</b>



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6164](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6164)

**“Artículo 33.- Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales.** La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales es un organismo autónomo y de carácter técnico, cuya misión es proponer las fórmulas de redistribución territorial de los ingresos fiscales al Congreso Plurinacional u otras instituciones de acuerdo a la Constitución y la ley.

La ley determinará la composición y elección de los miembros de la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, así como sus competencias, las que, sin perjuicio de las facultades del Concejo de Gobernadores, incluyen al menos:

- a) Recopilar y sistematizar la información necesaria para definir la redistribución de los ingresos fiscales;
- b) Proponer una fórmula para la redistribución de los ingresos fiscales de los impuestos del artículo 1 y de las regalías;
- c) Proponer una fórmula para las transferencias de igualación fiscal horizontal establecidas en los artículos 17 y 18, habiendo considerado las transferencias de igualación fiscal vertical; y
- d) Proponer los montos para contribuir periódicamente al Fondo Fiduciario de Territorios Especiales.”

**En votación:**

**IND 084** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 33: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 33.

**Resultados de la votación, indicación Nº 84:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	18	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6165](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6165)



**En votación:**

**IND 085** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 33 por el siguiente:

“Artículo 33. Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales. La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales es el órgano de carácter técnico cuya misión es proponer las fórmulas de redistribución de los ingresos fiscales al Poder Legislativo u otras instituciones de acuerdo a la Constitución y la ley.

La ley determinará la composición y elección de sus miembros, para lo cual deberá considerar criterios equitativos de participación y representación de las entidades territoriales.

Sin perjuicio de las atribuciones consagradas al Consejo de Gobernaciones, dicha ley determinará la organización y competencias de la Comisión, la que deberá considerar, al menos, las siguientes:

1. Recopilar y sistematizar la información necesaria para definir la redistribución de los ingresos fiscales.
2. Proponer una fórmula para la redistribución de los ingresos fiscales de los impuestos del artículo 2 y de las regalías.
3. Proponer una fórmula para la redistribución interregional e intercomunal establecidas en el artículo 43 ter y en el artículo 43 quater habiendo considerado las transferencias verticales.
4. La cuantificación de los costos fijos y variables que conlleve la transferencia de competencias desde el Estado a las entidades territoriales.
5. Proponer los montos para contribuir periódicamente al Fondo Fiduciario de Territorios Especiales.
6. Colaborar en la preparación de informes financieros de los proyectos de ley presentados por el poder legislativo que impliquen gastos con destinación regional o comunal, según lo establecido en la Constitución, así como informes y estudios económicos.”

**Resultados de la votación, indicación N° 85:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------

19	3	3	0	25	APROBADA
----	---	---	---	----	----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6166](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6166)

**“Artículo 34.- Presupuesto.** La ley de presupuesto del Estado, aprobada de acuerdo al artículo x de la Constitución, deberá estimar las transferencias de recursos a las entidades territoriales de la República.

El Estado propenderá a la reducción progresiva del gasto militar.

En la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos, las Regiones, Comunas y autonomías territoriales indígenas de la República deberán cumplir con el equilibrio presupuestario. No podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

La aprobación de los presupuestos de las Regiones, Comunas y autonomías territoriales indígenas de la República debe ser ratificada por las Asambleas Legislativas Regionales, Concejos Comunales y el órgano que señale el Estatuto de la autonomía territorial indígena, respectivamente.”

**En votación:**

**IND 086** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 34.

**Resultados de la votación, indicación Nº 86:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	2	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6167](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6167)



**IND 087** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 34. Inc. 2: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso segundo en la parte que señala “del gasto militar.” Por “de los gastos políticos, especialmente de aquellos cargos que sean de la confianza del Presidente de la República y otras autoridades”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 35.- Suscripción de deuda pública.** Las Regiones, Comunas y autonomías territoriales indígenas, de acuerdo a la ley podrán suscribir deuda. El nivel de deuda de cada unidad territorial debe ser consistente con una regla de sostenibilidad de finanzas públicas establecida por el Congreso Plurinacional.”

**En votación:**

**IND 088** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 35: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 35.

**IND 089** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 35

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones Nº 88 y 89:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	2	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6168](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6168)

**“Artículo 36.- Fondo fiduciario para Territorios Especiales.** La ley creará un Fondo Fiduciario para Territorios Especiales.

La ley regulará la administración del Fondo Fiduciario para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados.



El Fondo Fiduciario obtendrá recursos de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 letra d.”

**En votación:**

**IND 090** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 36: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 36.

**Resultados de la votación, indicación Nº 90:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	17	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6169](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6169)

**En votación:**

**IND 091** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 36 por el siguiente:

“Artículo 36 Fondo fiduciario para Territorios Especiales. La ley creará un Fondo Fiduciario para Territorios Especiales.

La ley regulará la administración del Fondo Fiduciario para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados.

El Fondo Fiduciario obtendrá recursos de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 N°5.”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 91:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	3	3	0	25	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6171](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6171)

**“Artículo 37.- De la autonomía financiera de las entidades territoriales.** Las entidades territoriales definidas en el artículo 1° gozarán de autonomía financiera para sus ingresos y gastos, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario y endeudamiento, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.”

El convencional **Sr. Álvarez** fundamentó las indicaciones en las que es autor respecto de este artículo, en particular la indicación N° 93, señalando que son la base de la hacienda comunal y regional, en relación a la agenda financiera de autonomías territoriales autónomas. Esto se encuentra en línea con lo que actualmente forma parte del borrador de nueva Constitución. Esta propuesta permite superar el diagnostico transversal de centralización en nuestro país, conjugándose con el principio de corresponsabilidad.

**En votación:**

**IND 092** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 37: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 37.

**Resultados de la votación, indicación N° 92:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
3	19	3	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6174](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6174)

**En votación:**





**IND 093** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 37 (De la autonomía financiera de las entidades territoriales) por el siguiente:

“Artículo 37. De la autonomía financiera de las entidades territoriales. Las entidades territoriales mencionadas en el artículo 5° de esta Constitución, gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 93:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	3	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6177](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6177)

**“Artículo 38.- De los ingresos de las entidades territoriales.** Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos:

1. Los recursos que para su funcionamiento o inversión les sean asignados en la Ley de Presupuestos del Estado;
2. Los ingresos que recauden de las contribuciones y tasas que establezcan en el ejercicio de la potestad tributaria que se les reconoce, de conformidad con los límites establecidos en la Constitución y las leyes;
3. Los recursos que provengan de los tributos que les sean destinados o en que coparticipen en la recaudación por ley;
4. Los recursos que les correspondan en la distribución de los fondos de compensación que se establecen en este capítulo y los demás que se consagren en la Constitución y las leyes;
5. Los recursos que obtengan vía endeudamiento en los casos y con los límites que se disponen en este capítulo y en las leyes dictadas en conformidad a esta Constitución;
6. Los ingresos que obtengan por la administración y explotación de su patrimonio;



- 7. Las donaciones, herencias y legados que reciban; y
- 8. Otros que la ley determine.”

**En votación:**

**IND 094** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 38 (De los ingresos de las entidades territoriales) inciso 1° en su primera parte, por el siguiente apartado:

“Artículo 38 De los ingresos de las entidades territoriales autónomas: Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos:”.

**Resultados de la votación, indicación N° 94:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	2	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6178](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6178)

**En votación:**

**IND 095** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 38 (De los ingresos de las entidades territoriales) inciso 1° numerales 1, 4, 5 y 7 por los siguientes, que mantienen su mismo orden y ubicación:

- “1. Los recursos que para su funcionamiento o inversión les sean asignados en la Ley de Presupuestos del Estado.
- 4. Los recursos que les correspondan en la distribución de fondos de compensación que se establecen en la Constitución y las leyes.
- 5. Los recursos que les correspondan por transferencias directas supletorias y



solidarias y por la redistribución interregional e intercomunal.

7. Los ingresos que obtengan por la administración y explotación de su patrimonio.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 95:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	0	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6181](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6181)

**En votación:**

**IND 096** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 38 inciso 1° numerales 2, 3, 6 y 8, que mantienen su mismo orden y ubicación:

“2. Los ingresos que recauden de las tasas, contribuciones e impuestos de afectación regional o local establecidos de conformidad con los límites señalados en la Constitución y las leyes. ”

3. Los recursos que por ley provengan de los tributos que les sean destinados o en que coparticipen en la recaudación

6. Los recursos que obtengan vía endeudamiento en los casos y con los límites que dispone la Constitución y la ley.

8. Las donaciones, herencias y legados que reciban”.

**Resultados de la votación, indicación N° 96:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	APROBADA



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6184](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6184)

**IND 098** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 38. Numeral 3: Ind. Aditiva. Para agregar la siguiente oración a continuación de la palabra “ley”, en el punto 3: “, y que sean complementarios a aquellos establecidos en beneficio del Estado”.

**En votación:**

**IND 099** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para agregar artículo 38 (De los ingresos de las entidades territoriales) inciso 1° un nuevo numeral 9:  
“9. Otros que determine la Constitución y la ley.”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 99:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6186](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6186)

**En votación:**

**IND 097** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 38. Numeral 2: Ind. Aditiva. Para agregar la siguiente oración a continuación de la palabra “leyes”: “, y de forma complementaria a los tributos establecidos en beneficio del Estado”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 97:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	16	2	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6189](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6189)

**“Artículo 39.- Distribución de las potestades tributarias.** Solo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.

La ley podrá crear tributos de afectación a favor de las entidades territoriales, como asimismo establecer impuestos locales, regionales, insulares o especiales en conformidad con la Constitución.

Las entidades territoriales podrán crear, modificar y suprimir contribuciones especiales y tasas, o establecer beneficios tributarios respecto de estas, dentro de su territorio, orientado por el principio de equivalencia y en el marco que determine la ley.

El ejercicio de estas potestades tributarias se hará conforme al deber de contribuir, los principios constitucionales tributarios y los derechos fundamentales, asegurando siempre la debida coordinación entre los titulares de estas.”

**En votación:**

**IND 100** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 39 por el siguiente:

“Artículo 39. Distribución de las potestades tributarias. Sólo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.

Las entidades territoriales, dentro de su territorio y en conformidad a la Constitución, podrán crear, modificar y derogar tasas y contribuciones y beneficios aplicables a ellas.

La ley podrá crear tributos de afectación a favor de las entidades territoriales, como asimismo establecer impuestos regionales, comunales, insulares o especiales, sobre actividades o bienes de clara identificación regional o local.

La ley determinará el marco general para la creación de impuestos de clara



identificación regional o local, dejando a cada Asamblea Regional la regulación específica de estos, incluyendo la determinación de la base imponible, así como los rangos dentro de los cuales cada Asamblea podrá establecer la alícuota aplicable, su progresión o fórmula.

Las potestades tributarias se ejercerán coordinadamente, conforme a los principios constitucionales tributarios y los derechos fundamentales”.

**Resultados de la votación, indicación 100:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	6	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6191](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6191)

**IND 101** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 39. Inc. 3.: Ind. Aditiva. Para agregar lo siguiente en el inciso tercero, a continuación de “ley”; “y la Constitución. En ningún caso podrán tener el carácter de confiscatorios y deberán considerar otros gravámenes de carácter nacional”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**En votación:**

**IND 102** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 39 bis, luego del artículo 39.

“Artículo 39 bis. Destino de los recursos tributarios. Una vez recaudados, los recursos obtenidos por tributos ingresarán al patrimonio de la entidad territorial respectiva, sin perjuicio de la compensación fiscal establecida en virtud del mecanismo de redistribución interregional e intercomunal establecido en la Constitución.”

**Resultados de la votación, indicación Nº 102:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	4	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6194](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6194)

**“Artículo 40.- Principios de autonomía y suficiencia.** La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes y bajo su responsabilidad.

Las entidades territoriales tendrán patrimonio propio y derecho a los recursos suficientes para cumplir las competencias que se les atribuyan, de los cuales podrán disponer autónomamente, salvo cuando se trate de transferencias condicionadas. Las transferencias de competencias deberán ir acompañadas de los recursos suficientes para su cumplimiento. Los costos fijos y variables de las competencias transferidas se cuantificarán por el organismo técnico que establezca la ley, el cual deberá tener integración y participación equitativa de las entidades territoriales.

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.

Sin perjuicio de los fondos de compensación señalados en el artículo 7, la ley regulará un fondo de desarrollo comunal y otro de desarrollo regional que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de los entes territoriales y del Estado Central. A cada uno de estos fondos se le asignará a lo menos un 5% de recaudación tributaria del país, exceptuando los ingresos tributarios propios de las entidades territoriales.

**En votación:**

**IND 103** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 1: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero en la parte que señala “y bajo su responsabilidad” por “y bajo la responsabilidad personal de sus autoridades”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 103:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
4	19	2	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
<https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899>

**En votación:**

**IND 104** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 40 inciso 1º (Principios de autonomía y suficiencia) por el siguiente:

“Artículo 40. Principios de autonomía y suficiencia. La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 104:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6198](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6198)

**En votación:**

**IND 105** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 2.: Ind. Supresiva. Para





eliminar el inciso 2.

Resultados de la votación, indicación Nº 105:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	19	1	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6201](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6201)

En votación:

**IND 106** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 3.

Resultados de la votación, indicación Nº 106:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

En votación:

**IND 107** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 40 inciso 2º y 3º:

“Las entidades territoriales tendrán patrimonio propio y derecho a los recursos suficientes para cumplir las competencias que se les atribuyan, de los cuales podrán disponer autónomamente, salvo cuando se trate de transferencias condicionadas. Los costos fijos y variables de las competencias transferidas se cuantificarán por la Comisión



de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales.

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 107:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	3	3	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6205](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6205)

**En votación:**

**IND 108** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 4.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 4.

**IND 109** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 40 inciso 4°.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 108 y 109:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	8	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6208](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6208)



“**Artículo 41.- Principio de coordinación.** La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas y con las demás haciendas públicas y autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicación e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general.

Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales.”

**En votación:**

**IND 110** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 41: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 41.

**Resultados de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
4	18	3	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6210](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6210)

**En votación:**

**IND 111** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 41 (Principio de coordinación) inciso 1° y 2° por el siguiente:

“Artículo 41. Principio de coordinación. La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general.

Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales.”.



Resultados de la votación, indicación Nº 111:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	0	1	1	24	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6212](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6212)

En votación:

**IND 112** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 41 inciso 3°, por el siguiente:

“Las inversiones estatales en los territorios de las entidades territoriales requerirán la aprobación de sus autoridades respectivas, la que se otorgará en la forma que determine la ley, sin perjuicio de las excepciones que la Constitución y las leyes establecen”.

Resultados de la votación, indicación Nº 112:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	6	0	2	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6213](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=899&prmlIdVotacion=6213)

En votación:

**IND 113** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 41 bis:  
“Coordinación y cooperación. El Estado deberá promover la acción coordinada de



diferentes organismos e instituciones de los diversos niveles gubernamentales, fomentando la cooperación y colaboración para el logro de sus objetivos comunes, evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 113:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	17	1	1	24	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6214](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6214)

**“Artículo 42.- Equilibrio presupuestario y endeudamiento.** Las entidades territoriales en la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos no podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

Las entidades territoriales excepcionalmente podrán recurrir al endeudamiento en la forma establecida por la ley marco correspondiente. En este caso, el endeudamiento no podrá superar el 2% de los ingresos ordinarios de la entidad territorial aprobados en su presupuesto anual del año anterior. Extraordinariamente, autorizadas por una ley, las entidades territoriales podrán endeudarse por sobre el valor antes señalado, pero en ningún caso el endeudamiento podrá superar el 5% de los ingresos ordinarios contenidos en su presupuesto anual del año anterior. En ninguno de estos casos, el endeudamiento contará con la garantía del Estado. Las entidades territoriales deberán definir el correspondiente plan de amortización, el que deberá ser informado a los órganos de control correspondientes.

Los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento obligatoriamente deberán destinarse a activos no financieros tales como inversiones en infraestructura o inmuebles y gastos de emergencia por causa de una calamidad o catástrofe dentro de sus respectivos territorios.”

**En votación:**

**IND 114** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera,



Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 42 por el siguiente:

“Artículo 42. Equilibrio presupuestario y endeudamiento. Las entidades territoriales en la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos no podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

Las entidades territoriales excepcionalmente podrán recurrir al endeudamiento en la forma establecida por la ley marco correspondiente. En este caso, el endeudamiento acumulado no podrá superar el 2% de los ingresos ordinarios de la entidad territorial aprobados en su presupuesto anual del año anterior. Extraordinariamente, autorizadas por una ley, las entidades territoriales podrán endeudarse por sobre el valor antes señalado, pero en ningún caso el endeudamiento acumulado podrá superar el 5% de los ingresos ordinarios contenidos en su presupuesto anual del año anterior. En ninguno de estos casos, el endeudamiento contará con la garantía del Estado. Las entidades territoriales deberán definir el correspondiente plan de amortización, el que deberá ser informado a los órganos de control correspondientes.

Los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento obligatoriamente deberán destinarse a activos no financieros tales como inversiones en infraestructura o inmuebles y gastos de emergencia por causa de una calamidad o catástrofe dentro de sus respectivos territorios”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 114:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	7	0	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6214](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6214)

**En votación:**

**IND 115** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 42 bis:

“Equilibrio y responsabilidad fiscal. Las autoridades del gobierno central, regional y comunal serán responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando



siempre los principios de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Una ley deberá definir dichos principios y regular las normas de responsabilidad fiscal aplicable, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Asimismo, una ley deberá fijar indicadores y metas de eficiencia de carácter público, asociados a resultados e impactos de la ejecución presupuestaria anual en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de las comunas y regiones”.

**Resultados de la votación, indicación Nº 115:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	13	1	2	23	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6216](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6216)

“**Artículo 43.- Solidaridad y compensación interterritorial.** El principio de solidaridad interterritorial tiene por fin corregir los desequilibrios económicos y ambientales entre las entidades territoriales. Para tales efectos, se podrán establecer mecanismos razonables y justos tales como transferencias directas, subvenciones, beneficios fiscales y fondos de compensación territorial.

La ley deberá establecer fondos solidarios de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal, que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de las entidades territoriales y del Estado Central. La ley establecerá los criterios para determinar qué se entiende por menor capacidad fiscal.

Las entidades territoriales en cuyo territorio se desarrollen actividades ligadas a sus características y condiciones naturales o geográficas, tendrán derecho a participar de los ingresos que se perciban por el Estado en relación con dichas actividades, en conformidad al principio de solidaridad interterritorial y en la forma que determine la ley”.

**En votación:**

**IND 116** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 43: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 43.

**Resultados de la votación, indicación Nº 116:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	17	0	2	23	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6217](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6217)

**En votación:**

**IND 117** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 43 por el siguiente:

“Artículo 43. Solidaridad interterritorial y fondos de compensación. El principio de solidaridad interterritorial tiene por fin corregir los desequilibrios en la dotación de recursos económicos y naturales entre las entidades territoriales. Para tales efectos, se establecerán mecanismos razonables y justos tales como transferencias directas, subvenciones, beneficios fiscales, fondos de compensación territorial y mecanismos de redistribución fiscal interregional e intercomunal. Asimismo, la ley deberá establecer fondos solidarios de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal, que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de las entidades territoriales y del Estado Central. Los criterios para determinar qué se entiende por menor capacidad fiscal serán determinados por ley.

Sin perjuicio de los demás fondos de compensación existentes, y de los fondos señalados en la Constitución, la ley establecerá al menos un fondo de desarrollo comunal y otro de desarrollo regional. La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales sugerirá los montos anuales de transferencias a dichos fondos, los que serán determinados por ley.

La ley determinará, previa propuesta de la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, los aportes a los fondos que provendrán del Estado y de las entidades territoriales. La ley asignará anualmente a cada uno de estos dos fondos, a lo menos un 5% de recaudación tributaria del país, exceptuando los ingresos tributarios propios de las entidades territoriales”.



Resultados de la votación, indicación Nº 117:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	3	3	2	23	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6218](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6218)

En votación:

**IND 118** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 43 bis:  
“Solidaridad y equidad Territorial. Los órganos del Estado y las leyes deben promover un desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario entre las distintas regiones y comunas del territorio de la República. Las leyes y políticas públicas deberán velar por cumplir con lo anterior, permitiendo que todos los habitantes de la República tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, independiente del lugar donde residan.

La ley dispondrá la creación de instrumentos que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior especialmente en cuanto a las transferencias fiscales que haga el Estado central a los gobiernos subnacionales, así como la creación de mecanismos de compensación económica entre las distintas unidades territoriales.

Asimismo, la ley podrá disponer medidas que permitan compensar las externalidades negativas derivadas de la explotación de recursos naturales a las regiones y comunas afectadas”.

Resultados de la votación, indicación Nº 118:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	15	1	2	23	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6220](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=899&prmIdVotacion=6220)

**En votación:**

**IND 119** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 43 bis:

“Artículo 43 bis. Participación en el ingreso por el uso y explotación de recursos naturales. Las entidades territoriales en cuyo territorio se desarrollen actividades ligadas a sus características y condiciones naturales o geográficas, tendrán derecho a participar, en conformidad al artículo 23 de los ingresos que el Estado perciba en relación con dichas actividades, en conformidad al principio de solidaridad interterritorial y en la forma que determine la ley.

Sin perjuicio del derecho de las entidades territoriales a participar de los ingresos que el Estado percibe de acuerdo al inciso anterior, la ley determinará los mecanismos necesarios para que dichos ingresos sean destinados a inversión pública.

Los ingresos a que se refiere este artículo, podrán provenir, entre otros, del uso y explotación de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, tales como recursos minerales, pesqueros y forestales, la observación astronómica, el uso de la energía solar, eólica, oceánica o geotermal, del espectro radioeléctrico, o de las concesiones sobre el uso de estos bienes, tales como el agua, carreteras o inmuebles fiscales”.

**Resultados de la votación, indicación N° 119:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	7	1	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6232](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6232)

**En votación:**

**IND 120** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 43 ter:

“No discrecionalidad presupuestaria. La transferencia de recursos realizada desde el Estado central a los gobiernos regionales y municipalidades, en el marco de la Ley de



Presupuestos de la Nación u otro instrumento, deberá efectuarse en base a criterios objetivos, verificables y no discrecionales. Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno subnacional.

Una ley determinará dichos criterios, debiendo reconocer la diversidad territorial y considerar los componentes geográficos, demográficos, socioeconómicos y de accesibilidad a los servicios básicos de las distintas unidades territoriales.

La Ley de Presupuestos de la Nación asignará los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos regionales y municipalidades, en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno.

Asimismo, una ley podrá disponer transferencias especiales por razones de aislamiento o emergencia, las que en ningún caso podrán establecer discriminaciones arbitrarias entre las distintas regiones y territorios del país”.

**Resultados de la votación, indicación N° 120:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	16	0	1	24	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6233](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6233)

El convencional **Sr. Álvarez** fundamentó la indicación N° 121, señalando que pretende complementar el artículo 43, especificando el funcionamiento de uno de los medios a través de los cuales se llevará a la vida el principio de solidaridad interterritorial. Con ello, se busca combatir la inequidad interregional e interterritorial que caracteriza a nuestro país.

**En votación:**

**IND 121** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 43 ter:

“Artículo 43 ter. Transferencias solidarias y compensación interterritorial. Con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Regiones y Comunas, la ley



establecerá mecanismos de redistribución interregional e intercomunal, respectivamente, que operarán a partir de sus correspondientes fórmulas de redistribución y de rangos de contribución definidos por la Constitución y la ley.

Las Regiones y Comunas que obtengan ingresos que superen el promedio ponderado de ingresos fiscales por habitante de las respectivas Entidades Territoriales, transferirán a las Regiones o Comunas que obtengan recursos bajo el promedio ponderado. Ninguna Entidad Territorial contribuirá más de la mitad de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio ponderado de ingresos fiscales por habitante de todas las Regiones Autónomas o Comunas Autónomas de la República.

Los recursos destinados a Regiones o Comunas por transferencias verticales directas del Estado, supletorias o solidarias, así como por tributos serán contabilizados como ingresos en el cálculo de la redistribución interregional e intercomunal, correspondiente. En el cálculo del promedio ponderado de ingresos por habitante y en la determinación de la fórmula de redistribución, la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales deberá contemplar criterios de capacidad fiscal, indicadores de pobreza, densidad demográfica, brechas de inversión pública y tamaño del territorio, u otros criterios otros semejantes.”

**Resultados de la votación, indicación N° 121:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	2	5	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6234](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6234)

**En votación:**

**IND 122** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 43 quater:

“Artículo 43 quater. Transferencia directa supletoria. El Estado podrá efectuar transferencias directas a las entidades territoriales, para financiar proyectos específicos destinados al bienestar regional, comunal y autonómico indígena. El Estado deberá fundar



sus transferencias directas en planes de Inversión en infraestructura pública, los que estarán basados en criterios tales como brechas de inversión pública, indicadores de pobreza y desarrollo territorial, o bien, en consideraciones que respondan al trato preferente a territorios especiales o poblaciones empobrecidas.

El Estado, en ejercicio de las facultades supletorias a que se refiere el artículo 30 inciso final de la Constitución, podrá efectuar transferencias directas a las entidades territoriales que corresponda.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 122:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	2	4	24	1	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6235](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6235)

**“Artículo 44.- Sostenibilidad.** Es deber de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

El cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas será una de las consideraciones primordiales al establecer, modificar, mantener o derogar tributos, beneficios tributarios o subsidios”.

Pustilnick, 123. Al momento de presentarla, el inciso 2º “coordinaciones primordiales”, eliminando la palabra “primordiales”. Solicitó indicación amistosa, pero se decidió votar en conjunto indicaciones 23 y 24 por referirse al mismo sentido.

**En votación:**

**IND 123** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Baccan, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 44 (Sostenibilidad) en sus incisos 1º y 2º por los siguientes:



“Artículo 44. Sostenibilidad Ambiental. Es deber del Estado y de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

El cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas será una de las consideraciones primordiales al establecer, modificar, mantener o derogar tributos, beneficios tributarios o subsidios.”

**IND 124** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 44. Inc. 2.: Ind. Supresiva. Para eliminar el término “primordiales”.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 123 y 124:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	24	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6236](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6236)

**En votación:**

**IND 125** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para agregar un nuevo inciso al artículo 44 del siguiente tenor:

“Cuando la ley, en cumplimiento del deber de sostenibilidad, establezca tributos, la ley deberá definir los criterios de compensación para las Comunas Autónomas afectadas por las actividades o externalidades sujetas a dichos tributos.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 125:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	2	4	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:



[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6237](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6237)

**“Artículo 45.- Responsabilidad.** Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven de conformidad con la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva.”

**En votación:**

**IND 126** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 45 (Responsabilidad) por el siguiente:

“Artículo 45. Responsabilidad fiscal. Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con arreglo a la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva”.

**Resultados de la votación, indicación N° 126:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6238](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6238)

**En votación:**

**IND 127** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 45. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero en la parte que indica “deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven de conformidad con la Constitución y las leyes” por “serán personalmente responsables de las consecuencias y perjuicios para la comunidad que de tales incumplimientos se deriven”.

**Resultados de la votación, indicación N° 127:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	18	0	1	24	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6239](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6239)

**“Artículo 46.- Eficiencia económica.** El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.”

La convencional **Sra. Pustilnick**, solicitó la posibilidad de una enmienda amistosa en cuanto a la indicación N° 28, toda vez que solicitó que aquella comienza redactadas con la expresión “El principio de eficiencia económica (...)”. Hubo acuerdo unánime por la Comisión.

**En votación:**

**IND 128** (17 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 46 (Eficiencia económica) por el siguiente:





“Artículo 46. Eficiencia económica. El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.”

**Resultados de la votación, indicación N° 128:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6240](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6240)

**En votación:**

**IND 129** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 46. Inc. 2.: Ind. Aditiva. Para agregar el siguiente inciso segundo: “Por consiguiente, las distintas entidades territoriales deberán tomar todas las medidas que contribuyan a tal fin, como por ejemplo contar con gastos reducidos a nivel de personal, y estructuras simples y adaptables de funcionarios. No se permitirá la contratación de familiares directos de las autoridades en las entidades territoriales ni en aquellas con las que éstas mantengan algún tipo de relación”.

**Resultados de la votación:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	18	1	1	1	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6241](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6241)



“**Artículo 47.- Garantías procesales de la autonomía financiera.** Para hacer efectiva la autonomía financiera en los términos consagrados en la Constitución, las entidades territoriales podrán recurrir a la jurisdicción constitucional, contenciosa administrativa u ordinaria competente, según corresponda”.

**En votación:**

**IND 130** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 47 por el siguiente:

“Artículo 47. Garantías jurisdiccionales de la autonomía financiera. Para hacer efectiva la autonomía financiera, incluidas las compensaciones territoriales en los términos consagrados en la Constitución, las entidades territoriales autónomas podrán recurrir a la jurisdicción constitucional, contenciosa administrativa u ordinaria competente, según corresponda.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 130:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	2	4	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6242](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6242)

“**Artículo 48.- Controles financieros.** Existirá un órgano de carácter técnico, desconcentrado territorialmente, con autonomía administrativa y presupuestaria, el cual controlará la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Su actuar deberá fundarse en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales y sociales.

Especialmente, fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley.



Asimismo, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano, democrático y participativo desde los territorios. El Estado promoverá la educación cívica de la ciudadanía en el control y la gestión de recursos públicos.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes.

Con todo, serán públicos los informes de auditorías y los estados financieros de las entidades fiscalizadas.”

**En votación:**

**IND 131** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para sustituir el artículo 48 por el siguiente:

“Artículo 48. Controles financieros. Un órgano de carácter técnico, desconcentrado territorialmente, con autonomía administrativa y presupuestaria, controlará la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Su actuar deberá fundarse en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales y sociales.

Este órgano técnico, especialmente fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley.

Asimismo, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano, democrático y participativo desde los territorios. El Estado promoverá la educación cívica de la ciudadanía en el control y la gestión de recursos públicos.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes.

Con todo, serán públicos los informes de auditorías y los estados financieros de las entidades territoriales fiscalizadas”.

**Resultados de la votación, indicación N° 131:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	2	2	2	23	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=)

[900&prmlIdVotacion=6243](#)

“**Artículo 49.-** En las unidades territoriales en que se organiza administrativamente el país, tendrán derecho a participación significativa de los réditos que generan las actividades económicas que se realizan en tales territorios.

Para lo anterior, se les reconoce la debida autonomía que las faculte para la toma de decisiones que les permitan su mejor desarrollo. Ejercerán dicha prerrogativa, sin perjuicio de reconocer su obligación solidaria con el resto de las unidades territoriales. Asimismo, deberán actuar en coordinación y sin desconocer la vinculación con el Estado a través del respectivo Ministerio o Secretaría de Estado.

El legislador deberá dictar una ley que regule, desde un punto de vista orgánico y funcional el proceso de traspaso de competencias a los gobiernos regionales, estableciendo de esta manera un eficiente sistema de captación y distribución de tributos y rentas regionales que viabilicen esas competencias.

El Estado propiciará un sistema de planificación y administración territorial que favorezca la integración y complementariedad regional, con especial atención a las áreas o unidades territoriales que esta Constitución consagra.”

**En votación:**

**IND 132** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 49: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 49.

**IND 133** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 49.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 132 y 133:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	1	0	1	24	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=)

[900&prmlIdVotacion=6244](#)

“**Artículo 50.-** El Estado se obliga a distribuir los recursos de manera equitativa y proporcional, sin desconocer el aporte que cada región efectúa al erario nacional, encomendando al legislador la determinación de los recursos que finalmente perciba la región y conjuntamente el mecanismo necesario para ello, a objeto de poder lograr su mejor desarrollo, atendida la autonomía que detentan.”

**En votación:**

**IND 134** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 50.

**Resultados de la votación, indicación N° 134:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6245](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6245)

“**Artículo 51.-** A nivel regional y comunal se deberá generar, promover y fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas, planes y programas, en los casos que esta constitución, la ley, y los estatutos regionales o comunales señalen.

Se proveerán los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, formación y educación cívica y todo aquello que sea necesario para concretar dicha participación que será consultiva, incidente y/o vinculante de acuerdo a la legislación respectiva.

La convocatoria, el financiamiento y el desarrollo del proceso participativo serán materia de ley.

Será deber de las entidades regionales y comunales considerar los principios de



inclusividad, universalidad, transparencia, oportunidad, pertinencia accesibilidad, reciprocidad, igualdad, gratuidad, pluralidad, respeto a la diversidad y no discriminación, adecuación tecnológica, autonomía e institucionalización para el fomento y desarrollo de la participación ciudadana.”

La convencional **Sra. Rivera**, manifestó su voluntad de retirar las indicaciones N° 138 y 140 de las que es autora.

La convencional **Sra. Pustilnick** fundamentó la indicación N° 135, señalando que la idea detrás de ella, es que a través de las autonomías regionales se determinen los mecanismos de participación, lo que explica la amplitud de la norma. El convencional **Sr. Álvarez** complementó dicha intervención, indicando que aquella contiene diferencias sustanciales con las indicaciones 137 y 137, toda vez que explicita el ámbito de participación, esto es, políticas públicas y planes, a la vez que no tiene pretensiones de taxatividad, dejando apertura y determinación a las autonomías territoriales.

La convencional **Sra. Mella**, fundamentó la indicación N° 136, indicando que aquella fórmula viene a complementar y ser compatible con la forma jurídica de Estado aprobada por el Pleno de la Convención. Señaló que se trata de una fórmula abierta, real y palpable hacia su ejecución que garantiza la participación popular. La norma responde ante el silencio normativo de otra Comisión que ostenta competencia en este ámbito, como lo es la Comisión de Principios Constitucionales.

Los convencionales **Sres. Jofré y Mena** fundamentaron la indicación N° 137, indicando que aquella disposiciones pretende garantizar mecanismos de participación mínimos que deben corresponder a las regiones y comunas.

#### **En votación:**

**IND 135** (05 Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Pustilnick, Castillo, Martínez) Para sustituir el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- Mecanismos de participación en las entidades territoriales. Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.”

**Resultados de la votación, indicación N° 135:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	9	0	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6246](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6246)

**IND 136** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para sustituir el artículo 51 por el siguiente:

“Artículo 51.- Las entidades territoriales promoverán la participación directa de la ciudadanía en las decisiones y asuntos públicos de su competencia. Para este objeto, se implementarán, a lo menos, los siguientes mecanismos:

- a) Plebiscitos y Referéndums;
- b) Consultas ciudadanas;
- c) Jurado Consultivo, integrado por sorteo;
- d) Contraloría popular;
- e) Presupuestos participativos;
- f) Audiencias públicas;
- g) Cabildos abiertos;
- h) Mecanismos de participación y consulta, destinados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y naciones preexistentes al Estado; y
- i) Iniciativa popular de norma.

Las entidades territoriales establecerán y desarrollarán otros mecanismos de participación ciudadana.” **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 137** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para sustituir el artículo 51 por el siguiente:

“El Estado promoverá la participación directa de la ciudadanía en las decisiones y asuntos públicos, especialmente a nivel regional y local, en la forma prevista por la Constitución y las leyes.

Los gobiernos regionales y comunales contarán, a lo menos, con los siguientes mecanismos de participación:

- a) Plebiscitos o referéndums.
- b) Jurado consultivo.
- c) Consultas ciudadanas.
- d) Presupuestos participativos.
- e) Audiencias públicas.



Los estatutos regionales podrán contemplar mecanismos de participación adicionales en conformidad con la Constitución y la ley”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 139** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 51. Inc. 2: Ind. Supresiva: Para eliminar “, incidente”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

Las indicaciones N° 138 y 140 fueron retiradas por su autora, la convencional **Sra. Rivera.**

**“Artículo 52.- De los mecanismos de participación en las entidades territoriales.** Las entidades regionales y comunales contarán a lo menos con los siguientes mecanismos de participación en su alcance respectivo:

- a) Plebiscitos;
- b) Consulta ciudadana;
- c) Contraloría popular;
- d) Presupuesto participativo;
- e) Audiencia pública;
- f) Cabildo abierto; y

g) Mecanismos de participación y consulta, destinados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y naciones pre existentes al Estado cada vez que se prevean medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza susceptibles de afectar sus derechos.

De igual manera, los estatutos comunales podrán establecer otros mecanismos de participación ciudadana, tales como las mesas barriales, consultas vecinales y los demás que señale esta constitución y la ley.”

**En votación:**

**IND 141** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 52 (De los mecanismos de participación en las entidades territoriales).

**IND 142** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 52.: Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 52.



**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 141 y 142:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	3	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6247](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6247)

**“Artículo 53.- Referendos regionales o comunales.** Se podrán someter a referendo las materias de competencia de los gobiernos regionales y las municipalidades en conformidad a lo dispuesto en una ley, la que regulará al menos los requisitos mínimos para solicitarlos o convocarlos válidamente por la ciudadanía o por las autoridades facultadas por la misma, la época en que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación y escrutinio y los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes.”

**En votación:**

**IND 143** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 53 (Referendos regionales o comunales).

**Resultados de la votación, indicación N° 143:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
20	1	4	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6248](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6248)



“**Artículo 54.- Jurado consultivo.** Antes de que un Consejo Regional o Concejo decida sobre una materia de su competencia, dicha materia podrá o deberá ser previamente discutida por un Jurado Consultivo integrado por ciudadanas y ciudadanos inscritas en la región o comuna, los que serán seleccionados al azar. Las resoluciones del Jurado no serán vinculantes para el Consejo Regional o Concejo.”

La convencional **Sra. Rivera** fundamentó la indicación N° 144, señalando que a su juicio el jurado consultivo sería una propuesta poco seria por no tratarse de un órgano de participación vinculante, generando gastos de manera innecesaria.

La convencional **Sra. Álvez** fundamentó la indicación N° 145, indicando que esta materia está regulada por la Comisión de Principios Constitucional, habiéndose ya aprobado mecanismos de participación en material regional. Sin embargo, diferió de la convencional Sra. Rivera toda vez que a su juicio la participación siempre es un proceso adecuado y beneficioso, no pudiendo implicar que aquello le quite seriedad.

**En votación:**

**IND 144** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 54.: Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 54.

**IND 145** (14 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 54 (Jurado consultivo).

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 144 y 145:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	5	0	1	24	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6249](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6249)



“**Artículo 55.-** La Administración Pública se reconoce como una función esencial del Estado de Chile orientado a satisfacer las necesidades fundamentales de la ciudadanía y se rige mediante los principios elementales de un estado moderno. El ingreso a la función pública se registrá mediante un procedimiento de carrera funcionaria. Serán trabajadoras y trabajadores públicos todas las personas que cumplan funciones en el aparato público.”

**En votación:**

**IND 146** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 55.Para suprimir el artículo 55.

**Resultados de la votación, indicación N° 146:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6250](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6250)

“**Artículo 56.-** Existirá un Estatuto de la función pública que regulará las condiciones funcionarias de los trabajadores públicos y el reconocimiento a sus organizaciones sindicales, depositarias de titularidad sindical para actuar en los procesos de negociación laboral y salarial de los trabajadores/as del Estado.”

**En votación:**

**IND 147** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 56.

Resultados de la votación, indicación N° 147:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6251](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6251)

**IND 148** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 56: Ind. Supresiva: Para eliminar “, depositarias de titularidad sindical para actuar en los procesos de negociación laboral y salarial de los trabajadores/as del Estado”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 57.-** Será deber del Estado velar por que todas las personas que habitan su territorio cuenten con acceso a servicios públicos que permitan su buen vivir, teniendo como fin la eliminación de diferencias en condiciones de vida barrial y territorial que responden a la condición socioeconómica de sus habitantes. Acceso a comercio, transporte público, establecimientos educaciones, y seguridad ciudadana, deberán responder a criterios objetivos tales como la cantidad de personas que habitan un determinado territorio, poniendo especial énfasis en las prestaciones que han sido privadas en cada uno de ellos.

Del mismo modo, la equidad territorial se expresará en el presupuesto por habitante del que dispongan las unidades administrativas en que se divide el territorio, siendo deber del Estado que ninguna persona cuente con distinto financiamiento a cualquier nivel, sin perjuicio de la capacidad de recaudación de cada una de éstas, en atención al territorio en que habiten las personas. La ley determinará los mecanismos por los cuales se materializará la equidad territorial, debiendo establecer, a lo menos, que el presupuesto por persona debe ser equitativo en todo el territorio nacional, admitiendo diferencias sólo en cuanto estas respondan a favorecer aquellos territorios que requieren de mayor financiamiento público, en atención a sus condiciones de precariedad en cuanto a servicios públicos como los señalados en el inciso anterior.”

**En votación:**

**IND 149** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 57.

**Resultados de la votación, indicación N° 149:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6252](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6252)

**IND 150** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 57. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “barrial y territorial que responden a la condición socioeconómica de sus habitantes”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 151** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 57. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar “siendo deber del Estado que ninguna persona cuente con distinto financiamiento a cualquier nivel, sin perjuicio de la capacidad de recaudación de cada una de éstas, en atención al territorio en que habiten las personas”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 58.- Principios orientadores de la función pública.** La función pública se ejercerá de manera responsable en todas sus actuaciones, procurando un actuar objetivo y fundado para concretar los fines del Estado.

Toda entidad pública deberá estar sujeta a control. Para esto, cada una de ellas deberá contar con un control interno y un control externo de acuerdo a lo establecido en la Constitución y las leyes.

Todas las personas que ejercen una función pública deben cumplir su labor asegurando un trato digno, respetuoso y oportuno, sin discriminar en ninguna circunstancia y asegurando que las decisiones sean debidamente justificadas. De esta manera, la función pública deberá brindarse con pertinencia cultural y lingüística de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando los servicios y prestaciones que se entreguen,



de acuerdo con las características y particularidades que presenten las personas beneficiarias de los servicios públicos.

El ejercicio de las funciones públicas se orientará a garantizar los principios de inclusión, probidad, transparencia, eficiencia, eficacia, jerarquía, descentralización, plurinacionalidad, interculturalidad e igualdad de género y no discriminación.

El Estado promoverá en el acceso a los cargos públicos medidas de acción afirmativa tales como la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, la participación de personas de grupos discriminados en razón del género, personas pertenecientes a los pueblos y naciones preexistentes, personas en situación de discapacidad y aquellas que establezcan la Constitución y las leyes.”

**En votación:**

**IND 152** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Baciañ, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir íntegramente el artículo 58 (Principios orientadores de la función pública), por el siguiente:

“Artículo 58.- Del ejercicio de la función pública. En el ejercicio de la función pública se deberá observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular.

La función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, adecuando las prestaciones que se entreguen de acuerdo con las características y particularidades de las personas beneficiarias de los servicios públicos.”

**Resultados de la votación, indicación N° 152:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6253](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6253)



**IND 153** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 58. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar “con pertinencia cultural y lingüística de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando los servicios y prestaciones que se entreguen,”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 154** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 58. Inc. 4: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 4. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**En votación:**

**IND 155** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para añadir un nuevo inciso al artículo 58, del siguiente tenor:

“La función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, atendiendo la existencia de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando las prestaciones que se entreguen, de acuerdo con las características y particularidades que presenten las personas beneficiarias de los servicios públicos.”.

**Resultados de la votación:, indicación N° 155:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
13	12	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6255](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6255)

El convencional **Sr. Mena** solicitó dejar sin efecto la votación relativa a la indicación N° 155 en atención a que sería incompatible con lo aprobado mediante la indicación N° 151, toda vez que se refieren al mismo sentido respecto de su inciso final. Además estimó que podría ser subsidiaria por suscribirse por 3 convencionales que suscriben la indicación 151.

El **Secretario Sr. Carlos Cámara** descartó que se tratara de una indicación subsidiaria, toda vez que sin perjuicio del fondo y contenido de la indicación, la indicación

Nº 155 añade un nuevo inciso y que, además, no existiría igualdad de autores, toda vez que la cantidad y nombres respecto de cada una de ellas difiere.

**“Artículo 59.- La Administración Pública.** La Administración Pública está al servicio de los pueblos y naciones de Chile, siendo su finalidad la promoción del bien común y el buen vivir de las personas que habitan el territorio del Estado.

La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de legalidad, juridicidad, transparencia, responsabilidad fiscal, enfoque de género, plurinacionalidad, coordinación y cooperación, control, eficiencia, eficacia, buen trato, rendición de cuentas, participación popular y primacía del interés general.

La Administración Pública central y territorial deberá ejecutar políticas públicas, planes, programas y proveerá la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente de alcance nacional, regional y comunal para hacer posible el desarrollo integral y solidario de los mencionados niveles territoriales.

Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración Pública, sus órganos o sus funcionarios, en el desempeño de sus funciones, podrá recurrir ante el respectivo órgano de control jerárquico administrativo interno y externo o, en su caso, ante los tribunales de justicia, según lo contemple la Constitución y la ley.”

#### **En votación:**

**IND 156** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir íntegramente el artículo 59 (La Administración Pública) por el siguiente:

“Artículo 59.- La Administración Pública. Los órganos de la Administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administración Pública ejecutará políticas públicas, planes y programas, y proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente.

La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás principios que señale la Constitución y la ley.

Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración Pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley.”



Resultados de la votación, indicación N° 156:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6256](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6256)

**IND 157** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 59. Inc 1: Ind. Supresiva: Para eliminar “los pueblos y naciones de”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 158** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 59. Inc.2: Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “enfoque de género, plurinacionalidad,” por “equidad”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

En votación:

**IND 159** (02 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga) Para añadir un nuevo artículo 59 bis, al siguiente tenor:

“Artículo 59 bis.- Organización Administrativa. La Ley establecerá la organización básica de la Administración Pública en el nivel central y en las entidades territoriales, que será desarrollada por la potestad reglamentaria buscando el mejor y más eficiente desarrollo de sus funciones.

La ley podrá conferir potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas y sancionatorias a los órganos de la Administración Pública. En ningún caso estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción.”.

Resultados de la votación, indicación N° 159:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	0	6	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6257](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6257)

**“Artículo 60.- Estatuto de la función pública administrativa.** La Administración Pública se formará con órganos administrativos, de gestión centralizada o descentralizada y con órganos autónomos. Los órganos de la Administración son creados por la ley, sin perjuicio de las potestades de organización interna de cada servicio.

Estos órganos sirven al interés general para hacer efectivos los servicios públicos, en el marco de un Estado social, plurinacional y democrático de derecho.

El acceso a los cargos públicos y a la carrera administrativa se realizará mediante un sistema de ingreso público, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo. De forma excepcional, podrán contratarse a personas bajo régimen de honorarios, siempre que el cargo no requiera subordinación y dependencia o para servicios ocasionales, específicos, puntuales y no habituales.

Los funcionarios de carrera administrativa serán estables en el cargo que ostenten y solo podrán ser desvinculados en la forma que establezca la ley. La misma norma permitirá y fomentará la movilidad de estos funcionarios dentro de toda la Administración del Estado.

Sin perjuicio de los estatutos administrativos generales y especiales, la ley establecerá las normas que el personal de las Administraciones Públicas debe cumplir para asegurar los principios y fines antes enunciados.”

El convencional **Sr. Álvarez** fundamentó la indicación N° 164, señalando que aquella pretende reconocer derechos de funcionarios públicos, en cuanto al derecho a la huelga, sindicación y negociación colectiva. Preciso que dicha normativa está en línea con instrumentos internacionales en la materia, como los convenios N° 151 y 159 de la OIT. En definitiva, indicó que se trata de un largo anhelo de funcionarios públicos que planean cumplir.

#### **En votación:**

**IND 160** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 60 (Estatuto de la función pública administrativa) por el siguiente:

“Artículo 60.- Empleo público. La Administración Pública desarrolla sus funciones



propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos.

El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados.

El desarrollo, evaluación de desempeño y cese en estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la Administración Pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 160:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6258](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6258)

**IND 161** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 60. Inc. 2: Ind. Supresiva: Para eliminar “social, plurinacional y”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 162** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 60. Inc. 4.: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 4. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**En votación:**

**IND 163** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para añadir los siguientes incisos al artículo 60 (Estatuto de la función pública administrativa) al siguiente tenor:

“La ley establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos.

Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza,



atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán el régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley.”

**Resultados de la votación, indicación N° 163:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6260](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6260)

**En votación:**

**IND 164** (02 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga) Para añadir un nuevo inciso al artículo 60 (Estatuto de la función pública administrativa) por el siguiente:

“Se reconoce el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga de quienes se desempeñen en la Administración Pública, salvo que en este último caso se paralicen servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público. La ley que regulará el ejercicio y límites de los derechos que indica este inciso.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 164:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	6	2	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6261](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6261)

**En votación:**

**IND 165** (22 Uribe, Ampuero, Giustinianovich, Millabur, Andrade, Chinga, Álvarez, C.Gómez, Bacian, Aguilera) Para agregar un inciso nuevo al artículo 60 del siguiente tenor:

“Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de la administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.”

**Resultados de la votación, indicación N° 165:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	4	2	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6263](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6263)

**“Artículo 61.- Formación y perfeccionamiento permanente.** El Estado deberá fortalecer la profesionalización y modernizar aquellos servicios que más lo requieran, estableciendo mecanismos de movilidad y capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio.

Corresponderá a la ley establecer un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos.”

**En votación:**

**IND 166** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 61 (Formación y perfeccionamiento permanente).

**Resultados de la votación, indicación N° 166:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	24	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6264](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6264)

**“Artículo 62.- Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.**

El Estado será responsable por los daños que causen por falta de servicio o por otro título de imputación determinado en la Constitución y ley. El Estado podrá siempre repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en dolo o falta personal. La ley regulará el régimen jurídico de responsabilidad de la Administración Pública.”

**En votación:**

**IND 167** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 62 (Responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado) por el siguiente:

“Artículo 62.- Responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado será responsable por los daños que sus órganos causen a particulares por falta de servicio u otro título de imputación determinado en la Constitución o en la ley.

El Estado podrá siempre repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en dolo o imprudencia temeraria.

La ley regulará, en lo demás, el régimen jurídico de esta responsabilidad.”.

**IND 168** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para trasladar el artículo 62 inmediatamente después del artículo 59.



**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 167 y 168:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	1	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6266](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6266)

**“Artículo 63.- Sobre la modernización del Estado.** Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y estructuras, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, tecnológicas y culturales de cada localidad. La modernización del Estado se basa en la innovación, la relación con las personas, los ecosistemas y el mejor uso de los recursos que dispone el Estado para el cumplimiento de estos fines.

Existirán Consejos asesores de los órganos ejecutivos nacional y regionales, encargados de elaborar el diagnóstico del funcionamiento de los servicios públicos, proponer y monitorear planes de modernización en las instituciones públicas, y las demás atribuciones que establezca la Constitución y las leyes. Estos Consejos velarán prioritariamente por la modernización de los servicios públicos brindados en las localidades de menores recursos.”

**En votación:**

**IND 169** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 63 (Sobre la modernización del Estado), por el siguiente:

“Artículo 63. Sobre la modernización del Estado. Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.

El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos.

El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las



personas y promover la gestión eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y comunidades.”

**Resultados de la votación, indicación N° 169:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6268](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6268)

**IND 170** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 63. Inc. 2.: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 2. **Rechazada por incompatible.**

**En votación:**

**IND 171** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para incorporar un nuevo artículo 63b, al siguiente tenor:

“Artículo 63b.- Órgano especializado para la modernización de la Administración Pública. Existirá un órgano especializado encargado de la elaboración de planes para promover la modernización de la Administración del Estado, monitorear la implementación de los mismos en las distintas instituciones públicas, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás atribuciones que establezca la ley.

El legislador se encargará de determinar la denominación de este órgano, además de su integración y procedimientos internos, estableciendo directrices y lineamientos que permitan una constante modernización de las instituciones públicas nacionales, regionales y locales, contando con unidades especializadas en cada gobierno regional y comunal.”

**Resultados de la votación, indicación N° 171:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6269](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6269)

“**Artículo 64.-** El Estado tiene la obligación de proveer servicios públicos universales y de calidad de manera directa para garantizar los derechos humanos de todas las personas y comunidades que habitan el territorio plurinacional, reducir las desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales y de género, y fomentar el desarrollo de todas las potencialidades de las personas.

Los servicios públicos universales y de calidad son la base de una sociedad justa y sostenible y no son una mercancía. Éstos abarcan un abanico de dimensiones vitales necesarias para vivir una vida digna y un desarrollo humano sostenible, y entre ellos figuran los servicios de salud y de cuidados, la seguridad social, la educación, el agua y el saneamiento, la vivienda, la alimentación, la energía, las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de residuos, sin que esta enumeración sea taxativa.”

El convencional **Sr. Uribe** fundamentó la indicación N° 175, señalando aquella propone generar principios orientados a que el Estado incentive o apoye comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos. Asimismo, fomenta que las entidades territoriales participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística.

**En votación:**

**IND 172** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 64. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 64.

**Resultados de la votación, indicación N° 172:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
3	22	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6271](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6271)

**En votación:**

**IND 173** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para sustituir el artículo 64 por el siguiente:

“Artículo 64. De los servicios públicos. Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente

El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial.”

**Resultados de la votación, indicación N° 173:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6272](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6272)

**En votación:**

**IND 174** (12 Pustilnick, Martínez) Para añadir un nuevo inciso al artículo 64, al



siguiente tenor:

“El Estado definirá, monitoreará e implementará las políticas públicas, procurando que el ámbito geográfico supere el nivel regional y que sean necesarias para resguardar el carácter único e indivisible del Estado de Chile.”

**Resultados de la votación, indicación N° 174:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	0	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6274](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6274)

**En votación:**

**IND 175** (22 Uribe, Ampuero, Giustinianovich, Millabur, Andrade, Chinga, Álvez, C.Gómez, Bacian, Aguilera) Para agregar dos incisos nuevos al artículo 64 del siguiente tenor:

Inciso nuevo.- “El Estado deberá incentivar y apoyar a aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos de estos servicios.”

Inciso nuevo.- "Las entidades territoriales participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística, en la forma prescrita por la ley.”

**Resultados de la votación, indicación N° 175:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	7	4	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6276](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6276)

**En votación:**

**IND 176** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para trasladar el artículo 64 inmediatamente después del artículo 58.

**Resultados de la votación, indicación N° 176:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6277](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=900&prmlIdVotacion=6277)

**“Artículo 65.-** Todo servicio público universal y de calidad deberá:

1. Ser universal y accesible para todas las personas tanto territorial como económicamente, sin discriminación;
2. Diseñarse a partir de las necesidades de largo plazo de las personas y comunidades a las que sirve, adaptándose a sus cambios y mejorando continuamente las condiciones de su prestación;
3. Contribuir a afrontar la crisis ecológica, incorporando los principios de sostenibilidad ambiental y justicia intergeneracional en sus decisiones;
4. Contar con estándares éticos, de excelencia institucional y de igualdad en su gobernanza, financiamiento y gestión, combatiendo activamente la corrupción y la discriminación en todas sus formas, incluida la de géneros;
5. Gestionarse democráticamente, garantizando la participación de las comunidades, usuarios y trabajadores en el diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo del servicio, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria de manera transparente;
6. Incorporar mecanismos de rendición de cuentas, de monitoreo por parte de las personas usuarias del servicio y de respuesta efectiva a sus requerimientos;
7. Garantizar un trabajo decente para sus funcionarios y funcionarias, incluyendo



condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, carrera funcionaria moderna y efectiva, y el respeto y promoción de los derechos laborales y sindicales, especialmente los derechos a sindicalización, huelga y negociación colectiva;

8. Incorporar garantías de protección de los servicios públicos contra la comercialización, financiarización y la búsqueda de fines de lucro;

9. Evitar el retroceso de las condiciones ofrecidas por el servicio frente a cambios en la disponibilidad presupuestaria; y

10. Contar con un financiamiento necesario y sostenible a largo plazo, en base a una política fiscal al servicio de los derechos humanos.”

**En votación:**

**IND 177** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 65.

**Resultados de la votación, indicación N° 177:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6278](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6278)

**IND 178** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Ind. Supresiva: Para eliminar “universal y de calidad”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 179** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “tanto territorial como económicamente,”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 180** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 7. Ind. Supresiva: Para eliminar “, especialmente los derechos a sindicalización, huelga y negociación colectiva”.

**Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 181** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 8. Ind Supresiva: Para eliminar “Financiarización”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 66.-** Todas las personas tienen el deber de contribuir al sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho y los servicios públicos sobre la base de su capacidad contributiva.

La política fiscal debe ser socialmente justa y se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos humanos y de las demás instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, la política fiscal deberá asegurar una recaudación suficiente para asegurar estos fines.

La política fiscal debe promover la igualdad sustantiva de todas las personas a través de un sistema financiero y tributario basado en los principios de justicia, equidad, solidaridad y progresividad, con capacidad para redistribuir el ingreso y la riqueza.

El Estado deberá financiar las medidas de acción positiva que se dispongan para la remoción de las desigualdades sociales, económicas, culturales y de género, y para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de todas las personas.

La política fiscal debe promover un desarrollo ambientalmente sostenible y la responsabilidad intergeneracional con el propósito de transitar hacia una economía regenerativa y justa.

La política fiscal debe diseñarse e implementarse de forma transparente, participativa y con instrumentos de rendición de cuentas. Todas las personas tienen derecho a recibir información acerca de la política fiscal de forma veraz y oportuna, la que deberá estar disponible de forma pública. Se establecerán mecanismos de participación de la sociedad civil durante todas las fases de diseño, elaboración y ejecución de la política fiscal.

El Estado promoverá un sistema financiero internacional socialmente justo, basado en los anteriores principios, así como en los de cooperación, solidaridad y reciprocidad.

La administración tributaria, en el desarrollo de sus labores de fiscalización y control de la evasión y elusión, contará con facultades para requerir información de organismos públicos y privados, sin previa autorización judicial, así como rangos de autonomía respecto a las autoridades de gobierno.”

**En votación:**



**IND 182** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 66.

**Resultados de la votación, indicación N° 182:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	1	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6280](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6280)

**IND 183** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “Social y”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 184** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.2. Ind. Supresiva: Para eliminar “Social y”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 185** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.2. Ind. Supresiva: Para eliminar “Asimismo, la política fiscal deberá asegurar una recaudación suficiente para asegurar estos fines”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 186** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.4. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “sociales, económicas, culturales y de género,” por “de todo tipo”.

**IND 187** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.7. Ind. Supresiva: Para eliminar “internacional”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 188** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 66. Inc 8. Ind Supresiva: Para eliminar “sin previa autorización judicial”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

El Coordinador, **Sr. Gómez**, propuso a la Comisión votar en conjunto todas

aquellas indicaciones de carácter supresivo formuladas respecto de los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del texto sistematizado de las iniciativas aprobadas en general. **Hubo acuerdo unánime de la Comisión para proceder de esta manera.**

**En votación:**

**IND 189** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 67.

**IND 191** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 68.

**IND 192** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 69.

**IND 194** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 70.

**IND 195** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 71.

**IND 196** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 72.

**IND 197** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 73.

**IND 198** (01 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete, Castillo) Para suprimir el artículo 74.





**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 189, 191, 192, 194, 195, 196, 197 y 198:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6282](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=900&prmIdVotacion=6282)

**IND 190** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para sustituir el artículo 67 por el siguiente tenor:

“El Estado definirá, monitoreará e implementará las políticas públicas, siempre que el ámbito geográfico supere el nivel regional”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 193** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 69. Inc 1. Ind Sustitutiva: para reemplazar “O idoneidad técnica” por “Y la idoneidad técnica”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 199** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “los pueblos,”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 200** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 3. Ind. Aditiva: Para agregar “, mediante la dictación de una ley,” , luego de El Estado. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 201** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 4. Ind. Supresiva: Para eliminar “de quórum calificado”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 75.-** Se reconoce la ruralidad como una expresión territorial y personal de



vida que, en atención a sus características históricas, materiales, ambientales y espirituales, requiere de un tratamiento y regulación especial en atención a los principios de solidaridad, plurinacionalidad e interculturalidad. Asimismo, sin perjuicio de otros derechos fundamentales específicos, se reconoce la ciudadanía rural como manifestación legítima y propia de la vida rural, siendo conformada por el campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, como sujetos históricos de especial protección constitucional, portadores de una cultura, conocimiento y cosmovisión propia, siendo deber del Estado garantizar el desarrollo armónico y en convivencia de los habitantes de la ruralidad en sus diversidades etarias, de género, nacionales, étnicas, productiva, entre otras.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

La convencional **Sra. Reyes** hizo la defensa de las indicaciones N° 202 señalando que constituye una propuesta contundente tendiente a conseguir el quórum de  $\frac{2}{3}$  en el Pleno, que, además, ha sido validada por organizaciones sociales durante un proceso de trabajo colaborativo. Aclaró que la indicación respectiva busca reducir el tamaño del artículo, manteniendo su espíritu original, dándole sentido a los artículos siguientes.

El convencional **Sr. Jürgensen** declaró haber analizado con profundidad la temática de ruralidad, afirmó que todas las indicaciones presentadas por su colectivo buscan aclarar conceptos y resguardar la igualdad ante la ley y laicidad del Estado, así como también delimitar las competencias de las otras comisiones temáticas a través de indicaciones supresivas.

#### **En votación:**

**IND 202** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para sustituir el artículo 75 por el siguiente:

“Artículo 75.- El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar.

El Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales.”

#### **Resultados de la votación, indicación N° 202:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6286](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6286)

**IND 203** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Supresiva: Para eliminar “plurinacionalidad”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 204** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 75. Ind Supresiva: Para eliminar “espirituales”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 205** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por “indígenas”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 206** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Supresiva: Para eliminar “nacionales,”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas N° 207, 208, 209, 210, 211 y 212 aplicables a los artículos 76, 77, 78, 79 y 80.**

**“Artículo 76.-** La ruralidad comprende aquel espacio territorial o hábitat donde se ejerce la vida, la producción, recolección y renovación de los bienes comunes de la tierra, y especialmente el uso, aprovechamiento y cuidado de las aguas marino-costeras, lacustres y de los ríos y otros cuerpos de agua.

La tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas rurales poseen una función social, cultural y ecológica fundamental e irreemplazable debiendo el Estado asegurar su protección, conservación y fomentar su restauración.”

**IND 207** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 76.

**“Artículo 77.-** El Estado debe fomentar la equidad entre los territorios rurales y urbanos, reconociendo que cada uno tiene particularidades respecto a los bienes naturales comunes y sus necesidades de desarrollo.”

**IND 208** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 77.

**“Artículo 78.-** Los territorios rurales serán gobernados y administrados por las entidades territoriales mandatadas por esta Constitución, con especial atención a sus modos de vida, sistemas de conocimiento, necesidades ecológicas, sociales, económicas, culturales y de conectividad de cada territorio y sus habitantes.”

**IND 209** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 78.

**IND 210** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 78. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 78.

**“Artículo 79.-** El Estado y las entidades territoriales deben establecer un trato equitativo en cada territorio, en la toma de decisiones, el presupuesto y la ejecución de este. Equiparando el flujo de recursos financieros para educación, cultura, organización, salud, economía e infraestructura básica de caminos, puentes, viviendas, conectividad y vialidad de alta calidad con el medio rural.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**IND 211** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 79.

**“Artículo 80.-** El campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores, otras personas que trabajan en zonas rurales y sus organizaciones tienen derecho a participar en todas las instituciones creadas para ejercer el poder popular, en la definición de políticas agrícolas y alimentarias, recogiendo las especificidades de los territorios y el bienestar de la población rural, su desarrollo económico,



productivo y la preservación de la naturaleza.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**IND 212** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 80.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones N° 207, 208, 209, 210, 211 y 212 para suprimir los artículos 76, 77, 78, 79, 80:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6288](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6288)

**IND 213** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 80. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por indígenas. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 214** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 80. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “el poder popular” por “la democracia”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 81.-** Es deber de las entidades territoriales fomentar y garantizar la participación efectiva de quienes habitan la ruralidad, en el diseño, desarrollo e implementación de las políticas de ordenamiento territorial y políticas agrícolas, promoviendo y habilitando mercados locales, circuitos cortos de comercialización de alimentos, incluidas las compras y ventas directas, de acuerdo con sus usos y costumbres, sin perjuicio de la asociatividad y sus derechos colectivos.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**



**IND 215** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 81 por lo siguiente:

Artículo 81.- El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen.

**Resultados de la votación, indicación N° 215:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	3	4		25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6291](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6291)

**En votación:**

**IND 216** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para sustituir el artículo 81 por el siguiente:

“El Estado y las entidades territoriales incorporarán la dimensión de pertinencia territorial en el diseño e implementación de las políticas públicas que puedan tener repercusiones en la ruralidad en su calidad de expresión territorial.

El legislador deberá propender a adoptar medidas que permitan la materialización efectiva de este mandato.” **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 82.-** El Estado debe intervenir y regular los mercados, procesos productivos y comercialización de bienes y servicios silvoagropecuarios, en función del bien común y las oportunidades de desarrollo económico local del país.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

La convencional **Sra. Pustilnick** informó el retiro de la indicación N° 218.

El convencional **Sr. Chinga** defendió la indicación N° 219, señalando que su objetivo es agregar además de comidas, bienes, artesanías, alimentos u otros relacionados con la ruralidad.



El convencional **Sr. Álvarez** señaló que la indicación N° 220 que sustituye el artículo 82, en razón de mantener el corazón de la norma y precisando mejor su definición, su objetivo es generar los mecanismos para promover y proteger la economía campesina. Posteriormente, definió el concepto de “circuitos cortos” como forma de comercio basada en la venta directa de productos frescos o de temporada, reduciendo al mínimo la intermediación entre productores y consumidores. Recalcó la importancia del intercambio como forma de relación económica y cultural, especialmente en los pueblos del norte de Chile.

El convencional **Sr. Mena** explicó que el objetivo de la indicación supresiva N° 217 se basa en que las ferias libres y circuitos cortos no deben estar constitucionalizados.

**En votación:**

**IND 217** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el artículo 82.

**Resultados de la votación, indicación N° 217:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6294](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6294)

**IND 218** (03 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 82 por el siguiente: Artículo 82. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización de alimentos. **Retirada por los autores.**

**En votación:**

**IND 219** (07 Chinga) Para sustituir el artículo 82 por el siguiente:

Artículo 82. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes, artesanías, alimentos u otros relacionados con

la ruralidad.

Resultados de la votación, indicación N° 219:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
14	6	5	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6297](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6297)

**IND 220** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 82 por lo siguiente: “Artículo 82. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de alimentos”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 221** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 82. Ind. Supresiva: Para eliminar “intervenir y”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 83.-** El Estado debe fomentar desde el ámbito público el desarrollo de tecnologías y conocimientos para la agricultura de base agroecológica, incluyendo la ciencia y los saberes tradicionales. Asimismo, debe garantizar los servicios tecnológicos, velar la transparencia de las innovaciones tecnológicas y asegurar el financiamiento hacia la transición agroecológica de la ruralidad.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

En votación:

**IND 222** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el artículo 83.

Resultados de la votación, indicación N° 222:

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------



9	16	0	0	25	RECHAZADA
---	----	---	---	----	-----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6299](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6299)

**En votación:**

**IND 223** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 83 por el siguiente:

Artículo 83. El Estado reconoce las prácticas e innovaciones materiales e inmateriales de las comunidades rurales como patrimonio común.

Se deberá fomentar procesos educativos, formales e informales, con temáticas locales, tanto históricas, fundacionales, étnicas, ecológicas, geológicas y económicas.

Se fomentará el desarrollo, financiamiento y acceso a tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena, tanto de base científica, como de los saberes tradicionales.

**Resultados de la votación, indicación N° 223:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	6	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6301](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6301)

**IND 224** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 83. Ind. Aditiva: Para agregar “por” entre “velar” y “la transparencia”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 84.-** Serán protegidos por el Estado la tierra, los territorios, el agua, la biodiversidad y los ecosistemas en su función social, cultural y ecológica fundamental, debiendo regular su uso, prohibir su deterioro, fomentar su restauración, así como limitar, prohibir y revertir su concentración.”



Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 225** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 84. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 84.

**Resultados de la votación, indicación N° 225:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	16	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6303](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6303)

**En votación:**

**IND 226** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 84 por el siguiente:

Artículo 84.- El Estado reconoce la función social y ecológica de la tierra, el agua, el mar, por lo que deberá regular su uso, fomentar su restauración y manejo ecológico, así como limitar y prevenir la concentración de su propiedad.

El ordenamiento del territorio rural deberá proteger las aguas, conservar los suelos y prevenir su degradación.

**Resultados de la votación, indicación N° 226:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	6	2	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6305](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6305)

**En votación:**

**IND 227** (20 Velásquez) Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 84:

“Esta protección estatal, el manejo ecológicamente responsable, la prevención y restauración ante la degradación ambiental, estarán determinados por la ley y los estatutos regionales”.

**Resultados de la votación, indicación N° 227:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
13	8	4	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6306](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6306)

“**Artículo 85.-** Estado debe asegurar la protección de nuestro patrimonio genético forestal de semillas locales y variedades autóctonas de ganado menor; la protección de la diversidad biogeográfica del país; el empleo eficiente del agua mediante la mecanización técnica del riego; la utilización adecuada de los distintos tipos de suelos; y la explotación adecuada de los recursos naturales basados en su capacidad biológica de reposición.”

Se abrió la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 228** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 85. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 85.

**Resultados de la votación, indicación N° 228:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	16	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6308](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6308)

**En votación:**

**IND 229** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 85 por el siguiente:

“Artículo 85.- Es deber del Estado garantizar el uso, manejo y libre intercambio de semillas y material vegetal de propagación.

No se permitirá la privatización de la capacidad reproductiva de plantas y animales.”

**Resultados de la votación, indicación N° 229:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	9	0	0	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6310](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6310)

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas N° 230, 231, 232 y 233 aplicables a los artículos 86 y 87.**

“**Artículo 86.-** El Estado debe declarar patrimonio natural de la nación la biodiversidad de las poblaciones y ejemplares de especies de fauna y flora nativa, y tengan derecho a su existencia, conservación, reconocimiento, restauración y preservación en sus ecosistemas naturales, así como la garantía de su permanencia, investigación y manejo óptimo respetando derechos y costumbres de las comunidades locales.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 230** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera,



Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 86.

**IND 231** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 86. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 86.

**“Artículo 87.-** El Estado debe reconocer y mitigar al máximo los daños ambientales provocados por la inacción de este, referidos a la desertificación y desertización; la falta de agua para consumo humano; la homogeneización del paisaje rural; la merma de tipos forestales que han sucumbido al avance de la fruticultura, la viticultura, la ganadería y otras explotaciones compuestas de especies forestales y animales que no tengan reguladores naturales. Asimismo, el Estado se debe comprometer a contrarrestar el cambio climático, sus causas, consecuencias y modelos de desarrollo que pongan en peligro la naturaleza y los seres humanos.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**IND 232** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 87.

**IND 233** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 87. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 87.

**Resultados de la votación conjunta, indicación supresivas N° 230, 231, 232 y 233 a los artículos 86 y 87:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	1	1	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6313](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6313)

**“Artículo 88.-** Se debe garantizar la alimentación como derecho fundamental e inalienable de los pueblos de Chile, indisolublemente ligado a la soberanía alimentaria y a la



protección de los sistemas campesinos de uso y conservación de semillas.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 234** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 88. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 88.

**Resultados de la votación, indicación N° 234:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	16	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6314](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6314)

**En votación:**

**IND 235** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 88 por el siguiente:

“Artículo 88.- Las personas y los pueblos tienen el derecho fundamental a la alimentación. Las políticas agropecuarias, pesqueras y alimentarias del país deben ordenar su acción en pleno respeto de este derecho.

El Estado garantizará los mecanismos para que los habitantes del país tengan acceso económico, físico y oportuno a una alimentación sana, saludable, diversa, nutricionalmente completa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada.

Será deber del Estado apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal, la pesca artesanal, las ferias libres, los mercados locales y el canal alimentario agropesquero tradicional como pilares fundamentales de la producción y abastecimiento de alimentos.”

**Resultados de la votación, indicación N° 235:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	5	4	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6316](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6316)

**En votación:**

**IND 236** (20 Velásquez) Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 88:

“Esta garantía estatal y mecanismos de acceso a la alimentación serán establecidos por la ley y los estatutos regionales”.

**Resultados de la votación, indicación N° 236:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	14	1	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6318](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6318)

“**Artículo 89.-** El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho fundamental e inalienable de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 237** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 89. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 89.

**Resultados de la votación, indicación N° 237:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	16	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6319](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6319)

**En votación:**

**IND 238** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para suprimir la expresión “e inalienable” después de “derecho fundamental” en el artículo 89.

**Resultados de la votación, indicación N° 238:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	3	4		25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6321](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6321)

**En votación:**

**IND 239** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para agregar un inciso segundo al artículo 89 del siguiente tenor:

“El Estado regulará los plaguicidas, agroquímicos, aditivos y alimentos transgénicos sobre la base del principio precautorio. No se permitirá la siembra de cultivos transgénicos”.

**Resultados de la votación, indicación N° 239:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
12	9	4	0	25	RECHAZADA





El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6324](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6324)

**En votación:**

**IND 240** (20 Velásquez) Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 89:

“La ley y los estatutos regionales regularán el sistema de producción alimentaria y el uso de agroquímicos tales como pesticidas, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematocidas que no pongan en grave riesgo extintivo la fauna polinizadora nativa”.

**Resultados de la votación, indicación N° 240:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	12	5	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6326](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6326)

**En votación:**

**IND 241** (21 Giustinianovich) Para agregar los siguientes incisos al artículo 89:

“La ley deberá regular los plaguicidas, agroquímicos, aditivos y transgénicos sobre la base del principio precautorio.

No se permitirá el uso de plaguicidas ni agroquímicos altamente peligrosos que pongan en riesgo la salud humana y los ecosistemas.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 241:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	7	2	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:

[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6328](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6328)

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones N° 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 y 256, todas ellas buscan suprimir los artículos 92, 93, 94, 95 y 96.**

**“Artículo 90.-** El Estado protegerá la salud humana, los ecosistemas y la soberanía alimentaria, velando por alimentos sanos y libres de contaminación y su producción, mitigando al máximo el uso de agroquímicos, plaguicidas, agentes biológicos nocivos y la introducción de organismos genéticamente modificados que se demuestre que sean dañinos para la salud. Asimismo, debe garantizar que los alimentos y el derecho a la alimentación no dependan de los intereses económicos del mercado e intervenga en su regulación.”

**IND 242** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 90.

**IND 243** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 90. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 90.

**“Artículo 91.-** El Estado velará porque todas y todos los habitantes del país tengan en todo momento acceso físico y económico a una alimentación saludable, diversa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada, que garantice una vida libre de hambre y permita un desarrollo mental, físico y espiritual digno y satisfactorio, promoviendo el derecho a la alimentación ya sea a través de la producción de autoconsumo, teniendo garantizado el acceso a tierra donde desarrollarlo, y/o mediante la adquisición de alimentos en sistemas de distribución, elaboración y comercialización establecidos.”

**IND 244** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 91.

**IND 245** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 91. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 91.

**“Artículo 92.-** Los tratados internacionales que Chile suscriba o adhiera, deberán respetar la soberanía alimentaria, la biodiversidad y modos de vida del campesinado,

pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en la ruralidad.”

**IND 246** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 92.

“**Artículo 93.-** El Estado debe asegurar la desprivatización del agua y su uso prioritario de forma inalienable en el orden siguiente: 1º) consumo humano y ecosistémico, 2º) para usos sanitarios humanos de poblaciones de territorios rurales o de caseríos urbano-rurales, 3º) para el mantenimiento de los caudales ecológicos de los cursos de agua y, 4º) para el uso productivo directo de alimentos, el combate de incendios forestales, recreación, otros.”

**IND 249** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 93.

**IND 250** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 93. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 93.

“**Artículo 94.-** El Estado debe asegurar la planificación del uso de las Cuencas Hidrográficas en armonía con la planificación territorial y la participación efectiva de los distintos actores u organizaciones que usan el recurso y/o administran su acceso y/o se posicionan físicamente sobre o colindantes a ellas.”

**IND 251** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 94.

**IND 252** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 94. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 94.

“**Artículo 95.-** El Estado debe garantizar el desarrollo de la mujer campesina y la efectiva realización de sus derechos, con especial referencia a los ámbitos del cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico; a una vida libre de violencia; a sus derechos sexuales y reproductivos; a la justicia feminista; a formar parte de la democracia paritaria y los derechos laborales dignos, donde se incluya a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores



presentes en la ruralidad.”

**IND 253** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 95.

“**Artículo 96.-** El Estado debe promover la equidad de género en sus diversas labores ligadas a la agricultura y a las labores forestales. Debiendo garantizar la equidad en los trabajos rurales y forestales, en las remuneraciones y en el acceso a trabajos dignos y de alta productividad.”

**IND 255** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 96.

**IND 256** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 96. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 96.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255 y 256, todas ellas buscan suprimir los artículos 92, 93, 94, 95 y 96.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6331](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6331)

En consecuencia, las indicaciones N° 247 y 248 fueron consideradas rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado.

**IND 247** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 92. Ind. Supresiva: Para eliminar “la soberanía alimentaria”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 248** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 92. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por indígenas. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**



**IND 254** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 95. Ind. Supresiva: Para eliminar “a sus derechos sexuales y reproductivos; a la justicia feminista;”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 97.-** Sin perjuicio de otros derechos fundamentales generales, se reconoce la actividad laboral, ejercida y desarrollada en la ruralidad, como una forma especial de trabajo. El legislador establecerá condiciones y derechos especiales para aquellos trabajadores, chilenos o extranjeros, que se desempeñen, indefinida o temporalmente, en faenas de agricultura, silvicultura, agroindustria, pesca artesanal, extracción de productos del mar y otras actividades afines, particularmente en lo referido a sus condiciones de higiene y seguridad laboral, su exposición a los agrotóxicos y la prevención de las enfermedades profesionales.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Álvarez** fundamentó N° 258 pretende sustituir el artículo 97 del texto sistematizado y establece un mandato al Estado para reconocer la actividad laboral que se desarrolla en la ruralidad, afirmó se suele olvidar que los territorios rurales deben enfrentar distintos desafíos, por lo mismo, la actividad laboral precaria no es una excepción y requiere un enfoque territorial e intersectorial que aborde la identidad lingüística, cultural, social y económica de las zonas rurales, la generación de oportunidades laborales y el fortalecimiento de las condiciones del trabajo rural. Por tanto, aclaró que la indicación busca distinguir el trabajo rural del urbano, lo que justifica un tratamiento diferenciado en materias como seguridad social.

El convencional **Sr. Chinga** explicó la indicación N° 259, en tanto, propuesta de redacción alternativa que busca combatir la precarización y la vulneración de derechos del trabajo rural.

#### **En votación:**

**IND 257** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 97. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 97.

**Resultados de la votación, indicación N° 257:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	19	0	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6334](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6334)

**En votación:**

**IND 258** (03 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 97 por el siguiente:

Artículo 97.- El Estado reconoce la actividad laboral, ejercida y desarrollada en la ruralidad, como una forma especial de trabajo, garantizando sus derechos laborales y de seguridad social.

**Resultados de la votación, indicación N° 258:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	2	6	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6335](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6335)

**IND 259** (07 Chinga) Para sustituir el artículo 97 por el siguiente: “Artículo 97. El Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo, el acceso a un sistema previsional, normas de sindicalización y mecanismos de fiscalización que sean especiales, en reconocimiento y consideración de las necesidades y particularidades del trabajo rural.”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 98.-** El campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, tienen derecho a formar e integrar asociaciones, sindicatos, cooperativas u otras organizaciones gremiales,



a fin de proteger sus intereses y negociar colectivamente, cuando ello proceda.

Una ley regulará el proceso de constitución, finalidades, participación, capacitación, extensión y financiamiento de la sindicalización campesina y organizaciones rurales.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 260** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 98.

**IND 261** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 98. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 98.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 260 y 261:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0		25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6336](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6336)

“**Artículo 99.-** El Estado reconoce especial protección a los diversos conocimientos, prácticas e innovaciones generadas por la ruralidad, incluidos los sistemas tradicionales de agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca artesanal, apicultura, ganadería, recolección, cultivo y cuidado de semillas, alimentación, medicina tradicional y artesanías rurales.

El Estado debe fomentar el desarrollo, financiamiento y acceso a tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena, la investigación científica, los saberes tradicionales, y garantizar los servicios tecnológicos, velando por la transparencia sobre las innovaciones tecnológicas, sus impactos y alternativas.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los



convencionales constituyentes. No hubo intervenciones.

**En votación:**

**IND 262** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 99. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 99.

**Resultados de la votación, indicación N° 262:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	16	1	0	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6338](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6338)

**En votación:**

**IND 263** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 99 por el siguiente:

Artículo 99.- El Estado apoyará y promoverá la transición agroecológica, considerando la ciencia y los conocimientos tradicionales, fomentando el desarrollo de tecnologías y garantizando mecanismos de apoyo técnico y financiero para esta transición.

**Resultados de la votación, indicación N° 263:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
16	6	3	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6339](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6339)

Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas N° 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 272, 277 y 278, aplicables a los



**artículos 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106.**

**“Artículo 100.-** Es deber del Estado garantizar al campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores y otras personas que trabajan en zonas rurales, el uso, aprovechamiento y libre intercambio de semillas y animales de cría, prohibiendo la privatización, registro o patentamiento de los conocimientos y tecnologías vinculadas a la capacidad reproductiva de plantas y animales, así como los procesos vitales, componentes y estructuras celulares, genéticas o químicas.”

**IND 264** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 100.

**IND 265** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 100. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 100.

**“Artículo 101.-** El Estado, en sus diferentes entidades territoriales, tiene el deber de reconocer y potenciar los legados ancestrales en el amplio espectro de las dimensiones cotidianas de la vida, tanto en su cosmovisión como en su relación con el ambiente, incluyendo la medicina nativa y sus prácticas, quedando ligada su propiedad intelectual al campesinado, los pueblos originarios, pescadoras y pescadores, recolectoras y recolectores u otras personas que trabajan en zonas rurales que las hubieren desarrollado, con base en estudios debidamente acreditados.

Para ello, en los procesos educativos formales se deberá destinar por ley un número mínimo de horas académicas en los planes de educación regional y local, orientadas a temáticas locales, tanto históricas, fundacionales, étnicas, ecológicas, geológicas y económicas, de escala territorial, provincial y regional, como parte del identitario de la nueva óptica de organización estatal.”

**IND 266** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 101.

**IND 268** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 101. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar el inc. 2 del artículo 101.

**“Artículo 102.-** Se entenderá por zona rural aquella comuna o agrupación de

comunas que cuente con la cantidad de pobladores o la densidad demográfica que determine la ley, así como también todo espacio que se encuentre fuera del radio urbano.

En la configuración de zonas rurales se considerarán elementos como la interrelación dinámica entre las personas, el desarrollo de actividades socioeconómicas comunes y los perfiles ecosistémicos del sector, empleando siempre las comunas como punto de referencia.

El legislador deberá determinar los criterios para establecer la cantidad de pobladores y la densidad demográfica para que una zona determinada sea considerada rural, procurando establecer parámetros que aseguran una actualización constante de dichas cifras.”

**IND 269** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 102.

“**Artículo 103.-** El Estado deberá garantizar la no discriminación arbitraria entre zonas urbanas y rurales, sin perjuicio de la aplicación de criterios de diferenciación y pertinencia territorial en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Asimismo, el Estado deberá promover el desarrollo integral y armónico de las zonas rurales, velando por la equidad horizontal en la provisión de bienes y servicios públicos para asegurar una cobertura efectiva de las necesidades básicas de la población.”

**IND 270** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 103.

“**Artículo 104.-** El estado reconoce la existencia de la violencia patronal y rural en contra de las mujeres y niñas que viven en sectores rurales y campesinos debiendo adoptar las medidas adecuadas para modificar los patrones culturales que sustentan la discriminación hacia las mujeres y en los comportamientos estereotipados.”

**IND 271** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 104.



**IND 272** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 104. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 104.

**“Artículo 105.-** El Estado debe velar y generar políticas públicas que protejan a las mujeres y niñas rurales de la sequía y escasez hídrica, el riesgo de incendios producidos por la industria forestal, la explotación sexual y prostitución forzada, la desigualdad educacional, la falta de acceso y propiedad sobre la tierra, la violencia patriarcal y patronal rural, la invisibilización de sus derechos políticos y el trabajo no remunerado.”

**IND 273** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 105.

**“Artículo 106.-** El Estado además debe garantizar los Derechos de las Mujeres y Niñas, especialmente de aquellas que viven en espacios Rurales, a vivir una vida libre de discriminación basada en el sexo, así como también debe implementar los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento de dichos derechos, en concordancia con los tratados internacionales relativos a la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación en contra de la mujeres, firmados y ratificados por Chile, y que se encuentren vigentes.”

**IND 277** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 106.

**IND 278** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 106. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 106.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones supresivas N° 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 272, 277 y 278 aplicables a los artículos 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 106.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
25	0	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6343](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6343)



En consecuencia, las indicaciones N° 267, 274, 275y 276 se entienden rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado.

**IND 267** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 101. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar el inc. 1 del artículo 101. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 274** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 275** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Supresiva: Para eliminar “patriarcal y patronal rural”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 276** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “sus derechos políticos” por “todos sus derechos”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 107.-** Es deber del Estado velar por la protección de la integridad física y psicológica de las Mujeres y Niñas Rurales con perspectiva Ecofeminista y erradicar su discriminación y violencia en todas sus formas, poniendo especial énfasis en aquellas vulneraciones específicas del mundo rural como las siguientes: la sequía y escasez hídrica, el riesgo de incendios derivados de la industria forestal, la explotación sexual y prostitución forzada, la explotación de su capacidad reproductiva, la desigualdad nutricional, la desigualdad educacional, la falta de acceso y propiedad de la tierra, la violencia patronal rural, la baja participación en decisiones políticas y comunitarias, las tareas de cuidado no remuneradas y el ejercicio de la maternidad.”

El convencional **Sr. Chinga** explicó la indicación N° 281 señalando que proviene de una necesidad como país en la prevención de violencia contra el campesinado y evitar más muertes por la defensa de los derechos y el medioambiente. Invitó a aprobar la norma en memoria de las defensoras del medioambiente, Javiera Rojas, Macarena Valdés, Emilia Herrera, entre otras.

#### **En votación:**

**IND 279** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian,



Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 107.

**IND 280** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 107. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 107.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 279 y 280:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	3	3	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6346](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6346)

**IND 281** (07 Chinga) Para sustituir el artículo 107 por el siguiente:

Artículo 107.- Es deber del Estado asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar a las y los campesinos, comunidades indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales de detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a no a no ser acosados, desalojados, perseguidos, detenidos arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos.  
**Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas N° 282, 283, 284, 286, 289, 290, 291, aplicables a los artículos 108, 109, 110, 111 y 112.**

**“Artículo 108.-** El Estado debe asegurar el derecho de las mujeres y niñas rurales y campesinas de reunirse en espacios seguros, independientes y autónomos, conocer y proteger su historia, economía y tradición práctica ecológica y feminista, sus saberes tradicionales, impidiendo su apropiación y deberá protegerlos del extractivismo epistémico y mercantilización.”

**IND 282** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 108.

**IND 283** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 108. Ind. Supresiva: Para eliminar el

artículo 108.

**“Artículo 109.-** El Estado debe garantizar a las mujeres y niñas rurales y campesinas el derecho de acceso a las comunicaciones e información, incluyendo el acceso a Internet y a la conectividad digital no pudiendo aludir a la falta de dispositivos digitales, ni de recursos económicos, de situación geográfica o de conocimientos informáticos o digitales.”

**IND 284** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 109.

**“Artículo 110.-** El Estado velará porque las mujeres y niñas rurales y campesinas accedan en condiciones de igualdad a salud física y mental y en particular a centros de atención sanitaria, información, fomentará el respeto y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, debiendo ser esta promoción preventiva, y con énfasis en perfeccionar la institucionalidad sanitaria destinada a los sectores rurales, así como su planificación territorial y la calidad de la prestación de sus servicios, e instalaciones.”

**IND 286** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 110.

**“Artículo 111.-** El Estado deberá fortalecer el acceso a programas de formación, capacitación y educación, formal o informal, incluidos los planes de desarrollo social, así como a todos los planes comunitarios, a fin de aumentar sus competencias técnicas. Asegurar y promover la creación de asociaciones, grupos comunitarios y cooperativas que tengan por finalidad acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades económicas mediante el acceso a empleos dignos que permitan el desarrollo de la vida campesina y del contexto de ruralidad y a gozar de igualdad de remuneración, acogerse a las prestaciones sociales, y acceder a actividades generadoras de ingresos así como el acceso a servicios financieros, los créditos y préstamos agrícolas, los servicios de comercialización y las tecnologías apropiadas.”

**IND 289** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 111.



“**Artículo 112.-** El Estado deberá promover y asegurar el libre e igualitario acceso de la mujer a la tierra, como a los bienes naturales y así poder utilizarlos y gestionarlos, obtener un trato igual o prioritario en las reformas agrarias y los planes de saneamiento, así como implementar planes de Protección de semillas, saberes ancestrales, y recursos necesarios para el desarrollo de la vida en el campo y para la gestión de una nutrición adecuada de manera que las mujeres puedan permanecer en el campo, si así lo quieren, para continuar con su rol de velar por la producción de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria.”

**IND 290** (04 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga, Mena, Jofré, Navarrete) Para suprimir el artículo 112.

**IND 291** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 112. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 112.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones supresivas N° 282, 283, 284, 286, 289, 290, 291, aplicables a los artículos 108, 109, 110, 111 y 112.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6347](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6347)

En consecuencia, las indicaciones N° 285, 287 y 288 se entienden rechazadas por ser incompatibles con lo aprobado.

**IND 285** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 109. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 287** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 110. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**



**IND 288** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 110. Ind. Sustitutivas: Para reemplazar “derechos sexuales y reproductivos debiendo ser esta promoción preventiva,” por “todos sus derechos”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 113.-** La conectividad de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso es esencial para el desarrollo de la nación y sus habitantes, como también para el pleno ejercicio y protección de los derechos y deberes que consagra la Constitución y las leyes.

Corresponderá al Estado generar los mecanismos, leyes y políticas públicas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso, con pleno respeto al territorio, sus habitantes y a los principios de equidad y justicia territorial.”

**En votación:**

**IND 292** (03 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 113 por el siguiente:

Artículo 113.- El Estado tomará las medidas necesarias para superar las desigualdades entre los territorios rurales y urbanos, promoviendo la equidad territorial. Asimismo, implementará políticas públicas para promover, respetar y garantizar los derechos de los habitantes presentes en los territorios rurales, con especial consideración a los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

El Estado promoverá y asegurará el acceso prioritario de la mujer a la tierra y el agua.

**Resultados de la votación, indicación N° 292:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	3	3	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6348](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6348)

**En votación:**





**IND 293** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 113 bis:  
“El Gobierno Central se encargará de planificar la conectividad del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para generar una conexión efectiva dentro del territorio nacional, con énfasis en los territorios rurales y aislados.

La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y locales en estas materias”.

**Resultados de la votación, indicación N° 293:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	10	6	1	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6349](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6349)

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas de los artículos 114 y 115, específicamente, indicaciones N° 294, 295, 296, 297, 298 y 299.**

“**Artículo 114.-** El Estado y sus organismos, en todos los niveles, promoverán las acciones y transformaciones necesarias para gestionar, mitigar y adaptarse a la crisis climática y ecológica. En el desarrollo de este deber integrará, de manera transversal en los niveles y funciones de gobierno, mecanismos de gobernanza basados en la cooperación y participación de las y los habitantes del territorio, así como los conocimientos científicos, saberes locales y ancestrales en la toma de decisiones.”

**IND 294** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 114.

**IND 295** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga) Para suprimir el artículo 114.



**IND 296** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 114. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 114.

**“Artículo 115.-** La unidad de gestión climática del territorio corresponderá a las cuencas, y biomas, las que contarán con un sistema de administración integrado de los elementos de la Naturaleza y actividades humanas, que promuevan la articulación multiescalar entre distintos niveles de gestión.

Esta administración deberá considerar los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación socio-ecosistémica de los territorios, los planes y políticas de desarrollo regional y local, atendiendo a las características locales y los escenarios presentes y futuros para gestionar los riesgos y vulnerabilidades frente a los efectos adversos del cambio climático y los desastres siconaturales, y la protección de ecosistemas estratégicos para enfrentar la crisis climática.”

**IND 297** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 115.

**IND 298** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga) Para suprimir el artículo 115.

**IND 299** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 115. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 115.

**Resultados de la votación, indicaciones supresivas N° 294, 295, 296, 297, 298 y 299 aplicables a los artículos 114 y 115.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	1	0	0	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6350](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6350)



“**Artículo 116.-** El Gobernador Regional evaluará anualmente a las empresas prestadoras de servicios del transporte, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos regionales. Tales evaluaciones serán públicas. La sociedad civil, por medio del mecanismo de participación vinculante previsto en la Constitución y las leyes, podrá poner fin a una licitación cuando existan reclamos reiterados.”

**En votación:**

**IND 300** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 116.

**Resultados de la votación, indicación N° 300:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
10	15	0	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6352](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6352)

**IND 301** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacian, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 116 por el siguiente:

“El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales.

El Gobernador o Gobernadora y la Asamblea Regional deberán establecer los mecanismos, normas y políticas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad de toda la región, con especial cuidado de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso. Esto se realizará en consulta con el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y las políticas que se establezcan a nivel nacional.

El Gobernador o Gobernadora deberá establecer mecanismos de evaluación para las empresas relacionadas a conectividad que incorpore la participación ciudadana en la forma establecida en esta Constitución y las leyes.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 301:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
17	5	3	1	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6354](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6354)

**IND 302** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 116. Ind. Supresiva: Para eliminar “La sociedad civil, por medio del mecanismo de participación vinculante previsto en la Constitución y las leyes, podrá poner fin a una licitación cuando existan reclamos reiterados”.  
**Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**“Artículo 117.-** El Gobernador Regional implementará oficinas territoriales debidamente descentralizadas, las cuales controlarán y fiscalizarán la prestación y calidad del servicio. En virtud de ello, podrá, mediante resolución fundada, sancionar directamente al prestador o empresa respectiva.

Los municipios tendrán la facultad de apoyar directamente a las oficinas territoriales regionales, con el fin de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de planificación vial y del tránsito, así como denunciar al correspondiente juzgado de policía local las faltas que observare.”

**En votación:**

**IND 303** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 117.

**IND 304** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga) Para suprimir el artículo 117.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 303 y 304:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------



24	1	0	0	25	APROBADAS
----	---	---	---	----	-----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6355](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6355)

“**Artículo 118.-** El Gobierno Regional podrá constituir empresas públicas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter regional, con el fin de desarrollar y participar en:

- 1. Áreas económicas estratégicas relacionadas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile: minería, silvicultura, acuicultura y pesca;
- 2. Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población: alimentaria; logística y portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable, combustible, energía, electricidad; provisión de vivienda y transporte público; rubros asociados a la salud; recolección y tratamiento de residuos;
- 3. Actividades asociadas a la investigación, desarrollo científico, innovación y cuidado y preservación de la vida y el medio ambiente.”

**En votación:**

**IND 305** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 118.

**IND 306** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 118. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 118.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 305 y 306:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	2	0	0	25	APROBADAS

El detalle de la votación puede ser consultado en:



[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6357](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6357)

**IND 307** (19 Velásquez) Artículo 118 N°2 (sustitutiva)

“Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población, tales como la provisión alimentaria; de logística; portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable; combustible; energías renovables; electricidad; construcción de viviendas; transporte público; rubros de la salud; la recolección y reciclaje de residuos; así como otras actividades que consignen expresamente las leyes, los estatutos regionales, y que no sean contrarias a la libre competencia, principios, reglas, deberes ni derechos consagrados en esta Constitución”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 308** (19 Velásquez) Artículo 118 N°3. (sustitutiva)

“Actividades asociadas a la promoción de la investigación regional o nacional, tales como de salud; avance científico; innovaciones tecnológicas; industria farmacéutica; centros de observación epidemiológicos; estudios para la prevención y monitoreo de desastres naturales; de fomento del desarrollo endógeno o circular para la producción rural; de exploración de suelos y subsuelos terrestres y marinos; de análisis del correcto cuidado y conservación ambiental; entre otros que señalen las leyes y los estatutos regionales”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 119.-** Las empresas públicas regionales tendrán como función social atender las necesidades básicas de la población regional e impulsar el desarrollo territorial.”

**En votación:**

**IND 309** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 119.

**IND 310** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 119. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 119.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 309 y 310:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------



24	0	1	0	25	APROBADAS
----	---	---	---	----	-----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6359](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6359)

“**Artículo 120.-** La creación de una o más empresas públicas regionales será iniciativa del Gobernador o Gobernadora Regional, por mutuo propio o por petición fundada del 10% del padrón electoral.

Para la aprobación de la iniciativa se requerirá la aprobación del consejo regional por la mayoría de sus miembros en ejercicio.”

**En votación:**

**IND 311** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 120. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 120.

**Resultados de la votación, indicación N° 311:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
13	11	1	0	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6360](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6360)

**En votación:**

**IND 312** (19 Velásquez) Agregar al Artículo 120 otro nuevo artículo extra, el artículo 120 bis, que consagra lo siguiente:

Artículo 120 bis.- Las empresas públicas regionales consagradas en el artículo X N°X de la Constitución tienen el principal fin de desarrollar y participar en:

1. Áreas económicas estratégicas relacionadas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile: minería, silvicultura, acuicultura y pesca.
2. Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios



básicos a la población, tales como la provisión alimentaria; de logística; portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable; combustible; energías renovables; electricidad; construcción de viviendas; transporte público; rubros de la salud; la recolección y reciclaje de residuos; así como otras actividades que consignent expresamente las leyes, los estatutos regionales, y que no sean contrarias a la libre competencia, principios, reglas, deberes ni derechos consagrados en esta Constitución

3. Actividades asociadas a la promoción de la investigación regional o nacional, tales como de salud; avance científico; innovaciones tecnológicas; industria farmacéutica; centros de observación epidemiológicos; estudios para la prevención y monitoreo de desastres naturales; de fomento del desarrollo endógeno o circular para la producción rural; de exploración de suelos y subsuelos terrestres y marinos; de análisis del correcto cuidado y conservación ambiental; entre otros que señalen las leyes y los estatutos regionales”.

**Resultados de la votación, indicación N° 312:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	14	5	0	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6363](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6363)

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas de los artículos 121, 122, 123, 124 y 125, específicamente, indicaciones N° 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322.**

“**Artículo 121.-** El patrimonio de las empresas públicas regionales estará constituido por los recursos que se encuentren en sus territorios, tales como aguas continentales, aguas subterráneas, minerales metálicos y no metálicos, energías solares, eólicas, recursos submarinos y otros cuya explotación o generación de valor pueda crear utilidades económicas en beneficio de la población.

Los gobiernos regionales podrán concertarse con regiones aledañas para crear conjuntamente empresas públicas regionales, si lo consideran necesario para su desarrollo.”

**IND 313** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe,





Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 121.

**IND 314** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 121. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 121.

**“Artículo 122.-** Sin perjuicio de la función de control fiscal y administrativo que por disposición de esta Constitución recaigan en otros órganos del Estado, las empresas públicas regionales estarán sometidas, además, al control de tutela y funcionamiento administrativo de un órgano público en la forma de Consejo Superior de Empresas Públicas Regionales. La ley determinara su composición, integración, funcionamiento, facultades y atribuciones.”

**IND 315** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 122.

**IND 316** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 122. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 122.

**“Artículo 123.-** Chile es una república constituida por regiones autónomas. La base de la república radica en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas que habitan un territorio.

Un territorio es la apropiación de un espacio geográfico por parte de los ciudadanos y ciudadanas que hacen usufructo de él para su bienestar personal y colectivo, constituyendo una historia común y una identidad colectiva. Este territorio construido socialmente recibe el nombre de región.

La región está constituida a la vez por comunas, cuya expresión institucional son los municipios expresión del poder local.”

**IND 317** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 123.

**IND 318** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 123. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 123.



“**Artículo 124.-** Del patrimonio de las regiones. Todos los recursos económicos presentes en las regiones constituyen el patrimonio económico de las regiones, entendiendo por ello los recursos minerales metálicos y no metálicos, aguas continentales, acuíferos, aguas subcontinentales; recursos energéticos tales como energía eólica, solar, geotérmica. Humedales y terrenos que se encuentran en sus territorios.”

**IND 319** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 124 (Del patrimonio de las regiones).

**IND 320** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 124. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 124.

“**Artículo 125.-**Tributación en las regiones. Todas las empresas que desarrollan actividades productivas en las regiones deberán pagar sus tributos en dicha región, independiente que sus oficinas centrales estén radicadas en la capital de la República.

Del total recaudado por las regiones, el 60% de estos ingresos constituirán el presupuesto de la región. El 40% restante serán derivados al Gobierno Central el cual destinará estos recursos a la constitución de un Fondo de Equidad Territorial; este fondo será tendrá como propósito mantener un desarrollo equilibrado entre las regiones.”

**IND 321** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 125 (Tributación de las regiones).

**IND 322** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 125. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 125.

**Resultados de la votación conjunta, indicaciones supresivas de los artículos 121, 122, 123, 124 y 125, específicamente, indicaciones N° 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 y 322.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	0	3	25	<b>APROBADAS</b>



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6387](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6387)

“**Artículo 126.-** La Estructura del Estado está conformado por el Gobierno Nacional, este a su vez implica la existencia de Ministerios y Direcciones Nacionales de Servicios Públicos.

El Gobierno Nacional estará presente en las regiones a través de las Direcciones Regionales y dependerán jerárquicamente del Gobernador Regional.”

**En votación:**

**IND 323** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 126. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 126.

**Resultados de la votación, indicación N° 323:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	17	0	3	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6388](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6388)

**En votación:**

**IND 324** (05 Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Pustilnick, Castillo, Martínez) Para sustituir el artículo 126 por el siguiente:

“Artículo 126. La designación de los representantes de los Ministerios y Servicios públicos con presencia en la Región Autónoma. Las y los representantes de los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma serán nombrados y removidos por decisión del Presidente o Presidenta de la República o de la jefatura superior del servicio público, según corresponda. El nombramiento deberá atender a criterios de competencia profesional, idoneidad y los demás requisitos que establezca la ley.

El Gobernador o Gobernadora Regional con el acuerdo de la Asamblea Regional,

propondrá una terna para la designación de las jefaturas de los órganos y servicios desconcentrados de la Administración Pública nacional que funcionen en la Región. La Asamblea Regional deberá pronunciarse sobre la propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional dentro de los treinta días siguientes a su presentación. En caso de que la Asamblea Regional no se pronuncie dentro del término señalado, regirá la propuesta formulada por el Gobernador o Gobernadora Regional.

De igual manera, se podrá proponer a la Presidencia de la República, al ministro o ministra respectivo o a la jefatura nacional del servicio público, según sea el caso, la remoción de los jefes regionales de los servicios públicos nacionales con presencia en la Región.

La ley regulará el ejercicio de estas facultades”.

**Resultados de la votación, indicación N° 324:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
9	9	4	3	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6389](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6389)

**En votación:**

**IND 325** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para sustituir el artículo 126 por el siguiente tenor:

“La designación de las y los representantes de los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma será decisión de la Presidencia de la República.

Para tal efecto, la Presidencia de la República propondrá una quina al Gobierno Regional para que éste, con acuerdo de la Asamblea Regional, responda en el plazo de 30 días contados desde la presentación. La respuesta deberá indicar una terna/dupla confeccionada a partir de la quina originalmente propuesta, y sobre la cual el Presidente de la República deberá determinar la designación.

Será facultad del Gobierno Regional, con acuerdo de la Asamblea Regional, solicitar a la Presidencia de la República, al ministro o ministra respectivo o a la jefatura nacional del servicio público, según corresponda, la remoción de los jefes regionales de los servicios públicos nacionales con presencia en la Región. Esta solicitud deberá fundarse en motivos graves y calificados en consideración de la naturaleza y función de la respectiva



jefatura”.

**Resultados de la votación, indicación N° 325:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
13	7	2	3	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6390](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6390)

**En votación:**

**IND 326** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 126 bis:  
“Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas facultades serán ejercidas por el Gobernador Regional, previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando tanto su debido financiamiento como el carácter técnico y profesional de dichos empleos”.

La convencional **Sra. Giustinianovich** propuso un acuerdo relativo a la incorporación de la frase “la carrera funcionaria” después la palabra “cautelando”, así también la incorporación de “ o Gobernadora” a continuación de “Gobernador” en el inciso segundo del artículo 126 bis contemplado en la indicación 126. Hubo acuerdo unánime en aprobar la modificación de “**indicación amistosa**”, quedando retirada en consecuencia la indicación N° 332.

**Ind. Amistosa:** “Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas facultades serán ejercidas por el Gobernador o Gobernadora Regional, previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos.”.

**Resultados de la votación, indicación amistosa N° 326:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	1	1		25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6391](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6391)

Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas de los artículos 127, 128 y 129, específicamente, indicaciones N° 327, 328, 329, 330, 331.

“Artículo 127.- La estructura de Estado en regiones estará constituida por el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales.”

**IND 327** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 127.

**IND 328** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 127. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 127.

“Artículo 128.- El Gobierno Regional estará constituido por un ejecutivo denominado Gobernador Regional. El Gobernador Regional será electo por los ciudadanos y ciudadanas de la región, mediante sufragio universal directo, secreto e informado.”

**IND 329** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 128.

**IND 330** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 128. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 128.

“Artículo 129.- Funciones del Gobierno Regional. El Gobernador Regional es el superior jerárquico del Gobierno Regional y de su servicio administrativo y de todas las direcciones regionales con presencia en la región.



Las principales responsabilidades del Gobernador Regional son:

- a) Representar a la región ante los otros poderes del Estado de Chile;
- b) Presidir todas las Comisiones Regionales que tienen directa relación con el desarrollo de la región, tales como, Comisión Regional del Uso del Borde Costero, Comisión Regional de Medio Ambiente, Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Urbanismo, etc.;
- c) Representar internacionalmente a la región sin contravenir las políticas nacionales sobre esta materia;
- d) Firmar convenios de cooperación con otros Gobiernos Regionales en pro del desarrollo económico, social y cultural de la región;
- e) Firmar convenios de cooperación con uno o varios municipios de su respectiva región para el desarrollo económico, social y cultural de la región;
- f) Elaborar Políticas, Planes y Programas para el desarrollo económico, social y cultural de la región;
- g) Presentar al Parlamento Regional el presupuesto plurianual de la región; y
- h) Administrar y ejecutar el presupuesto de la región.”

**IND 331** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 129. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 129.

**Resultados de la votación conjunta de las indicaciones supresivas de los artículos 127, 128 y 129, específicamente, indicaciones N° 327, 328, 329, 330, 331.**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6392](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6392)

**IND 332** (14 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para sustituir íntegramente el artículo 129 (Funciones del Gobierno Regional), por el siguiente:

“Artículo X.- Los Gobiernos Regionales para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas atribuciones se ejercerán cautelando la carrera funcionaria, su debido



financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos.”. **Retirada por sus autores.**

“**Artículo 130.-** Cada región contará con una instancia colegiada y deliberativa denominada Parlamento Regional, cuyos miembros serán elegidos por los ciudadanos y ciudadanas de la región, mediante sufragio universal directo, secreto e informado.

El número de sus integrantes será definido por ley.

Las principales facultades son legislativa, reglamentaria y fiscalizadora.”

**En votación:**

**IND 333** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 130. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 130.

**Resultados de la votación, indicación N° 333:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
7	17	0	1	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6393](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6393)

**En votación:**

**IND 334** (08 Millabur, Aguilera, Chinga, Bacia, Giustinianovich, Uribe, Andrade) Para sustituir el artículo 130 por el siguiente tenor:

“La integración y requisitos para acceder al cargo respetará criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas que habiten en la Región Autónoma, de conformidad a lo que determine la ley”.

**Resultados de la votación, indicación N° 334:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
---------	-----------	------------	---------	-------	-----------





17	6	1	1	25	APROBADA
----	---	---	---	----	----------

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6394](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6394)

“**Artículo 131.-** Funciones del Parlamento Regional:

- a) Fiscalizar los recursos económicos de la región;
- b) Fiscalizar las acciones del Gobernador Regional;
- c) Fiscalizar las acciones de las direcciones regionales;
- d) Legislar en función del desarrollo de la región;
- e) Aprobar normas para su funcionamiento;
- f) Aprobar normas para la región las cuales no pueden contravenir leyes o normas de carácter nacional o local;
- g) Aprobar Alianzas públicas – privadas – sociales – cívicas en pro del desarrollo regional con participación de todos los sectores. Es necesario la complementariedad y el establecimiento de alianzas estratégicas entre todos los actores vinculados a procesos de desarrollo que permita una solución integral a los problemas; y
- h) Aprobar la convocatoria a consultas regionales, las que pueden provenir del Gobernador Regional o de algún integrante del Parlamento Regional.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Gómez** explicó la iniciativa N° 337, considerada como una atribución de la Asamblea Regional, referida al deber de pronunciamiento, en conjunto con los órganos competentes, de los procesos de evaluación ambiental.

El convencional **Sr. Castillo** en referencia a la indicación N° 336, explicó que son atribuciones indispensables para los gobiernos y las Asambleas regionales, principalmente, pronunciarse sobre la administración de su patrimonio, y aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos de compensación interterritorial que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley.

El convencional **Sr. Mena** hizo la prevención de reglamento en la fundamentación de iniciativas sin el patrocinio respectivo. Solicitó prolijidad al momento de otorgar la palabra. La convencional **Sra. Rivera** adhirió a lo señalado, paralelamente enfatizó en que no está a



favor de un Parlamento regional motivo por el cual propusieron indicaciones supresivas al respecto.

El convencional **Sr. Gómez** se disculpó por el error y retiró lo señalado en la fundamentación.

El convencional **Sr. Jofré** propuso someter a votación la indicación N° 336 excluyendo el último numeral contemplado en el artículo 131. En el mismo sentido, la convencional **Sra. Pustilnick** señaló que lo contemplado en dicho numeral fue aprobado en el Pleno. El convencional Sr. Álvarez adhirió a lo señalado.

Se sometió a acuerdo de la comisión. **Por unanimidad el numeral “x4” del artículo 131 contemplado en la indicación N° 336 se entendió retirado y excluido de la votación.**

**En votación:**

**IND 335** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 131. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 131.

**Resultados de la votación, indicación N° 335:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	19	0	1	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6395](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6395)

**En votación:**

**IND 336** (14 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para sustituir íntegramente el artículo 131 (Funciones del Parlamento Regional), complementando el artículo 31 de Atribuciones de la Asamblea Regional, con los siguientes numerales:

Artículo 131.- Atribuciones de la Asamblea Regional. Son atribuciones de la



Asamblea Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional:

- x1) Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.
  - x2) Administrar su patrimonio, bienes y rentas.
  - x3) Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos de compensación interterritorial que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley.
  - x4) Las demás atribuciones que señalen la Constitución, el Estatuto Regional y las leyes.
- Retirada de la votación por los motivos señalados en la etapa de fundamentación de las indicaciones.**

**Resultados de la votación, indicación N° 336, primera parte art. 131 x1,x2,x3:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
21	0	3	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6396](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6396)

**En votación:**

**IND 337** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para añadir al artículo 131, complementando el artículo 31 de Atribuciones de la Asamblea Regional, el siguiente numeral:

- x) Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los procesos de evaluación ambiental.

**Resultados de la votación, indicación N° 337:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	1	5	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6397](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6397)

**“Artículo 132.-** Del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales. Las Asambleas Legislativas Regionales participarán en los destinos de la República



constituyendo un Consejo de Asambleas Legislativas Regionales, a fin de ejercer las atribuciones y competencias señaladas en los incisos siguientes.

El Consejo de Asambleas Legislativas Regionales se reunirá sólo cuando lo convoque la Presidencia, el Congreso Plurinacional o la mayoría de las Asambleas Legislativas Regionales.

Una ley ratificada por la mayoría de las Asambleas Legislativas Regionales regulará la composición y funcionamiento del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales.”

**En votación:**

**IND 338** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo132 (Del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales).

**IND 339** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 132. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 132.

**Resultados de la votación, indicaciones N° 338 y 339:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6398](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6398)

**En votación :**

**IND 340** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 132 bis:  
“El Gobierno Central se encargará de planificar el ordenamiento territorial del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para contar con una distribución eficiente del territorio nacional, con énfasis en la interrelación dinámica entre las personas, el desarrollo de actividades socioeconómicas comunes y la protección de los ecosistemas.



La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias exclusivas de los gobiernos regionales y locales en estas materias”.

**Resultados de la votación, indicación N° 340:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
6	17	1	1	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6399](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6399)

**Se acordó por unanimidad la votación conjunta de las indicaciones supresivas de los artículos 133 y 134, específicamente, indicaciones N° 341, 342, 343 y 344.**

**“Artículo 133.-** Son atribuciones de las Asambleas Legislativas Regionales:

1. Ratificar tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión;
2. Ratificar la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Plurinacional;
3. Ratificar la ley general de regalías y la ley de regalías sobre el cobre y el litio aprobadas por el Congreso Plurinacional;
4. Ratificar la fórmula establecida por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales aprobada por el Congreso Plurinacional;
5. Ratificar la ley que crea, modifica, delimita y suprime las entidades territoriales;
6. Ratificar el nombramiento de quienes componen el órgano de justicia constitucional;
7. Ratificar el nombramiento de las autoridades que determine la Constitución y la ley.”

**IND 341** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 133.

**IND 342** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 133. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 133.



“**Artículo 134.-** Son materias de competencia legislativa del Consejo de Asambleas Legislativas Regionales:

- 1. Dictar la ley que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Gobernadores; y
- 2. Dictar la ley que regula los mecanismos de compensación fiscal horizontal, incluyendo la regulación de la fórmula de compensación fiscal propuesta por la Comisión de Equidad Territorial.”

**IND 343** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 134.

**IND 344** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 134. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 134.

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 341, 342, 343 y 344 supresivas de los artículo 133 y 134:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
24	0	0	1	25	<b>APROBADAS</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6400](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6400)

“**Artículo 135.-** El Estado y sus entidades territoriales deben asumir un rol de custodios del territorio plurinacional mediante el ordenamiento y planificación vinculante del uso del suelo y agua, para la protección de la totalidad del territorio del país, considerando como unidad de gestión de planificación a las cuencas hidrológicas que permitan un manejo ecosistémico y un desarrollo equilibrado, eficiente y sostenible para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.”

La convencional **Sra. Pustilnick** señaló las diferencias de la indicación N° 346 y N° 345. Promovió una indicación amistosa con las y los autores de la indicación N° 345. El convencional **Sr. Uribe** se mostró de acuerdo con la propuesta. Promovió agregar la frase “y los usos de suelo” a continuación de “las cuencas hidrográficas”. Se sometió a acuerdo la



propuesta de indicación amistosa. **Aprobada por unanimidad.**

**IND 345** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacia, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 135 por el siguiente:

“Art. 135.- El Estado y sus entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar la totalidad del suelo del territorio nacional. Para esto utilizará unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas.

Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos, actividades productivas y un desarrollo socioeconómico ambientalmente equilibrado, que permita tanto un manejo responsable e integrado de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de justicia territorial que permitan promover el bienestar de las presentes y futuras generaciones.”.

**Indicación amistosa:** “Art. 135.- El Estado y sus entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar la totalidad del suelo del territorio nacional. Para esto utilizará unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas y los usos de suelos.

Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos, actividades productivas y un desarrollo socioeconómico ambientalmente equilibrado, que permita tanto un manejo responsable e integrado de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de justicia territorial que permitan promover el bienestar de las presentes y futuras generaciones.”

**Resultados de la votación, indicación amistosa:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	5	1	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6401](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6401)

**IND 346** (15 Pustilnick, Martínez, Abarca, C.Sepúlveda, Namor) Para sustituir el artículo 135, por el siguiente:

“Artículo 135.- El Estado y las entidades territoriales tienen el deber de ordenar y



planificar el territorio. Para esto utilizará unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas y los usos de suelo.

Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos, actividades productivas y un desarrollo socioeconómico ambientalmente equilibrado, que permita tanto un manejo responsable e integrado de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de justicia territorial que permitan promover el bienestar de las presentes y futuras generaciones.”. **Tras acuerdo de indicación amistoso, se entendió retirada por sus autores.**

**En votación:**

**IND 347** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 135. Ind. Supresiva: Para eliminar” y sus entidades territoriales” y luego la letra “n” en la palabra deben.

**Resultados de la votación, indicación N° 347:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	18	1	1	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6402](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmlId=27&prmlIdSesion=909&prmlIdVotacion=6402)

“**Artículo 136.-** La elaboración de toda política, plan de ordenamiento e instrumentos de planificación territorial deberá fundarse en:

- a) Los principios de gradualidad, la equidad, la integración social, la participación, la identidad, el compromiso, la calidad, la eficiencia, la adaptabilidad, la resiliencia y la seguridad, entre otros. Una ley desarrollará el contenido y alcance de estos principios;
- b) Reconocer cuando corresponda, la preeminencia del cuidado de la integridad del ser humano y de los ecosistemas como soporte esencial de la vida en los territorios y considerar su protección, conservación y restauración;
- c) Considerar la integración y coordinación permanente de todos los niveles de administración y gobierno estatal, con el fin de cautelar que las políticas y planes de ordenamiento territorial sean coherentes entre sus distintos niveles;
- d) Fundarse en un uso eficiente, responsable y justificado de los recursos públicos que permita crear y proveer bienes y servicios enfocados en el bienestar y buen vivir de las generaciones actuales y futuras;





- e) Tener como base la integración de todos los conocimientos, tanto la evidencia científica como los saberes tradicionales de los pueblos originarios y de las comunidades. Cuando no exista información, deberá regir el principio precautorio;
- f) Reconocer las distintas formas de vida y culturas que habitan los territorios, fomentando la protección de los elementos históricos, ancestrales y culturales tanto materiales como inmateriales;
- g) Procesos participativos de los distintos actores involucrados, asegurando el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones vinculantes de sus habitantes, desde una mirada local; y
- h) Considerar la diversidad del paisaje y la vocación natural de los territorios.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Uribe** explicó la indicación N° 349, la cual dice relación con que el cambio al carácter vinculante del proceso de planificación tiene que ser vinculante, el cual surgió tras presentaciones de los expertos como Enrique Rajevic y de las conversaciones con diversos colectivos.

**En votación:**

**IND 348** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el Artículo 136.

**Resultados de la votación, indicación N° 348:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
5	18	1	1	25	<b>RECHAZADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6403](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6403)

**En votación:**

**IND 349** (10 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Pustilnick, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga) Para sustituir el artículo 136 por el siguiente:



“Art. 136.- La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine, coordinada, integrada y enfocada en el interés público. Se deberán realizar procesos de participación previos e informados en sus diferentes etapas, considerando los diversos sistemas de conocimientos existentes.

Dicha ordenación y planificación deberá considerar tanto la diversidad del paisaje y los aspectos culturales locales; como los riesgos y vulnerabilidades frente a desastres siconaturales y los impactos que los usos de suelo causen en la disponibilidad y calidad del agua.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 349:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
19	2	3	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en: [https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6404](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6404)

**IND 350** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 136. Letra e). Ind. Supresiva: Para eliminar “como los saberes tradicionales de los pueblos originarios y de las comunidades”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 137.-** El Estado, a través de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deberá:

- a) Velar por una correcta, adecuada, segura y eficiente localización de los asentamientos y actividades humanas;
- b) Crear, reconocer, resguardar y conservar todas las zonas y áreas de protección de la diversidad biológica así como otras de alto valor ecológico, para que éste sea aprovechado por las generaciones futuras;
- c) Establecer la ordenación espacial y gestión integrada de los espacios marinos y del maritorio, así como de las especies hidrobiológicas, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, basado en la justicia ambiental, ecológica, territorial y distributiva. La ley definirá estas materias;
- d) Considerar como unidad de análisis, gestión y planificación a la o las cuencas hidrológicas y protegerlas siempre en coordinación con los planes de cuenca;
- e) Garantizar un uso y manejo sostenible del suelo que prevenga su degradación o contaminación, y permita su conservación, recuperación y regeneración de sus funciones



ecosistémicas;

- f) Garantizar ciudades sostenibles y seguras;
- g) Utilizar criterios de justicia ambiental para evitar la concentración de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la naturaleza en una determinada localidad;
- h) Definir zonas de interacción entre lo antrópico y lo ecosistémico, contiguas a las de conservación, preservación y restauración. Áreas que deben ser calculadas y que deben tener usos compatibles con los ecosistemas;
- i) Considerar instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad, a fin de fortalecer integralmente el desarrollo local y apoyar, estimular y valorizar las iniciativas de base comunitaria;
- j) Identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales en el territorio, las que deberán desarrollarse en armonía con los centros poblados y los ecosistemas en que se pretendan instalar; y
- k) Planificar economías locales alternativas, basada en la capacidad territorial como eje estructurante al servicio de los ecosistemas y de las economías locales sustentables.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Uribe** señaló que el ordenamiento y planificación no son solo instrumento de protección sino que abarcan otras áreas del desarrollo social y protección medioambiental, tales como las enumeradas en la indicación N° 352.

El convencional **Sr. Mena** explicó que los instrumentos de planificación territorial debe ser competencia del legislador. Además, informó el retiro de la indicación N° 351.

La convencional **Sra. Pustilnick** puntualizó las diferencias entre 353 y 354, las cuales se basan en establecer otros criterios a considerar al momento de establecer los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, como por ejemplo, las áreas excluidas de actividades productivas. Por último, agregó que en el mismo sentido se agregaron dos incisos adicionales.

**IND 351** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el Artículo 137. **Retirada por sus autores.**

**En votación:**



**IND 352** (11 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Chinga, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Quinteros, Bacion) Para sustituir el artículo 137 por el siguiente:

“Art. 137. Los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deberán considerar según corresponda:

- a) El diseño de ciudades y asentamientos poblados sostenibles, seguros e inclusivos; con criterios de equidad de género y justicia socioespacial.
- b) El reconocimiento o definición de áreas de protección ambiental y patrimonial.
- c) Los territorios indígenas, su biodiversidad y usos.
- d) Instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad, a fin de fortalecer integralmente el desarrollo local y comunitario.
- e) Utilizar criterios de justicia ambiental para evitar la concentración de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la naturaleza en una determinada localidad.
- f) Identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales en el territorio, las que deberán desarrollarse en armonía con los centros poblados y los ecosistemas en que se pretendan instalar;
- g) La integración socioespacial, asegurando el acceso a equipamiento, servicios básicos y una movilidad segura, sostenible, con transporte público y vialidad comprometida con un espacio público e infraestructura urbana de calidad.
- h) Las demás que determinen la Constitución y las leyes.

**Resultados de la votación, indicación N° 352:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	7	1	2	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6405](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6405)

**IND 353** (15 Pustilnick, Martínez, Abarca, C.Sepúlveda, Namor) Para sustituir el artículo 137, por el siguiente:

“Artículo 137.- Los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial contemplarán:

- a) El diseño de ciudades y asentamientos sostenibles, seguros e inclusivos;
- b) La creación de áreas de protección ambiental o patrimonial;

- c) Las áreas de amortiguamiento;
- d) La localización de los territorios indígenas y rurales;
- e) La distribución racional de los usos de suelo;
- f) La definición de áreas de riesgos o vulnerabilidades;
- g) Las áreas excluidas de actividades productivas;
- h) Las áreas de equipamiento y servicios;
- i) La integración socioespacial y conectividad;
- j) La diversidad del paisaje y la protección de la Naturaleza;
- k) Las demás unidades que determine la ley.

Los Planes regionales de manejo integrado de cuencas tendrán como unidad de ordenación las cuencas hidrográficas y protegerán la integralidad de las aguas, las partes altas de la cuenca, glaciares, las zonas de recarga natural de acuíferos, los ecosistemas como humedales y bosques; las áreas de inundación de ríos y la biodiversidad.

Estos planes e instrumentos incorporarán criterios de justicia territorial, ambiental y socioespacial; evitarán la concentración de parques industriales, de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la Naturaleza; y promoverán la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Todos los planes e instrumentos incorporarán la perspectiva de género y socioecológica como enfoques transversales.”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 354** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 137. Letra c). Ind. Supresiva. Para eliminar “autónomo y descentralizado, según corresponda, basado en la justicia ambiental, ecológica, territorial y distributiva”. **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

**IND 355** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 137. Letra h). Ind. Supresiva. Para eliminar la letra h). **Rechazada por incompatible con lo aprobado.**

“**Artículo 138.-** Se creará una Ley Marco de Ordenamiento y Planificación Territorial basada en un enfoque socio ecológico, que busque el desarrollo del país, integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios.

Los aspectos que a lo menos deberá abordar esta ley son los siguientes:

- a) Determinar las diferentes escalas de ordenamiento y planificación territorial, y los instrumentos y atribuciones que les permitan dar cumplimiento a los deberes establecidos por esta Constitución;
- b) Establecer una orgánica con presencia en las distintas entidades territoriales que garantice una integración multiescalar en el desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación en los distintos niveles, nacional, regional, comunal, y el cumplimiento de



estos.

c) Establecer una orgánica con presencia en las distintas entidades territoriales que garantice una integración multiescalar de la gestión de la información territorial para construir la base ambiental, social, cultural y económica que permita el desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación y ordenamiento;

d) La transición gradual de los instrumentos existentes al nuevo sistema de ordenamiento y planificación establecido en esta Constitución y las leyes;

e) Definir los mecanismos para la implementación de la función social y ecológica como límite del ejercicio del derecho de propiedad mediante los instrumentos de planificación y ordenamiento, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos establecidos por esta Constitución;

f) Considerar e integrar en los planes de ordenamiento y planificación los territorios especiales que se establezcan según la ley;

g) Proponer mecanismos de compatibilidad territorial de los impactos de actividades, proyectos y normativas que se pretendan realizar o implementar en el territorio;

h) Dar normas de coordinación, asociatividad y/o colaboración transfronteriza de las autoridades, cuando los límites naturales aconsejen elaborar planes para macrozonas;

i) Utilizar el diseño como herramienta válida para resolver puntos conflictivos de la planificación y la participación, con el objeto de catalizar variables territoriales o espaciales urbanas, rurales o de los tejidos productivos; y

j) Crear normas que permitan una actualización y/o modificación de los planes de ordenamiento o planificación del territorio, cuando los indicadores evidencian en el tiempo, un error en la decisión; y den la posibilidad de compensar ambientalmente.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Uribe, respecto a la indicación N° 357**, indicó que la forma en que se implementa la planificación territorial es a través de una Ley marco de planificación territorial y la coordinación entre los distintos niveles y escalas.

#### **En votación:**

**IND 356** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 138. Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 138.

**Resultados de la votación, indicación N° 356:**



A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
8	6	0	1	25	RECHAZADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6406](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6406)

**En votación:**

**IND 357** (11 Uribe, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Chinga, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Quinteros, Bacian)  
Para sustituir el artículo 138 por el siguiente:

“Art. 138. Una Ley Marco de Ordenamiento y Planificación Territorial, basada en un enfoque socioecológico velará por el desarrollo del país integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 357:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
18	2	4	1	25	APROBADA

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6407](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6407)

“**Artículo 139.-** Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Sin perjuicio de los derechos y deberes del Estado de administrar /os recursos que como pueblo nos pertenecen y los bienes nacionales que forman parte de las riquezas del país, se reconoce a toda persona la libertad de empresa respecto de cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o la seguridad de la nación, respetando los valores y principios de esta Constitución y la legislación que las regule, en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y por el derecho internacional de los derechos humanos.



Las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición monopólica así como de concentraciones empresariales que afecten o puedan afectar el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados y el bienestar de los consumidores, declaradas por la autoridad jurisdiccional competente, se entenderán como conductas contrarias a la moral y al orden público económico, obligando a sus responsables a una reparación integral.

La ley regulará el ejercicio de esta libertad en la medida necesario para proteger el interés general, el medio ambiente, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos nación indígenas preexistentes al Estado. Este podrá establecer una regulación de precios máximos en bienes, prestaciones y servicios en razón del interés superior social.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

La convencional **Sra. Rivera** informó el retiro de las indicaciones N° 359 y N° 361, cuya vocación supresiva surgió de la incompetencia de la comisión en estas materias y no respecto al contenido de la misma, sobre el cual manifestó estar de acuerdo. En el mismo sentido, el convencional **Sr. Jürgensen** solicitó dejar establecido que está de acuerdo con la norma, pero no es competencia de esta comisión.

La convencional **Sra. Mella** aclaró que las normas fueron correctamente derivadas por la comisión de Derechos Fundamentales. Justificó la indicación 358, la cual busca suprimir el artículo 139 pues una norma de similar tenor se encuentra aprobada por el Pleno.

**Se acordó por unanimidad someter a votación de forma conjunta las indicaciones N° 358 y 360 que buscan suprimir los artículos 139 y 140 respectivamente.**

**IND 358** (06 Y. Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C. Gómez, J. Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 139 (Libertad de emprender y desarrollar actividades económicas).

**IND 359** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 139. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 139. **Retirada por los autores.**

**“Artículo 140.-** Régimen constitucional minero. Las sustancias que constituyen el



patrimonio minero son bienes públicos. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Se comprenden en dicho dominio, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburo y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales que no requerirán de concesión minera, sin perjuicio de las autorizaciones que exija la ley. Lo anterior, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para permitir la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Quedará prohibida la exploración y explotación de sustancias minerales en áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad y aquellas donde se localizan los glaciares, incluyendo un espacio de protección en torno a dichas áreas,

Serán concesibles todas las sustancias minerales que la ley determine, exceptuando los hidrocarburos líquidos o gaseosos y el litio, los que sólo podrán ser explotados por el Estado mediante contratos especiales de operación los que deberán ser fijados por decreto supremo del Ejecutivo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes bajo las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como estratégicas o de importancia para la seguridad nacional. La ley, para efectos de la explotación de aquellas sustancias que se encuentran disueltas en las salmueras, tales como el litio, deberá considerar requisitos ambientales especiales con la finalidad de que los fluidos que se extraigan no mermen las cuencas hidrográficas en que se produce su explotación. Con todo, aquellos áridos y arcillas que se encuentran en los cauces de los ríos y sus riberas no podrán ser objeto de extracción ni de concesión alguna.

Dentro del perímetro de la concesión de exploración y explotación deberán delimitarse y quedarán excluidas para su exploración y explotación las siguientes áreas catastradas según defina la ley: los glaciares y su área circundante; las áreas silvestres protegidas por el Estado; las áreas protegidas privadas, los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres, los acuíferos que alimenten los sistemas vegetacionales indicados, los límites urbanos, los territorios indígenas, las fuentes de abastecimiento de agua para la población, los sitios arqueológicos que constituyen patrimonio de la humanidad y todos aquellos sitios de interés científico que la ley determine. La concesión de exploración y explotación minera está sujeta a las restricciones y limitaciones que determine la ley y entre ellas que los residuos masivos provenientes de las labores de explotación minera no puedan afectar los componentes del medio ambiente protegidos indicados precedentemente. Estas zonas deben estar delimitadas con anterioridad a la solicitud de concesión minera.

El Estado sólo podrá otorgar concesiones si se satisface el interés público que justifica su otorgamiento. Dicho interés público consiste en el equilibrio que debe existir entre el desarrollo de la actividad minera, el beneficio patrimonial que de ella se obtenga y la conservación de los bienes públicos naturales que ella afecta, tales como el agua, los glaciares, la flora y la fauna la protección de las comunidades indígenas. Si dentro del perímetro de la concesión existe una comunidad indígena, el Estado deberá someter a consulta indígena la solicitud de concesión minera.

Las concesiones se constituirán por resolución administrativa y serán objeto de revisión para verificar su explotación efectiva en los plazos y formas que determine el legislador. La determinación de la exploración o explotación efectiva se efectuará mediante la obtención de una resolución de calificación ambiental favorable. Las concesiones mineras conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese. El procedimiento que dé lugar a la resolución administrativa constitutiva deberá estar fijado por ley. El otorgamiento de la concesión y sus revisiones posteriores, podrán ser objeto de acciones colectivas de carácter cautelar cuando éstas amenacen el interés público.

La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justificó su otorgamiento y por ello su régimen de amparo se traduce en que las concesiones pagarán una patente anual, según lo determine la ley. Un porcentaje de esta patente deberá tener una destinación local con la finalidad de beneficiar al territorio donde se efectúa la exploración o la explotación, según la distribución geográfica que determine la ley. Sin perjuicio de la patente anterior, la explotación minera deberá pagar una contribución anual al territorio en el cual efectúa la disposición de sus residuos masivos. Dicha contribución y la proporcionalidad de la patente en el territorio será fijada por la ley.

Serán causales de caducidad de la concesión minera de exploración o explotación, las siguientes: la no acreditación de su uso efectivo en los plazos y formas que determine el legislador; el incumplimiento de las restricciones ambientales aplicables a la concesión, tales como explorar o explotar las áreas de exclusión; el no pago de la patente o de la contribución minera; y el incumplimiento del deber de informar que establezca la ley, el que al menos dispondrá informar las aguas del minero. Será de competencia exclusiva de la Administración declarar la caducidad de tales concesiones, sin perjuicio del derecho concesionario de recurrir judicialmente. En caso de caducidad por no pago de patente, el afectado podrá solicitar la subsistencia de su concesión una vez enterado el importe de lo no pagado de conformidad lo indique la ley.”

**IND 360** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella,



Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 140 (Régimen constitucional minero).

**IND 361** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 140. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 140. **Retirada por sus autores.**

**Resultados de la votación conjunta, indicación N° 358 y 360:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
22	0	2		25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6408](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6408)

“**Artículo 141.-** En cada región existirá, al menos, una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, y que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa. Estas universidades formarán parte de la Administración del Estado, relacionándose preferente y coordinadamente con las demás instituciones estatales, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o del país. Una ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Álvarez** se refirió a la indicación N° 362, la cual amplía lo señalado por el artículo original reconociendo la realidad del país al futuro descentralizando no solo la educación universitaria sino también el nivel técnico profesional. Enfatizó en la importancia de la educación.

**En votación:**

**IND 362** (14 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para sustituir el Artículo 141 por la siguiente redacción:

Artículo 141. De las instituciones estatales de educación superior. En cada región



autónoma existirá, al menos, una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa y formarán parte de la Administración del Estado.

Se relacionarán de manera preferente y coordinada con las instituciones estatales, autoridades regionales, autoridades comunales y con otros servicios públicos con presencia regional, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o nacional . La ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias.

Del mismo modo, en cada región existirá, al menos, una institución de formación técnico profesional de nivel superior, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

**Resultados de la votación, indicación N° 362:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
21	2	1	1	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6409](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6409)

“**Artículo 142.-** Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución reconocida por el Estado cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito, incidentes con materiales peligroso u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.

Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos de operaciones, inversiones, capacitación y renovación de equipos de material mayor y menor, como también dotarlos de equipos de protección personal para los diferentes actos de servicio, otorgar cobertura médica para atención de efectivos accidentados o por enfermedades contraídas por actos de servicio y un reconocimiento económico en época de vejez o invalidez.

Le corresponderá a la Ley establecer el marco regulatorio general respecto de lo señalado en el inciso anterior.”

Se inició la etapa de fundamentación de las indicaciones presentadas por las y los



convencionales constituyentes.

El convencional **Sr. Gómez** explicó la indicación N° 363, la cual surge de una iniciativa popular del cuerpo de bomberos de Chile, institución que genera un amplio apoyo transversal fundamentado en la labor en la sociedad, institución que no cuenta con protección coherente en relación con el beneficio que ofrecen en el desarrollo de sus funciones. Afirmó que esta norma busca consagrar constitucionalmente a los cuerpos de bomberos y garantizar la cobertura de gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio, a fin de otorgarle dignidad.

El convencional **Sr. Mena** aclaró que la indicación N° 364 busca agregar un nuevo inciso complementario tanto con el texto original y la indicación N° 363.

**En votación:**

**IND 363** (14 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para sustituir el artículo 142 por el siguiente:

Artículo 142.- Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.

Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio.

La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez.”.

**Resultados de la votación, indicación N° 363:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
23	0	1	1	25	<b>APROBADA</b>

La convencional **Sra. Navarrete** solicitó dejar en acta su error en la votación, siendo su intención aprobar la indicación.



El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6410](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6410)

**En votación:**

**IND 364** (18 Navarrete, Jofré, Mena) que incorpora un nuevo inciso: “El Estado reconoce y ampara los Cuerpos de Bomberos de Chile en su función esencial de servicio a la comunidad, garantizando la voluntariedad de afiliación de sus miembros y la debida autonomía institucional para el cumplimiento de sus fines específicos”.

**Resultados de la votación, indicación N° 364:**

A favor	En contra	Abstención	No vota	Total	Resultado
15	6	2	2	25	<b>APROBADA</b>

El detalle de la votación puede ser consultado en:  
[https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion\\_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6411](https://www.cconstituyente.cl/comisiones/votacion_detalle.aspx?prmId=27&prmIdSesion=909&prmIdVotacion=6411)

**2.2.- Indicaciones rechazadas.**

**IND 003** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero “Todos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”, por:

“Los habitantes de la República están obligados a contribuir al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos, respetando las normas del sistema tributario inspirado en los principios de igualdad, progresividad y solidaridad. Los impuestos directos en ningún caso podrán ser confiscatorios, lo que se presumirá cuando sean manifiestamente desproporcionados o injustos, como cuando graven en más de un 45% las utilidades o ganancias que reporte un contribuyente, para cuyo cálculo se tendrá en consideración la totalidad de cargas pecuniarias aplicables a nivel nacional y regional”.

**IND 005** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “Sin perjuicio de lo establecido en otras normas de esta Constitución, los tributos, las exenciones y los beneficios impositivos, aplicables a toda la República, serán

determinados por una ley del Congreso Plurinacional”, por:

“Los tributos y las demás cargas se aplicarán en proporción a las rentas o en la progresión que fije la ley, los que no podrán exceder en su conjunto del porcentaje antes señalado respecto del contribuyente final. Los impuestos y cargas, las exenciones y los beneficios impositivos de aplicación estatal, serán determinados por Ley de quorum especial”.

**IND 007** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 2.: Ind. Aditiva: Para añadir antes de iniciar el tercer inciso: “El Legislador velará por dar estabilidad al sistema tributario, cuyo buen funcionamiento permitirá al Estado brindar la protección requerida por sus habitantes, así como contribuir al desarrollo personal de sus integrantes”.

**IND 010** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 2. Inc. 4.: Ind. Aditiva. Para añadir un cuarto inciso: “Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago”.

**IND 011** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 2 bis:

“Igualdad y legalidad tributaria. Todas las personas contribuirán con el sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad contributiva, en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes.

El sistema tributario y las cargas públicas encuentran su fundamento en los principios de equidad, progresividad, no discriminación arbitraria, justicia, irretroactividad, certeza jurídica, neutralidad, simplicidad, eficiencia y los demás que determinen la Constitución y las leyes.

En ningún caso los tributos, las cargas públicas o el sistema tributario en su conjunto podrán tener alcances confiscatorios o de carácter desproporcionado o injusto”.

**IND 016** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 4. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar parte del inciso primero “(...) en tanto no sean sobre los mismos hechos establecidos en tasas o contribuciones aplicables a la República en su conjunto según ley del Congreso Plurinacional” por “(...) sólo cuando complementen de forma racional los impuestos de carácter nacional, según especifique una Ley de quorum especial”.

**(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 017** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 4. Inc 2.: Ind. Aditiva. Para agregar



un inciso segundo: “Para evitar transgresiones que den por resultado la aplicación de impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos, el Congreso podrá establecer un rango máximo de afectación impositiva que podrá ser utilizado por las regiones, de manera que estas puedan establecer impuestos de carácter regional que complementen de forma razonable a las cargas nacionales”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 018** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 5.

**IND 019** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 5. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso segundo que señala: “(...) sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno” por “(...) sea ejecutado a través de los gobiernos regionales, buscando que el uso de los recursos recaudados vía impuestos se distribuya de forma equitativa y ordenada para el beneficio de todos los habitantes”.

**IND 021** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 6. Inc. 1.: Ind. Aditiva. Para agregar a continuación de “son responsables” el término “personalmente”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 024** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 8. Inc. 2.: Ind. Aditiva. Para incorporar como nuevo inciso Segundo el siguiente: “La ley podrá establecer beneficios tributarios especiales a ciertas zonas que benefician a sus habitantes y emprendedores, en razón de su distancia de los centros urbanos o de otras condiciones particulares que hagan necesario el fomento a determinadas actividades”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 026** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 9. Inc. 1.: Ind. Aditiva. Para agregar al final del primer inciso los términos “y gastos”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 027** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 9. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso final. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 029** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc. 1.: Ind. Supresiva. Para eliminar del primero inciso el término “central”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**



**IND 030** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc. 1.: Ind. Supresiva. Para eliminar “Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno subnacional”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 031** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 10. Inc.3.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso tercero que señala “(...) en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno” por “(...) para lo que se tomará en consideración el número de habitantes que las integren, así como la cooperación de los mismos al erario nacional”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 033** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc.1.: Ind. Aditiva. Para agregar en el primer inciso a continuación de la palabra “respectivamente”, lo siguiente: “el que deberá revisarlo en el marco determinado por la ley de Presupuestos Nacional y a los ingresos que en razón de las políticas tributarias disponga la entidad. En ningún caso podrán aprobarse gastos cuando no existan ingresos que permitan financiarlos”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 034** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso segundo por el siguiente: “De no aprobarse el presupuesto para un año determinado, regirá el autorizado para el año inmediatamente anterior”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 035** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 11. Inc. 3.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte del inciso tercero que señala “(...) salvo los establecidos en las leyes” por “respectivo”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 039** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 14. Inc.1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la parte final del inciso primero que señala “(...) o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras” por “(...) Los gravámenes sólo podrán establecerse por el Congreso o por el organismo regional competente, adoptando criterios claros y objetivos, que no impliquen una discriminación arbitraria”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 043** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 15 bis:  
“Tributos de destinación local. Una ley deberá disponer que lo recaudado por determinados tributos que gravan actividades o bienes con una clara identificación regional o local, sea destinado, dentro del marco que la misma ley señale, a los

presupuestos regionales o comunales correspondientes”:

**IND 047** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc.1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar la primera parte del inciso primero “Con el fin de velar por el cuidado social y ecológico, el Congreso Plurinacional debe dictar una ley general de regalías sobre las rentas (...)” por “El Congreso debe dictar una ley general de regalías o impuestos especiales sobre las rentas (...)”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 048** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso 2 por el siguiente: “El establecimiento de regalías respetará siempre los principios del sistema tributario, en cuanto su aplicación no será confiscatoria. Las regalías sólo podrán establecerse en beneficio del Estado, sin perjuicio de que una Ley especial determinará el mecanismo de redistribución con los Gobiernos Regionales”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 049** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 3. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 050** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 4.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 4. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 051** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 5.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 5. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 052** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 6.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 6. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 053** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 18. Inc. 7.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 7. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 058** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero por el siguiente: “La aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieron, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y las Regiones cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad determinada, corresponderá al Servicio de Impuestos Internos”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 059** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 2.: Ind. Sustitutiva. Para

reemplazar el inciso segundo por el siguiente: “El Servicio Nacional de Aduanas es el encargado de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, de intervenir en el tráfico internacional para los efectos de la recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y de generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 060** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 21. Inc. 3: Ind. Aditiva. Para agregar como inciso tercero el siguiente: “El Servicio de Tesorerías estará encargado de recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales de todos los servicios públicos. Asimismo, deberá efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, y otros que le encomienden las leyes. Estos servicios dependen del Ministerio de Hacienda”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 063** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 23: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 23.

**IND 066** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 24: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 24.

**IND 067** (23 Pustilnick, Giustinianovich, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Martínez, Bacion, Quinteros, Chinga, Castillo) Para suprimir el artículo 24.

**IND 084** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 33: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 33.

**IND 087** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 34. Inc. 2: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso segundo en la parte que señala “del gasto militar.” Por “de los gastos políticos, especialmente de aquellos cargos que sean de la confianza del Presidente de la República y otras autoridades”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 090** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 36: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 36.

**IND 092** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 37: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 37.

**IND 097** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 38. Numeral 2: Ind. Aditiva. Para agregar la siguiente oración a continuación de la palabra “leyes”: “, y de forma complementaria a los tributos establecidos en beneficio del Estado”.

**IND 098** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 38. Numeral 3: Ind. Aditiva. Para agregar la siguiente oración a continuación de la palabra “ley”, en el punto 3: “, y que sean complementarios a aquellos establecidos en beneficio del Estado”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 101** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 39. Inc. 3.: Ind. Aditiva. Para agregar lo siguiente en el inciso tercero, a continuación de “ley”; “y la Constitución. En ningún caso podrán tener el carácter de confiscatorios y deberán considerar otros gravámenes de carácter nacional”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 103** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 1: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero en la parte que señala “y bajo su responsabilidad” por “y bajo la responsabilidad personal de sus autoridades”.

**IND 105** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 2.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 2.

**IND 106** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 40. Inc. 3.: Ind. Supresiva. Para eliminar el inciso 3.

**IND 110** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 41: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 41.

**IND 113** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 41 bis:  
“Coordinación y cooperación. El Estado deberá promover la acción coordinada de diferentes organismos e instituciones de los diversos niveles gubernamentales, fomentando la cooperación y colaboración para el logro de sus objetivos comunes, evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones”.

**IND 115** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 42 bis:  
“Equilibrio y responsabilidad fiscal. Las autoridades del gobierno central, regional y comunal serán responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando siempre los principios de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Una ley deberá definir dichos principios y regular las normas de responsabilidad

fiscal aplicable, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Asimismo, una ley deberá fijar indicadores y metas de eficiencia de carácter público, asociados a resultados e impactos de la ejecución presupuestaria anual en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía de las comunas y regiones”.

**IND 116** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 43: Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 43.

**IND 118** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 43 bis:

“Solidaridad y equidad Territorial. Los órganos del Estado y las leyes deben promover un desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario entre las distintas regiones y comunas del territorio de la República. Las leyes y políticas públicas deberán velar por cumplir con lo anterior, permitiendo que todos los habitantes de la República tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, independiente del lugar donde residan.

La ley dispondrá la creación de instrumentos que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, especialmente en cuanto a las transferencias fiscales que haga el Estado central a los gobiernos subnacionales, así como la creación de mecanismos de compensación económica entre las distintas unidades territoriales.

Asimismo, la ley podrá disponer medidas que permitan compensar las externalidades negativas derivadas de la explotación de recursos naturales a las regiones y comunas afectadas”.

**IND 120** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 43 ter:

“No discrecionalidad presupuestaria. La transferencia de recursos realizada desde el Estado central a los gobiernos regionales y municipalidades, en el marco de la Ley de Presupuestos de la Nación u otro instrumento, deberá efectuarse en base a criterios objetivos, verificables y no discrecionales. Asimismo, no debe afectar las decisiones de aumentar o reducir la recaudación de ingresos propios de cada gobierno subnacional.

Una ley determinará dichos criterios, debiendo reconocer la diversidad territorial y considerar los componentes geográficos, demográficos, socioeconómicos y de accesibilidad a los servicios básicos de las distintas unidades territoriales.

La Ley de Presupuestos de la Nación asignará los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos regionales y municipalidades, en función de las responsabilidades propias que deba asumir cada nivel de gobierno.

Asimismo, una ley podrá disponer transferencias especiales por razones de

aislamiento o emergencia, las que en ningún caso podrán establecer discriminaciones arbitrarias entre las distintas regiones y territorios del país”.

**IND 127** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 45. Inc. 1.: Ind. Sustitutiva. Para reemplazar el inciso primero en la parte que indica “deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven de conformidad con la Constitución y las leyes” por “serán personalmente responsables de las consecuencias y perjuicios para la comunidad que de tales incumplimientos se deriven”.

**IND 129** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 46. Inc. 2.: Ind. Aditiva. Para agregar el siguiente inciso segundo: “Por consiguiente, las distintas entidades territoriales deberán tomar todas las medidas que contribuyan a tal fin, como por ejemplo contar con gastos reducidos a nivel de personal, y estructuras simples y adaptables de funcionarios. No se permitirá la contratación de familiares directos de las autoridades en las entidades territoriales ni en aquellas con las que éstas mantengan algún tipo de relación”.

**IND 136** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para sustituir el artículo 51 por el siguiente:  
Artículo 51.- Las entidades territoriales promoverán la participación directa de la ciudadanía en las decisiones y asuntos públicos de su competencia. Para este objeto, se implementarán, a lo menos, los siguientes mecanismos:

- a) Plebiscitos y Referéndums;
- b) Consultas ciudadanas;
- c) Jurado Consultivo, integrado por sorteo;
- d) Contraloría popular;
- e) Presupuestos participativos;
- f) Audiencias públicas;
- g) Cabildos abiertos;
- h) Mecanismos de participación y consulta, destinados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y naciones preexistentes al Estado; y
- i) Iniciativa popular de norma.

Las entidades territoriales establecerán y desarrollarán otros mecanismos de participación ciudadana. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 137** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para sustituir el artículo 51 por el siguiente:  
“El Estado promoverá la participación directa de la ciudadanía en las decisiones



y asuntos públicos, especialmente a nivel regional y local, en la forma prevista por la Constitución y las leyes.

Los gobiernos regionales y comunales contarán, a lo menos, con los siguientes mecanismos de participación:

- a) Plebiscitos o referéndums.
- b) Jurado consultivo.
- c) Consultas ciudadanas.
- d) Presupuestos participativos.
- e) Audiencias públicas.

Los estatutos regionales podrán contemplar mecanismos de participación adicionales en conformidad con la Constitución y la ley”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 139** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 51. Inc. 2: Ind. Supresiva: Para eliminar “, incidente”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 148** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 56: Ind. Supresiva: Para eliminar “, depositarias de titularidad sindical para actuar en los procesos de negociación laboral y salarial de los trabajadores/as del Estado”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 150** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 57. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “barrial y territorial que responden a la condición socioeconómica de sus habitantes”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 151** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 57. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar “siendo deber del Estado que ninguna persona cuente con distinto financiamiento a cualquier nivel, sin perjuicio de la capacidad de recaudación de cada una de éstas, en atención al territorio en que habiten las personas”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 153** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 58. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar “con pertinencia cultural y lingüística de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando los servicios y prestaciones que se entreguen,”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 154** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 58. Inc. 4: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 4. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 157** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 59. Inc 1: Ind. Supresiva: Para eliminar “los pueblos y naciones de”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 158** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 59. Inc.2: Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “enfoque de género, plurinacionalidad,” por “equidad”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 161** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 60. Inc. 2: Ind. Supresiva: Para eliminar “social, plurinacional y”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 162** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 60. Inc. 4.: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 4. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 170** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 63. Inc. 2.: Ind. Supresiva: Para eliminar el inciso 2. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 172** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 64. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 64.

**IND 178** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Ind. Supresiva: Para eliminar “universal y de calidad”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 179** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “tanto territorial como económicamente,”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 180** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 7. Ind. Supresiva: Para eliminar “, especialmente los derechos a sindicalización, huelga y negociación colectiva”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 181** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 65. Numeral 8. Ind Supresiva: Para eliminar “Financiarización”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 183** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “Social y”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 184** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.2. Ind. Supresiva: Para eliminar “Social y”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**



**IND 185** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.2. Ind. Supresiva: Para eliminar “Asimismo, la política fiscal deberá asegurar una recaudación suficiente para asegurar estos fines”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 186** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.4. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “sociales, económicas, culturales y de género,” por “de todo tipo”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 187** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 66. Inc.7. Ind. Supresiva: Para eliminar “internacional”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 188** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 66. Inc 8. Ind Supresiva: Para eliminar “sin previa autorización judicial”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 190** (09 Mella, Álvez, Y.Gómez) Para sustituir el artículo 67 por el siguiente tenor:

“El Estado definirá, monitoreará e implementará las políticas públicas, siempre que el ámbito geográfico supere el nivel regional”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 193** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 69. Inc 1. Ind Sustitutiva: para reemplazar “O idoneidad técnica” por “Y la idoneidad técnica”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 199** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar “los pueblos,”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 200** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 3. Ind. Aditiva: Para agregar “, mediante la dictación de una ley,”, luego de El Estado. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 201** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 74. Inc. 4. Ind. Supresiva: Para eliminar “de quórum calificado”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 203** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Supresiva: Para eliminar “plurinacionalidad”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 204** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art 75. Ind Supresiva: Para eliminar “espirituales”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 205** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por “indígenas”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 206** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 75. Ind. Supresiva: Para eliminar “nacionales,”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 213** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 80. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por indígenas. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 214** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 80. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “el poder popular” por “la democracia”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 216** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para sustituir el artículo 81 por el siguiente:  
“El Estado y las entidades territoriales incorporarán la dimensión de pertinencia territorial en el diseño e implementación de las políticas públicas que puedan tener repercusiones en la ruralidad en su calidad de expresión territorial.

El legislador deberá propender a adoptar medidas que permitan la materialización efectiva de este mandato.” **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 217** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el artículo 82.

**IND 220** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para sustituir el artículo 82 por lo siguiente:

Artículo 82. El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de alimentos. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 221** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 82. Ind. Supresiva: Para eliminar “intervenir y”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 222** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el artículo 83.

**IND 224** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 83. Ind. Aditiva: Para agregar “por”

entre “velar” y “la transparencia”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 225** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 84. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 84.

**IND 228** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 85. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 85.

**IND 234** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 88. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 88.

**IND 236** (20 Velásquez) Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 88:

“Esta garantía estatal y mecanismos de acceso a la alimentación serán establecidos por la ley y los estatutos regionales”.

**IND 237** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 89. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 89.

**IND 239** (16 Chinga, Ampuero, Mella, Álvarez, Uribe, Aguilera, Millabur, Y.Gómez, Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Bacian, Quinteros) Para agregar un inciso segundo al artículo 89 del siguiente tenor:

“El Estado regulará los plaguicidas, agroquímicos, aditivos y alimentos transgénicos sobre la base del principio precautorio. No se permitirá la siembra de cultivos transgénicos”.

**IND 240** (20 Velásquez) Para agregar un nuevo inciso final en el artículo 89:

“La ley y los estatutos regionales regularán el sistema de producción alimentaria y el uso de agroquímicos tales como pesticidas, plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematocidas que no pongan en grave riesgo extintivo la fauna polinizadora nativa”.

**IND 247** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 92. Ind. Supresiva: Para eliminar “la soberanía alimentaria”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 248** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 92. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “originarios” por indígenas. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 254** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 95. Ind. Supresiva: Para eliminar

“a sus derechos sexuales y reproductivos; a la justicia feminista;”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 257** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 97. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 97.

**IND 259** (07 Chinga) Para sustituir el artículo 97 por el siguiente:

Artículo 97. El Estado deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de la salud y seguridad en el trabajo, el acceso a un sistema previsional, normas de sindicalización y mecanismos de fiscalización que sean especiales, en reconocimiento y consideración de las necesidades y particularidades del trabajo rural. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 262** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 99. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 99.

**IND 267** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 101. Inc. 1. Ind. Supresiva: Para eliminar el inc. 1 del artículo 101. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 268** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 101. Inc. 2. Ind. Supresiva: Para eliminar el inc. 2 del artículo 101. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 274** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 275** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Supresiva: Para eliminar “patriarcal y patronal rural”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 276** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 105. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “sus derechos políticos” por “todos sus derechos”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 281** (07 Chinga) Para sustituir el artículo 107 por el siguiente:

Artículo 107.- Es deber del Estado asegurar los medios y medidas necesarias para resguardar a las y los campesinos, comunidades indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales de detenciones y reclusiones arbitrarias, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a no ser acosados,



desalojados, perseguidos, detenidos arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 285** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 109. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 287** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 110. Ind. Sustitutiva: Para reemplazar “las mujeres y niñas” por “todos los habitantes de las zonas”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 288** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 110. Ind. Sustitutivas: Para reemplazar “derechos sexuales y reproductivos debiendo ser esta promoción preventiva,” por “todos sus derechos”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 293** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 113 bis:  
“El Gobierno Central se encargará de planificar la conectividad del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para generar una conexión efectiva dentro del territorio nacional, con énfasis en los territorios rurales y aislados.

La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y locales en estas materias”.

**IND 300** (06 Y.Gómez, Giustinianovich, Ampuero, Navarrete, Álvez, Aguilera, Mella, Millabur, Pustilnick, Mena, C.Gómez, J.Álvarez, Andrade, Velásquez, Jofré, Martínez, Uribe, Reyes, Castillo) Para suprimir el artículo 116.

**IND 302** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 116. Ind. Supresiva: Para eliminar “La sociedad civil, por medio del mecanismo de participación vinculante previsto en la Constitución y las leyes, podrá poner fin a una licitación cuando existan reclamos reiterados”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 307** (19 Velásquez) Artículo 118 N°2 (sustitutiva)

“Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población, tales como la provisión alimentaria; de logística; portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable; combustible; energías renovables; electricidad; construcción de viviendas; transporte público; rubros de la salud; la



recolección y reciclaje de residuos; así como otras actividades que consignent expresamente las leyes, los estatutos regionales, y que no sean contrarias a la libre competencia, principios, reglas, deberes ni derechos consagrados en esta Constitución”.

**(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 308** (19 Velásquez) Artículo 118 N°3. (sustitutiva)

“Actividades asociadas a la promoción de la investigación regional o nacional, tales como de salud; avance científico; innovaciones tecnológicas; industria farmacéutica; centros de observación epidemiológicos; estudios para la prevención y monitoreo de desastres naturales; de fomento del desarrollo endógeno o circular para la producción rural; de exploración de suelos y subsuelos terrestres y marinos; de análisis del correcto cuidado y conservación ambiental; entre otros que señalen las leyes y los estatutos regionales”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 312** (19 Velásquez) Agregar al Artículo 120 otro nuevo artículo extra, el artículo 120bis, que consagra lo sgte:

Artículo 120 bis.- Las empresas públicas regionales consagradas en el artículo X N°X de la Constitución tienen el principal fin de desarrollar y participar en:

1. Áreas económicas estratégicas relacionadas con los recursos naturales de propiedad del Estado de Chile: minería, silvicultura, acuicultura y pesca.

2. Actividades económicas en sectores esenciales para la economía y de servicios básicos a la población, tales como la provisión alimentaria; de logística; portuaria; de generación, distribución y suministro de agua potable; combustible; energías renovables; electricidad; construcción de viviendas; transporte público; rubros de la salud; la recolección y reciclaje de residuos; así como otras actividades que consignent expresamente las leyes, los estatutos regionales, y que no sean contrarias a la libre competencia, principios, reglas, deberes ni derechos consagrados en esta Constitución

3. Actividades asociadas a la promoción de la investigación regional o nacional, tales como de salud; avance científico; innovaciones tecnológicas; industria farmacéutica; centros de observación epidemiológicos; estudios para la prevención y monitoreo de desastres naturales; de fomento del desarrollo endógeno o circular para la producción rural; de exploración de suelos y subsuelos terrestres y marinos; de análisis del correcto cuidado y conservación ambiental; entre otros que señalen las leyes y los estatutos regionales”.

**IND 323** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 126. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 126.

**IND 324** (05 Reyes, C.Gómez, J.Álvarez, Pustilnick, Castillo, Martínez) Para sustituir el artículo 126 por el siguiente:

“Artículo 126. La designación de los representantes de los Ministerios y Servicios públicos con presencia en la Región Autónoma. Las y los representantes de los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma serán nombrados y removidos por decisión del Presidente o Presidenta de la República o de la jefatura superior del servicio público, según corresponda. El nombramiento deberá atender a criterios de competencia profesional, idoneidad y los demás requisitos que establezca la ley.

El Gobernador o Gobernadora Regional con el acuerdo de la Asamblea Regional, propondrá una terna para la designación de las jefaturas de los órganos y servicios desconcentrados de la Administración Pública nacional que funcionen en la Región. La Asamblea Regional deberá pronunciarse sobre la propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional dentro de los treinta días siguientes a su presentación. En caso de que la Asamblea Regional no se pronuncie dentro del término señalado, regirá la propuesta formulada por el Gobernador o Gobernadora Regional.

De igual manera, se podrá proponer a la Presidencia de la República, al ministro o ministra respectivo o a la jefatura nacional del servicio público, según sea el caso, la remoción de los jefes regionales de los servicios públicos nacionales con presencia en la Región.

La ley regulará el ejercicio de estas facultades”.

**IND 333** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 130. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 130.

**IND 335** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 131. Ind. Supresiva: Para eliminar el artículo 131.

**IND 340** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para incorporar un nuevo artículo 132 bis:

“El Gobierno Central se encargará de planificar el ordenamiento territorial del país, debiendo adoptar todas aquellas medidas que resulten necesarias para contar con una distribución eficiente del territorio nacional, con énfasis en la interrelación dinámica entre las personas, el desarrollo de actividades socioeconómicas comunes y la protección de los ecosistemas.

La ley determinará los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta obligación, garantizando una coordinación permanente entre el Gobierno Central y las demás entidades territoriales, sin perjuicio de las competencias exclusivas de los

gobiernos regionales y locales en estas materias”.

**IND 347** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 135. Ind. Supresiva: Para eliminar” y sus entidades territoriales” y luego la letra “n” en la palabra deben.

**IND 348** (18 Navarrete, Jofré, Mena) Para suprimir el Artículo 136.

**IND 350** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 136. Letra e). Ind. Supresiva: Para eliminar “como los saberes tradicionales de los pueblos originarios y de las comunidades”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 353** (15 Pustilnick, Martínez, Abarca, C.Sepúlveda, Namor) Para sustituir el artículo 137, por el siguiente:

“Artículo 137.- Los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial contemplarán:

- a) El diseño de ciudades y asentamientos sostenibles, seguros e inclusivos;
- b) La creación de áreas de protección ambiental o patrimonial;
- c) Las áreas de amortiguamiento;
- d) La localización de los territorios indígenas y rurales;
- e) La distribución racional de los usos de suelo;
- f) La definición de áreas de riesgos o vulnerabilidades;
- g) Las áreas excluidas de actividades productivas;
- h) Las áreas de equipamiento y servicios;
- i) La integración socioespacial y conectividad;
- j) La diversidad del paisaje y la protección de la Naturaleza;
- k) Las demás unidades que determine la ley.

Los Planes regionales de manejo integrado de cuencas tendrán como unidad de ordenación las cuencas hidrográficas y protegerán la integralidad de las aguas, las partes altas de la cuenca, glaciares, las zonas de recarga natural de acuíferos, los ecosistemas como humedales y bosques; las áreas de inundación de ríos y la biodiversidad.

Estos planes e instrumentos incorporarán criterios de justicia territorial, ambiental y socioespacial; evitarán la concentración de parques industriales, de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la Naturaleza; y promoverán la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Todos los planes e instrumentos incorporarán la perspectiva de género y socioecológica como enfoques transversales.”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 354** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 137. Letra c). Ind. Supresiva. Para



eliminar “autónomo y descentralizado, según corresponda, basado en la justicia ambiental, ecológica, territorial y distributiva”. **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 355** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 137. Letra h). Ind. Supresiva. Para eliminar la letra h). **(RECHAZADA POR INCOMPATIBLE)**

**IND 356** (13 Rivera, Arancibia, Jurgensen) Art. 138. Ind. Supresiva. Para eliminar el artículo 138.

## V. PROPUESTA CONSTITUCIONAL<sup>5</sup>.

En atención a los antecedentes expuestos, y como consecuencia de la deliberación efectuada y las votaciones realizadas, la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal recomienda al Pleno de la Convención Constitucional aprobar la siguiente propuesta constitucional:

### “Capítulo 1.- CARGAS TRIBUTARIAS Y ORGANIZACIÓN FISCAL

**Artículo 1 (2\_TS).- De los tributos.** Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley.

El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, coherencia, no confiscatoriedad, solidaridad y justicia material; tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza.

Los tributos y los beneficios tributarios se crean, modifican o suprimen por ley, salvo aquellas tasas y contribuciones especiales que, conforme a esta Constitución y la ley correspondiente y dentro de su jurisdicción, puedan ser establecidas por las entidades territoriales. En el ejercicio de las potestades tributarias, se deberán respetar los principios del sistema.

El ejercicio de la potestad tributaria admite la imposición de tributos que respondan a criterios extrafiscales debiendo tener en consideración límites tales como la necesidad, razonabilidad y transparencia.

<sup>5</sup> La identificación entre paréntesis en algunos artículos corresponde a la numeración original que cada artículo tenía en el Texto Sistemizado, con el objeto de facilitar su comprensión y ubicación para efectos de la eventual renovación de indicaciones.

**Artículo 2 (5\_TS).- Descentralización fiscal.** Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades gozan de autonomía financiera para el cumplimiento de sus funciones, dentro del marco establecido por esta Constitución y las leyes.

La Ley de Presupuestos de la Nación deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos subnacionales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno.

El deber y la facultad de velar por la estabilidad macroeconómica y fiscal será centralizada, conforme a lo dispuesto en esta Constitución.

**Artículo 3 (15\_TS).- De la afectación.** Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al erario público del Estado o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución.

Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos de afectación en favor de las entidades territoriales referidos a actividades o bienes con una clara identificación con los territorios, la prevención de contaminación medioambiental, la conservación y reparación de los ecosistemas, salud o educación. Una ley marco fijará los criterios para la creación de estos tributos.

**Artículo 4 (15 bis\_TS).- Prohibiciones en materia tributaria.** La ley de Presupuestos no puede crear tributos ni beneficios tributarios. No procederán iniciativas populares ni plebiscito y referéndum en materia tributaria.

**Artículo 5 (24\_TS).- Multas y sobrepagos sobre externalidades negativas ambientales o de actividades económicas.** La ley dictada por el Congreso Plurinacional puede establecer multas y sobrepagos sobre las externalidades negativas ambientales o de actividades económicas, tales como cargas sobre la emisión de carbono, residuos tóxicos u otras sustancias semejantes.

Esta ley debe definir criterios de compensación para las Comunas Autónomas afectadas por las externalidades o actividades sujetas a este impuesto.

**Artículo 6 (33\_TS).- Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales.** La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales es el órgano de carácter técnico cuya misión es proponer las fórmulas de redistribución de los ingresos fiscales al Poder Legislativo u otras instituciones de acuerdo a la Constitución y la ley.

La ley determinará la composición y elección de sus miembros, para lo cual deberá considerar criterios equitativos de participación y representación de las entidades territoriales.

Sin perjuicio de las atribuciones consagradas al Consejo de Gobernaciones, dicha ley determinará la organización y competencias de la Comisión, la que deberá considerar, al menos, las siguientes:

1. Recopilar y sistematizar la información necesaria para definir la redistribución de los ingresos fiscales.
2. Proponer una fórmula para la redistribución de los ingresos fiscales de los impuestos del artículo 2 y de las regalías.
3. Proponer una fórmula para la redistribución interregional e intercomunal establecidas en el artículo 18 (43 ter\_TS) y en el artículo 19 (43 quater\_TS) habiendo considerado las transferencias verticales.
4. La cuantificación de los costos fijos y variables que conlleve la transferencia de competencias desde el Estado a las entidades territoriales.
5. Proponer los montos para contribuir periódicamente al Fondo Fiduciario de Territorios Especiales.
6. Colaborar en la preparación de informes financieros de los proyectos de ley presentados por el poder legislativo que impliquen gastos con destinación regional o comunal, según lo establecido en la Constitución, así como informes y estudios económicos.

**Artículo 7 (36\_TS).- Fondo fiduciario para Territorios Especiales.** La ley creará un Fondo Fiduciario para Territorios Especiales.

La ley regulará la administración del Fondo Fiduciario para Territorios Especiales, cuyos recursos serán destinados exclusivamente a los fines para los cuales fueron creados.

El Fondo Fiduciario obtendrá recursos de acuerdo a lo señalado en el artículo 6 (33\_TS) N°5.

**Artículo 8 (37\_TS).- De la autonomía financiera de las entidades territoriales.** Las entidades territoriales mencionadas en el artículo 5° de esta Constitución, gozarán de autonomía financiera en sus ingresos y gastos para el cumplimiento de sus competencias, la cual deberá ajustarse a los principios de suficiencia, coordinación, equilibrio presupuestario, solidaridad y compensación interterritorial, sostenibilidad, responsabilidad y eficiencia económica.

**Artículo 9 (38\_TS).- De los ingresos de las entidades territoriales autónomas.** Las entidades territoriales tendrán las siguientes fuentes de ingresos:

1. Los recursos que para su funcionamiento o inversión les sean asignados en la Ley de Presupuestos del Estado.

2. Los ingresos que recauden de las tasas, contribuciones e impuestos de afectación regional o local establecidos de conformidad con los límites señalados en la Constitución y las leyes.

3. Los recursos que por ley provengan de los tributos que les sean destinados o en que coparticipen en la recaudación.

4. Los recursos que les correspondan en la distribución de fondos de compensación que se establecen en la Constitución y las leyes.

5. Los recursos que les correspondan por transferencias directas supletorias y solidarias y por la redistribución interregional e intercomunal.

6. Los recursos que obtengan vía endeudamiento en los casos y con los límites que dispone la Constitución y la ley.

7. Los ingresos que obtengan por la administración y explotación de su patrimonio.

8. Las donaciones, herencias y legados que reciban.

9. Otros que determine la Constitución y la ley.

**Artículo 10 (39\_TS).- Distribución de las potestades tributarias.** Sólo la ley podrá crear, modificar y suprimir impuestos y beneficios tributarios aplicables a estos.

Las entidades territoriales, dentro de su territorio y en conformidad a la Constitución, podrán crear, modificar y derogar tasas y contribuciones y beneficios aplicables a ellas.

La ley podrá crear tributos de afectación a favor de las entidades territoriales, como asimismo establecer impuestos regionales, comunales, insulares o especiales, sobre actividades o bienes de clara identificación regional o local.

La ley determinará el marco general para la creación de impuestos de clara identificación regional o local, dejando a cada Asamblea Regional la regulación específica de estos, incluyendo la determinación de la base imponible, así como los rangos dentro de los cuales cada Asamblea podrá establecer la alícuota aplicable, su progresión o fórmula.

Las potestades tributarias se ejercerán coordinadamente, conforme a los principios constitucionales tributarios y los derechos fundamentales.

**Artículo 11 (39 bis-TS).- Destino de los recursos tributarios.** Una vez recaudados, los recursos obtenidos por tributos ingresarán al patrimonio de la entidad territorial respectiva, sin perjuicio de la compensación fiscal establecida en virtud del mecanismo de redistribución interregional e intercomunal establecido en la Constitución.

**Artículo 12 (23\_TS).- Coparticipación en los impuestos.** Los ingresos fiscales

generados por impuestos serán redistribuidos entre el Estado y las entidades territoriales en la forma establecida en la ley de presupuesto anual, según la fórmula de coparticipación sugerida por la Comisión de Equidad Territorial.

Tanto en el cálculo de la fórmula de coparticipación sugerida por la Comisión de Equidad Territorial, así como en la deliberación para la dictación de la ley de presupuesto anual, deben ser considerados los siguientes criterios:

1. Conciliar el interés general de la República y los intereses de las entidades territoriales;
2. Evaluar periódicamente la capacidad fiscal, los índices de pobreza y de desigualdad, las brechas de inversión pública, las brechas de desarrollo territorial y la población y tamaño de las entidades territoriales;
3. La estabilidad macroeconómica de la República, el equilibrio presupuestario u otros criterios semejantes.

El Consejo de Gobernaciones puede proponer criterios adicionales para la elaboración de la fórmula de coparticipación y la dictación de la ley respectiva.

**Artículo 13 (40\_TS).- Principios de autonomía y suficiencia.** La autonomía financiera de las entidades territoriales implica la facultad de ordenar y gestionar sus finanzas públicas en el marco de la Constitución y las leyes, en beneficio de sus habitantes, bajo los criterios de responsabilidad y sostenibilidad financiera.

Las entidades territoriales tendrán patrimonio propio y derecho a los recursos suficientes para cumplir las competencias que se les atribuyan, de los cuales podrán disponer autónomamente, salvo cuando se trate de transferencias condicionadas. Los costos fijos y variables de las competencias transferidas se cuantificarán por la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales.

La suficiencia financiera se determinará bajo criterios objetivos tales como correspondencia entre competencias y recursos necesarios para su cumplimiento, equilibrio presupuestario, coordinación, no discriminación arbitraria entre entidades territoriales, igualdad en las prestaciones sociales, desarrollo armónico de los territorios, unidad, objetividad, razonabilidad, oportunidad y transparencia.

**Artículo 14 (41\_TS).- Principio de coordinación.** La actividad financiera de las entidades territoriales se realizará coordinadamente entre ellas, el Estado y las autoridades competentes, las cuales deberán cooperar y colaborar entre sí y evitar la duplicidad e interferencia de funciones, velando en todo momento por la satisfacción del interés general.

Este principio se aplicará también respecto de todas las competencias o potestades que se atribuyan a las entidades territoriales.

Las inversiones estatales en los territorios de las entidades territoriales requerirán la aprobación de sus autoridades respectivas, la que se otorgará en la forma que determine la ley, sin perjuicio de las excepciones que la Constitución y las leyes establecen.

**Artículo 15 (42\_TS).- Equilibrio presupuestario y endeudamiento.** Las entidades territoriales en la elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos no podrán provisionar gastos superiores a los ingresos ordinarios, ni sus gastos ordinarios financiarse con ingresos extraordinarios.

Las entidades territoriales excepcionalmente podrán recurrir al endeudamiento en la forma establecida por la ley marco correspondiente. En este caso, el endeudamiento acumulado no podrá superar el 2% de los ingresos ordinarios de la entidad territorial aprobados en su presupuesto anual del año anterior. Extraordinariamente, autorizadas por una ley, las entidades territoriales podrán endeudarse por sobre el valor antes señalado, pero en ningún caso el endeudamiento acumulado podrá superar el 5% de los ingresos ordinarios contenidos en su presupuesto anual del año anterior. En ninguno de estos casos, el endeudamiento contará con la garantía del Estado. Las entidades territoriales deberán definir el correspondiente plan de amortización, el que deberá ser informado a los órganos de control correspondientes.

Los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento obligatoriamente deberán destinarse a activos no financieros tales como inversiones en infraestructura o inmuebles y gastos de emergencia por causa de una calamidad o catástrofe dentro de sus respectivos territorios.

**Artículo 16 (43\_TS).- Solidaridad interterritorial y fondos de compensación.** El principio de solidaridad interterritorial tiene por fin corregir los desequilibrios en la dotación de recursos económicos y naturales entre las entidades territoriales. Para tales efectos, se establecerán mecanismos razonables y justos tales como transferencias directas, subvenciones, beneficios fiscales, fondos de compensación territorial y mecanismos de redistribución fiscal interregional e intercomunal. Asimismo, la ley deberá establecer fondos solidarios de compensación para las entidades territoriales con una menor capacidad fiscal, que se conformarán anualmente mediante aportes mixtos, provenientes de las entidades territoriales y del Estado Central. Los criterios para determinar qué se entiende por menor capacidad fiscal serán determinados por ley.

Sin perjuicio de los demás fondos de compensación existentes, y de los fondos señalados en la Constitución, la ley establecerá al menos un fondo de desarrollo comunal y otro de desarrollo regional. La Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales sugerirá los montos anuales de transferencias a dichos fondos, los que serán

determinados por ley.

La ley determinará, previa propuesta de la Comisión de Equidad Territorial y Transferencias Fiscales, los aportes a los fondos que provendrán del Estado y de las entidades territoriales. La ley asignará anualmente a cada uno de estos dos fondos, a lo menos un 5% de recaudación tributaria del país, exceptuando los ingresos tributarios propios de las entidades territoriales.

**Artículo 17 (43 bis\_TS).- Participación en el ingreso por el uso y explotación de recursos naturales.** Las entidades territoriales en cuyo territorio se desarrollen actividades ligadas a sus características y condiciones naturales o geográficas, tendrán derecho a participar, en conformidad al artículo 23 de los ingresos que el Estado perciba en relación con dichas actividades, en conformidad al principio de solidaridad interterritorial y en la forma que determine la ley.

Sin perjuicio del derecho de las entidades territoriales a participar de los ingresos que el Estado percibe de acuerdo al inciso anterior, la ley determinará los mecanismos necesarios para que dichos ingresos sean destinados a inversión pública.

Los ingresos a que se refiere este artículo, podrán provenir, entre otros, del uso y explotación de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, tales como recursos minerales, pesqueros y forestales, la observación astronómica, el uso de la energía solar, eólica, oceánica o geotermal, del espectro radioeléctrico, o de las concesiones sobre el uso de estos bienes, tales como el agua, carreteras o inmuebles fiscales.

**Artículo 18 (43 ter\_TS).- Transferencias solidarias y compensación interterritorial.** Con el fin de reducir las diferencias en la capacidad fiscal de las Regiones y Comunas, la ley establecerá mecanismos de redistribución interregional e intercomunal, respectivamente, que operarán a partir de sus correspondientes fórmulas de redistribución y de rangos de contribución definidos por la Constitución y la ley.

Las Regiones y Comunas que obtengan ingresos que superen el promedio ponderado de ingresos fiscales por habitante de las respectivas Entidades Territoriales, transferirán a las Regiones o Comunas que obtengan recursos bajo el promedio ponderado. Ninguna Entidad Territorial contribuirá más de la mitad de sus ingresos fiscales por habitantes superiores al promedio ponderado de ingresos fiscales por habitante de todas las Regiones Autónomas o Comunas Autónomas de la República.

Los recursos destinados a Regiones o Comunas por transferencias verticales directas del Estado, supletorias o solidarias, así como por tributos serán contabilizados como ingresos en el cálculo de la redistribución interregional e intercomunal, correspondiente. En el cálculo del promedio ponderado de ingresos por habitante y en la determinación de la fórmula de redistribución, la Comisión de Equidad Territorial y



Transferencias Fiscales deberá contemplar criterios de capacidad fiscal, indicadores de pobreza, densidad demográfica, brechas de inversión pública y tamaño del territorio, u otros criterios otros semejantes.

**Artículo 19 (43 quater\_TS).- Transferencia directa supletoria.** El Estado podrá efectuar transferencias directas a las entidades territoriales, para financiar proyectos específicos destinados al bienestar regional, comunal y autonómico indígena. El Estado deberá fundar sus transferencias directas en planes de Inversión en infraestructura pública, los que estarán basados en criterios tales como brechas de inversión pública, indicadores de pobreza y desarrollo territorial, o bien, en consideraciones que respondan al trato preferente a territorios especiales o poblaciones empobrecidas.

El Estado, en ejercicio de las facultades supletorias a que se refiere el artículo 30 inciso final de la Constitución, podrá efectuar transferencias directas a las entidades territoriales que corresponda.

**Artículo 20 (44\_TS).- Sostenibilidad ambiental.** Es deber del Estado y de las entidades territoriales, en el ámbito de sus competencias financieras, establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.

El cuidado, el fortalecimiento y la recuperación del medio ambiente y los ecosistemas será una de las consideraciones al establecer, modificar, mantener o derogar tributos, beneficios tributarios o subsidios.

Cuando la ley, en cumplimiento del deber de sostenibilidad, establezca tributos, la ley deberá definir los criterios de compensación para las Comunas Autónomas afectadas por las actividades o externalidades sujetas a dichos tributos.

**Artículo 21 (45\_TS).- Responsabilidad fiscal.** Las entidades territoriales, sus representantes y sus autoridades que incumplan con sus obligaciones en materia financiera, deberán asumir, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que de tal incumplimiento se deriven con arreglo a la Constitución y las leyes.

Sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad a que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio fiscal o de la entidad territorial respectiva.

**Artículo 22 (46\_TS).- Eficiencia económica.** El principio de eficiencia económica implica que las entidades territoriales deberán usar sus recursos de forma económicamente razonable, óptima y eficaz, en beneficio de sus habitantes y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan.



**Artículo 23 (47\_TS).- Garantías jurisdiccionales de la autonomía financiera.**

Para hacer efectiva la autonomía financiera, incluidas las compensaciones territoriales en los términos consagrados en la Constitución, las entidades territoriales autónomas podrán recurrir a la jurisdicción constitucional, contenciosa administrativa u ordinaria competente, según corresponda.

**Artículo 24 (48\_TS).- Controles financieros.** Un órgano de carácter técnico, desconcentrado territorialmente, con autonomía administrativa y presupuestaria, controlará la legalidad de la actividad financiera, la gestión y los resultados de la administración de los recursos públicos. Su actuar deberá fundarse en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales y sociales.

Este órgano técnico, especialmente fiscalizará la elaboración y ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, las que deberán efectuarse bajo las normas contables aplicables al sector público determinadas por ley.

Asimismo, la ley establecerá los mecanismos adecuados para incorporar un control ciudadano, democrático y participativo desde los territorios. El Estado promoverá la educación cívica de la ciudadanía en el control y la gestión de recursos públicos.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la ley regulará otros controles internos y auditorías periódicas independientes.

Con todo, serán públicos los informes de auditorías y los estados financieros de las entidades territoriales fiscalizadas.

**Artículo 25 (26\_TS).- Transparencia tributaria.** En virtud del principio de transparencia e igualdad democrática, una vez al año, al concluir la operación de renta, el organismo competente publicará las rentas imponibles y cargas tributarias estatales, regionales y comunales determinadas por cada contribuyente de forma anónima, así como, los subsidios, subvenciones o bonificaciones pagadas que ordenen leyes de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas, información que, en todo caso, deberá ser anónima.

La ley determinará la información a ser publicada y la forma de llevarla a cabo.

La Presidencia deberá incluir en la cuenta pública anual, las medidas adoptadas para disminuir la evasión y elusión de impuestos.

**Capítulo 2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ENTIDADES REGIONALES Y LOCALES**

**Artículo 26 (51\_TS).- Mecanismos de participación en las entidades**

**territoriales.** Las entidades territoriales deberán promover, fomentar y garantizar los mecanismos de participación en las políticas públicas, planes y programas que se implementen en cada nivel territorial, en los casos que esta Constitución, la ley y los estatutos regionales señalen.

### **Capítulo 3.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO**

**Artículo 27 (58\_TS).- Del ejercicio de la función pública.** En el ejercicio de la función pública se deberá observar una conducta funcionaria intachable y responsable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular.

La función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, adecuando las prestaciones que se entreguen de acuerdo con las características y particularidades de las personas beneficiarias de los servicios públicos.

La función pública se deberá brindar con pertinencia cultural y lingüística, atendiendo la existencia de los diferentes pueblos y naciones que habitan el territorio, adecuando las prestaciones que se entreguen, de acuerdo con las características y particularidades que presenten las personas beneficiarias de los servicios públicos.

**Artículo 28 (64\_TS).- De los servicios públicos.** Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad a todas las personas que habiten en su territorio, los cuales contarán con un financiamiento suficiente.

El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios, bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial.

El Estado definirá, monitoreará e implementará las políticas públicas, procurando que el ámbito geográfico supere el nivel regional y que sean necesarias para resguardar el carácter único e indivisible del Estado de Chile.

El Estado deberá incentivar y apoyar a aquellas comunidades urbanas o rurales que opten por sistemas autónomos, cooperativos, integrados y/o colectivos de estos servicios.

Las entidades territoriales participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística, en la forma prescrita por la ley.

**Artículo 29 (59\_TS).- La Administración Pública.** Los órganos de la Administración tienen por objeto satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades. La Administración Pública ejecutará políticas públicas, planes y

programas, y proveerá o garantizará, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente.

La Administración Pública se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, publicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, eficiencia, eficacia, rendición de cuentas, buen trato, primacía del interés general y los demás principios que señale la Constitución y la ley.

Cualquier persona que hubiere sido vulnerada en sus derechos por la Administración Pública podrá reclamar ante las instancias administrativas y jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley.

**Artículo 30 (62\_TS).- Responsabilidad patrimonial del Estado.** El Estado será responsable por los daños que sus órganos causen a particulares por falta de servicio u otro título de imputación determinado en la Constitución o en la ley.

El Estado podrá siempre repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en dolo o imprudencia temeraria.

La ley regulará, en lo demás, el régimen jurídico de esta responsabilidad.

**Artículo 31 (59 bis\_TS).- Organización Administrativa.** La Ley establecerá la organización básica de la Administración Pública en el nivel central y en las entidades territoriales, que será desarrollada por la potestad reglamentaria buscando el mejor y más eficiente desarrollo de sus funciones.

La ley podrá conferir potestades fiscalizadoras, instructoras, normativas y sancionatorias a los órganos de la Administración Pública. En ningún caso estas potestades implicarán ejercicio de jurisdicción.

**Artículo 32 (60\_TS).- Empleo público.** La Administración Pública desarrolla sus funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos.

El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando en todo momento criterios objetivos y predeterminados.

El desarrollo, evaluación de desempeño y cese en estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la Administración Pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio.

La ley establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y funcionarios públicos.

Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza,

atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán el régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley.

Se reconoce el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga de quienes se desempeñen en la Administración Pública, salvo que en este último caso se paralicen servicios esenciales o se impida la continuidad del servicio público. La ley que regulará el ejercicio y límites de los derechos que indica este inciso.

Las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, no podrán ser nombrados en cargos de la administración pública respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera.

**Artículo 33 (63\_TS).- Sobre la modernización del Estado.** Es deber del Estado definir mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustando su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad.

El Estado deberá destinar recursos para que sus órganos adopten las medidas que resulten necesarias para la incorporación de avances tecnológicos, innovación y el mejor uso de los recursos que permitan optimizar la provisión de bienes y servicios públicos.

El Estado deberá fomentar los mecanismos de participación, la relación con las personas y promover la gestión eficiente y moderna, acorde a las necesidades de las personas y comunidades.

**Artículo 34 (63 b\_TS).- Órgano especializado para la modernización de la Administración Pública.** Existirá un órgano especializado encargado de la elaboración de planes para promover la modernización de la Administración del Estado, monitorear la implementación de los mismos en las distintas instituciones públicas, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás atribuciones que establezca la ley.

El legislador se encargará de determinar la denominación de este órgano, además de su integración y procedimientos internos, estableciendo directrices y lineamientos que permitan una constante modernización de las instituciones públicas nacionales, regionales y locales, contando con unidades especializadas en cada gobierno regional y comunal.

#### **Capítulo 4.- RURALIDAD**

**Artículo 35 (75\_TS).**- El Estado reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar.

El Estado promoverá el desarrollo integral de los territorios rurales.

**Artículo 36 (81\_TS).**- El Estado y las entidades territoriales facilitarán la participación de las comunidades rurales a nivel local y regional en el diseño e implementación de programas y políticas públicas que les afectan o conciernen.

**Artículo 37 (82\_TS).**- El Estado fomentará los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización e intercambio de bienes, artesanías, alimentos u otros relacionados con la ruralidad.

**Artículo 38 (83\_TS).**- El Estado reconoce las prácticas e innovaciones materiales e inmateriales de las comunidades rurales como patrimonio común.

Se deberá fomentar procesos educativos, formales e informales, con temáticas locales, tanto históricas, fundacionales, étnicas, ecológicas, geológicas y económicas.

Se fomentará el desarrollo, financiamiento y acceso a tecnologías y conocimientos para la agricultura campesina e indígena, tanto de base científica, como de los saberes tradicionales.

**Artículo 39 (84\_TS).**- El Estado reconoce la función social y ecológica de la tierra, el agua, el mar, por lo que deberá regular su uso, fomentar su restauración y manejo ecológico, así como limitar y prevenir la concentración de su propiedad.

El ordenamiento del territorio rural deberá proteger las aguas, conservar los suelos y prevenir su degradación.

Esta protección estatal, el manejo ecológicamente responsable, la prevención y restauración ante la degradación ambiental, estarán determinados por la ley y los estatutos regionales.

**Artículo 40 (85\_TS).**- Es deber del Estado garantizar el uso, manejo y libre intercambio de semillas y material vegetal de propagación.

No se permitirá la privatización de la capacidad reproductiva de plantas y animales.

**Artículo 41 (88\_TS).**- Las personas y los pueblos tienen el derecho fundamental a la alimentación. Las políticas agropecuarias, pesqueras y alimentarias del país deben ordenar su acción en pleno respeto de este derecho.

El Estado garantizará los mecanismos para que los habitantes del país tengan acceso económico, físico y oportuno a una alimentación sana, saludable, diversa, nutricionalmente completa, sin contaminantes, suficiente y culturalmente adecuada.

Será deber del Estado apoyar la agricultura campesina e indígena, la recolección artesanal, la pesca artesanal, las ferias libres, los mercados locales y el canal alimentario agropesquero tradicional como pilares fundamentales de la producción y abastecimiento de alimentos.

**Artículo 42 (89\_TS).**- El Estado reconoce la soberanía alimentaria como el derecho fundamental de los pueblos a determinar libremente y poner en práctica sus propios sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos.

La ley deberá regular los plaguicidas, agroquímicos, aditivos y transgénicos sobre la base del principio precautorio.

No se permitirá el uso de plaguicidas ni agroquímicos altamente peligrosos que pongan en riesgo la salud humana y los ecosistemas.

**Artículo 43 (97\_TS).**- El Estado reconoce la actividad laboral, ejercida y desarrollada en la ruralidad, como una forma especial de trabajo, garantizando sus derechos laborales y de seguridad social.

**Artículo 44 (99\_TS).**- El Estado apoyará y promoverá la transición agroecológica, considerando la ciencia y los conocimientos tradicionales, fomentando el desarrollo de tecnologías y garantizando mecanismos de apoyo técnico y financiero para esta transición.

**Artículo 45 (113\_TS).**- El Estado tomará las medidas necesarias para superar las desigualdades entre los territorios rurales y urbanos, promoviendo la equidad territorial. Asimismo, implementará políticas públicas para promover, respetar y garantizar los derechos de los habitantes presentes en los territorios rurales, con especial consideración a los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

El Estado promoverá y asegurará el acceso prioritario de la mujer a la tierra y el agua.

## **Capítulo 5.- GOBIERNO REGIONAL (REZAGADA)**

**Artículo 46 (116\_TS).**- El Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales.

El Gobernador o Gobernadora y la Asamblea Regional deberán establecer los mecanismos, normas y políticas necesarias para asegurar y fomentar la conectividad de toda la región, con especial cuidado de los sectores rurales, aislados y de difícil acceso. Esto se realizará en consulta con el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas y las políticas que se establezcan a nivel nacional.

El Gobernador o Gobernadora deberá establecer mecanismos de evaluación para las empresas relacionadas a conectividad que incorpore la participación ciudadana en la forma establecida en esta Constitución y las leyes.

## **Capítulo 6.- FORMA DE ESTADO (REZAGADA)**

**Artículo 47 (126\_TS).**- La designación de las y los representantes de los Ministerios y Servicios Públicos con presencia en la Región Autónoma será decisión de la Presidencia de la República.

Para tal efecto, la Presidencia de la República propondrá una quina al Gobierno Regional para que éste, con acuerdo de la Asamblea Regional, responda en el plazo de 30 días contados desde la presentación. La respuesta deberá indicar una terna/dupla confeccionada a partir de la quina originalmente propuesta, y sobre la cual el Presidente de la República deberá determinar la designación.

Será facultad del Gobierno Regional, con acuerdo de la Asamblea Regional, solicitar a la Presidencia de la República, al ministro o ministra respectivo o a la jefatura nacional del servicio público, según corresponda, la remoción de los jefes regionales de los servicios públicos nacionales con presencia en la Región. Esta solicitud deberá fundarse en motivos graves y calificados en consideración de la naturaleza y función de la respectiva jefatura.

**Artículo 48 (126 bis\_TS).**- Las regiones autónomas, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer sus plantas de personal y los órganos o unidades de su estructura interna, en conformidad a la Constitución y la ley.

Estas facultades serán ejercidas por el Gobernador o Gobernadora Regional, previo acuerdo de la Asamblea Regional, cautelando la carrera funcionaria, su debido financiamiento y el carácter técnico y profesional de dichos empleos.”.

**Artículo 49 (130\_TS).**- La integración y requisitos para acceder al cargo respetará criterios de inclusión, paridad de género y escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas que habiten en la Región Autónoma, de conformidad a lo que determine la ley.



**Artículo 50 (131\_TS).- Atribuciones de la Asamblea Regional.** Son atribuciones de la Asamblea Regional, en conformidad a la Constitución, la ley y el Estatuto Regional:

1. Pronunciarse sobre la convocatoria a consultas o plebiscitos regionales.
2. Administrar su patrimonio, bienes y rentas.
3. Aprobar, rechazar o modificar la inversión de los recursos de los fondos de compensación interterritorial que se creen y otros recursos públicos que disponga la ley.
4. Pronunciarse en conjunto con los órganos competentes respecto de los procesos de evaluación ambiental.

## **Capítulo 7.- ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**Artículo 51 (135\_TS).-** El Estado y sus entidades territoriales tienen el deber de ordenar y planificar la totalidad del suelo del territorio nacional. Para esto utilizará unidades de ordenación que consideren las cuencas hidrográficas.

Este deber tendrá como fin asegurar una adecuada localización de los asentamientos, actividades productivas y un desarrollo socioeconómico ambientalmente equilibrado, que permita tanto un manejo responsable e integrado de los ecosistemas como de las actividades humanas, con criterios de justicia territorial que permitan promover el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

**Artículo 52 (136\_TS).-** La ordenación y planificación de los territorios será vinculante en las materias que la ley determine, coordinada, integrada y enfocada en el interés público. Se deberán realizar procesos de participación previos e informados en sus diferentes etapas, considerando los diversos sistemas de conocimientos existentes.

Dicha ordenación y planificación deberá considerar tanto la diversidad del paisaje y los aspectos culturales locales; como los riesgos y vulnerabilidades frente a desastres siconaturales y los impactos que los usos de suelo causen en la disponibilidad y calidad del agua.

**Artículo 53 (137\_TS).-** Los planes e instrumentos de ordenamiento y planificación territorial deberán considerar según corresponda:

- a) El diseño de ciudades y asentamientos poblados sostenibles, seguros e inclusivos; con criterios de equidad de género y justicia socioespacial.
- b) El reconocimiento o definición de áreas de protección ambiental y patrimonial.
- c) Los territorios indígenas, su biodiversidad y usos.
- d) Instrumentos especiales para las áreas de mayor vulnerabilidad, a fin de fortalecer integralmente el desarrollo local y comunitario.



e) Utilizar criterios de justicia ambiental para evitar la concentración de contaminantes, deterioro o agotamiento de los elementos de la naturaleza en una determinada localidad.

f) Identificar y orientar el desarrollo de actividades productivas, empresariales e industriales en el territorio, las que deberán desarrollarse en armonía con los centros poblados y los ecosistemas en que se pretendan instalar;

g) La integración socioespacial, asegurando el acceso a equipamiento, servicios básicos y una movilidad segura, sostenible, con transporte público y vialidad comprometida con un espacio público e infraestructura urbana de calidad.

h) Las demás que determinen la Constitución y las leyes.

**Artículo 54 (138\_TS).**- Una Ley Marco de Ordenamiento y Planificación Territorial, basada en un enfoque socioecológico velará por el desarrollo del país integrando y coordinando los distintos niveles y escalas territoriales, sus relaciones y los diversos actores que cohabitan los territorios.

## **Capítulo 8.- NORMAS VARIAS**

**Artículo 55 (141\_TS).**- **De las instituciones estatales de educación superior.** En cada región autónoma existirá, al menos, una universidad estatal, funcionalmente descentralizada, que actuará con plena autonomía académica, económica y administrativa y formarán parte de la Administración del Estado.

Se relacionarán de manera preferente y coordinada con las instituciones estatales, autoridades regionales, autoridades comunales y con otros servicios públicos con presencia regional, para contribuir al desarrollo de sus funciones propias y en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas de desarrollo local, regional o nacional. La ley fijará un estatuto especial para el cumplimiento de las tareas universitarias.

Del mismo modo, en cada región existirá, al menos, una institución de formación técnico profesional de nivel superior, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

**Artículo 56 (142\_TS).**- Los Cuerpos de Bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y/o privados.

Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio.



La ley regulará el régimen de financiamiento y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez.

El Estado reconoce y ampara los Cuerpos de Bomberos de Chile en su función esencial de servicio a la comunidad, garantizando la voluntariedad de afiliación de sus miembros y la debida autonomía institucional para el cumplimiento de sus fines específicos.”.

\*\*\*\*\*

**COMISIÓN DE FORMA DE ESTADO, ORDENAMIENTO, AUTONOMÍA,  
DESCENTRALIZACIÓN, EQUIDAD, JUSTICIA TERRITORIAL,  
GOBIERNOS LOCALES Y ORGANIZACIÓN FISCAL  
07 de abril de 2022**

Tratado y acordado en sesiones de fechas 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24 y 30 de marzo de 2022, y 4, 5 y 6 de abril de 2022, con la asistencia de las y los convencionales Tiare Aguilera, Julio Álvarez, Amaya Álvez, Adriana Ampuero, Cristóbal Andrade, Jorge Arancibia, Wilfredo Bacián, Eduardo Castillo, Eric Chinga, Elisa Giustinianovich, Claudio Gómez, Yarela Gómez, Álvaro Jofré, Harry Jurgensen, Helmuth Martínez Jeniffer Mella, Felipe Mena, Adolfo Millabur, Geoconda Navarrete, Tammy Pustilnick, María Elisa Quinteros, Ramona Reyes, Pollyana Rivera, César Uribe y Hernán Velásquez.